

Presentación

Continuando con el esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de mantener al día a la clase jurídica del país, ofrecemos la presente publicación, que contiene las principales sentencias dictadas por nuestro máximo Tribunal Judicial durante el período agosto de 1997 a diciembre de 1999, la cual ha estado a cargo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y la colaboración especial de su abogada ayudante la Dra. Laura Hernández Román.

Las sentencias que figuren sin el número del Boletín Judicial correspondiente es porque éste no ha sido editado.

Dr. Jorge A. Subero Isa

Presidente de la Suprema Corte de Justicia



Indice General

A

1.- Abuso de Derecho:

| | |
|---------------------------------|---|
| Abuso de derecho. Alegato. | 3 |
|---------------------------------|---|

2.- Accidente de Trabajo:

| | |
|---|---|
| Accidente de trabajo. Artículo 728 del Código de Trabajo. Ley 385 sobre Accidentes de Trabajo. Trabajador no asegurado. Competencia. | 3 |
|---|---|

3.- Accidente de Vehículo:

| | |
|--|---|
| 3.1 Accidente de vehículo. Autor de los daños y civilmente responsable. Solidaridad. Daños morales. | 5 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 3.2 Accidente de vehículo. Comitente. Propietario del vehículo. Comitencia. Prueba en contrario. | 6 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3.3 Accidente de vehículo. Concurrencia de falta. Indemnización. | 6 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| 3.4 Accidente de vehículo. Daños a justificar por estado. | 7 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 3.5 Accidente de vehículo. Demandado que no niega ser el propietario del vehículo. | 7 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3.6 Accidente de vehículo. Estado Dominicano. Comitente. | 7 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| 3.7 Accidente de vehículo. Inadmisibilidad del recurso del prevenido. Obligación de examinar los hechos. Influencia sobre la persona civilmente responsable. Monto de las indemnizaciones. Proporcionalidad con la gravedad del daño. | 8 |
|--|---|

| | |
|---|----|
| 3.8 Accidente de vehículo. Indivisibilidad de la comitencia. El titular de la póliza no necesariamente es el comitente..... | 9 |
| 3.9 Accidente de vehículo. Presunción de autorización. | 10 |
| 3.10 Accidente de vehículo. Presunción de propiedad de un vehículo. Seguro in- rem. Condiciones. | 10 |
| 3.11 Accidente de vehículo. Propiedad del vehículo. Matrícula. Contrato de Venta Condicional. Presunción de Comitencia. | 11 |
| 3.12 Accidente de vehículo. Seguro obligatorio. Presunción de comitencia. Seguro a nombre de un tercero. | 12 |
| 3.13 Accidente de vehículo. Seguro de vehículo. Póliza emitida a otra persona. | 12 |
| 3.14 Accidente de vehículo. Vehículo arrendado. Contrato de adhesión. Responsabilidad del arrendador..... | 13 |
| 4.- Acción Civil: | |
| Acción Civil. Ausencia de personalidad jurídica de la familia. Presunción de daños morales. | 14 |
| 5.-Acción en Inconstitucionalidad: | 15 |
| 6.- Acta de Audiencia: | |
| Acta de audiencia. Materia criminal. Declaraciones de los testigos. Artículos 248, 280 y 281 del Código de Procedimiento Criminal | 15 |

7.- Acta Nacimiento:

Acta nacimiento. Artículo 46 de la Ley 659
sobre Actos del Estado Civil.

Declaración personal del padre. 16

8.- Agentes Importadores:

8.1 Agentes importadores. Artículo 10 de la Ley 173
de 1966. Registro del Contrato. Plazos..... 17

8.2 Agentes importadores. Ley 173 de 1966.
Daños y perjuicios. Condiciones 18

8.3 Agentes importadores. Propósitos.
Justa causa. 19

8.4 Agentes importadores. Registro del contrato.
Artículo 10 de la Ley 173 de 1966. 21

9.- Alquileres:

9.1 Alquileres. Comisión de Apelación sobre
Alquileres. Recursos inadmisibles..... 21

9.2 Alquileres. Competencia del juzgado de paz.
Vivienda suntuaria. Sentido del medio de
inadmisibilidad de la Ley No. 18-88 sobre
Viviendas Suntuarias y Solares
Urbanos no Edificados..... 22

9.3 Alquileres. Competencia de los juzgados de paz. . 23

9.4 Alquileres. Competencia de los juzgados de paz. . 24

9.5 Alquileres. Fondo de Comercio. Aplicación del
Decreto No. 4807 de 1959. 27

9.6 Alquileres. Hueco en la pared del inmueble
alquilado. Alegato de daños y perjuicios.
Obligación de los jueces... .. 29

10.- Allanamiento:

| | |
|---|----|
| 10.1 Allanamiento. Acta de allanamiento en violación al artículo 184 del Código de Procedimiento Criminal. | 30 |
| 10.2 Allanamiento. Acta de allanamiento practicada por el ayudante fiscal. | 30 |

11.- Amparo:

| | |
|--|----|
| 11.1 Amparo. Recurso. Reconocimiento. Procedimiento a seguir. | 31 |
| 11.2 Amparo. Resolución. Competencia. | 32 |

12.- Apelación:

| | |
|--|----|
| 12.1 Apelación. Acto que contiene el recurso. | 33 |
| 12.2 Apelación. Apelación mediante acto de alguacil. Artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal. | 33 |
| 12.3 Apelación. Apelación tardía. Inadmisibilidad del recurso. No hay que ponderar los méritos del recurso. | 35 |
| 12.4 Apelación. Apertura del plazo. Notificación por acto de alguacil. | 36 |
| 12.5 Apelación. Apertura del plazo. Notificación a persona o domicilio. | 37 |
| 12.6 Apelación. Artículo 539 del Código de Trabajo. Propósito. Constitucionalidad de dicho artículo. | 37 |
| 12.7 Apelación. Artículo 539 del Código de Trabajo. Suspensión de ejecución mediante fianza. Artículo 667 del mismo Código. | 39 |

| | |
|--|----|
| 12.8 Apelación. Comparecencia personal. Ordenanza de oficio. Sentencia preparatoria. | 40 |
| 12.9 Apelación. Desistimiento. Condiciones. | 41 |
| 12.10 Apelación. Efecto devolutivo. | 41 |
| 12.11 Apelación. Efectos. Exclusión de la demanda en grado de apelación. | 42 |
| 12.12 Apelación. Forma de la apelación. Artículo 621 del Código de Trabajo. | 43 |
| 12.13 Apelación. Incidentes. Efecto no suspensivo. Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953. | 44 |
| 12.14 Apelación. Indivisibilidad. Demanda en partición. Efectos de la apelación. | 44 |
| 12.15 Apelación. No depósito de sentencia recurrida y del acto de apelación. | 45 |
| 12.16 Apelación. Notificación de la sentencia a los abogados. Artículo 147 del Código de Procedimiento Civil. Finalidad de ese artículo. . . . | 46 |
| 12.17 Apelación. Pensiones alimentarias. Efecto ejecutorio. | 47 |
| 12.18 Apelación. Plazo. Aumento en razón de la distancia. Artículo 1033 Código de Procedimiento Civil. Antiguo Código de Trabajo. | 47 |
| 12.19 Apelación. Plazo. Días no laborables. Artículo 495 del Código de Trabajo. | 48 |
| 12.20 Apelación. Plazo. Punto de partida. Sentencia dictada en presencia de las partes. | 49 |
| 12.21 Apelación. Punto de partida del plazo. Notificación. | 49 |

12.22 Apelación. Recurso. Advocación del fondo.
Artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal. . . 50

12.23 Apelación. Sentencia recurrida sin ser
notificada. Apertura del plazo. Condiciones. 51

13.- Astreinte:

13.1 Astreinte. 52

13.2 Astreinte. Artículo 86 del Código de
Trabajo. Condiciones. 52

13.3 Astreinte. Demandar con posteridad a su fijación. . 52

14.- Autores y Cómplices:

Autores y cómplices. Importancia de su distinción.
Artículo 18 del Código Penal y 106 de la
Ley 224 de 1984. Reclusión mayor. 53

15.- Avocación:

Avocación en materia criminal. Artículo 215
Código de Procedimiento Criminal. 57

B

16.- Banco:

16.1 Banco. Banco Central. Junta Monetaria. 58

16.2 Banco. Cuentas comerciales. Artículos
12 y 13 del Código de Comercio.
Cámara de compensación. 58

16.3 Banco. Banco Central. Naturaleza jurídica.
Obligación asumida. Artículo 63 y 64 del
Código de Trabajo. 59

16.4 Banco. Franquicia para operar una institución
bancaria. Obligaciones frente a los trabajadores. . . . 60

| | |
|--|----|
| 16.5 Banco. Liquidación. | |
| Derechos de los trabajadores..... | 61 |
| 16.6 Banco. Liquidación provisional. Interpretación del Artículo 36 de la Ley General de Bancos. | 62 |

17.- Beneficios:

| | |
|---|----|
| Beneficios de una empresa. Artículo 494 del Código de Trabajo. Deber de los jueces. | 62 |
|---|----|

18.- Bien de Familia:

| | |
|--|----|
| 18.1 Bien de familia. Inmuebles de programa de asistencia social. Artículo 1ro. de la Ley 472 de 1964..... | 63 |
| 18.2 Bien de Familia. Ley 339 de 1968. Cesación de la inembargabilidad. | 64 |
| 18.3 Bien de Familia. Venta. Renuncia. | 64 |

19.- Bienes Reservados:

| | |
|---|----|
| Bienes reservados. Renuncia a la comunidad de bienes. Formalidades. | 66 |
|---|----|

C

20.- Cámara de Calificación

| | |
|---|----|
| 20.1 Cámara de Calificación. Casación. Inadmisibilidad del recurso de casación contra las providencias calificativas. | 69 |
| 20.2 Cámara de Calificación. Recursos. Art. 127 del Código de Procedimiento Criminal. Alegato de violación a la Constitución..... | 69 |

21.- Cámara de Compensación:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Cámara de compensación. Banco. | 71 |
|-------------------------------------|----|

22.- Casación:

| | |
|---|----|
| 22.1 Casación. Alegato de inconstitucionalidad por primera vez en casación. Medio nuevo. Inadmisible. | 71 |
| 22.2 Casación. Alegato de indivisibilidad. Exposición sucinta de los medios. Admisibilidad del recurso. | 71 |
| 22.3 Casación. Artículo 6 Ley de Casación. Recurso de una sucesión.- Condiciones. | 72 |
| 22.4 Casación. Artículo 133 Ley de Registro de Tierras. Condiciones. | 73 |
| 22.5 Casación. Artículo 643 del Código de Trabajo. Inaplicabilidad del Artículo 7 de la Ley de Casación. | 73 |
| 22.6 Casación. Artículo 641 del Código de Trabajo. Salarios mínimos. Comité Nacional de Salarios. | 74 |
| 22.7 Casación. Artículo 642 ordinal 4to. del Código de Trabajo. | 74 |
| 22.8 Casación. Ausencia de Medios. Recurso inadmisible. | 74 |
| 22.9 Casación. Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios. Recurso inadmisible. | 75 |
| 22.10 Casación. Comunicación de documentos. Sentencia preparatoria. Artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. | 76 |
| 22.11 Casación. Contenido de los medios de casación. | 76 |
| 22.12 Casación. Contradicción entre los motivos y el dispositivo. Consecuencias. | 76 |

| | |
|---|----|
| 22.13 Casación. Control de la casación sobre la terminología usada en las sentencias. | 77 |
| 22.14 Casación. Efectos. Perención. | 77 |
| 22.15 Casación. Efecto suspensivo de las sentencias incidentales recurridas en casación. | 78 |
| 22.16 Casación. Ejecución de una sentencia anterior. | 78 |
| 22.17 Casación. Emplazamiento. Artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 36 de la Ley 834 de 1978. | 79 |
| 22.18 Casación. Emplazamiento. Artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil. No hay nulidad sin agravio. | 80 |
| 22.19 Casación. Escritos ampliatorios. Artículo 42 de la Ley de Casación. | 80 |
| 22.20 Casación. Excepción de incompetencia. Inadmisibilidad. Artículo 2 de la Ley 834 de 1978. | 81 |
| 22.21 Casación. Funciones de la Suprema Corte. Los agravios deben dirigirse contra la sentencia y no a los imputados al secretario de un tribunal. | 82 |
| 22.22 Casación. Inadmisibilidad. Artículos 641, 480 y 619 del Código de Trabajo. | 83 |
| 22.23 Casación. Indivisión en el objeto del litigio. Consecuencia | 84 |
| 22.24 Casación. Interpelación a los fines de inscripción en falsedad contra sentencia impugnada. | 85 |
| 22.25 Casación. Juramento diferido. Artículo 1358 del Código Civil. | 85 |

| | |
|---|----|
| 22.26 Casación. Medio de orden público. Artículo 141 de la Ley 834 de 1978. | 86 |
| 22.27 Casación. Medios nuevos. Inadmisibles. | 86 |
| 22.28 Casación. Medio nuevo. | 87 |
| 22.29 Casación. Memorial. Plazo. Artículo 37 de la Ley de Casación. | 88 |
| 22.30 Casación. Méritos. Recursos. La Corte a-qua no puede ponderarlo. | 88 |
| 22.31 Casación. Motivos de las sentencias. Apartado 5to. del Artículo 23 de la Ley de Casación. . | 89 |
| 22.32 Casación. Naturaleza y admisibilidad del recurso. | 90 |
| 22.33 Casación. Notificación por el ministerio público. Art. 34 Ley sobre Procedimiento de Casación.. | 91 |
| 22.34 Casación. Parte en el recurso de alzada. Inadmisibilidad. | 91 |
| 22.35 Casación. Plazo. | 92 |
| 22.36 Casación. Plazo. Artículo 5 de la Ley de Casación. Inadmisibilidad de oficio. | 93 |
| 22.37 Casación. Plazo. Artículo 134 de la Ley sobre Registro de Tierras. | 94 |
| 22.38 Casación. Recurso contra una sentencia que ordena la ejecución de otra ligada al tribunal. Improcedencia del recurso de apelación contra una sentencia de adjudicación. | 95 |
| 22.39 Casación. Recurso. Copia auténtica de la sentencia impugnada. | 97 |

| | |
|--|-----|
| 22.40 Casación. Recursos del acusado y del ministerio público. Nulidad del recurso del ministerio público. Consecuencias. | 97 |
| 22.41 Casación. Recurso del ministerio público. Notificación del recurso. Artículo 34 Ley de Casación.. . . . | 98 |
| 22.42 Casación. Recurso interpuesto sin haber sido parte ni condenada en primer y segundo grado. Recurso carente de interés. | 99 |
| 22.43 Casación. Resolución del Tribunal de Tierras. Artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras. Inadmisibilidad del recurso.. . . . | 100 |
| 22.44 Casación. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en Cámara de Consejo. Inadmisibilidad. | 101 |
| 22.45 Casación. Sentencia objeto de dos recursos de casación. Inadmisibile. | 101 |
| 22.46 Casación. Suspensión. Artículo 12 de la Ley de Casación. Perención. Plazo. | 102 |
| 22.47 Casación. Tierras. Plazo. Artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras. Punto de partida. | 104 |
| 22.48 Casación. Trabajo. Caducidad del recurso. Aplicación artículo 7 de la Ley 3726 de 1966. | 106 |

23.- Casinos:

| | |
|--|-----|
| Casinos. Arrendamiento de un casino sin la autorización del Poder Ejecutivo. Artículo 11 Ley No. 351 de 1964, sobre Salas de Juegos de Azar. . . | 107 |
|--|-----|

24.- Cédula:

| | |
|--|-----|
| Cédula de Identidad y Electoral. Ley 8-92. | |
| Falta de la misma. | 107 |

25.- Cesión de Empresa:

| | |
|---|-----|
| 25.1 Cesión de empresa. Obligación de la empresa cesionaria. | 108 |
| 25.2 Cesión de empresa. Prescripción. Artículos 63 y 64 del Código de Trabajo. | 109 |

26.- Certificado de Título:

| | |
|--|-----|
| 26.1 Certificado de título. Inmutabilidad del derecho registrado. Artículo 205 de la Ley sobre Registro de Tierras. | 110 |
| 26.2 Certificado de título. Propósito de la Ley. | 111 |

27.- Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:

| | |
|--|-----|
| Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Propósitos. | 111 |
|--|-----|

28.- Comisión de Apelación de Alquileres:

| | |
|---|-----|
| Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios. Recurso Inadmisible. | 112 |
|---|-----|

29.- Compañía por Acciones:

| | |
|--|-----|
| 29.1 Compañía por Acciones. Acciones contra socios no liquidadores. Artículo 64 del Código de Comercio. | 113 |
| 29.2 Compañía por Acciones. Artículo 64 del Código de Comercio. Prescripción. Fundamento. . . | 114 |
| 29.3 Compañía por Acciones. Liquidación. Artículo | |

| | |
|--|-----|
| 37 del Código de Comercio. | 115 |
| 29.4 Compañía por Acciones. Personalidad jurídica y sus consecuencias. Falta de mención de sus representantes. No hay nulidad sin agravio. . | 116 |
| 30.- Competencia: | |
| 30.1 Competencia. | 116 |
| 30.2 Competencia. Artículo 4 Ley 834 del 1978. Puesta en mora de concluir al fondo. Extensión al referimiento. | 117 |
| 30.3 Competencia. Artículo 56 Ley 14-94. Jurisdicción Contencioso-Administrativa. | 117 |
| 30.4 Competencia. Derecho de propiedad. | 118 |
| 30.5 Competencia. Excepción de incompetencia. Artículo 3 Ley 834. | 118 |
| 30.6 Competencia. Sucesión. Partición. Terrenos registrados. | 120 |
| 31.- Composición de un Tribunal: | |
| Composición de un tribunal. Inhibición. Consecuencias. | 120 |
| 32.- Comunidad de Bienes: | |
| 32.1 Comunidad. Bienes propios. Inmuebles. Derechos adquiridos antes del matrimonio. | 121 |
| 32.2 Comunidad de Bienes. Bienes reservados. Disolución de comunidad. | 122 |
| 32.3 Comunidad de bienes. Bienes reservados. Renuncia. | 123 |
| 32.4 Comunidad de Bienes. Recompensa. Artículo 1437 del Código Civil. | 123 |

33.- Comparecencia Personal:

| | |
|--|-----|
| Comparecencia personal. Naturaleza de la sentencia. | 124 |
|--|-----|

34.- Comunicación de Documentos:

| | |
|--|-----|
| Comunicación de documentos. Sentencia preparatoria. | 125 |
|--|-----|

35.- Conciliación:

| | |
|--|-----|
| 35.1 Conciliación. Finalidad. Incidentes. | 125 |
| 35.2 Conciliación. Propuesta de arreglo. Consecuencias. | 127 |

36.- Condición Potestativa:

| | |
|--|-----|
| Condición Potestativa. Conceptos. | 127 |
|--|-----|

37.- Conclusiones:

| | |
|---|-----|
| 37.1 Conclusiones. Apreciación de la naturaleza de las conclusiones. | 128 |
| 37.2 Conclusiones al fondo. Violación al derecho de defensa. Medio de Inadmisibilidad. | 129 |

38.- Congreso Nacional:

| | |
|---|-----|
| 38.1 Congreso Nacional. Dos discusiones distintas. Artículo 39 de la Constitución. Disposición aplicable únicamente a las leyes en sentido estricto y no a las resoluciones. | 129 |
| 38.2 Congreso Nacional. Facultad de hacerse asistir de otros organismos del Estado. No hay violación a la separación de los poderes. | 130 |
| 38.3 Congreso Nacional. Legislatura | |

ordinaria y extraordinaria. 131

39.- Constitucionalidad:

39.1 Constitucionalidad. 132

39.2 Constitucionalidad. 132

39.3 Constitucionalidad. 132

39.4 Constitucionalidad. Alegatos de
inconstitucionalidad contra varias leyes. 132

39.5 Constitucionalidad. Anulación de los actos
de los poderes públicos. 133

39.6 Constitucionalidad. Artículo 67, inciso 1
de la Constitución. 133

39.7 Constitucionalidad. Artículo 67, inciso 1
de la Constitución. Inconstitucionalidad por vía
principal. Concepto de Ley. Efecto erga omnes.
Control difuso y control concentrado
de la constitucionalidad. Concepto de
parte interesada. 134

39.8 Constitucionalidad. Artículo 539 del
Código de Trabajo. 138

39.9 Constitucionalidad. Decreto Inconstitucional. . 139

39.10 Constitucionalidad. Facultad de
los jueces del fondo. 140

39.11 Constitucionalidad. Alegatos de inconsti-
tucionalidad de los artículos 619 y 641 del
Código de Trabajo. 140

39.12 Constitucionalidad. Procedimiento a seguir.
Constitucionalidad. Acción en
inconstitucionalidad 141

39.13 Constitucionalidad. Oposición contra una

sentencia de la Suprema Corte de Justicia. 144

39.14 Constitucionalidad. Recurso de
Inconstitucionalidad contra una sentencia. 144

40.- Contradicción de Sentencia:

Contradicción de Sentencia. Condiciones. 145

41.- Contratista:

Contratista o empleador principal. Prueba de la
solvencia del sub-contratista. Artículo 12 del
Código de Trabajo. 146

42.- Contrato:

42.1 Contrato. Interpretación. Facultad de los
jueces del fondo. Excepciones. 147

42.2 Contrato. Interpretación. Poder de los
Jueces. Límites. 148

42.3 Contrato. Naturaleza. 149

43.- Contrato Arrendamiento:

43.1 Contrato arrendamiento. Arrendamiento y
sub-arrendamiento. Artículo 1742 del Código
Civil. Vigencia. 150

43.2 Contrato arrendamiento. Contrato de cesión
para la explotación de un fondo de comercio.
Artículo 3 del Decreto No. 4807 de 1959. 151

43.3 Contrato de arrendamiento. Requisitos. 152

44.- Contrato de Trabajo:

44.1 Contrato de trabajo. Cuando se

| | |
|--|-----|
| produce su terminación. | 152 |
| 44.2 Contrato de trabajo. Libertad de prueba. | 153 |
| 44.3 Contrato de trabajo. Pago por comisión. Naturaleza. Inaplicabilidad del Código de Comercio. | 153 |
| 44.4 Contrato de trabajo. IX Principio del Código de Trabajo. Contrato realidad. | 154 |
| 44.5 Contrato de trabajo. Presunción de contrato indefinido. Artículo 34 Código de Trabajo. | 154 |
| 44.6 Contrato de trabajo. Presunción. Artículo 16 del Código de Trabajo. | 155 |
| 44.7 Contrato de trabajo. Prueba. Artículo 16 Código de Trabajo. Agente vendedor a comisión. . . | 155 |
| 44.8 Contrato de trabajo. Renuncia de derechos. Carácter unilateral del descargo. | 156 |
| 44.9 Contrato de trabajo. Suspensión. Artículo 55 del Código de Trabajo. Ineficacia de resolución de Aeronáutica Civil. | 157 |
| 44.10 Contrato de trabajo. Suspensión ilegal. Artículo 100 Código de Trabajo. | 158 |
| 44.11 Contrato de trabajo. Terminación. Alegato de despido. Conclusión de la Obra. | 158 |
| 44.12 Contrato de trabajo. Terminación por mutuo acuerdo. Terminación por ante un Notario. . . | 159 |

45.- Corporación Dominicana de Empresas Estatales:

| | |
|---|-----|
| Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Ley 289 de 1966. Sentencias definitivas. Seguridad jurídica. | 160 |
|---|-----|

54.- Desalojo:

| | |
|--|-----|
| Desalojo. Solicitud para ocupar vivienda. Declaración jurada por ante el Control de Alquileres de Casas y Desahucios. | 178 |
|--|-----|

55.- Descargo:

| | |
|--|-----|
| 55.1 Descargo. Prestaciones laborales. Expedición de cheques. Necesidad del procedimiento de oferta real de pago. | 179 |
| 55.2 Descargo. Prestaciones laborales. Recibo de descargo con posterioridad a la terminación del contrato. | 180 |

56.- Desistimiento:

| | |
|--|-----|
| Desistimiento. Recursos. Condiciones. | 180 |
|--|-----|

57.- Despido:

| | |
|---|-----|
| 57.1 Despido. | 180 |
| 57.2 Despido. Falta de comunicación al Departa- mento de Trabajo. Artículo 93 del Código de Trabajo. Presunción. | 181 |
| 57.3 Despido. Falta laboral. Hecho sujeto a sanción penal. Consecuencias. | 182 |
| 57.4 Despido injustificado. Presunción juris et jure. No comunicación a las autoridades de trabajo. . | 182 |
| 57.5 Despido. Justa causa. Comunicaciones de faltas. | 183 |
| 57.6 Despido. Negativa de la existencia del contrato de trabajo. | 184 |
| 57.7 Despido. Nulidad. Artículo 233 del | |

| | |
|---|-----|
| Código de Trabajo. Embarazo. | 184 |
| 57.8 Despido. Obligación de comunicar las faltas. . . | 185 |
| 57.9 Despido. Participación en una riña. | 185 |
| 57.10 Despido. Plazo vencimiento en día feriado. . . | 186 |
| 57.11 Despido. Precisiones que debe hacer el juez. . | 186 |
| 57.12 Despido. Prescripción. | 187 |
| 57.13 Despido. Presunción de despido injustificado. Comunicación al Departamento de Trabajo. Carácter de orden público. | 188 |
| 57.14 Despido. Prueba del despido. Prueba de la justa causa del abandono. | 188 |
| 57.15 Despido. Prueba de la justa causa. | 189 |
| 57.16 Despido. Prueba. Insuficiencia de probar la existencia del contrato. | 189 |

58.- Determinación de Herederos:

| | |
|--|-----|
| 58.1 Determinación de Herederos. Herederos omitidos. Tercero de buena fe. Condiciones. | 190 |
| 58.2 Determinación de herederos. Transferencia solicitada conjuntamente. Artículo 266 de la Ley de Registro de Tierras. Tercero adquirente de buena fe. Artículos 1116 y 2268 del Código Civil. . . . | 191 |

59.- Dimisión:

| | |
|---|-----|
| 59.1 Dimisión. Cambio de forma de pago. | 192 |
| 59.2 Dimisión. Falta continua. Plazo. | 193 |

60.- Disciplinaria:

| | |
|--|-----|
| 60.1 Disciplinaria. Destitución de un juez. Artículo 62 Ley de Carrera Judicial. Objetivo del régimen disciplinario. | 194 |
| 60.2 Disciplinaria. Fiscal del Distrito Nacional. Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia. . . . | 194 |

61.- Divorcio:

| | |
|--|-----|
| 61.1 Divorcio. Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Comunicación al Ministerio Público. . . | 195 |
| 61.2 Divorcio. Artículo 215 del Código Civil. Demanda en nulidad. | 196 |
| 61.3 Divorcio. Juzgado de Paz. Incompetencia para ordenar el retiro de bienes en beneficio de una parte. | 197 |

62.- Documentos:

| | |
|--|-----|
| 62.1 Documentos. Depósito. Artículos 508 y 544 del Código de Trabajo. | 197 |
| 62.2 Documentos no ponderados por el tribunal. Casación de la sentencia. | 199 |

63.- Dolo:

| | |
|---|-----|
| Dolo. Facultad de los jueces. Distinción. | 200 |
|---|-----|

64.- Domicilio:

| | |
|---|-----|
| 64.1 Domicilio de elección. Artículo 111 del Código Civil. Notificación de una sentencia. | 201 |
| 64.2 Domicilio desconocido. Notificación. Artículo | |

| | |
|--|-----|
| 69 párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil..... | 202 |
|--|-----|

65.- Drogas:

| | |
|---|-----|
| 65.1 Drogas y sustancias controladas. Arrestos investigativos. | 202 |
| 65.2 Drogas. Valor en el mercado de una cantidad de droga..... | 203 |

E

66.- Electa una Vía:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Electa una vía. Condiciones..... | 204 |
|----------------------------------|-----|

67.- Embarazo:

| | |
|--|-----|
| 67.1 Embarazo. | 205 |
| 67.2 Embarazo. Artículo 232 del Código de Trabajo. Notificación al empleador. | 205 |

68.- Embargo:

| | |
|--|-----|
| 68.1 Embargo Inmobiliario. Incidentes. Artículo 734 del Código de Procedimiento Civil. | 206 |
| 68.2 Embargo inmobiliario. Oposición al mandamiento de pago. | 207 |
| 68.3 Embargo retentivo. Tercero embargado. Artículos 569 y 577 del Código de Procedimiento Civil. Demanda en validación y demanda en declaración de deudor puro y simple. | 208 |

69.- Emplazamiento:

| | |
|--|-----|
| 69.1 Emplazamiento. Artículos 68 y 70 del Código de Procedimiento Civil. Notificación..... | 210 |
| 69.2 Emplazamiento. Demandado residente | |

en el extranjero. Artículo 73, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. Emplazamiento en la octava franca. No hay nulidad sin agravio. 211

69.3 Emplazamiento. Notificación al domicilio de elección. 212

70.- Empleador:

70.1 Empleador. Dueño de la empresa. Artículo 3 del Código de Trabajo. Solidaridad. 213

70.2 Empleador. Nombre comercial. Consecuencia. 214

70.3 Empleadores demandados. Solidaridad. Artículo 13 del Código de Trabajo. Condiciones. . . . 214

71.- Empresas Públicas:

71.1 Empresas Públicas. Artículo 4 de la Constitución. Ley 141-97. Alegato de violación a la separación de poderes. 215

71.2 Empresas Públicas. Conversión en sociedades anónimas. Ley 141-97. 215

71.3 Empresas Públicas. Ley 141-97. 216

72.- Error Material:

72.1 Error material. Error en cuanto al nombre. Artículo 205 de la Ley sobre Registro de Tierras. . . . 218

72.2 Error Material. Corrección. Artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras. 219

73.- Estado:

73.1 Estado. Bienes del dominio público y del dominio privado. Distinción. Posibilidad de enajenación. 219

| | |
|--|-----|
| 73.2 Estado Dominicano. Enajenación inmobiliaria. Aprobación del Congreso Nacional. . . | 221 |
| 73.3 Estado. Entidades autónomas. Instituto Agrario Dominicano. Ley 1486 de 1938. | 222 |
| 73.4 Estado. Representación. Ley 14-86 de 1938. . . | 223 |

74.- Excepción Non Adimpleti Contractus:

| | |
|---|-----|
| Excepción non adimpleti contractus. Aplicación. . . | 224 |
|---|-----|

75.- Extradición:

| | |
|--|-----|
| 75.1 Extradición. Ley 489 de 1969, modificada por la Ley 278 de 1998. Facultad del Presidente de la República. | 224 |
| 75.2 Extradición. Facultad del Procurador Gene- ral de la República para dictar mandamiento. | 225 |

F

76.- Falta:

| | |
|--|-----|
| 76.1 Falta. Falta de base legal. Características. . . | 227 |
| 76.2 Falta. Falta de calidad. Violación de los artículos 1134 y 1165 del Código Civil. Res inter alios acta. | 227 |

77.- Fianza Judicatum Solvi:

| | |
|--|-----|
| 77.1 Fianza Judicatum Solvi. Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil. No se exige para un recurrido en casación. Medio nuevo en casación. | 228 |
| 77.2 Fianza Judicatum Solvi. Inaplicabilidad de la fianza judicatum solvi en materia laboral. | 229 |

78.- Fijación de Sellos:

Competencia. Juez de Paz. 229

79.- Filiación:

Filiación. Prueba. Acto de notoriedad. 229

80.- Fotocopia:

80.1 Fotocopia. Casación. Copia de la sentencia. . . 231

80.2 Fotocopia. Prueba. Validez. 232

80.3 Fotocopia. Prueba de un testamento.
Deber de los jueces. 23280.4 Fotocopia. Valor probatorio.
Obligación del juez. 234**81.- Fuero Sindical:**Fuero Sindical. Desahucio. Artículo 80 del
Código de Trabajo. 234**G****82.- Guardián:**Guardián de la cosa inanimada. Apoderamiento
previo a la jurisdicción represiva. 236**H****83.- Habeas Corpus:**83.1 Habeas Corpus. Admisibilidad de la acción.
Límites. Fines del Habeas Corpus. 23783.2 Habeas Corpus. Competencia de la
Suprema Corte de Justicia. 238

| | |
|---|-----|
| 83.3 Habeas Corpus. Competencia. | 239 |
| 83.4 Habeas Corpus. Competencia. | 240 |
| 83.5 Habeas Corpus. Competencia. | 241 |
| 83.6 Habeas Corpus. Competencia. Rehusamiento a librar el mandamiento. Artículo 25 Ley sobre Habeas Corpus. Naturaleza del Habeas Corpus. | 241 |
| 83.7 Habeas Corpus. Extradición. | 243 |
| 83.8 Habeas Corpus. Mandamiento. Procedencia. Justificación. | 243 |
| 83.9 Habeas Corpus. Presencia del Ministerio Público. Artículo 16 de la Ley de Hábeas Corpus. Facultad de los jueces si hay indicios de culpabilidad. | 244 |

/

84.- Idioma:

| | |
|---|-----|
| Idioma. Acusado juzgado en un idioma que no conoce. | 246 |
|---|-----|

85.- Impuesto de Salida:

| | |
|---|-----|
| Impuesto de Salida. Decreto. Inconstitucionalidad.. | 246 |
|---|-----|

86.- Incompetencia:

| | |
|--|-----|
| Incompetencia. Declinatoria por ante la Suprema Corte de Justicia. Artículos 381 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal. | 250 |
|--|-----|

87.- Indivisibilidad:

| | |
|--|-----|
| Indivisibilidad. Recursos. Indivisión en el objeto de litigio. Emplazamiento solamente a una parte... | 251 |
|--|-----|

88.- Inhibición:

Inhibición. Obligación del Juez..... 251

89.- Instancia:

Instancia. Renovación. Artículo 344 del Código de Procedimiento Civil. 252

90.- Intervención Voluntaria:

Intervención voluntaria. Requisitos..... 253

J**91.- Juez:**

91.1 Juez. Demanda en responsabilidad civil contra un juez. Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Competencia de la Suprema Corte de Justicia para la autorización..... 254

91.2 Juez de Paz. Fijación de sellos. Artículo 912 del Código de Procedimiento Civil..... 255

92.- Junta Monetaria:

92.1 Junta Monetaria. 255

92.2 Junta Monetaria. Atribuciones. Carácter definitivo y no susceptible de recurso de sus resoluciones..... 255

93.- Jurisdicción Contencioso Administrativo:

93.1 Jurisdicción contencioso administrativo. 256

93.2 Jurisdicción contencioso administrativo. Carácter especial. Competencia en materia de contratos. Ley 14-94 de 1947..... 257

93.3 Jurisdicción contencioso administrativo. Competencia. Artículo 56 Ley 14-94 de 1947. 258

93.4 Jurisdicción contencioso administrativo.

| | |
|---|-----|
| Incompetencia. Demanda contra el Estado para el pago de mejoras. | 258 |
|---|-----|

94.- Jus Variandi:

| | |
|---|-----|
| Jus variandi. Modificación del horario de trabajo de manera unilateral. Antiguo Artículo 56 del Código de Trabajo. | 259 |
|---|-----|

95.- Juzgado de Paz:

| | |
|---|-----|
| Juzgado de Paz. Demandas en desalojo o desahucio. Competencia. Comunicación de documentos. Artículo 2 de la Ley 834 de 1978. | 261 |
|---|-----|

L

96.- Libertad Condicional:

| | |
|--|-----|
| Libertad condicional. Revocación. | 263 |
|--|-----|

97.- Libertad Provisional Bajo Fianza

| | |
|--|-----|
| 97.1 Libertad Provisional bajo fianza. Monto de la fianza prestada. | 263 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 97.2 Libertad Provisional bajo fianza. Razones poderosas. | 264 |
|--|-----|

98.- Libros de Comercio:

| | |
|--|-----|
| Libros de Comercio. Artículo 8 al 11 del Código de Comercio. Fuerza probante. Estado de cuentas. Banco. | 265 |
|--|-----|

99.- Locomotoras:

| | |
|---|-----|
| Locomotoras. Artículo 1ero. y 230 de la Ley 241. | 266 |
|---|-----|

100.- Lo laboral mantiene a lo Penal en Estado:

| | |
|--|-----|
| 100.1 Lo laboral mantiene a lo penal en estado. Falta que constituye un delito penal. | 266 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 100.2 Lo laboral mantiene a lo penal en estado. Artículo 74 del Código de Trabajo. | 267 |
|--|-----|

M

101.- Medio de Inadmisión:

| | |
|---|-----|
| 101.1 Medio de Inadmisibilidad. Alegato de que no se conoció al fondo. | 269 |
| 101.2 Medio de Inadmisión. Necesidad de poner en mora al rechazarse un medio de inadmisión. | 269 |
| 101.3 Medio de inadmisión. Obligación de fallarlo antes del fondo. | 270 |

102.- Menores:

| | |
|---|-----|
| 102.1 Menores. Ley 14-94: Propósito. Reclama- ción de alimentos. Carácter provisional. Apelación de pensiones alimentarias: Efecto Ejecutorio. | 271 |
| 102.2 Menores. Reclamación de alimentos. Carácter provisional. | 271 |

N

103.- No hay Nulidad sin Agravio:

| | |
|--|-----|
| No hay nulidad sin agravio. Artículo 37 Ley 834 de 1978. Lo que se entiende por perjuicio. | 273 |
|--|-----|

104.- Nombre Comercial:

| | |
|--|-----|
| 104.1 Nombre Comercial. Artículo 8. Ley 1450 del 1958. Nombre geográfico. División territorial. Paraje. Ley 5220 de 1959. | 273 |
| 104.2 Nombre comercial. Conflicto entre particu- lares. Competencia de los tribunales ordinarios. | 275 |

| | |
|--|-----|
| 104.3 Nombre comercial. Nulidad del traspaso. Medio nuevo en casación. | 277 |
|--|-----|

105.- Notarios:

| | |
|--|-----|
| Notarios. Artículo 16, literal b de la Ley del Notariado. Distinción entre una sanción disciplinaria y una sanción penal. | 277 |
|--|-----|

106.- Notificación:

| | |
|---|-----|
| 106.1 Notificación. Artículo 68 Código de Procedimiento Civil. Sello gomígrafo del ayuntamiento. Recursos. | 278 |
| 106.2 Notificación. Notificación al abogado constituido. Artículo 147 del Código de Procedimiento Civil. | 280 |

107.- Nulidad:

| | |
|---|-----|
| 107.1 Nulidad. Acto de Procedimiento. Necesidad de ser pronunciadas. | 281 |
| 107.2 Nulidad. Nulidad de los actos de los poderes públicos. Anulación. Formas de proceder. Perención de instancia. Suprema Corte de Justicia. Artículo 397 Código de Procedimiento Civil. | 281 |
| 107.3 Nulidad. Demanda. Competencia. Derecho registrado puesto en juego. | 283 |

O

108.- Ocultamiento de Bienes:

| | |
|---|-----|
| 108.1 Ocultamiento o distracción de bienes. Artículos 792 y 1477 del Código Civil. | 286 |
| 108.2 Ocultamiento de bienes. Condiciones. | 287 |

109.- Oferta Real de Pago:

| | |
|---|-----|
| 109.1 Oferta real de pago. Artículo 86 del Código de Trabajo. Diferencia en cuanto a lo ofertado y reclamado. | 287 |
| 109.2 Oferta real de pago. Artículo 653 del Código de Trabajo. Necesidad de la consignación para la liberación de la obligación. | 289 |
| 109.3 Oferta real de pago. Condiciones impuestas por el ofertante. | 290 |

110.- Oposición:

| | |
|--|-----|
| 110.1 Oposición. Constitucionalidad. Inadmisible contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. | 291 |
| 110.2 Oposición. Recurso. Sentencias contra las cuales se admite. | 293 |

P**111.- Pacto Colectivo:**

| | |
|--|-----|
| Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Condiciones para su ejecución. Artículo 105 del Código de Trabajo. | 295 |
|--|-----|

112.- Partición:

| | |
|--|-----|
| 112.1 Partición y liquidación de bienes. Artículos 7, 193 y 214 de la Ley de Registro de Tierras. Competencia. | 296 |
| 112.2 Partición de una sucesión. Competencia. Artículos 214 Ley de Registro de Tierras. Tribunal civil apoderado. | 297 |

113.- Patente de Invención:

| | |
|---|-----|
| Patente de invención. Protección. Ley 4994 de 1911..... | 299 |
|---|-----|

114.- Patrono:

| | |
|---|-----|
| Patrono. Obligaciones adquiridas por el anterior patrono. Influencia del pacto colectivo. Artículos 57 y 58 del Código de Trabajo. | 300 |
|---|-----|

115.- Patronato:

| | |
|---|-----|
| Patronato Nacional de Ganaderos. Naturaleza Jurídica..... | 301 |
|---|-----|

116.- Perención de Instancia:

| | |
|--|-----|
| 116.1 Perención de instancia. Casación. Efectos.. | 302 |
| 116.2 Perención de instancia materia laboral. Formas de demandarla. | 303 |

117.- Perjuicio:

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Perjuicio. Perjuicio in futurum..... | 304 |
|--------------------------------------|-----|

118.- Permuta:

| | |
|--|-----|
| Permuta. Aplicación de las reglas para la compraventa. Artículo 173 del Código Civil. | 305 |
|--|-----|

119.- Personalidad de las Penas:

| | |
|---|-----|
| Personalidad de las penas. Persecución penal contra los ejecutivos o representantes legales de una persona moral..... | 305 |
|---|-----|

120.- Perdón Condicional:

| | |
|--|-----|
| Perdón condicional. Ley 223-84. Condiciones..... | 306 |
|--|-----|

121.- Poder Ejecutivo:

| | |
|---|-----|
| Poder Ejecutivo. Poder al Administrador General de Bienes Nacionales..... | 307 |
|---|-----|

122.- Prestaciones Laborales:

| | |
|--|-----|
| 122.1 Prestaciones Laborales. | 308 |
| 122.2 Prestaciones laborales. Retardo en el cumplimiento de la obligación. Artículos 86 y 95 del Código de Trabajo. | 308 |
| 122.3 Prestaciones laborales. Condición de empleador. Obligación de los jueces. | 310 |
| 122.4 Prestaciones laborales. Condiciones para su otorgamiento. | 310 |
| 122.5 Prestaciones laborales. Condición de empleador. Obligación de los jueces. | 311 |
| 122.6 Prestaciones laborales. Irretroactividad de la ley. | 313 |
| 122.7 Prestaciones laborales. Pacto colectivo. ... | 314 |

123.- Prescripción:

| | |
|---|-----|
| Prescripción. Materia laboral. Asuntos de interés privado. | 315 |
|---|-----|

124.- Presunción :

| | |
|---|-----|
| 124.1 Presunción de Inocencia..... | 315 |
| 124.2 Presunción de comitencia. Propietario de un vehículo de motor. | 315 |

125.- Probidad:

| | |
|---|-----|
| Probidad. Falta de probidad y honradez. Artículo 88 Código de Trabajo. | 316 |
|---|-----|

126.- Proceso Criminal:

126.1 Proceso criminal. Artículo 280 del Código de Procedimiento Criminal. Garantía del proceso oral. 317

126.2 Proceso criminal. Carácter Moral. Reglas de orden público. Artículo 280 Código de Procedimiento Criminal. 317

127.- Promesa de Venta:

Promesa de Venta. Competencia de la Jurisdicción Civil. 318

128.- Providencia Calificativa:

Providencia Calificativa. Recurso. Sobreseimiento. 318

129.- Provocación:

Provocación. Condiciones. 319

130.- Prueba:

130.1 Prueba. Acta escrita. Admisión de testimonio contra ella. Requisitos. Sentido del artículo 549 del Código de Trabajo. 320

130.2 Prueba. Apreciación de los jueces de fondo. Condiciones. 321

130.3 Prueba contrato de trabajo. Condenaciones sobre la base del uso y la costumbre. Precisiones que deba hacer el juez. 322

130.4 Prueba. Facultad de la Corte de Casación de examinar el carácter legal de la prueba. 322

| | |
|---|-----|
| 130.5 Prueba. Materia laboral. Precisiones del tribunal. | 323 |
| 130.6 Prueba. Violación. Derecho de defensa. Apreciación de Prueba. | 323 |

Q

131.- Querella:

| | |
|--|-----|
| 131.1 Querella. Daños y perjuicios. No pago de salarios en la fecha convenida. | 324 |
| 131.2 Querella. Daños y perjuicios. No pago de salario en la fecha convenida. | 325 |
| 131.3 Querella directa. Artículo 25 de la Ley 91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Condiciones. | 326 |

R

132.- Radio Televisión Dominicana:

| | |
|--|-----|
| Radio Televisión Dominicana. Condición de empleados públicos. Ley No. 168 del 5 de abril de 1966. Cuestión de orden público. | 328 |
|--|-----|

133.- Reapertura de Debates:

| | |
|--|-----|
| 133.1 Reapertura de Debates. Condiciones. | 329 |
| 133.2 Reapertura de debates. Sentencia Preparatoria. | 329 |
| 133.3 Reapertura de debates. Facultades del juez. Condiciones. | 330 |

134. - Reconocimiento de un Hijo:

| | |
|---|-----|
| 134.1 Reconocimiento de un hijo. Acta de nacimiento. | 330 |
| 134.2 Reconocimiento de hijo. Declaración personal del padre. Artículo 46 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. | 331 |

135.- Recursos:

| | |
|---|-----|
| 135.1 Recursos. Desistimiento. Condiciones. | 332 |
| 135.2 Recursos. Formalidades requeridas. Imposibilidad de ser sustituidas por otras. | 332 |
| 135.3 Recursos. Sentencia irregularmente notificada. Punto de partida del plazo. | 332 |
| 135.4 Recursos. Interposición. Formalidades. Irrelevancia de la existencia o no de un agravio. Inadmisibilidad. | 333 |
| 135.5 Recursos. Recursos interpuestos por los ayudantes del ministerio público. | 334 |
| 135.6 Recursos. Recursos interpuestos por el abogado ayudante del ministerio público. Nume- ral 1ro. del Artículo 2 de la Ley No. 1822 de 1948. | 335 |
| 135.7 Recursos. Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia. | 335 |
| 135.8 Sentencia Incidental. Punto de partida. | 336 |

136.- Referimiento:

| | |
|--|-----|
| 136.1 Referimiento. Artículo 667 del Código de Trabajo. Demanda en cancelación de Registro Sindical. | 336 |
| 136.2 Referimiento. Competencia del juez de | |

los referimientos. Interpretación del artículo 101
de la Ley No. 834 de 1978. 337

136.3 Referimiento. Suspensión de Ejecución.
Notificación en la oficina de abogado. 337

136.4 Referimiento. Suspensión de
ejecución de sentencia. Condiciones. 338

137.- Representantes Locales de Trabajo:

Representantes locales de trabajo. Despido.
Atribuciones. Representantes competente. 338

138.- Responsabilidad Civil:

138.1 Responsabilidad Civil. Cláusula de
Limitación de Responsabilidad. 339

138.2 Responsabilidad Civil. Daños y
Prejuicios. Daños Morales. 340

138.3 Responsabilidad Civil. Cheque sin fondo. . . . 341

138.4 Responsabilidad civil.
Demanda contra un juez. 341

138.5 Responsabilidad civil. Ejercicio de un
derecho. Alegato de abuso de un derecho. 341

138.6 Responsabilidad Civil. Falta médica.
Caso de especie. 342

138.7 Responsabilidad civil. Falta temporal del
servicio telefónico. Obligación de los jueces de
justificar la indemnización. 342

138.8 Responsabilidad Civil. Guardián de la cosa
inanimada. Artículo 1384, párrafo 1ero. del Cód-
go Civil. Condiciones. Obligación de los jueces. . . . 343

| | |
|--|-----|
| 138.9 Responsabilidad civil. Intereses complementarios. Facultades de los jueces. | 345 |
| 138.10 Responsabilidad civil. Prescripciones particulares. Fundamento. | 345 |
| 138.11 Responsabilidad civil laboral. Artículos del 712 al 715 del Código de Trabajo. Exoneración de la prueba del perjuicio. Constitucionalidad. | 346 |
| 138.12 Responsabilidad Contractual. Incompetencia de la jurisdicción represiva. | 347 |

139.- Retroactividad de la Ley:

| | |
|--|-----|
| Retroactividad de la ley. Procedencia. Leyes 50-88 y 17-95. | 347 |
|--|-----|

140.- Res Inter Alios Acta:

| | |
|---|-----|
| Res inter alios acta. Calidad para demandar la nulidad de un contrato. | 349 |
|---|-----|

141.- Revisión:

| | |
|--|-----|
| 141.1 Revisión Civil. Dolo atribuido a un tercero. Acción en daños y perjuicios. | 349 |
| 141.2 Revisión por causa de fraude. Artículo 139 de la Ley de Registro de Tierras. | 349 |
| 141.3 Revisión por causa de error material. Artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras. Alcance. | 350 |
| 141.4 Revisión por causa de fraude. Poder soberano de los jueces. | 351 |

S

142.- Salarios:

| | |
|---|-----|
| Salarios. Determinación de su monto. | 352 |
|---|-----|

143.- Saneamiento Inmobiliario:

Saneamiento inmobiliario. Facultades del Tribunal Superior de Tierras. 352

144.- Secretario de Estado sin Cartera:

Secretario de Estado sin cartera. Competencia. . . . 354

145.- Seguro:

145.1 Seguro. Propiedad de Vehículos. Póliza. 355

145.2 Seguro obligatorio. 355

145.3 Seguro obligatorio. Asegurador que viola el contrato. Acción recursoria a favor del asegurador. . 356

145.4 Seguro obligatorio. Póliza de seguro. Asegurado que no niega la calidad en virtud de la cual se le demanda. 356

145.5 Seguro obligatorio. Puesta en causa al asegurador. 356

145.6 Seguro obligatorio de vehículo. Ejecución no obstante cualquier recurso contra el asegurador. Improcedente. Artículo 29 Ley de Casación. 357

145.7 Seguro de responsabilidad civil. Inoponibilidad al asegurador. Inaplicabilidad del artículo 10 de la Ley 4117. 357

146.- Sentencia:

146.1 Sentencia. Artículo 11 inciso 9. Ley Registro de Tierras. Poderes de los jueces. 359

146.2 Sentencia. Diferencia entre la existencia y la calificación de los hechos. 359

146.3 Sentencia Ejecutada. Materia laboral. Interés jurídico de la parte perdedora. Finalidad

| | |
|---|-----|
| del artículo 539 del Código de Trabajo. | 360 |
| 146.4 Sentencia. Ejecución Provisional. Art. 127 al 141 de la Ley 834 de 1978. Ejecución de pleno derecho. Excepciones. | 361 |
| 146.5 Sentencia. Exclusión de oficio de un demandado. | 362 |
| 146.6 Sentencia. Fecha. Certificación de Secretaria. | 363 |
| 146.7 Sentencia. Medida de Instrucción. Obligación de cumplirlas. Excepciones. | 363 |
| 146.8 Sentencia. Menció de que será ejecutoria provisionalmente. Consecuencia de su omisión. . . | 364 |
| 146.9 Sentencia. Motivación. | 365 |
| 146.10 Sentencia. Motivación. | 365 |
| 146.11 Sentencia. Motivación. Finalidad. | 365 |
| 146.12 Sentencia. Motivación. Derecho fundamental de las personas. | 367 |
| 146.13 Sentencia. Motivaciones. Importancia. . . . | 368 |
| 146.14 Sentencia. Motivación. Naturaleza de los hechos. | 368 |
| 146.15 Sentencia. Motivación. Uso y costumbre. . . | 369 |
| 146.16 Sentencia. Motivos. Enumeración de elementos probatorios. Intima convicción. | 369 |
| 146.17 Sentencia. Notificación. Punto de partida del plazo para los recursos. Domicilio desconocido. Artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil. | 370 |
| 146.18 Sentencia. Obligación de fallar sobre las conclusiones, no sobre los alegatos | |

| | |
|---|-----|
| y argumentos. | 373 |
| 146.19 Sentencia. Orden en cuanto al fallo. | 373 |
| 146.20 Sentencia. Plazo para fallar. Falta imputable a los jueces. No constituye un vicio de casación. | 374 |
| 146.21 Sentencia preparatoria. Comunicación de documentos. | 374 |
| 146.22 Sentencia preparatoria. Comparecencia personal. | 375 |
| 146.23 Sentencia preparatoria. Reapertura de debates. | 375 |
| 146.24 Sentencia. Suspensión de Ejecución. Interpretación del artículo 134 de la Ley No. 834 de 1978. | 375 |
| 146.25 Sentencia. Recursos. Imposibilidad de ser atacada por acción principal. | 376 |
| 146.26 Sentencia. Recursos contra la misma. Hechos y derecho. | 376 |
| 146.27 Sentencia. Relación de hechos y derechos. | 377 |
| 146.28 Sentencia. Suspensión. Artículo 539. Prestación de Fianza. | 377 |
| 146.29 Sentencia. Tribunal colegiado. Ley 684 de 1984. | 378 |
| 147.- Simulación: | |
| Simulación. Facultad de los jueces de fondo. | 379 |
| 148.- Sobreseimiento: | |
| 148.1 Sobreseimiento. Recurso de Tercería. | 379 |
| 148.2 Sobreseimiento. Recurso de apelación | |

| | |
|--|-----|
| inadmisible. Querella en falsedad. Consecuencia.. | 381 |
| 148.3 Sobreseimiento. Jurisdicción de fondo. . . . | 381 |

149.- Solve Et Respete:

| | |
|--|-----|
| Solve et respete. Artículo 8 Ley 14-94 de 1947. | |
| Pago de impuesto previa aun cuando se invoque la incompetencia. | 382 |

150.- Sociedades:

| | |
|--|-----|
| 150.1 Sociedades financieras de empresas que promueven el desarrollo económico. Ley No. 292 de 1966. Alegato de inconstitucionalidad . . | 383 |
| 150.2 Sociedades. Fusión. | 384 |
| 150.3 Sociedades. Fusión. Consecuencias. Artículo 42 del Código de Comercio. Publicidad. . . . | 385 |
| 150.4 Sociedad de hecho. Calificación. | 386 |

151.- Solidaridad:

| | |
|---|-----|
| Solidaridad. Contratos de trabajo. Artículo 13 Código de Trabajo. Condiciones. | 387 |
|---|-----|

152.- Suprema Corte de Justicia:

| | |
|--|-----|
| 152.1 Suprema Corte de Justicia. Poder creador. Máximas y principios. | 388 |
| 152.2 Suprema Corte de Justicia. Querella con constitución en parte civil. Artículo 25 Ley 91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Auto del Presidente. | 389 |
| 152.3 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la República y otros funcionarios. Auto del Presidente. Necesidad de juicio previo. . . . | 390 |
| 152.4 Suprema Corte de Justicia. Querella con constitución en parte civil en contra de Jueces de la Suprema Corte de Justicia. Auto del Presidente. | |

| | |
|---|-----|
| Solicitud de inhibición de jueces.. | 393 |
| 152.5 Suprema Corte de Justicia. Querella contra Senador de la República. Auto del Presidente. Calidad para constituirse en parte civil.. . . . | 397 |
| 152.6 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Auto del Presidente. Actuación dentro de la ley. | 398 |
| 152.7 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Auto del Presidente. Necesidad de un poder para actuar a nombre del agraviado.. . . . | 401 |
| 152.8 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Secretario de Estado de Interior y Policía y Jefe de la Policía Nacional. Auto del Presidente. Necesidad de poder. | 402 |
| 152.9 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Junta Central Electoral. Auto del Presidente. Violación a la Ley del Notariado. | 404 |
| 152.10 Suprema Corte de Justicia. Querella contra Juez Cámara de Cuentas. Auto del Presidente. Necesidad de haber sufrido un perjuicio.. . . . | 407 |
| 152.11 Suprema Corte de Justicia. Recursos contra sus sentencias.. | 410 |

153.- Suspensión de Ejecución:

| | |
|---|-----|
| Suspensión de ejecución de una sentencia. Aplicación a las sentencias de los juzgados de paz de los artículos 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978. | 410 |
|---|-----|

T

154.- Trabajadores:

| | |
|---|-----|
| 154.1 Trabajador que ejerce el desahucio. | 412 |
| 154.2 Trabajadores. Renuncia de sus derechos. V principio fundamental del Código de Trabajo. Alcance. | 413 |

155.- Trabajadora Embarazada:

| | |
|---|-----|
| 155.1 Trabajadora embarazada. Artículo 233 del Código de Trabajo. Terminación del Contrato por mutuo acuerdo. | 413 |
| 155.2 Trabajadora embarazada. Terminación de contrato. Acto auténtico. | 414 |
| 155.3 Trabajadora embarazada. | 416 |
| 155.4 Trabajadora embarazada. | 416 |

156.- Tercero Adquiriente:

| | |
|--|-----|
| 156.1 Tercero adquiriente de buena fe. Un mueble adquirido en virtud de un certificado de título. Presunción de buena fe. Excepción. | 416 |
| 156.2 Tercero adquiriente de buena fe. Ausencia de oposición en el certificado de título. | 417 |

157.- Testigos:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Testigos. Declaración. | 419 |
|--------------------------------|-----|

158.- Tierra:

| | |
|---|-----|
| Tierra. Artículos 185 y 186 de la Ley de Registro de Tierras. Publicidad. Registro de Títulos. | 419 |
|---|-----|

V

159.- Venta de Terrenos:

Venta de terrenos registrados. Formalidades.

Artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras.

Obligación de los jueces..... 421

160.- Vivienda Suntuaria:

Vivienda suntuaria. Art. 12 de la Ley 18-88.

Cuando constituye un medio de inadmisión..... 422

A

1. ABUSO DE DERECHO:

Abuso de derecho. Alegato.

(Ver: Responsabilidad civil. Ejercicio de un derecho. Alegato de abuso de un derecho. Pleno, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 131-132).

2. ACCIDENTE DE TRABAJO:

Accidente de trabajo. Artículo 728 del Código de Trabajo. Ley 385 sobre accidente de trabajo. Trabajador no asegurado. Competencia.

Considerando, que de la redacción del artículo 728 del Código de Trabajo, la Ley No. 385 sobre Accidentes de Trabajo sólo es aplicable en esta materia, cuando el empleador tiene asegurado al trabajador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y está al día en el pago de sus cotizaciones, pues al disponer que "todas las materias relativas a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están regidas por leyes especiales", establece que "no obstante, la no inscripción del trabajador por parte del empleador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o la falta de pago de las contribuciones correspondientes, obliga a este último a reembolsar el salario completo correspondiente a la ausencia del trabajador, los gastos en que incurra por

motivo de la enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no recibida a causa de falta del empleador;

Considerando, que de igual manera tiene que cubrir la reparación de los daños y perjuicios que sufra con motivo de un accidente de trabajo, al ser responsable civilmente de estos daños, en virtud de las disposiciones del artículo 725 del Código de Trabajo, los cuales son cubiertos por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, si el empleador está dentro de los límites de cumplimiento de las leyes de Accidentes del Trabajo y del Seguro Social; que cuando esto no sucede él es responsable personalmente del pago de todas las prestaciones que determinan las leyes sobre la materia, más las indemnizaciones reparatorias de los daños adicionales que padece un trabajador al requerir de atenciones médicas, internamiento, suministro de medicinas y equipos médicos y otros servicios y no disfrutarlos por el estado de falta en que se encuentra su empleador;

Considerando, que la acción ejercida por el recurrido está enmarcada dentro de las que corresponde conocer a los tribunales de trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 713 del Código de Trabajo, pues al no tener inscrito el recurrente al trabajador en el Seguro Social, incurrió en la responsabilidad civil prevista en los artículos 712 y 725 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 685-686).

3. ACCIDENTE DE VEHICULO:

Véase además:

-Acción Civil.

-Locomotoras.

-Responsabilidad Civil.

-Seguros.

3.1 Accidente de vehículo. Autor de los daños y civilmente responsable. Solidaridad. Daños morales.

Considerando, que conforme a los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, la reparación de la víctima, tanto a cargo del autor de los daños como de la o de las personas a quienes esos textos hacen civilmente responsables caracteriza un caso de solidaridad de pleno derecho a los términos de los artículos 1200 y 1202 del mismo Código;

Considerando, que un hecho ilícito es susceptible de ocasionar tanto daños morales como materiales;

Considerando, que los daños morales son la consecuencia obligada del dolor y del sufrimiento producido por las heridas recibidas a consecuencia de un hecho ilícito;

Considerando, que ha sido comprobado, que la parte civil constituida recibió daños y perjuicios morales y materiales a consecuencia del accidente y por tanto, merece una reparación. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 171).

3.2 Accidente de vehículo. Comitente. Propietario del vehículo. Comitencia. Prueba en contrario.

Considerando, que para los fines de los accidentes causados por vehículos de motor y para la aplicación de la Ley sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor es preciso admitir que la persona a cuyo nombre figure matriculado un vehículo se presume comitente de quien lo conduce; que esta presunción solo admite la prueba en contrario cuando se pruebe una de las características siguientes: a) que la solicitud de traspaso ha sido depositada con anterioridad al accidente de que se trate, en la oficina a cuyo cargo esté la expedición de las matrículas, b) o cuando se pruebe mediante un documento dotado de fecha cierta que el vehículo había sido traspasado en propiedad a otra persona, y c) o cuando se pruebe que el mismo ha sido objeto de un robo y el propietario pruebe la sustracción del mismo antes del accidente que se le imputa. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 170-171).

3.3 Accidente de vehículo. Concurrencia de falta. Indemnización.

Considerando, que al producirse una concurrencia de faltas entre la víctima y el demandado los jueces están en la obligación de tener en cuenta para fijar la indemnización correspondiente a la reparación del daño, la proporción de la gravedad respectiva de las faltas,

Considerando, que procede valorar la indemnización en base a una proporción en la incidencia del accidente de un 50% para cada uno de los referidos conductores, y en esa misma proporción otorgar las indemnizaciones a la parte civil constituida. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 172).

3.4 Accidente de vehículo. Daños a justificar por estado.

Considerando, que la parte civil constituida Isoelia Padilla de Sánchez no ha depositado facturas, recibos u otra documentación que permita deducir los daños ocasionados al vehículo de su propiedad y conducido por el coprevenido Sergio Sánchez, procede que la indemnización debida le sea ordenada a justificar por estado. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 172).

3.5 Accidente de vehículo. Demandado que no niega ser el propietario del vehículo.

Considerando, que si bien no existe en el expediente ninguna certificación en la cual conste que el Estado Dominicano, demandado como persona civilmente responsable, es el propietario del vehículo a quien la parte civil le atribuye ser causante del daño, este demandado ha aceptado implícitamente esa calidad, al no cuestionarla en audiencia. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 170).

3.6 Accidente de vehículo. Estado Dominicano. Co-mitente.

Considerando, que por lo demás, existe constancia, derivada de la certificación expedida por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo que el coprevenido Juan Leonidas Martínez Núñez ostenta la posición de Subsecretario Administrativo de la Presidencia; quedando establecido además en el plenario que al momento del accidente se encontraba en el ejercicio de sus funciones, y por tanto su labor como empleado público se encuentra

subordinada a la autoridad de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, dependencia del Estado Dominicano; que por consiguiente, las disposiciones del artículo 1384, párrafo 3ro. del Código Civil se aplican en el caso que nos ocupa, puesto que, los comitentes son responsables del daño causado por sus empleados en el ejercicio de sus funciones. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 171).

3.7 Accidente de vehículo. Inadmisibilidad del recurso del prevenido. Obligación de examinar los hechos. Influencia sobre la persona civilmente responsable. Monto de las indemnizaciones. Proporcionalidad con la gravedad del daño.

Considerando, que aún cuando ciertamente y con pertinencia se pronunció la inadmisibilidad del recurso de apelación del prevenido, por lo que en el aspecto penal la sentencia tenía autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, no menos cierto es que la Cámara a-qua tenía la obligación de examinar los hechos para determinar la magnitud de la falta del prevenido, capaz de comprometer la responsabilidad civil de su comitente, Metro Servicios Turísticos, S. A., puesto que la misma estaba basada en los mismos hechos de la prevención de la que estaba respondiendo el preposé Gerónimo Pérez Flores, por lo que no existe ninguna contradicción en la actitud de la Corte de Apelación, como están alegando los recurrentes;

Considerando, que tanto es así, que era una obligación ineludible de la Cámara a-qua examinar los hechos antes indicados, para determinar la relación de causa a efecto entre la falta y el daño causado, toda vez que se impone

la proporcionalidad de la indemnización que se acuerde en favor de las víctimas, y la gravedad del daño causado, puesto que si bien es verdad que en principio los jueces son soberanos para imponer las indemnizaciones condignas, ese poder no puede ser tan absoluto que puedan consagrar una iniquidad o una arbitrariedad, y las mismas no puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que como ámbito de ejercicio de esa discrecionalidad que tienen los jueces, se ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables, es decir, que haya una relación entre la falta, la magnitud del daño causado y el monto fijado como resarcimiento por los perjuicios sufridos;

Considerando, que en la especie, la indemnización acordada en favor de la parte civil constituida es a todas luces irrazonable, por lo que la sentencia debe ser casada en ese aspecto. (Cámara Penal, 24 de agosto de 1998; B. J. 1053. Págs. 188-189).

3.8 Accidente de vehículo. Indivisibilidad de la comitencia. El titular de la póliza no necesariamente es el comitente.

Considerando, que el recurrente alega, y es correcto, que la comitencia es indivisible, puesto que el poder de control y dirección ejercido sobre alguien, no puede ser compartido por varias personas, sino que sólo uno es el comitente...;

Considerando, por otra parte, que el nombrado H. V. O. R. no fue condenado como comitente de H. V. O. R., sino como propietario de la póliza de seguros que amparaba el vehículo, emitida por la U. S., lo que es impropio,

puesto que evidentemente éste no tenía el poder de control y dirección sobre el conductor del vehículo, sino que conforme certificación de la Dirección General de Rentas Internas, depositada en el expediente, el propietario del mismo era J. S., y por ende presunto comitente del conductor, calidad que no fue negada en ninguna de las instancias; que la circunstancia de que la póliza fuera emitida a favor de H. V. O. R. no le daba calidad de comitente, lo que tampoco impedía que la sentencia fuera oponible a la aseguradora, en el entendido de que la misma amparaba el vehículo causante del accidente, que por tanto procede casar la sentencia, por vía de supresión y sin envío, en lo que atañen a H. V. O. R.. (Cámara Penal, 10 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 146).

3.9 Accidente de vehículo. Presunción de autorización.

Considerando, que la persona que conduce un vehículo de motor se presume, hasta prueba en contrario, que lo hace con la autorización del propietario. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 171).

3.10 Accidente de vehículo. Presunción de propiedad de un vehículo. Seguro in- rem. Condiciones.

Considerando, que lo que ciertamente establece, para los fines de los terceros, la propiedad de un vehículo, es la certificación que expida la Dirección General de Rentas Internas o la entidad que la sustituya según la ley, y la que acredita el vínculo contractual de asegurado y asegurador es la certificación expedida por la Superintendencia de Seguros; que una vez identificado el

vehículo asegurado y establecida la vigencia de la póliza, no importa que el seguro esté a nombre de otra persona o entidad para que las condenaciones sean declaradas oponibles al asegurador, siempre y cuando el propietario haya sido demandado y comprobada su responsabilidad civil, y dicha entidad aseguradora haya sido puesta en causa, en virtud del artículo 10 de la Ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor;

Considerando, que en la especie el agraviado procedió correctamente al poner en causa al Partido Reformista Social Cristiano como comitente de Lara Fernández, y al comprobar que existía un contrato de seguro en la General de Seguros, S. A., que amparaba ese vehículo, aunque éste estuviera a nombre de Micro Hondas Nacionales, C. por A., podía, tal como lo hizo, ponerla en causa para que la sentencia le fuera oponible, debido a que a quien ampara la póliza es al vehículo. (Cámara Penal, 15 de septiembre de 1999).

3.11 Accidente de vehículo. Propiedad del vehículo. Matrícula. Contrato de Venta Condicional. Presunción de Comitencia.

Considerando, que lo que acredita la propiedad de un vehículo es la matrícula y no el registro del contrato de venta condicional de muebles, como erróneamente interpretó el Juez a-quo sobre todo, cuando precisamente ese documento es el que permite dar vigencia a la presunción de comitencia entre el propietario y el conductor del vehículo. (Cámara Penal, 24 de marzo de 1999; B. J. 1060. Pág. 458).

3.12 Accidente de vehículo. Seguro obligatorio. Presunción de comitencia. Seguro a nombre de un tercero.

Considerando, que ha sido una constante primero, señalar al propietario de un vehículo, debidamente establecida dicha propiedad mediante una certificación de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, como comitente del conductor que ha causado un accidente, y, segundo, que carece de relevancia la circunstancia de que el seguro esté a nombre de un tercero, para establecer la oponibilidad a la compañía aseguradora;

Considerando, que en el caso que nos ocupa, el agraviado puso en causa como persona civilmente responsable a la señora Caridad Liranzo, quien es la titular del seguro, pero no propietaria del vehículo conducido por Luis O. Rivas Taveras, y tanto en el acta policial, como en la certificación expedida por la Dirección de Rentas Internas (hoy Dirección Nacional de Impuestos Internos) figura como propietario del referido vehículo Luis Manuel Polanco Toro, y por consiguiente la presunción de comitencia era contra éste y no contra la señora Caridad Liranzo, por tanto a ésta había que probarle que ella era la comitente de Luis O. Rivas Taveras, lo que no se ha establecido en la sentencia. (Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

3.13 Accidente de vehículo. Seguro de vehículo. Póliza emitida a otra persona.

Considerando, que no consta en la sentencia ningún elemento de juicio que permita señalar a este último como propietario del vehículo causante del accidente, puesto que la sola circunstancia de que la póliza de

seguro fuera emitida a su favor, no basta para configurar la comitencia de éste, como tampoco excluye la responsabilidad de la compañía aseguradora, para que la sentencia le sea oponible, razón por la cual, lo invocado por el recurrente Rolando Heredia está fundado sobre bases sólidas, y procede casar la sentencia en cuanto a él atañe. (Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

3.14 Accidente de vehículo. Vehículo arrendado. Contrato de adhesión. Responsabilidad del arrendador.

Considerando, que si bien es cierto, tal como lo alega la recurrente, que en el dorso del contrato de marras, en el párrafo cuarto se establece que el arrendatario asume "la responsabilidad por los daños que cause a terceros y las responsabilidades civiles por los actos que se cometan", no menos cierto es que de la economía del contrato se infiere que el propietario, o sea B. R. C., le impone una serie de condiciones y obligaciones al arrendatario, cuya inobservancia conducirían a la rescisión inmediata del mismo, lo cual es revelador de que el propietario conserva el poder de control y dirección, jurídicamente hablando, sobre el vehículo, lo que no sucede en un arrendamiento ordinario, donde el propietario del bien arrendado se compromete a permitir el disfrute pleno del objeto, por parte del arrendatario, sin ninguna restricción;

Considerando, además, que los contratos de arrendamiento de vehículos que imponen las compañías que se dedican a ese negocio, son contratos de adhesión, que no dejan nada al libre albedrío de los arrendatarios, lo que viene a confirmar lo sustentado anteriormente;

Considerando, que en el caso del robo, citado por el recurrente en su memorial como ejemplo de desplazamiento de la guarda, el propietario ni tiene el control material, ni le ha impuesto condiciones y obligaciones al tercero (el ladrón), por lo que no existe similitud en los dos casos;

Considerando, por otra parte, que el contrato de arrendamiento depositado en el expediente, no tiene fecha cierta, puesto que no está registrado, y por ende conforme al artículo 1328 del Código Civil no es oponible a los terceros. (Cámara Penal, 29 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Págs. 273 y 274).

4. ACCION CIVIL:

Acción Civil. Ausencia de personalidad jurídica de la familia. Presunción de daños morales.

Considerando,... toda vez que para ser sujeto de derecho se requiere tener personalidad jurídica, lo que no sucede con una familia, como tal;

Considerando, que de aceptarse tal constitución en parte civil en nombre de la totalidad de una familia, como es el caso, se estaría estimulando las demandas por concepto de daños y perjuicios, sobre todo basadas en casos relativos a accidentes de tránsito, cuando lo cierto es que sólo los padres, los hijos y los cónyuges supervivientes pueden sustentarlas sin aportar las pruebas de los daños morales que ese hecho ilícito les ha producido, lo que no sucede con las personas que tengan cualquier otro tipo de vínculo familiar, sanguíneo o por afinidad, con las víctimas de un accidente, quienes están en la obligación

de probar que existía entre ellos y el occiso dependencia económica o una comunidad afectiva tan real y profunda, que permita a los jueces convencerse de que tales reclamantes han sufrido un perjuicio que amerita una condigna reparación; ya que el interés puramente afectivo no basta para justificar una indemnización;

Considerando, que la solución contraria implicaría una multiplicidad de acciones derivadas de un accidente con víctimas mortales, incoadas por personas cuyos sentimientos de afectos podrían ser lesionados por el suceso, lo que resultaría ilógico, ya que el causante se vería compelido a enfrentar innumerables demandas que no se justifican dentro de un criterio rigurosamente científico. (Cámara Penal, 14 de abril de 1998; B. J. 1049. Pág. 128).

5. ACCION EN INCONSTITUCIONALIDAD:

Véase:

-Constitucionalidad.

-Nulidad de los Actos de los Poderes Públicos.

6. ACTA DE AUDIENCIA:

Acta de audiencia. Materia criminal. Declaraciones de los testigos. Artículos 248, 280 y 281 del Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que de los artículos precitados se infiere que las anotaciones en el acta de audiencia, en materia criminal, sobre las contradicciones, adiciones o variaciones de las declaraciones de los testigos son

permitidas, pero no las de los propios acusados, puesto que se perdería el sentido de la oralidad que el legislador ha querido imprimir y conservar en los juicios criminales; que la inobservancia de estas reglas entraña la nulidad del proceso, conforme a lo preceptuado por el artículo 281 del Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que las reglas establecidas por los referidos artículos 248, 280 y 281 del Código de Procedimiento Criminal, relativas a la redacción del acta de audiencia y a las menciones que ella debe realizar, son de orden público, porque atañen al interés social y al sagrado derecho de defensa que le asiste a todo justiciable, y estos son aplicables no obstante lo abominable de los hechos que se le puedan imputar a los procesados. (Cámara Penal, 29 de diciembre de 1999).

7. ACTA NACIMIENTO:

Acta nacimiento. Artículo 46 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. Declaración personal del padre.

Considerando, que lo expresado en dicho artículo revela, tal y como lo argumentan los recurrentes, que cuando el padre se presenta personalmente por ante el Oficial del Estado Civil y declara el nacimiento de una criatura y al propio tiempo que esa criatura es hija natural de la persona que tiene el mismo nombre del declarante, es evidente que está expresando su voluntad de reconocerlo como hijo suyo, salvo los problemas de identidad que pudiesen surgir, tanto en relación con el declarante, como con la criatura declarada; que el hecho de que en los extractos de actas de nacimiento expedidas por el Oficial del Estado Civil de La Romana en los años

1991 y 1992, se intercalara el apellido Mañón a cada uno de los declarados y se insertara la frase "reconocidos por declaración de su padre", no resta validez al reconocimiento contenido y las copias in extenso de las actas originales, en la cual sólo se expresa que los mismos son hijos naturales del declarante;

Considerando, que por lo antes expuesto se advierte que la corte a-quia no ponderó, como era su deber, la circunstancia de que fue el propio Juan Francisco Mañón Lluberes quien compareció libre y voluntariamente en las fechas indicadas ante el Oficial del Estado Civil y afirmó que él era el padre de esas criaturas, y que no fue suscitado ningún problema de identidad en relación con él; que esa falta de ponderación de esos hechos esenciales de la litis, evidencian que en la sentencia impugnada se incurrió en la desnaturalización invocada por los recurrentes, no atribuyendo al contenido específico de las actas de nacimiento depositadas por éstos, el sentido y alcance resultante de sus propias enunciaciones; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada que juzgar. (Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 120).

8. AGENTES IMPORTADORES:

8.1 Agentes importadores. Artículo 10 de la Ley 173 de 1966. Registro del Contrato. Plazos.

Considerando, que en virtud de la referida ley, el plazo establecido en la misma, corre a partir de la fecha en que las relaciones entre concedente y concesionario han sido contratadas, no renovadas; que los hechos, circuns-

tancias y documentos de la causa evidencian, que la recurrida no procedió dentro del plazo ni mediante las formalidades establecidas por dicha ley al registro o inscripción de su contrato en el Departamento de Cambio Extranjero del Banco Central; que en tales circunstancias dichas relaciones contractuales no podían estar regidas por las disposiciones de la referida Ley No. 173, como lo dispuso la Corte a-quá, sino por el derecho común; que la falta de cumplimiento de la formalidad del registro o inscripción del contrato de concesión suscrito entre la concedente y la concesionaria dentro de los plazos establecidos en el artículo 10 de la Ley No. 173 de 1966, modificados, constituye un medio de inadmisión que puede incluso ser suplido de oficio, por tratarse en el caso de una cuestión de orden público; que por lo expuesto, procede a acoger el medio de casación examinado, y casar la sentencia impugnada sin necesidad de ponderar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 22 de septiembre de 1999).

8.2 Agentes importadores. Ley 173 de 1966. Daños y perjuicios. Condiciones.

Considerando, que si bien es cierto que el propósito fundamental de la Ley No. 173 de 1966 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, es la de evitar una resolución unilateral, intempestiva e injusta en perjuicio de los agentes y representantes de casas extranjeras, estos propósitos no pueden obstaculizar el libre mercado en los casos en que, por la índole de las relaciones contractuales, el concedente no otorga exclusividad al concesionario, en la importación, venta o distribución de sus productos, en cuyo caso, y salvo que se pruebe el dolo o mala fe, que no es el caso,

al concesionario no le asiste el derecho de reclamar, frente al concedente, los daños y perjuicios que acuerda dicha ley, por el hecho del concedente establecer relaciones con otro concesionario, aún sea éste una compañía en cuya constitución hayan intervenido accionistas de la concedente; que, en efecto, los contratos de distribución otorgados en provecho de la recurrente son claros y precisos cuando expresan que ésta se designa "distribuidor no exclusivo para la República Dominicana", y que dicho distribuidor "tiene conocimiento y acepta" que la concedente "tiene el derecho de nombrar otros distribuidores en las líneas de productos que ya representa"; que, por otra parte, de acuerdo con la previsión del artículo 10 de la citada ley, el ejercicio de los derechos conferidos en la misma, está supeditado al cumplimiento, en el plazo prescrito por la indicada disposición, del registro o inscripción de las firmas o empresas extranjeras a cuyo nombre actúen dichos agentes nacionales, junto con la documentación que justifique la indicada calidad así como las demás informaciones pertinentes. (Cámara Civil, 18 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Págs. 57-58).

8.3 Agentes importadores. Propósitos. Justa causa.

Considerando, que la Ley sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercancías y Productos, No. 173, del 6 de abril de 1966, y sus modificaciones, cuyo objetivo es la adecuada protección a las personas físicas o morales que se dediquen en la República a promover y gestionar la importación, la distribución, la venta, el alquiler o cualquier otra forma de explotación de mercaderías o productos y servicios procedentes del extranjero o cuando los mismos sean fabricados en el país, actuando

como agentes o bajo cualquiera otra denominación, contra los perjuicios que puedan irrogarles la resolución injusta de las relaciones en virtud de las cuales ejerzan tales actividades, por cuya cuenta o interés actúan, a fin de asegurarles la reparación equitativa y completa de todas las pérdidas que hayan sufrido, así como las ganancias legítimamente percibibles de que sean privadas, establece, sin embargo, el concepto de "justa causa", que prevé la posibilidad de dar por terminadas o resueltas las relaciones entre las partes o de negarse a renovar el contrato, cuanto ella exista, la cual se define en la ley como el " incumplimiento por parte de cualquiera, de las obligaciones esenciales del contrato de concesión, o cualquier acción u omisión de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del concedente en la promoción o gestión de la importación, la distribución, la venta, el alquiler, o cualquier otra forma de tráfico o explotación de sus mercaderías, productos o servicios";

Considerando, que de conformidad con las comprobaciones realizadas por la Corte a-qua, como consta en la sentencia impugnada, se dió por establecido que la recurrente Dres. Mallén Guerra, C. por A., abandonó sus obligaciones contractuales, tipificándose así la justa causa definida por la ley, la que debidamente comprobada por la Corte a-qua, permitiera la rescisión del contrato, demandada; que al fallar en la forma que se hizo, en el caso de que se trata, en la recurrida se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que el aspecto tercero del medio único propuesto, carece igualmente de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 269-270).

8.4 Agentes importadores. Registro del contrato. Artículo 10 de la Ley 173 de 1966.

Considerando, que la falta de cumplimiento de la formalidad del registro o inscripción del contrato de concesión, suscrito entre la concedente y la concesionaria dentro de los plazos establecidos en el artículo 10 de la Ley 173 de 1966, constituye un medio de inadmisibilidad, que puede ser suplido de oficio por tratarse, en el caso, de una cuestión de orden público, tal y como procedió la Corte a-quá, una vez comprobado el hecho de la inobservancia del plazo fijado por la referida ley; que por todo lo expuesto, procede rechazar dicho medio de casación. (Cámara Civil, 18 de noviembre de 1998; B.J. 1056. Pág. 55).

9. ALQUILERES:

Véase además:

-Contrato de arrendamiento.

9.1 Alquileres. Comisión de Apelación sobre Alquileres. Recursos inadmisibles.

Considerando, que en la especie se trata de un recurso de casación contra una resolución de la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, jurisdicción especial administrativa, que no es un tribunal del orden judicial, único contra cuyas decisiones puede ejercerse el recurso de casación de acuerdo con lo establecido en el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, o cuando una disposición expresa de la ley así lo determine. (Cámara Civil, 1 de abril de 1998; B.J. 1049. Pág. 46)

9.2 Alquileres. Competencia del juzgado de paz. Vivienda suntuaria. Sentido del medio de inadmisibilidad de la Ley No. 18-88 sobre Viviendas Suntuarias y Solares Urbanos no Edificados.

Luego de haberse ratificado el criterio de que el artículo 1ro. del Código de Procedimiento Civil solo atribuye competencia al juzgado de paz para conocer de las acciones en rescisión del contrato de alquiler, desalojo y lanzamiento de lugares, cuando éstas se fundan en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos y que fuera de ese caso la incompetencia del juzgado de paz es absoluta para conocer de dichas acciones, se dijo que si bien el artículo 12 la antes citada Ley No. 18-88 pone a cargo del propietario la obligación de aportar la prueba de haberse cumplido con el pago del impuesto creado por la citada Ley, cuando esto no ocurre, corresponde al demandado en desalojo demostrar, que la edificación o vivienda dada en arrendamiento, está sujeta al pago del impuesto por tener un valor, incluyendo el solar en donde esté edificada de Medio Millón de Pesos (RD\$500,000.00), o más. Que aun cuando el referido artículo 12 consagra un fin de inadmisión, que puede ser suscitado de oficio por el juez apoderado de una demanda en desalojo, por tener un carácter de orden público, la inadmisibilidad no puede ser pronunciada sino después que se establezca que el inmueble de que se trata estaba sujeto al pago del impuesto por tener un valor incluyendo el solar en que esté edificado de RD\$500,000.00 o más, conforme a lo que dispone el artículo 2 de la indicada ley. Que como la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, decide si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden

judicial, sin conocer en ningún caso del fondo del asunto, es obvio que en ese rol no podría decidir sobre los medios de inadmisión que no fueron suscitados ante los jueces del fondo, excepto si ellos son de orden público, pues la casación no constituye un tercer grado de jurisdicción. Que si bien es cierto que es de principio que los medios de orden público son susceptibles de ser propuestos por primera vez en casación y aun promovidos de oficio, éstos no podrían ser invocados más que si la corte que ha rendido la sentencia atacada ha sido puesta en condiciones de conocer el hecho que le sirve de base al agravio y de verificar su realidad, pues no sería ni jurídico ni justo reprochar al juez de fondo haber violado una ley que nadie le había señalado ni indicado como aplicable a la causa; que al invocar el recurrente por primera vez en casación el medio de inadmisión consagrado en el artículo 12 de la Ley No. 18-88 sin que la Corte a-qua fuese puesta en condiciones de verificar el hecho que fundamenta agravio, el medio que se examina resulta irrecibible. (Cámara Civil, 3 de diciembre de 1997; B.J. 1045. Págs. 81-85).

9.3 Alquileres. Competencia de los juzgados de paz.

Considerando, que en efecto, el examen de la sentencia impugnada y del expediente revela que la demanda intentada por el propietario del inmueble G. A. C., recurrido, no tuvo por base la falta de pago de los alquileres por parte del inquilino, La R., sino su interés de ocuparla personalmente; que el artículo Iro., párrafo 2do., del Código de Procedimiento Civil, establece que: "Conocen sin apelación, hasta la suma de quinientos pesos, y a cargo de apelación por cualquier cuantía a que se eleve la demanda: de las acciones sobre pago de

alquileres o arrendamientos, de los desahucios, de las demandas sobre rescisión de contratos de arrendamiento fundadas únicamente en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos; de los lanzamientos y desalojo de los lugares; y de las demandas sobre validez y en nulidad de embargo de ajuar de casa por inquilinato..."; que esta Suprema Corte ha venido sustentando el criterio, acorde con el texto legal transcrito, de que la competencia del juzgado de paz en esta materia, está limitada a la demanda en desalojo por falta de pago; por lo que el Juzgado de Paz que dictó la sentencia en primer grado resulta incompetente para juzgar el asunto así como el tribunal a-quo que conoció la apelación y dictó la sentencia impugnada; que en estas condiciones la sentencia debe ser casada por ese motivo, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 139).

9.4 Alquileres. Competencia de los juzgados de paz.

Considerando, que los jueces de paz, al tenor de lo que dispone el párrafo 2 del artículo 1ro., del Código de Procedimiento Civil, conocen de las acciones sobre pago de alquileres o arrendamientos, de los desahucios, de las demandas sobre rescisión de contratos de arrendamiento fundadas únicamente en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos, de los lanzamientos y desalojo de lugares, y de las demandas sobre validez y nulidad de embargo de ajuar de casa por inquilinato; que ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia, criterio que hoy se ratifica, que dicha competencia de atribución de los jueces de paz, para conocer de la demanda en desalojo o desahucio en materia de arrendamiento, es

excepcional, y está limitada expresamente, por el texto legal que la establece, a dichos asuntos; que en ese mismo orden se ha decidido, que conforme al referido párrafo 2 del artículo 1ro. del Código de Procedimiento Civil, el juez de paz es competente para conocer de las demandas en rescisión de los contratos de arrendamiento fundadas únicamente en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos, de las demandas en lanzamiento y desalojo de lugares, que sean la consecuencia de aquellas; que, por el contrario, dicho tribunal no tiene facultad para conocer de las demandas en rescisión de los contratos de arrendamiento, fundadas en otras causas, ni de los desahucios, lanzamientos y desalojos que sean consecuencia de éstas.-

Considerando, que esta orientación se reafirma en el hecho de que, al ser el juzgado de primera instancia la jurisdicción de derecho común de primer grado competente para conocer del universo de los asuntos, excepto los atribuidos de manera expresa a otro tribunal o corte, lo que no le haya sido deferido expresamente por la ley al juzgado de paz, no puede ser conocido ni decidido por éste; que el conocimiento de la demanda en resciliación del contrato de arrendamiento, por el motivo de que el propietario ocupará el inmueble alquilado personalmente, no está atribuido en forma expresa por la ley al juzgado de paz, por lo que la jurisdicción ordinaria es solo competente; que, además, la circunstancia de que el artículo 5 del Decreto No. 4807 de 1959, sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios, disponga que las controversias que se susciten en relación a las disposiciones de ese artículo serán de la competencia de los tribunales de primera instancia, no debe interpretarse en el sentido de que en materia de que se trata el juzgado de paz tiene

competencia para todos los asuntos no concernidos en el señalado artículo 5, ya que la competencia general de los tribunales de primera instancia no se restringe en beneficio de ningún otro, por precisar la ley que determinados asuntos entran en la esfera de sus atribuciones.-

Considerando, que no obstante el recurrente no haber propuesto el medio derivado de la incompetencia del juzgado de paz para pronunciar la resciliación del contrato de arrendamiento en razón de que la demanda se fundamenta en otra causa que la falta de pago de los alquileres, este medio de casación se examina por tratarse de un asunto de orden público que puede ser suscitado y suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación.-

Considerando, que la demanda intentada por el propietario y actual recurrido es en realidad en resciliación del contrato de arrendamiento y no tiene por causa la falta de pago de los alquileres, sino la de que el propietario va a ocupar el apartamento alquilado con su oficina de ingenieros, lo que hace que el juzgado paz sea incompetente para conocer de la referida demanda; que la Cámara Civil y Comercial a-quo ha debido, no avocar el fondo como lo hizo, sino declarar primero, la incompetencia del juzgado de paz, así como las suya propia para estatuir como tribunal de alzada, en razón de que dicha Cámara Civil y Comercial no era jurisdicción de apelación respecto de la jurisdicción competente en primer grado; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de ponderar el otro medio del recurso". (Cámara Civil, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 88-90).

9.5 Alquileres. Fondo de Comercio. Aplicación del Decreto No. 4807 de 1959.

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, cuantas veces ha tenido oportunidad de hacerlo, que el vencimiento del término por el cual fue convenido el contrato de arrendamiento o inquilinato, no es causa de resiliación de dicho contrato; que este criterio se encuentra sustentado en las disposiciones del artículo 3 del referido Decreto No. 4807, de 1959, que no prevé entre las causas de terminación del contrato la planteada por la Esso Standard Oil, S. A., Limited fundamentada precisamente en la terminación del contrato por la llegada del término;

Considerando, que el alegato de la recurrida en el sentido de que las disposiciones del decreto sobre alquileres de casas, no le son aplicables al caso ocurrente porque no se trata de un simple contrato de arrendamiento, sino de un contrato de cesión para la explotación de un fondo de comercio, no es pertinente, en razón de que el artículo 5 del citado decreto, al prever la preferencia que tiene el inquilino de volver a ocupar el inmueble cuando haya sido desahuciado y se encontrara ocupado por algún establecimiento comercial o de industria fabril, está incluyendo al arrendamiento de inmuebles destinados a este uso, entre aquellos regidos o comprendidos por el referido Decreto No. 4807; que si bien es cierto, como lo prescribe el artículo 1134 del Código Civil, que las convenciones no pueden ser revocadas sino por mutuo consentimiento o por las causas que están autorizadas por la ley, no menos cierto es que las disposiciones del señalado decreto son de orden público y, como tales, no pueden ser derogadas por acuerdos entre particulares;

que de ello resulta que lo pactado por las partes en el artículo ocho (8) del contrato que suscribieron el 1ro. de septiembre de 1989, objeto de la controversia, según el cual el referido contrato por tiempo indefinido podrá ser rescindido mediante una comunicación hecha por una parte a la otra, por escrito, con sesenta (60) días de anticipación, no podía servir de fundamento válido para que, actuando de ese modo, la propietaria del inmueble desahuciara a la arrendataria, sin acogerse a las previsiones imperativas contenidas en el artículo 3 del Decreto No. 4807, de 1959, según el cual "queda prohibido el desahucio del inquilino de un inmueble por persecución del propietario, salvo que se haya ordenado la resiliación del contrato de alquiler por falta de pago del precio del alquiler; o por utilizar el inmueble alquilado con un fin diferente para el cual fue alquilado, siempre que sea perjudicial al propietario o contrario al orden público o a las buenas costumbres; o por el inquilino subalquilar total o parcialmente el inmueble alquilado, no obstante habersele prohibido por escrito; o por cambiar la forma del inmueble alquilado. Cuando el inmueble vaya a ser objeto de reparación, reedificación o nueva construcción o cuando vaya a ser ocupado personalmente por el propietario o su cónyuge, o por parientes de unos de ellos, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el segundo grado inclusive, durante dos años por lo menos, el Control de Alquileres de Casas y Desahucios autorizará el desalojo"; que al no reconocerlo así la Corte a qua incurrió en la violación del texto legal ya señalado, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de ponderar el otro medio propuesto por la recurrente. (Cámara Civil, 17 de febrero de 1999; B. J. 1059. Págs. 123-124).

9.6 Alquileros. Hueco en la pared del inmueble alquilado. Alegato de daños y perjuicios. Obligación de los jueces.

Considerando, que en su segundo medio de casación, que la Suprema Corte de Justicia examina por convenir a la solución del caso, el recurrente justifica el indicado medio en que los jueces del fondo, para ordenar la rescisión del contrato de alquiler y la indemnización de RD\$50,000.00 se fundamentaron en que fue comprobado que el recurrente hizo un hueco en la pared del inmueble alquilado que podría socavar las bases del edificio, y que ese riesgo ha causado a la propietaria daños y perjuicios que los jueces del fondo valoraron en la indicada suma; que basados en la recomendación del Inspector de la Secretaría de Obras Públicas, que no se ejecutó, para que se hicieran evaluaciones estructurales en el edificio a fin de determinar si el hueco socavó o no sus bases, dichos jueces consideraron estas recomendaciones prueba incuestionable de la violación del contrato de inquilinato y de los daños causados a la propietaria;

Considerando, que la Corte a-qua, fundamentándose en la recomendación que hizo el Inspector de la Secretaría de Obras Públicas en el sentido de que la edificación deberá ser sometida a evaluaciones estructurales necesarias, estimó como ciertos y razonables los alegatos de la parte recurrida, de que tal situación podía socavar las bases del edificio, y en base a ese alegato riesgo, justificó la indemnización fijada por el juez en primera instancia. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Págs. 92-93).

10 ALLANAMIENTO:

10.1 Allanamiento. Acta de allanamiento en violación al artículo 184 del Código de Procedimiento Criminal.

Que de haber ponderado el contenido del acta de allanamiento de marras, practicado sin la intervención de una autoridad judicial competente, como manda la ley, y contraviniendo el artículo 184 del Código de Procedimiento Criminal, evidentemente que la misma no constituía una prueba fehaciente contra los acusados, pese a la maniobra realizada con posterioridad, de llamar al Fiscalizador, para cohonestar esa ilegal actuación y las propias declaraciones del Fiscalizador del Juzgado de Paz de Loma de Cabrera, de no haber visto nada comprometedor, otro hubiera sido el resultado del proceso, pero como los acusados no recurrieron en casación contra la sentencia de la Corte, obviamente ésta tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada (Cámara Penal, 12 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 110).

10.2 Allanamiento. Acta de allanamiento practicada por el ayudante fiscal.

Considerando, que esa acta de allanamiento le mereció credibilidad a la Cámara Penal de la Corte de Apelación en razón de que quien instrumentó fue un ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, funcionario judicial competente para realizar esa clase de actuaciones. (Cámara Penal, 18 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 264).

11. AMPARO:

11.1 Amparo. Recurso. Reconocimiento. Procedimiento a seguir.

Primero: Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo dominicano, por haber sido adoptada y aprobada por el Congreso Nacional, mediante Resolución No. 739 del 25 de diciembre de 1977, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución de la República; Segundo: Determinar: a) que tiene competencia para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que se haya producido el acto u omisión atacado; b) que el procedimiento que deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el referimiento, reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la Ley 834 de 1978; c) el impetrante deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u omisión, dentro de los quince (15) días en que se haya producido el acto u omisión de que se trate; d) la audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada para que tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspondiente. Sin embargo, cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del magistrado apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del expediente. Este auto no será susceptible de ningún recurso; e) el juez deberá dictar su sentencia dentro de los cinco días que sigan al momento en que el asunto quede en estado; el recurso de apelación, que conocerá la corte de apelación

correspondiente, deberá interponerse dentro de los tres días hábiles de notificada la sentencia, el cual se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para la primera instancia, incluido el plazo de que se dispone para dictar sentencia; f) los procedimientos del recurso de amparo se harán libres de costas. Tercero: Declarar que no procede, en el caso de la especie, estatuir sobre el pedimento de sobreseimiento en razón de que corresponde al juez apoderado de lo principal pronunciarse sobre dicho pedimento; Cuarto: Ordena que la presente Resolución sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar. (Pleno, 24 de febrero de 1999; B. J. 1059. Págs. 84 y 85).

11.2 Amparo. Resolución. Competencia.

Atendido, a que, de conformidad con nuestra Resolución del 24 de febrero de 1999, antes citada, la jurisdicción competente para conocer de toda acción de amparo, a los términos de los artículos 25.1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Congreso Nacional por Resolución No. 739, del 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No. 9460, del 11 de febrero de 1978, es el tribunal de primera instancia, o la cámara civil correspondiente, cuando esté dividido en cámaras, del lugar donde se haya producido el acto u omisión atacado, lo que se reafirma al trazarse por la indicada resolución el procedimiento a seguirse en esta materia, similar al establecido en el procedimiento civil para el referimiento.

Atendido, a que como la competencia de los tribunales de justicia es una cuestión de orden público que puede ser

suscitada de oficio por el juez, sin que sea necesario que medie pedimento al respecto, y perteneciendo a los tribunales de primera instancia el conocimiento en primer grado de la acción de amparo, como se ha visto, procede que esta Suprema Corte de Justicia, irregularmente apoderada, declare de oficio su incompetencia y, por tanto, la solicitud de fijación de audiencia de que se trata. (Pleno, 10 de junio de 1999).

12. APELACION:

12.1 Apelación. Acto que contiene el recurso.

Considerando, que un tribunal de alzada está en la imposibilidad de conocer un recurso de apelación, si el acto contentivo de dicho recurso no le es suministrado, pues del estudio del mismo es que puede determinar los agravios que se le atribuyen a la sentencia impugnada, verificar la certeza de los mismos y el límite de su apoderamiento; que el hecho de que el tribunal haya dispuesto la celebración de medidas de instrucción no constituye una admisión del recurso de apelación, pues la inadmisibilidad puede ser declarada no obstante esa circunstancia, ya que dichas medidas no cubren la falta del recurrente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 416 y 417).

12.2 Apelación. Apelación mediante acto de alguacil. Artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que de la redacción de ese texto legal no se infiere que la única forma de interponer el recurso de apelación sea mediante la redacción que del mismo haya

hecho el secretario del tribunal que dictó la sentencia en atención a una declaración verbal de la parte interesada, sino que es preciso entender que cualquier acto donde se manifieste el deseo o la voluntad de apelar, notificado al secretario mencionado, basta para llenar el voto de la ley, siempre y cuando esa notificación se haga dentro del plazo especificado por el artículo 203 expresado;

Considerando, que en el expediente hay constancia de que los señores Ing. R. J. y S. K. F. J., notificaron dentro del plazo de ley, al secretario del juzgado de paz para asuntos municipales de la primera circunscripción, su apelación contra la sentencia del 16 de diciembre de 1996, mediante acto de alguacil que tiene fecha del 21 de ese mismo mes y año y registrado el mismo día, que evidentemente le da fecha cierta.

Considerando, que en el expediente hay también constancia de una Certificación expedida por el secretario del referido Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, donde se hace constar que por un error o por descuido burocrático, la secretaria que recibió dicho acto no lo transcribió en el libro de apelaciones, como era su deber, con lo cual se hubiera llenado el voto de la ley;

Considerando, que la Juez a-qua apoderada del recurso de alzada no podía desestimar pura y simplemente esa certificación y el acto del alguacil contentivo de la voluntad de apelar de los prevenidos, sino que debió ponderarlos e inferir las consecuencias jurídicas que se derivan de esos documentos, por lo que evidentemente desconoció o mal interpretó el contenido del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil. (Cámara Penal, 31 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 260-261).

12.3. Apelación. Apelación tardía. Inadmisibilidad del recurso.- No hay que ponderar los méritos del recurso.

Considerando, que la sentencia impugnada expresa: "que evidentemente el recurso interpuesto por la parte recurrente, fue irregular en la forma y en el fondo, como se puede observar a los actos Nos. 131/93 y 833/93, puesto que no se cumplió con las disposiciones substanciales establecidas en el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable a todo recurso de apelación y muy especialmente a la materia de trabajo, regulado por la Ley No. 637 sobre Contratos de Trabajo, aplicable en la especie tratándose de un que tiene vigencia con la anterior y no por el Código de Trabajo vigente.-

Considerando, que fue precisamente por la aplicación conjunta del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil y de la Ley No. 637, sobre Contratos de Trabajo, que la corte a-qua declaró inadmisibile el recurso de apelación de la recurrente, en razón de que, según consta en el expediente, la sentencia de primer grado le fue notificada el 24 de agosto del 1993, cuando ya se había vencido el plazo de treinta días fijado por el artículo 61 de la indicada ley 637, para la interposición del recurso, siendo correcta la motivación dada por la sentencia recurrida en cuanto al no cumplimiento del referido artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, dentro del plazo legal, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento, procediendo su rechazo.

Considerando, que habiendo declarado el tribunal a-quo inadmisibile el recurso de apelación por las razones antes expuestas, estaba imposibilitado de ponderar el mérito de

dicho recurso, pues uno de los efectos de la misma es declarar al adversario inadmisibile en su demanda, sin examen al fondo, no constituyendo ninguna violación el hecho de que a la recurrente no se le permitiera demostrar la justa causa del despido, prueba que devenía en frustratoria, frente a la inadmisibilidad del recurso, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento, por lo que procede su rechazo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Págs. 259-260).

12.4 Apelación. Apertura del plazo. Notificación por acto de alguacil.

Considerando, que el conocimiento que de la sentencia tenga el apelante por una vía distinta a la señalada por la ley no da apertura al plazo de la apelación; que, además, la notificación por acto de alguacil, única forma válida para dar apertura al plazo de la apelación, debe ser regular; que para anular el acto del 18 de octubre de 1993 del alguacil Polibio Antonio Cerda Ramírez, mediante el cual se notificó la sentencia apelada de primer grado, la Corte a-quo retuvo que el original de dicha notificación, hecha en la persona de un vecino, no fue firmada por éste y que el espíritu del legislador ha sido salvaguardar el derecho de defensa, máxime en las notificaciones de sentencias que entrañan vías de ejecución, lo que acarrea la nulidad de la notificación como lo prescribe el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil; que al no ser regular la notificación y conllevar agravio al derecho de defensa de la actual recurrida, la que no pudo intentar su recurso de apelación sino a los 103 días de la notificación de la sentencia de primera instancia en la

persona de un vecino, resulta evidente que carece de fundamento la denunciada violación de los artículos 37 y 39 del Código de Procedimiento Civil. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B.J. 1055. Pág. 77).

12.5 Apelación. Apertura del plazo. Notificación a persona o domicilio.

(Ver Domicilio de elección. Artículo 111 del Código Civil. Notificación de una sentencia. Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 78).

12.6 Apelación. Artículo 539 del Código de Trabajo. Propósito. Constitucionalidad de dicho artículo.

Considerando, que tal como se observa, el depósito del duplo de las condenaciones que exige el referido artículo 539, no es para la admisibilidad del recurso de apelación, sino que al declarar ejecutorias las sentencias del juzgado de trabajo, a partir del tercer día de la notificación, exige ese depósito para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, con lo que crea una condición para que dicho recurso mantenga el efecto suspensivo propio de este tipo de recurso;

Considerando, que, independientemente de que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución no prohíbe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso, el artículo 539, ya citado, no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el efecto suspensivo de ese recurso, efecto este, cuyo condicionamiento o eliminación no constituye ninguna

violación a cánones o principios constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, sino en los principios del derecho; que el recurso de apelación, ejercido aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, conserva los demás efectos propios de estos recursos, lo que permite a las partes exponer sus medios de defensa, como si la sentencia no existiere, a través de un procedimiento cuyas reglas están previamente establecidas, lo que les da además, oportunidad de hacer valer todos sus derechos, cumpliéndose con ello el debido proceso, que es el interés del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expresado al disponer que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", a lo cual no se opone el artículo en cuestión;

Considerando, que por lo demás, el artículo 539, no persigue forzar a la parte sucumbiente ante el juzgado de trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fin al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, muy normal entre los litigantes en esta materia, por su peculiar característica, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa suspensión, si los montos de las

condenaciones no han sido garantizados previamente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de agosto de 1999).

12.7 Apelación. Artículo 539 del Código de Trabajo. Suspensión de ejecución mediante fianza. Artículo 667 del mismo Código.

Considerando, que la racionalidad de la ley queda manifestada en el complemento que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, establece el artículo 667 de dicho código, al disponer que "El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes", lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza, en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el Presidente de la Corte, cuyas condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada;

Considerando, que al no ser el artículo 539 del Código de Trabajo, contrario a ninguna norma o principio constitucional, el Juez a-quo estaba en la obligación de observar sus disposiciones, exigiendo a la parte que pretendía la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, de que el duplo de la condenación, se hiciera a través del depósito de una fianza, como se ha indicado más arriba, salvo que la misma demostrara que dicha sentencia adolecía de una nulidad evidente o incurrido en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, en cuyos casos puede, el juez de referimiento, ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, sin necesidad del depósito del referido duplo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de agosto de 1999).

12.8 Apelación. Comparecencia personal. Ordenanza de oficio. Sentencia preparatoria.

Considerando, que en la especie la comparecencia personal fue ordenada de oficio por el juez de primera instancia para dar la oportunidad a ambas partes para que presentaran sus medios de pruebas, para poner el asunto en condiciones de ser fallado; que al no ser dirigida específicamente en interés de una de las partes sino de ambas, es evidente que la misma se trata de una sentencia preparatoria, resultando correcta la decisión del Tribunal a-quo al declarar inadmisibile el recurso de apelación incoado contra ella, pues las sentencia de esa naturaleza sólo pueden ser recurridas conjuntamente con la decisión que decida el fondo del asunto, algo que no había sucedido en el momento en que se elevó el referido recurso de apelación. (Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 3 de marzo de 1999; B. J. 1061. Pág. 606).

12.9 Apelación. Desistimiento. Condiciones.

Considerando, que el desistimiento de un recurso de apelación, como de cualquier otro recurso ordinario o extraordinario tiene que ser formulado y presentado por el propio apelante o recurrente o por un apoderado con poder especial; que en el caso de la especie el supuesto desistimiento fue hecho, según el Tribunal a-quo, mediante el referido escrito suscrito por el abogado del recurrente, sin haber justificado el mandato que recibiera de su cliente para tales fines; que en consecuencia, en la sentencia impugnada se ha incurrido en una desnaturalización de los hechos y en una falta de base legal, dado que en tales condiciones ésta Suprema Corte de Justicia, no puede verificar si la Ley ha sido bien o mal aplicada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de julio de 1998; B.J. 1052. Pág. 1027).

12.10 Apelación. Efecto devolutivo.

Considerando, que en uno de sus Considerandos, la Corte a-qua señala que la actual recurrente solicitó la inadmisibilidad de la indicada demanda en daños y perjuicios, interpuesta por el recurrido, fundamentándose en las disposiciones del artículo 81 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; pero, no obstante lo indicado, dicha Corte consideró no estar apoderada del conocimiento de la demanda introductiva del recurso, sino de la apelación contra la sentencia que acogió la oposición mencionada, interpuesta por la actual

recurrente; que en tal virtud, dicho pedimento debía ser desestimado sin que, a juicio de dicha Corte, fuera necesario hacerlo constar en el dispositivo del fallo recurrido;

Considerando, que la sentencia resultante de la oposición objeto del recurso de apelación, juzgó el fondo del asunto al declarar nula y sin ningún efecto jurídico la demanda intentada por Nelson B. Butten Varona y la nulidad de todos los actos del procedimiento que siguieron a la demanda, razón por la cual la Corte a-quo, al revocar la sentencia impugnada quedó apoderada de todas las cuestiones de hecho y de derecho en virtud del efecto devolutivo de la apelación; que en tal virtud debió proceder a un nuevo examen de la demanda introductiva de la instancia, y decidirla mediante una sentencia confirmando o anulando el fallo emitido en primer grado con motivo del recurso de oposición mencionado interpuesto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo cual no ocurrió en la especie, ya que la Corte a-quo se limitó a revocar dicho fallo sin pronunciarse sobre el fondo de la demanda que ya había decidido el juez de primer grado;

Considerando, que en consecuencia, procede casar la sentencia recurrida por haber violado el principio del efecto devolutivo de la apelación, motivo que suple la Suprema Corte de Justicia por ser de puro derecho. (Cámara Civil, 30 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 136).

12.11 Apelación. Efectos. Exclusión de la demanda en grado de apelación.

Considerando, que dado el efecto devolutivo del recurso

de apelación y no habiendo admitido los recurrentes en primera instancia, donde hicieron defecto, la condición de empleadores, éstos conservaban el derecho de pedir su exclusión de la demanda, si entendían que no tuvieron ninguna relación contractual con el recurrido, debiendo el tribunal pronunciarse sobre dicho pedimento después de analizar las pruebas aportadas por las partes y no rechazarlo bajo el argumento de que en grado de apelación no era posible hacer tal pedimento. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 247).

12.12 Apelación. Forma de la apelación. Artículo 621 del Código de Trabajo.

Que la exigencia del escrito o declaración formulada por ante la Secretaría de la Corte competente tiene por finalidad facilitar el cumplimiento del procedimiento establecido en grado de apelación, el cual otorga al secretario del tribunal un papel activo que le obliga enviar copia del escrito contentivo de la declaración a la parte adversa, como una manera de garantizar la seguridad en la recepción del recurso al intimado, a fin de que organice su defensa y la exponga en un escrito que deberá ser depositado en la Secretaría de la Corte. Que por tales razones la notificación de un acto de alguacil no suple la exigencia del escrito o declaración que formulan los artículos 621 y 622, aludidos, por lo que no puede constituirse en un recurso de apelación frente a la precisión de las disposiciones de los indicados artículos y la razón de ser del escrito o declaración. Que las disposiciones del artículo 486 del Código de Trabajo, en el sentido de que ningún acto de procedimiento será nulo

por vicio de forma, en materia de trabajo, es inaplicable en la especie, por tratarse no de la falta de una mención substancial o del cumplimiento de una formalidad, sino de la no realización de una actuación que es la que constituye el recurso de apelación, por lo que al declarar inadmisibile dicho recurso, la Corte a-quu actuó de acuerdo a la ley. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 26 de noviembre de 1997; B.J. 1044. Pág. 289-290).

12.13 Apelación. Incidentes. Efecto no suspensivo. Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953.

Considerando, que el propio legislador mediante la Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953, estableció que los recursos ordinarios o extraordinarios elevados contra las sentencias incidentales no son suspensivos, y expresamente obligan a los jueces a continuar el conocimiento de las causas de las que estuvieren apoderadas, no obstante dichos recursos, por lo que el Juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata debió continuar el conocimiento del caso de que se trata, habida cuenta que la sentencia que dictó y fue recurrida, versó sobre un incidente del proceso. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág.343).

12.14 Apelación. Indivisibilidad. Demanda en partición. Efectos de la apelación.

Considerando,... que, aparte de que la referida sentencia de la Corte a-quo del 26 de abril de 1994, adquirió, por estos motivos, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es incuestionable que si bien en principio los

actos de la instancia tienen un efecto relativo y que cuando en ella figuran varias partes, sea como demandante sea como demandados, la apelación no tiene efecto más que con respecto de que aquellos que la han interpuesto y no aprovecha a las otras, no es menos cierto que en materia indivisible la apelación interpuesta por una de las partes aprovecha a sus cointerésados; que como en la especie se trata de una demanda en partición de bienes entre coherederos, que por su naturaleza es indivisible, el recurso interpuesto contra algunas de las partes vale respecto de las demás y, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesta en segundo término carecía de interés y utilidad, medio de inadmisión que se suple de oficio por tratarse de una regla de orden público. (Cámara Civil, 1 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 44).

12.15 Apelación. No depósito de sentencia recurrida y del acto de apelación.

Considerando, que tal como lo expresa la sentencia impugnada el no depósito del acto de apelación y de la sentencia recurrida, impedía al tribunal a-quo analizar los méritos de un recurso de apelación contra una sentencia desconocida, por no tener constancia de la existencia del recurso ni de la sentencia supuestamente impugnada.

Considerando, que la procedencia de un recurso de apelación depende de que los agravios que se imputan contra la sentencia recurrida fueren ciertos, siendo imposible que un tribunal verifique los mismos, sin la presencia de la sentencia recurrida y sin que se le demuestren los agravios contra ella.

Considerando, que los actos y documentos procesales no se presumen, por lo que el hecho de que la recurrida

hubiere formulado conclusiones sobre el alegado recurso de apelación, no implica la existencia del mismo, siendo válida que la inadmisibilidad fuere declarada de oficio por parte del tribunal a-quo, frente a su imposibilidad de dictar un fallo sobre el fondo del alegado recurso de apelación, por el desconocimiento que tuvo de la existencia de éste.

Considerando, que abierto el expediente en ocasión del presente recurso de casación, el recurrente aún no ha depositado la sentencia de primer grado, ni el recurso de apelación contra la misma, razón por la cual esta Corte no está en condiciones de verificar la existencia de los mismos y que la Cámara a-qua cometiera alguna violación a la ley, careciendo, en consecuencia, de fundamento el presente recurso de casación, debiendo ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág.491).

12.16 Apelación. Notificación de la sentencia a los abogados. Artículo 147 del Código de Procedimiento Civil. Finalidad de ese artículo.

Considerando, que los recurrentes admiten que el recurso de apelación fue interpuesto después que el plazo se habían vencido, pero alegan que la notificación de la sentencia fue nula por no haberse notificado a los abogados, al tenor de las disposiciones del artículo 147 del Código de Procedimiento Civil; Que el no cumplimiento de las disposiciones de ese artículo no tiene ningún efecto en la interposición de los recursos, pues el mismo solo es exigible como un requisito previo a la ejecución de sentencia, en los casos donde hay necesidad de constituir abogados y efectivamente se ha

hecho esa constitución, por lo que la Corte a-qua lo que tenía que establecer era la validez de la notificación de la sentencia, la cual, según su comprobación, se hizo en la forma que establece la ley para los casos en que la persona contra quién va dirigida la notificación no ha señalado domicilio ni residencia en el país. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 12 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 276).

12.17 Apelación. Pensiones alimentarias. Efecto ejecutivo.

Considerando, que el recurso de apelación tiene como primer efecto el suspender la ejecución de la sentencia impugnada, pero, en el caso de las pensiones alimentarias la ley señala que, por el contrario, las sentencias tienen un efecto ejecutivo; que, en el caso ocurrente, la ejecutoriedad de la sentencia del tribunal de primer grado cesa, no en el momento en que se interpone el recurso de apelación, sino a partir del momento en que el tribunal de alzada sustituye la decisión que se tomó en primer grado, que por esta razón, la ejecución de una sentencia revocada o modificada, será a partir de la fecha del fallo del tribunal que resolvió la apelación. (Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

12.18 Apelación. Plazo. Aumento en razón de la distancia. Artículo 1033 Código de Procedimiento Civil. Antiguo Código de Trabajo.

Considerando, que la legislación laboral no contenía ninguna referencia al aumento del plazo por el término de la distancia, razón por la cual en los casos en que las



notificaciones debían hacerse fuera del lugar del domicilio de la persona que realizaba la actuación, eran aplicables las disposiciones del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, que dispone un aumento de los plazos de un día por cada 30 Km., o fracción de más de 15 Kms., entre el lugar del domicilio de la parte contra quien se corre el plazo y el lugar donde se deba cumplir el acto, por lo que el tribunal debió determinar la distancia existente entre el domicilio del recurrente y el lugar donde se notificó el recurso de apelación, para apreciar si éste se hizo dentro de los plazos legales. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 334).

12.19 Apelación. Plazo. Días no laborables. Artículo 495 del Código de Trabajo.

Considerando, que si bien la sentencia impugnada contiene una motivación errónea para declarar admisible el recurso de apelación intentado por la actual recurrida, al considerar que el período de vacaciones judiciales no se computa en los plazos procesales, la decisión tomada es correcta en razón de que por mandato del artículo 495 del Código de Trabajo, los días no laborables no son computables en los plazos para las actuaciones en materia laboral, habiendo sido ejercido el recurso de apelación de que se trata dentro del plazo de un mes franco que establece el artículo 621 del Código de Trabajo, ya que en el período del 20 de diciembre de 1996 al 30 de enero de 1997, hubo diez días no laborables, venciendo en consecuencia el plazo para la apelación el día 31 de enero del 1997. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 643).

12.20 Apelación. Plazo. Punto de partida. Sentencia dictada en presencia de las partes.

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la misma fue dictada el 24 de abril de 1997, en presencia de las partes, al tratarse de una sentencia in-voce producida en el curso de la audiencia pública que en esa fecha era celebrada por la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional;

Considerando, que al ser dictada en presencia de las partes, el plazo para la interposición del correspondiente recurso comenzaba a correr desde el mismo día de la fecha de la sentencia; que al depositarse el escrito contentivo del recurso de casación, en la Secretaría del tribunal que dictó dicha sentencia, el 26 de junio de 1997, el mismo deviene en tardío al haberse vencido en esa fecha el plazo de un mes que establece el referido artículo 641 del Código de Trabajo para el ejercicio del recurso de casación en materia laboral, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisibile por extemporáneo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 9 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 569).

12.21 Apelación. Punto de partida del plazo. Notificación.

Considerando, que como es evidente que no se procedió a notificar la sentencia en la forma indicada y el acto no llegar a manos del interesado, es obvio que dicho acto no pudo dar apertura al plazo de la apelación; que tampoco pudo dar apertura a ese plazo el hecho del conocimiento por otro medio que no fuera el de una notificación por acto de alguacil que de tal sentencia tuvo el recurrente, puesto

que sólo una notificación regular abre el plazo de la apelación; que como en la especie, esa notificación regular no tuvo lugar, es claro que cuando el recurrido interpuso el recurso de apelación no había comenzado a correr el plazo establecido por la ley para interponerlo y por tanto el aludido recurso fue interpuesto dentro del plazo legal. (Cámara Civil, 17 de febrero de 1999; B. J. 1059. Págs. 131 y 132).

12.22 Apelación. Recurso. Advocación del fondo. Artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que el texto de una disposición legal no puede interpretarse de manera aislada, sino que es preciso examinarla en el contexto general de la ley o del código donde esté insertada;

Considerando, que en efecto el artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal está concebido y redactado dentro de la potestad que tiene una corte de apelación para resolver el recurso que ha sido sometido a su examen, y en los textos que le preceden plantea diversas situaciones, como son la revocación de una sentencia porque el caso no se repute ni contravención, ni delito; anulación de la sentencia porque el hecho sea una contravención de simple policía, o porque el hecho sea de naturaleza tal que amerite penas afflictivas o infamantes, y por último, establece la avocación del fondo del caso, si la sentencia es revocada por la inaplicación de formas no reparadas, sancionadas con la nulidad;

Considerando, que como se observa, todas las situaciones planteadas contemplan casos en que el tribunal de primer grado ha fallado el fondo del asunto y

por tanto, se ha desapoderado del mismo, por lo que sería improcedente que una corte de apelación devolviera el caso a esa jurisdicción, si en virtud del recurso que la apodera, anula la sentencia de primer grado, de conformidad con lo que dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal, pues contravendría el principio universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 342).

12.23 Apelación. Sentencia recurrida sin ser notificada. Apertura del plazo. Condiciones.

Considerando, que en el expediente no hay constancia de que la sentencia del 16 de diciembre de 1993, hubiera sido notificada a los prevenidos Ing. R. J. y S. K. F. J., notificación que es el punto de partida del plazo de diez días para interponer el recurso de apelación; por lo que el mismo se encuentra todavía abierto para que dichos prevenidos puedan ejercerlo, y ésto así, no obstante la notificación del recurso de apelación realizado por los prevenidos por medio de acto de alguacil, que puede dar a entender que ellos conocían la sentencia, toda vez que conforme a criterio técnico, nadie se cierra una vía de recurso así mismo, y que sólo el pronunciamiento de la sentencia en presencia de las partes, o una notificación regular de una sentencia, por medio de un acto de alguacil, da lugar a la apertura del plazo para interponer un recurso. (Cámara Penal, 31 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 261.

13. ASTREINTE:

13.1 Astreinte.

(Ver: Prestaciones laborales. Retardo en el cumplimiento de la obligación. Artículo 86 y 95 del Código de Trabajo. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contecioso Tributario, 29 de diciem- bre de 1999). —

13.2 Astreinte. Artículo 86 del Código de Trabajo. Condiciones.

Considerando, que cuando el empleador hace una oferta de pago y esta no es aceptada por el trabajador bajo el alegato de que la misma es incompleta y no satisface los derechos que le corresponden, para que un tribunal disponga la aplicación de la penalidad establecida en el referido artículo 86, es necesario que previamente este declare que la negativa del trabajador a recibir los valores ofertados es justificada por no cubrir la oferta realizada el monto total de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo, Contencioso-Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 308). <

13.3 Astreinte. Demandar con posteridad a su fijación.

Considerando, que, efectivamente, contrario a lo alegado por la recurrente nada obliga a la parte que solicita la fijación de una astreinte, interponer su demanda a título accesorio por ante el tribunal apoderado del recurso de apelación contra la sentencia u ordenanza en cuya ejecución había dificultad; que si generalmente la astreinte es una acción incoada accesoriamente a la demanda principal, esto no impide que la parte que ha

obtenido por sentencia una condenación en su provecho y que por resistencia de su contraparte, no ha podido ejecutar, demandar con posterioridad la fijación de una astreinte por ante el mismo juez que dictó la decisión y lograr así que el tribunal pronuncie la ejecución de su decisión por medio de este mecanismo de constreñimiento, conservando de ese modo la astreinte, su carácter accesorio, puesto que la astreinte por su naturaleza es un instrumento ofrecido más al juez para la defensa de su decisión que al litigante para la protección de su derecho ya que su misión, contraria a la de los daños y perjuicios, es constreñir, no reparar. (Cámara Civil, 10 de noviembre de 1999).

14. AUTORES Y COMPLICES:

Autores y cómplices. Importancia de su distinción. Artículo 18 del Código Penal y 106 de la Ley 224 de 1984. Reclusión mayor.

Considerando, que la complicidad como figura jurídica, implica algún tipo de participación de un individuo en un acto delictuoso ejecutado por otra persona; que el cómplice como tal, en un momento dado puede facilitar la ejecución, teniendo obviamente conocimiento de que el hecho que se realiza constituye una infracción a la ley;

Considerando, que, además, el principio de responsabilidad de autores o cómplices, cada cual en su esfera y gradación, descansa en el presupuesto lógico de la libre decisión que toma una persona de ejecutar o de planear, auspiciar o facilitar un hecho reñido con la ley;

Considerando, que es de suma importancia, cuando se

pronuncia una condenación penal, no sólo articular claramente los hechos de la prevención y relacionar estos con la ley, como se ha hecho en el caso que examinamos, sino que, se precisa además distinguir claramente a los autores de los cómplices, principalmente en lo que concierne a las penas aplicables a cada procesado, en razón de que los autores de un crimen o de un delito son pasibles de las penas que conlleve la infracción cometida, a la luz de lo señalado por el Código Penal y/o por otras leyes adjetivas, mientras que a los cómplices de los hechos le corresponde, en virtud del artículo 59 del citado Código Penal, la pena inmediatamente inferior a la aplicable a los autores principales; y en particular la ley de drogas, señala en su artículo 77 lo siguiente: "Los cómplices en cada caso, serán sancionados con la pena inmediatamente inferior...";

Considerando, que tal y como lo ha expresado la Corte a-quá en su decisión, el crimen tipificado de Tráfico de Drogas conlleva para los autores una sanción de 5 a 20 años y multa no menor del valor de la droga decomisada, pero nunca inferior a RD\$50,000.00; pero dicha ley no indica, como se aprecia, a cual de las penas aflictivas o infamantes corresponde ésta sanción, lo que debe ser entendido en el sentido de que corresponde a la reclusión, partiendo de que la Ley No. 224 de 1984, sustituyó en la legislación dominicana la denominación de Trabajos Públicos por la de Reclusión;

Considerando, que las sanciones antes señaladas deben recaer en el autor de la infracción y por tanto, se precisa determinar cual sería la pena aplicable al cómplice en el caso que nos ocupa;

Considerando, que, al ser la Ley No. 224 del año 1984

una pieza legal que trata sobre materia penitenciaria o carcelaria y no sobre materia penal propiamente dicha, debe entenderse que lo por ella regulado es la manera y las condiciones de la ejecución de las penas privativas de libertad, y no la duración de éstas;

Considerando, que, así las cosas, lo que se abolió en la República Dominicana mediante el artículo 106 de la Ley 224 del año 1984 fueron los trabajos penosos o forzados a que hacían referencia los artículos 15 y 16 del Código Penal, los cuales también contemplaban el encadenamiento de los reclusos como medida de seguridad y el trabajo penoso de las mujeres en el interior de las cárceles y presidios del país. Que, por consiguiente, la pena de tres a veinte años de duración instituida mediante el artículo 18 del Código Penal sigue existiendo en nuestra nación, ahora como una sanción que podría denominarse Reclusión Mayor, para diferenciarla de la Reclusión instituida por los artículos 22 y 23 del citado Código Penal, la cual sigue siendo de 2 a 5 años de duración. Que, en este orden, la pena de Detención contemplada en el artículo 21 del referido Código Penal, ha quedado inalterada, en razón de que la Ley 224 del 1984 no la ha afectado en ningún sentido. Que, asimismo, las penas de 20 años y de 30 años de duración, otrora llamadas de trabajos públicos, previstas en el artículo 7 del Código Penal, no fueron alcanzadas por ninguna disposición de la Ley 224-84, sobre Régimen Penitenciario, excepto en lo relativo al modo de su denominación; por consiguiente, las penas de referencia siguen teniendo vigencia en cuanto a su duración, pero no en lo atinente a su manera de ejecución, en razón de la abolición de los trabajos públicos; por lo cual las citadas penas podrían denominarse como de veinte años y de treinta años de reclusión mayor;

Considerando, que debe entenderse que cuando la Ley No. 224 de 1984, sustituyó la denominación de Trabajos Públicos por la de Reclusión en la legislación penal dominicana, adoptó una medida que se refiere sólo a la naturaleza, denominación y modo de ejecución de las penas; por consiguiente, cuando la Corte a-quá condenó al acusado, en la categoría de cómplice, a 3 años de reclusión y al pago de RD\$10,000.00 de multa, aplicó una sanción ajustada a la ley en cuanto a la multa y a la duración de la prisión, pero no en lo referente a la denominación de esta, en razón de que la pena inmediatamente inferior a la señalada para los autores del hecho, por el artículo 75 párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, es la de 3 a 10 años de Detención, puesto que, como se ha expresado, lo que ha variado la Ley No. 224 de 1984 es el nombre y el modo de ejecución de algunas penas, y no la duración de éstas; y en cuanto a la Detención, este tipo de sanción ha quedado inalterada por no ser alcanzada por la precitada reforma legal del año 1984;

Considerando, que, la Corte a-quá aplicó una sanción ajustada a la ley en lo que se refiere a la duración de la pena impuesta y, por consiguiente, en este aspecto no existe vicio, ni violación que justifiquen su casación;

Considerando, que, no obstante, en lo referente a la denominación, naturaleza y forma de ejecución de la pena, la Corte a-quá hizo un uso incorrecto del término reclusión, puesto que dentro de las penas aflictivas e infamantes que instituye el Código Penal, cuando se refiere a la sanción de 3 a 10 años, el artículo 21 de este Código la denomina como "detención", de lo que se infiere que, al imponer la Corte a-quá la sanción de 3

años y RD\$10,000.00 de multa, en la categoría de cómplice, no podía denominar la misma como "reclusión", sino como "detención", y por tanto, en este aspecto la sentencia debe ser casada. (Cámara Penal, 29 de septiembre de 1998; B.J. 1054. Pág. 281).

15. AVOCACION:

Avocación en materia criminal. Artículo 215 Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que aún cuando la avocación del fondo en materia criminal no está prevista, como sucede con el artículo 215 del Código de Procedimiento Criminal referente a la materia correccional, es procedente consignar que en razón de que la jurisdicción de primer grado falló el fondo del asunto, agotando ese grado, la misma Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago mantiene su competencia para conocer del recurso de apelación de que se trata, declarando previamente la anulación del plenario, de la sentencia y del acta de audiencia, tal como lo alegó la parte civil, y avocándose al fondo; toda vez que por las razones arriba indicadas, si el asunto volviera a la jurisdicción de primer grado, se incurriría en la violación del artículo 8, numeral 2, letra h) de la Constitución de la República, que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (Cámara Penal, 14 de abril de 1998; B. J. 1049. Pág. 111).

B

16. BANCO:

Ver además:

-Cheques.

16.1 Banco. Banco Central. Junta Monetaria.

(Ver: Junta monetaria. Atribuciones. Carácter definitivo y no susceptible de recurso de su resolución, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de septiembre de 1998; B.J. 1054. Pág. 333).

16.2 Banco. Cuentas comerciales. Artículos 12 y 13 del Código de Comercio. Cámara de compensación.

Considerando, que es evidente que la sentencia impugnada adolece de una insuficiente comprobación de los hechos necesarios para estatuir de conformidad con la ley; que en efecto, la Corte a-quo, para rechazar los alegatos del recurrente se fundamenta en el concepto erróneo de que los bancos no pueden regular y determinar la contabilidad de las cuentas corrientes; que éstas deben regirse por las normas establecidas en los artículos 12 y 13 del Código de Comercio, disposiciones que, según se ha visto, no son aplicables al estado de cuenta que rinden los bancos a sus clientes, por no constituir un libro de comercio; que en este sentido, y por

las razones apuntadas, se creó la Cámara de Compensación, que tiene por finalidad liquidar, recíprocamente, los cheques librados contra los bancos, mediante mecanismos establecidos; de ahí que, cuando se deposita un cheque librado contra el propio banco del girador, que es el caso, o contra otro banco diferente, éste deberá esperar los días hábiles necesarios, según los usos bancarios, para poder disponer de los fondos, cuando éstos sean cobrados a través de la Cámara de Compensación, razón por la cual los bancos advierten a sus clientes que no podrán disponer de estos fondos hasta que no hayan sido hechos efectivos por el banco girado, reservándose el banco el derecho de rehusar el pago de cualquier cheque para el que no se provean los fondos antes del comienzo de las operaciones en el día en que el cheque es presentado. (Cámara Civil, 30 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 294-295).

16.3 Banco. Banco Central. Naturaleza jurídica. Obligación asumida. Artículos 63 y 64 del Código de Trabajo.

Considerando, que si bien el Banco Central no es una empresa comercial, en la especie la Corte a-qua determinó que el mismo actuaba como un ente de derecho privado, realizando actividades comerciales y contratando trabajadores, a los cuales se comprometió, de acuerdo, al párrafo del artículo décimo del contrato de arrendamiento a pagar "las prestaciones laborales";

Considerando, que en esa circunstancia el Banco Central contrajo la obligación que tenía la empresa arrendataria frente al recurrido, quien ya la había demandado en pago de prestaciones laborales, en el momento en que se

produjo la rescisión del contrato de arrendamiento, no porque dicho banco mantuviera relación laboral con el reclamante, sino porque al posesionarse de nuevo de las instalaciones objetos del arrendamiento, adquirió todos los compromisos laborales que la empresa que explotaba el negocio tenía con sus trabajadores y con los que habían dejado de laborar con ella y tuvieran acciones pendientes por decidir en los tribunales de trabajo;

Considerando, que en virtud de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, no es necesario participar en un contrato de trabajo para adquirir obligaciones derivadas de éste, bastando para que un tercero tenga que cumplir con tales obligaciones, el traspaso o transferencia de una empresa o de un trabajador, lo que descarta que la sentencia impugnada haya violado las disposiciones del artículo 1165 del Código Civil, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de septiembre de 1999).

16.4 Banco. Franquicia para operar una institución bancaria. Obligaciones frente a los trabajadores.

Considerando, que en el ámbito de las actividades bancarias, la adquisición de la franquicia para operar una institución bancaria o parte de dicha institución, conlleva a cargo del adquiriente la obligación de satisfacer los derechos de los trabajadores de las mismas, asimilándose a la cesión de empresa o de sucursal que regulaba el referido artículo 57 del anterior Código de Trabajo y reglamenta hoy, el artículo 63, de la legislación laboral vigente;

Considerando, que la finalidad de las disposiciones legales arriba indicadas, no es sólo garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores que laboran en las empresas o establecimientos cedidos, los cuales conservan sus puestos de trabajo, no obstante los cambios operados en la dirección y manejo de estos, sino la de garantizar sus derechos como trabajadores, frente a negociaciones, a las cuales permanecen ajenos, que conlleven no tan sólo cambio en la dirección de las empresas, sino disminución o transferencia del patrimonio empresarial. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de agosto de 1999).

16.5 Banco. Liquidación. Derechos de los trabajadores.

Considerando, que no constituye ningún obstáculo para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el hecho de que una institución bancaria esté en proceso de liquidación, pues ese reconocimiento en nada altera la situación en que se encuentra el demandado, que lo que sí deben hacer los demandantes es garantizarle su derecho a la defensa, haciendo las citaciones a las instituciones o funcionarios que tengan a su cargo la liquidación del banco, de lo cual no se ha quejado la recurrente; que en consecuencia el Tribunal a-quo no estaba obligado a suspender el conocimiento del asunto de que se trata, sobre todo, si como se advierte, en el expediente, a las partes se le concedieron las oportunidades y facilidades para defenderse, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de agosto de 1999).

16.6 Banco. Liquidación provisional. Interpretación del Artículo 36 de la Ley General de Bancos.

El Superintendente de Bancos es el único funcionario indicado por la ley con calidad para proceder a la liquidación de un banco, con la aprobación de la Junta Monetaria, en las condiciones previstas, para lo cual debe tomar posesión del activo y del pasivo del banco de que se trate, y todas las providencias y medidas propias de la liquidación, sin que esta facultad y poderes puedan ser restringidos por no autorizarlos la ley; que al ordenar el juez a-quo que se procediera a una liquidación provisional del B. U. S. A., bajo las condiciones apuntadas, es obvio que la sentencia impugnada no sólo violó las disposiciones del artículo 36 de la Ley anteriormente citada, sino que al mismo tiempo incurrió en un exceso de poder al condicionar la actividad del liquidador en el caso de la especie, sin permitírsele la ley que regula la actividad bancaria en el país y particularmente el texto legal cuya violación se invoca, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada. (Cámara Civil, 19 de noviembre de 1997; B.J. 1044. Pág. 74).

17. BENEFICIOS:

17.1 Beneficios de una empresa. Artículo 494 del Código de Trabajo. Deber de los jueces.

Considerando, que para una mejor substanciación del proceso, la Corte debió recurrir a las disposiciones del artículo 494 del Código de Trabajo, que concede facultad, a los tribunales de trabajo, para solicitar "a las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualesquiera personas en general, todos los datos e

informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos", para obtener de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, los datos y referencias necesarios que le permitieran determinar si la recurrente obtuvo beneficios, y el alcance de la participación en la distribución de estos que correspondía a cada trabajador; que al no hacerlo dejó la sentencia carente de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios de recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de junio de 1998; B.J. 1051. Págs. 496-497).

18. BIEN DE FAMILIA:

18.1 Bien de familia. Inmuebles de programa de asistencia social. Artículo 1ro. de la Ley 472 de 1964.

Considerando, que tal como lo expone en la Decisión impugnada el Tribunal a-quo cuando como en la especie el Estado Dominicano o sus instituciones autónomas correspondientes proceden a asignar o a vender inmuebles dentro de sus programas de asistencia social a los particulares de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 472 que establece que dichos inmuebles se considerarán constituidos en Bien de Familia conforme a la Ley No. 1024 del 24 de octubre de 1928 y sus modificaciones y así se estipulará el acto y en el documento que ampare su derecho, sin necesidad de otro requisito legal y que dichos inmuebles conforme el artículo 14 de la Ley No. 1024, del 24 de octubre de 1928 modificada por la Ley No. 5610 del 25 de agosto de 1961, no podrán ser transferidos en ningún tiempo de otras

personas, aunque hayan sido pagados en su totalidad, sino cuando se cumplan las disposiciones de dicha ley y en los casos especificados por ella, es incuestionable, que ningún inmueble sometido al régimen establecido por las indicadas disposiciones legales puede ser transferido, enajenado ni embargado porque el mismo constituye una garantía para la estabilidad y protección de las familias, por lo que, tal como lo ha expuesto el tribunal a-quo el inmueble indicado debe permanecer en el patrimonio de los adquirientes, hasta tanto se cumplan las condiciones establecidas por la ley. (Cámara Civil, 1 de julio de 1998).

18.2 Bien de Familia. Ley 339 de 1968. Cesación de la inembargabilidad.

Considerando, que la circunstancia de que la Corte a-quo independiente de lo consignado anteriormente, incurrió en una motivación errónea, al considerar que el haber adquirido los coparticipes la mayoría de edad ésta puso fin a la inembargabilidad del bien de familia constituido en virtud de la Ley No. 339 de 1968, ya que, por el contrario, esta inembargabilidad únicamente desaparece mediante el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley que rige la institución del bien de familia; que tal errónea motivación, sin embargo, no ha podido influir sobre la presente decisión, por ser inoperante puesto que, de ser considerada válida, hubiera conducido a la misma solución de la litis. (Cámara Civil, 22 de diciembre de 1999).

18.3 Bien de Familia. Venta. Renuncia.

Considerando, que como se advierte por lo anterior, los

jueces del fondo ponderaron los documentos aportados al debate; que el hecho de que el inmueble al momento de adquirirlo el recurrente quedara sometido al imperio de la Ley No. 1024 de 1928, o sea, de Bien de Familia inajenable e inembargable, no bastaba en la especie para el otorgamiento del acto de venta suscrito por el recurrente a favor del recurrido, si como también comprobó el Tribunal a-quo, dicho inmueble fue liberado de esas prohibiciones, en virtud de sentencia dictada al efecto el 25 de julio de 1985, por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que declaró válida la renuncia a la constitución de bien de familia que afectaba dicho inmueble; que tampoco ha incurrido el Tribunal a-quo en las violaciones denunciadas por el recurrente al ordenar la transferencia del inmueble en la proporción de un 50% a favor del recurrido y el otro 50% a favor de los sucesores de la finada Juana Bautista Suazo, después de comprobar que esta última había fallecido, con cuyo acontecimiento se abrió su sucesión, por lo que estimó justo y equitativo ordenar a favor de los sucesores de la misma la mitad de dicho inmueble; que nada se opone a que conjuntamente con la instancia del recurrido mediante la cual solicitó la transferencia en su favor del inmueble en discusión, se estableciera que el vendedor era casado bajo el régimen de la comunidad legal de bienes; que el inmueble fue adquirido durante el matrimonio y que la esposa había fallecido, pudiendo el tribunal resolver ambas situaciones, por una sola sentencia, sin necesidad de que para ello le fueron formulados pedimentos expresos y formales por las partes interesadas, ya que así lo impone el artículo 266 de la Ley de Registro de Tierras, por todo lo cual el

segundo medio del recurso, también carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 31 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 1114 y 1115).

19. BIENES RESERVADOS:

Bienes reservados. Renuncia a la comunidad de bienes. Formalidades.

Considerando, en cuanto al alegato contenido en la letra a) del considerando anterior, el examen del expediente pone de manifiesto que la recurrida realizó una serie de actos (compraventas, préstamos, emisión de cheques y otros) mientras estuvo casada con el recurrente, con el propósito de adquirir los inmuebles que ahora reclama como bienes reservados; que al tenor de las disposiciones del artículo 1454 del Código Civil, cuya violación invoca el recurrente, la aceptación por la mujer de la comunidad por haberse inmiscuido en ésta no puede resultar más que de actos de disposición; que al no revestir este carácter ninguno de los actos en que intervino la recurrida durante el matrimonio en relación con los bienes adquiridos dentro del mismo en los que sí tuvo participación activa con el producto de su trabajo personal, es obvio que su derecho de renunciar a la comunidad no sufrió menoscabo, por lo que dicho alegato carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, en cuanto a lo expresado en la letra b), que tampoco puede considerarse a la recurrida como partícipe de la comunidad por el hecho de haber actuado conjuntamente con el señor Heinsen Kundhart, mientras

estuvo casada con éste, en el contrato para la compra de una parte de la Parcela No. 6-Ref. B-1-A-1-C-7-D del Distrito Catastral No. 4 del Distrito Nacional, en virtud del cual fue expedido el certificado del título correspondiente, pues la hipótesis que prevé el artículo 1455 del Código Civil, que el recurrente afirma haber sido violado, es aquella cuando estando ya disuelta la comunidad por el divorcio o por la muerte del esposo, la mujer se hace partícipe en un documento público que implique obviamente su aceptación de la comunidad; que como en el expediente no figura ningún acto en que figure la recurrida después de disuelta la comunidad que involucre bienes adquiridos durante el matrimonio, el referido texto legal no fue desconocido con la renuncia a la comunidad producida por la recurrida, por lo que también este alegato carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, en lo que respecta a lo expresado por el recurrente en el sentido de que la renuncia hecha por la mujer de modo unilateral, sin que haya sido aceptada por el marido o sus herederos, está desprovista de valor porque una voluntad no puede ligarse por sí misma, procede significar que ninguna disposición de la ley subordina la validez de esa renuncia a la aceptación del marido, excepto cuando la renuncia es incluida en una convención celebrada entre la mujer o sus herederos y el marido o los herederos de éste, pero no cuando aquella se hace pública por declaración en secretaría, como ocurrió en la especie, caso en el cual sus efectos son oponibles erga omnes;

Considerando, en lo referente a lo alegado en la letra c), el artículo 997 del Código de Procedimiento Civil dispone: "La renuncia a una comunidad o de una sucesión se hará

en la secretaría del tribunal de primera instancia del distrito en el cual la disolución de la comunidad o la apertura de la sucesión haya tenido lugar, inscribiéndose sobre el registro prescrito por el artículo 784 del Código Civil, y de conformidad con el artículo 1457 del mismo código, sin necesidad de otra formalidad..."; que, como admite el recurrente, el divorcio de su esposa, actual recurrida, fue pronunciado el 31 de agosto de 1991, después de haber sido admitido por sentencia No. 844/91, rendida por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que independientemente de que la renuncia a la comunidad fue realizada en la jurisdicción judicial del Distrito Nacional, como se ha visto, la recurrida, para llenar tal formalidad, compareció personalmente por ante la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que fue apoderado de la demanda de divorcio y donde éste se produjo; que como la comunidad se disuelve, además de otras causas, al disolverse el matrimonio, es obvio que al hacer su declaración de renuncia a la comunidad en la secretaría de la señalada Cámara Civil y Comercial, la recurrida procedió correctamente y en armonía con las previsiones de la regla trazada por el citado artículo 997 del Código de Procedimiento Civil. (Cámara Civil, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 79-81).

C

20. CAMARA DE CALIFICACION:

20.1 Cámara de Calificación. Casación. Inadmisibilidad del recurso de casación contra las providencias calificativas.

Las Providencias Calificativas no están comprendidas dentro de los fallos a que hace referencia el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, a su vez, el artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal, modificado por la Ley No. 5155 del 26 de junio de 1959, en su párrafo final, declara categóricamente: Las decisiones de la Cámara de Calificación, no son susceptibles de ningún recurso; que ésto tiene indudablemente por fundamento el hecho de que los acusados puedan proponer ante los jueces del fondo todos los medios de defensa tendentes a su descargo o a la modificación de la calificación que se haya dado al hecho. (Cámara Penal, 17 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Págs. 113 y 114).

20.2 Cámara de Calificación. Recursos. Art. 127 del Código de Procedimiento Criminal. Alegato de violación a la Constitución.

Considerando, que el recurrente alega en su memorial, la violación del derecho de defensa consagrado en el artículo 8, párrafo 2, letra j, de la Constitución de la

República Dominicana y el desconocimiento por parte del Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la declinatoria del expediente el día 6 de diciembre de 1995, por ante el Juez de Instrucción de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial de Santiago, lo que le impedía continuar instruyendo la sumaria del caso, sobre todo porque las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no son susceptibles de ningún recurso, pero evidentemente que esa es una crítica que se hace a la actuación del Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, y por tanto no dirigida a la providencia calificativa del Juez de Instrucción, y en esa jurisdicción el recurrente pudo hacer, como al efecto lo hizo, todos los alegatos que consideró de lugar, por lo que evidentemente no se violó su derecho de defensa, como se alega en el primer aspecto de este medio.

Considerando, por otra parte, que las decisiones emanadas de la jurisdicción de instrucción, de primer y de segundo grado, no tienen autoridad de cosa juzgada, en razón de no conocer del fondo de los casos, por ser jueces de indicios; y las partes alegadamente afectadas por las irregularidades en que éstas hayan incurrido, pueden invocarlas ante las jurisdicciones de juicio, que son en definitiva las que proveen las soluciones de los asuntos de los cuales son apoderados, y no pretender anularlas mediante un recurso expresamente vedado por el artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal. (Cámara Penal, 17 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 196).

21. CAMARA DE COMPENSACION:

Cámara de compensación. Banco.

(Ver: Banco. Cuentas corrientes. Artículos 12 y 13 del Código de Comercio. Cámara de compensación. Cámara Civil, 30 de junio de 1999; B. J. 1063. Pág. 294-295).

22.- CASACION:

22.1 Casación. Alegato de inconstitucionalidad por primera vez en casación. Medio nuevo. Inadmisibile.

Considerando, que procede examinar en primer término, el medio propuesto por la parte recurrida, deducido de la inconstitucionalidad de la Ley No. 16-88 del 5 de febrero de 1988; que ni en la sentencia impugnada ni en el expediente del caso consta que la recurrente alegara ante los jueces del fondo, la inconstitucionalidad de la referida ley como medio de defensa; que habiendo sido alegado por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia, debe declararse inadmisibile por constituir un medio nuevo en casación. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 100).

22.2 Casación. Alegato de indivisibilidad. Exposición sucinta de los medios. Admisibilidad del recurso.

Considerando, que tal como se observa, el recurrente desarrolla brevemente su medio de casación, planteando que la contradicción entre el dispositivo y los motivos de la sentencia se produce cuando el juez hace consideraciones sobre el fondo de la demanda y sin embargo declara inadmisibile dicha demanda, indicando

además que el juez a-quo acepta como medio de inadmisión lo que no es más que una defensa al fondo; que la forma sucinta como está desarrollado dicho medio, no impide a esta corte apreciar el vicio atribuido a la sentencia recurrida, razón por la cual procede examinar el medio atacado de inadmisibilidad. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 353).

22.3 Casación. Artículo 6 Ley de Casación. Recurso de una sucesión. Condiciones.

Considerando, que en virtud esas disposiciones legales, los miembros de una sucesión, que han podido figurar de una manera innominada en el saneamiento catastral, deben, para recurrir en casación, ajustarse al derecho común, e indicar de una manera precisa el nombre, la profesión y el domicilio de cada uno de ellos, a fin de que el recurrido pueda verificar sus respectivas calidades.

Considerando, que al no ser una sucesión persona física, ni moral, ni jurídica, no puede actuar en justicia, que la falta de indicación tanto en el recurso como en la notificación del mismo hecha a la parte recurrida, del nombre, la profesión y el domicilio de cada uno de los componentes de dicha sucesión, como ocurre en la especie en que en el memorial introductivo del recurso no figuran esos datos, hace inadmisibile, el recurso de casación de que se trata.

Considerando, que los recurrentes no han depositado hasta la fecha el acto de emplazamiento notificado a la parte recurrida por lo que no ha sido posible verificar si en el mismo se han cumplido o no, las formalidades exigidas

por los artículos 6 de la ley sobre Procedimiento de Casación y 61 del Código de Procedimiento Civil. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 299 y 300).

22.4 Casación. Artículo 133 Ley de Registro de Tierras. Condiciones.

Considerando, que la recurrente no ha probado que interpusiera recurso de apelación contra la mencionada sentencia de jurisdicción original, ni tampoco ha demostrado que la sentencia impugnada le haya producido agravio alguno, casos en los cuales hubiera podido recurrir en casación; que, por consiguiente, su recurso es inadmisibile. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario, 25 de marzo de 1988; B. J. 1048. Pág. 595).

22.5 Casación. Artículo 643 del Código de Trabajo. Inaplicabilidad del Artículo 7 de la Ley de Casación.

Dicho artículo no contempla la inadmisibilidad del recurso no notificado en el plazo establecido no siendo aplicables las disposiciones del artículo 7 de la Ley 3726, sobre Procedimiento de Casación, que pronuncia la caducidad del recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de 30 días a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento en razón de que en materia laboral no existe el auto de proveimiento a que se refiere el indicado artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Casación, no derivando la ley ninguna consecuencia del no cumplimiento de la formalidad de notificación del

memorial de casación en el plazo que establece el artículo 643 ya referido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1ro. de Octubre de 1997; B.J. 1043. Pág. 260).

22.6 Casación. Artículo 641 del Código de Trabajo. Salarios mínimos. Comité Nacional de Salarios.

Considerando, que para determinar la admisibilidad del recurso de casación, no se toma en cuenta el salario que devengaba el trabajador, sino el establecido por el Comité Nacional de Salarios o por el Congreso Nacional, como mínimo nacional o del área de producción correspondiente, según el caso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de septiembre de 1999).

22.7 Casación. Artículo 642 ordinal 4to. del Código de Trabajo.

Considerando, que no basta que un recurrente alegue la violación de un texto legal, sino que debe indicar en qué consistió la violación y de qué manera se cometió esa violación, al tenor del artículo 642, ordinal 4to. del Código de Trabajo, que dispone que el memorial contendrá todos los medios en que se funda.; que al no hacerlo así, el recurso se declara inadmisibile por falta de desarrollo de los medios invocados.(Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo, y Contencioso- Tributario, de fecha 6 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 288).

22.8 Casación. Ausencia de Medios. Recurso inadmisibile.

Considerando, que en el desarrollo de los medios primero y segundo, el recurrente se limita a hacer una

relación de los hechos acontecidos ante los tribunales de primer y segundo grado, y formular críticas contra la sentencia sin identificarlas y sin precisar en qué forma el tribunal cometió las violaciones que se le atribuyen, lo que no permite a esta Corte verificar si las mismas son existentes, razón por la cual estos dos medios se declaran inadmisibles. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 305).

22.9 Casación. Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios. Recurso inadmisibile.

Considerando, que como se advierte, se trata en la especie de un recurso de casación contra una resolución de la Comisión de Apelación Sobre Alquileres de Casas y Desahucios, jurisdicción especial administrativa, que no es un tribunal del orden judicial; que de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; que como la comisión que evacuó la resolución no es un tribunal del orden judicial, ni existe disposición expresa de la ley que así lo determine, el recurso de casación interpuesto contra la indicada resolución resulta inadmisibile; (Cámara Civil, 30 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Págs. 121-122).

22.10 Casación. Comunicación de documentos. Sentencia preparatoria. Artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

(Ver: Sentencia preparatoria. Comunicación de documentos, Cámara Civil, 4 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 38).

22.11 Casación. Contenido de los medios de casación.

Los alegatos en que se fundan los medios de casación deben ser dirigidos contra la sentencia impugnada y no contra decisiones dictadas por otros tribunales, incluidos los de primer grado cuando el asunto ha sido objeto de un doble examen en virtud del principio del doble grado de jurisdicción. Cámara Civil, 29 de agosto de 1997; B.J. 1041. Pág. 40).

22.12 Casación. Contradicción entre los motivos y el dispositivo. Consecuencias.

Considerando, que si bien, al examinar el fondo de la demanda y rechazar los alegatos de las demandantes, entra en contradicción con el dispositivo de la sentencia que declara inadmisibile dicha demanda, ese hecho por sí solo no es motivo de casación de la sentencia, si del estudio de la misma se determina que el tribunal a-quo, al rechazar las pretensiones de las demandantes, no cometió ninguna violación a ley, independientemente de la terminología que haya utilizado para dictar su fallo, por que el medio que se examina carece de fundamento, procediendo ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso

Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 353-354).

22.13 Casación. Control de la casación sobre la terminología usada en las sentencias.

Que si bien corresponde a los jueces de la causa establecer la existencia o inexistencia de los hechos, así como la circunstancias que lo rodean o acompañan, no es menos cierto que ese poder soberano no es excluyente para que la jurisdicción de casación pueda verificar si en alguno de los sentidos alegados ha sido violada la ley, inclusive sobre aquellos puntos decididos por los jueces del fondo, dieron fundamentos suficientes o utilizaron la terminología apropiada o correcta, según el caso, aún si tales terminologías o fundamentos pueden ser suplidos con ayuda de las enunciaciones incluidas en el fallo. (Cámara Penal, 10 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 140).

22.14 Casación. Efectos. Perención.

Considerando, que cuando una sentencia es casada en todas sus partes, tiene por efecto reponer a las partes en causa en la misma situación en que se encontraban antes de producirse la sentencia casada; quedando en consecuencia subsistente el recurso de apelación contra la sentencia en primer grado; que en esa circunstancia, si después de dictada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento permanece inactivo, el recurrido en apelación puede demandar la perención de esa instancia. (Pleno, 23 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 183-184).

22.15 Casación. Efecto suspensivo de las sentencias incidentales recurridas en casación.

Ante argumentos de los abogados de los impetrantes en el sentido de que tratándose de una sentencia incidental, el recurso que la impugna, interpuesto por el Procurador General de la Corte, no puede suspender la ejecución de la sentencia del juez de primer grado que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, a la luz de lo que dispone el artículo 1ro. de la Ley No. 3723 del 29 de diciembre de 1953, la Suprema Corte de Justicia dijo en sentencia del 19 de septiembre de 1997, que el texto del artículo 29 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que declara la suspensión de las sentencias recurribles en casación o cuando ya se ha ejercido el recurso mismo, no es tan absoluto, pues comporta algunas excepciones, entre ellas, la consagrada por el artículo 1ro. de la Ley No. 3723 de 1953. (Pleno, 19 de septiembre de 1997; B.J. 1042. Pág. 27).

22.16 Casación. Ejecución de una sentencia anterior.

...que es admitido que cuando una decisión constituye la simple ejecución de una sentencia anterior dicha decisión no puede ser objeto de un recurso de casación recibibile, pues, las sentencias que ordenan la ejecución de otra ligada al tribunal, tienen en cuanto a las vías de recurso, el mismo carácter que la primera sentencia, a la cual se incorpora la segunda. (Cámara Civil, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 64).

22.17 Casación. Emplazamiento. Artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 36 de la Ley 834 de 1978.

Considerando, que el párrafo inicial del artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación expresa que el emplazamiento debe contener, a pena de nulidad, los nombres y residencia de la parte recurrida, y el nombre de la persona a quien se entregue copia de dicho emplazamiento; que, por otra parte, el artículo 36 de la Ley No. 834 de 1978, de aplicación general, expresa en su parte final, que la mera comparecencia para proponer la nulidad de un acto de procedimiento no cubre la nulidad; que si el recurrido comparece en la forma indicada en el mencionado artículo 36, con el propósito de invocar la irregularidad del emplazamiento, como ha ocurrido en la especie, debe acogerse dicho pedimento si la irregularidad es comprobada y afecta, en la especie, una formalidad sustancial y de orden público;

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que las formalidades requeridas por la ley para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras; que la inobservancia de estas formalidades se sanciona con la inadmisibilidad del recurso, independientemente de que la misma haya causado o no agravio al derecho de defensa de la parte que la invoca; que por las razones expuestas, procede declarar inadmisibile el presente recurso y por tanto no ha lugar a ponderar los medios propuestos en el memorial de casación del recurrente. (Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 85).

22.18 Casación. Emplazamiento. Artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil. No hay nulidad sin agravio.

Considerando, que si bien los actos de emplazamiento en casación deben contener, además de las formalidades exigidas por el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, las enunciaciones prescritas, todas a pena de nulidad, por el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, no es menos cierto que el recurrido, según revela el examen del expediente, a pesar de no haber sido notificado en su domicilio real ni a su persona, constituyó abogado y produjo sus medios de defensa en tiempo oportuno, por lo que en la especie, en aplicación de la máxima, hoy consagrada legislativamente, "no hay nulidad sin agravio", y en vista de que no sufrió perjuicio alguno, el citado texto legal, cuya finalidad es que el recurrido reciba a tiempo el referido acto de emplazamiento y produzca oportunamente su memorial de defensa, no pudo ser desconocido. (Cámara Civil, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 63).

22.19 Casación. Escritos ampliatorios. Artículo 42 de la Ley de Casación.

Atendido, que la facultad que concede el artículo 42 de la citada ley de casación, de presentar "aclaraciones o memoriales tendientes a justificar sus pretensiones", en los tres días siguientes a la audiencia, supone que la parte que está obligada a motivar su recurso, así lo ha hecho real y efectivamente, con anterioridad a la audiencia, en tiempo oportuno, porque de lo contrario, se estaría violando el derecho de defensa de la parte

adversa, la cual no conocería los argumentos de los recurrentes; y, además, el Procurador General de la República no estaría en condiciones de motivar su dictamen, porque desconocería los alegatos del recurrente, al momento de emitir su opinión, el que se produce con anterioridad a la fijación de la audiencia;

Atendido, que en la especie, no existe constancia del depósito del memorial contentivo de los medios del recurso requerido por el artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Sin embargo, la solicitante aduce que no se le dio oportunidad de redactarlo y depositarlo, y que, por consiguiente, no fueron valorados sus argumentos en la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 20 de agosto de 1998, por lo que procede establecer la manera como se debe actuar en esos casos. (Pleno, 28 de junio de 1999).

22.20 Casación. Excepción de incompetencia. Inadmisibilidad. Artículo 2 de la Ley 834 de 1978.

Considerando, que si bien antes de la vigencia de la Ley 834 de 1978, que introdujo modificaciones en el régimen de las excepciones de procedimiento, era posible proponer por primera vez en casación la incompetencia absoluta o de atribución, que es el caso, no resulta así a partir de las modificaciones legales señaladas; que a ello se opone la disposición restrictiva del artículo 2 de la citada Ley No. 834 de 1978, en cuya virtud "las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Se procederá de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo de la excepción, sean de orden público"; que, en tal virtud, y como la

excepción de que se trata no fue propuesta ante los jueces del fondo, procede declarar inadmisibile el primer medio de casación. (Cámara Civil, 21 de noviembre de 1999).

22.21 Casación. Funciones de la Suprema Corte. Los agravios deben dirigirse contra la sentencia y no a los imputados al secretario de un tribunal.

Considerando, que en efecto, los recurrentes alegan como fundamento de su recurso, la violación al artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, según el cual los secretarios que expidiesen copias de una sentencia antes de firmada, serán perseguidos como falsarios; que la falta a que aluden los recurrentes es atribuida al secretario del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez y con relación a la sentencia No. 68 del 19 de julio de 1988, dictada por ese tribunal con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario hecho a persecución de la recurrida, en contra de los recurrentes, de la cual afirman su original no fue firmado por el juez titular del indicado tribunal.-

Considerando, que conforme a la disposición del artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, corresponde a la Suprema Corte de Justicia decidir, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial y admitir o desestimar los medios en que se base el recurso, sin conocer en ningún caso el fondo del asunto.-

Considerando, que ha sido juzgado que las violaciones a la ley que pueden dar lugar a casación, deben encontrarse en la sentencia contra la cual se dirige el

recurso y no en otra, por lo que resulta indispensable que los agravios en que se fundamentan los medios de casación estén dirigidos contra la sentencia impugnada y no contra decisiones dictadas por otros tribunales, aunque hayan sido dictadas en relación con la misma contestación; que en el presente caso, la violación alegada por los recurrentes como único medio de casación, es imputada del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, quien, según afirman, incurrió en la falta denunciada al expedir una copia de la sentencia de adjudicación sin el original haber sido firmado por el juez titular del referido tribunal, como lo requiere el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil; que como esta violación no fue incurrida en la sentencia que es objeto del presente recurso y al no alegarse contra ésta ningún vicio que pudiera producir su anulación, el medio único propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 28 de enero de 1998; B. J. 1046. Págs. 158-161).

22.22 Casación. Inadmisibilidad. Artículos 641, 480 y 619 del Código de Trabajo.

Considerando, que de la combinación de ambas disposiciones legales se infiere, tal como lo alega el recurrido, que el recurso de casación de que se trata no puede ser admitido en razón de que las condenaciones impuestas al recurrente por la sentencia impugnada, no exceden el monto de veinte salarios mínimos.

Considerando, finalmente, que las disposiciones del artículo 619 del Código de Trabajo, que exceptúa del recurso de apelación las sentencias originadas en demandas que no excedan de diez salarios mínimos y las

del artículo 641 del mismo Código que declara inadmisibles los recursos de casación contra las sentencias que impongan condenaciones que no excedan de veinte salarios mínimos tienen por finalidad permitir una pronta solución de los asuntos de esta naturaleza, que por su modicidad no merecen ser impugnadas mediante esas vías de recursos, por lo que procede declarar inadmisibles el presente recurso de casación. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 486-497).

22.23 Casación. Indivisión en el objeto del litigio. Consecuencias.

Considerando, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisibles con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes; que por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha a varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que de no hacerse así, el recurso debe ser

declarado inadmisble. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 1 de septiembre de 1999).

22.24 Casación. Interpelación a los fines de inscripción en falsedad contra sentencia impugnada.

Considerando, que la simple interpelación hecha por la recurrente a los fines de inscripción en falsedad contra la sentencia impugnada y la certificación del 16 de abril de 1996, de la secretaria de la Corte a-quo, y la contestación afirmativa de la recurrida, no constituyen un obstáculo jurídico para que el presente recurso de casación sea fallado, por lo que la solicitud de sobreseimiento del recurrente carece de fundamento y debe ser desestimada, procediendo, en consecuencia, la ponderación de los medios del recurso. (Cámara Civil, 10 de noviembre de 1999).

22.25 Casación. Juramento diferido. Artículo 1358 del Código Civil.

Considerando, que aparte de que ni en la sentencia impugnada ni en el expediente consta que la controversia versara sobre la existencia o no de la deuda cuyo pago reclama la recurrente, caso en el cual el juramento podía ser deferido al deudor, tampoco consta que la empresa acreedora produjera conclusiones ante los jueces del fondo, deferiendo el juramento; que al invocar el recurrente por primera vez en casación la violación de los artículos 1358 y siguientes del Código Civil, al no permitírsele realizar el juramento decisorio, lo que hizo ante la jurisdicción de la cual proviene la decisión

atacada, el medio así propuesto es nuevo, y, por tanto, resulta inadmisibles, ya que su examen de oficio no se impone por no tratarse la especie de una cuestión de orden público. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998, B. J. 1055, págs. 77-78).

22.26 Casación. Medio de orden público. Artículo 141 de la Ley 834 de 1978.

Considerando, que la regla establecida por el artículo 141 de la Ley No. 834, de 1978, que modificó ciertas disposiciones en materia de procedimiento civil, en cuanto a que el presidente de la corte de apelación puede, en el curso de la instancia de apelación, en caso de urgencia, suspender la ejecución de las sentencias, constituye un medio de orden público, porque reglamenta los poderes del presidente cuando estatuye en referimiento, y como tal, puede ser suscitado de oficio por la Suprema Corte de Justicia. (Cámara Civil, 3 de febrero de 1999; B. J. 1059. Págs. 100 y 101).

22.27 Casación. Medios nuevos. Inadmisibles.

Considerando, que, en efecto, el examen del fallo impugnado revela, que, tal como lo alega la recurrida, el actual recurrente en sus conclusiones de apelación por ante la corte a-quo se limitó a solicitar una comparecencia personal de las partes; y subsidiariamente, primero, el rechazo de las nulidades presentadas por la contraparte, y segundo, en cuanto al fondo, a requerir, pura y simplemente, la revocación de la sentencia dictada el 6 de agosto de 1993 por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que

no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público; que en la sentencia impugnada y en lo documentos a que ella se refiere, no consta que el recurrente presentara ante la corte a-quo, el medio derivado de la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada, así como tampoco, la violación a los artículos 1401 y 1404 del Código Civil que señalan los inmuebles que entran y forman activamente la comunidad entre esposos; ni que invocara el desconocimiento de la regla según la cual las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho consagrados en el artículo 1134, referida a los contratos de compraventa de inmuebles intervenidos en fechas 19 y 20 de junio de 1987 entre E. P. M., causante de la recurrida, y el recurrente L. C. P. C. A; ni la que prescribe el artículo 1254 del mismo código, que prohíbe al deudor, salvo con el consentimiento del acreedor, aplicar, cuando la deuda produce interés, el pago que hace al capital, con preferencia de las rentas; que en esas condiciones, y como en las especie no se trata de cuestiones que interesan al orden público, los medios propuestos son nuevos y como tal, resultan inadmisibles. (Cámara Civil, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Págs. 124-125).

22.28 Casación. Medio nuevo.

(Ver: Nombre comercial. Nulidad de traspaso. Medio nuevo en casación. Cámara Civil, 12 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs.137-138).

22.29 Casación. Memorial. Plazo. Artículo 37 de la Ley de Casación.

Se determinó que en virtud del artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y como paso previo a su envío al Procurador General de la República del expediente, la Secretaría General le informará al abogado del recurrente que disponía de un plazo de 10 días para depositar en dicha Secretaría el escrito contencioso de sus medios de casación, medida que tiene por finalidad poner al Ministerio Público por ante este tribunal y al recurrido o interviniente en condiciones de conocer los agravios contra la sentencia recurrida. (Pleno, Acta No. 38/99, del 30 de septiembre de 1999).

22.30 Casación. Méritos. Recursos. La Corte a-qua no puede ponderarlo.

Considerando, que en conocimiento de esa situación, la corte a-qua no podía declarar que el referido fallo había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pues era la Suprema Corte de Justicia, la que debía ponderar los méritos del recurso de casación y decidir sobre su procedencia o no; que mientras no sucediera una decisión de la Corte de Casación al respecto, la Corte a-qua, tenía que reconocer que la sentencia de la referencia había sido impugnada, lo que le impedía dar al asunto la característica de juzgado irrevocablemente, ni autorizar la entrega de los valores retenidos, en vista de que sí bien las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, al tenor del artículo 539 del Código de Trabajo a los fines de los

embargos retentivos, para que el tercer embargado se obligue a entregar directamente los valores embargados al ejecutante, es necesario además, que esta sea irrevocable. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de septiembre de 1999).

22.31 Casación. Motivos de las sentencias. Apartado 5to. del Artículo 23 de la Ley de Casación.

Considerando, que es obligación de los tribunales motivar sus sentencias, ésto, como un principio general que se aplica a todas las jurisdicciones y que aparece consagrado en el apartado No. 5to. del artículo 23 de la Ley de Casación; a fin de que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, esté siempre en condiciones de apreciar la regularidad de la calificación de los hechos y que las partes encuentren la prueba de que su condena no es arbitraria e ilegal; además, los jueces deben siempre responder y motivar sus decisiones sobre cada punto o extremo de las conclusiones, bien sea de parte de la representación del ministerio público, de la parte civil si la hubiere o del acusado; más aún, se impone que, como en el caso que nos ocupa, el recurso ha sido incoado por el acusado, y por tanto, precisan ser examinados y ponderados debidamente, los elementos constitutivos de la infracción, aún, tal y como se ha expresado, ese medio no hubiere sido propuesto por el recurrente; que por consiguiente, en el caso que nos ocupa la sentencia de la

Corte a-qua debe ser casada por no contener ni la más mínima motivación a la decisión expresada en su dispositivo. (Cámara Penal, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 124-125).

22.32 Casación. Naturaleza y admisibilidad del recurso.

Que de conformidad con el inciso 2 del artículo 67 de la Constitución, es atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia conocer de los recursos de casación, de conformidad con la ley; que esta expresión había venido siendo interpretada en el sentido de que la ley puede suprimir el recurso de casación como ocurre en algunas materias en que se expresa, como en el artículo 11 de la Ley 302 de 1964, que la decisión que intervenga no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario. Que en un estudio más detenido y profundo del canon constitucional que consagra el recurso y de la institución misma de la casación revela que el recurso de casación no sólo se sustenta en la Ley Fundamental de la Nación, sino que mediante su ejercicio se alcanzan fines tan esenciales como el control jurídico sobre la marcha de la vida del Estado, mediante el mantenimiento del respeto de la ley, así como mantener la unidad de la jurisprudencia por vía de la interpretación de la ley; que además, el recurso de casación constituye para el justiciable una garantía fundamental de la cual, en virtud del inciso 2 del artículo 67 de la Constitución, pertenece a la ley fijar sus reglas; que al enunciar el artículo 11, modificado de la Ley No. 302 de 1964, que la decisión que intervenga con motivo de una impugnación de una liquidación de honorarios, o de gastos y honorarios no

será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario, no está excluyendo el recurso de casación el cual está abierto por causa de violación a la ley contra toda decisión judicial dictada en última o única instancia, y sólo puede prohibirse, por tratarse de la restricción de un derecho, que así lo dispone expresamente la ley para un caso particular. (Cámara Civil, 10 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 42).

22.33 Casación. Notificación por el ministerio público. Art. 34 Ley sobre Procedimiento de Casación.

Considerando, que en efecto, tal y como lo alegan los intervinientes, el artículo 34 de la referida Ley, establece una obligación esencial a cargo del ministerio público y la parte civil recurrente, como es la de notificar sus recursos de casación, además de la declaración en Secretaría, en el plazo de tres (3) días, a la parte contra quien se deduzca y "si ésta se hallase detenida, el acta que contenga la declaración del recurso le será leída por el secretario, y la parte firmará".

Considerando, que en el expediente no hay constancia de que se hubiere cumplido con ese requisito esencial para la validez del recurso, por lo que procede declarar su inadmisibilidad. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 197).

22.34 Casación. Parte en el recurso de alzada. Inadmisibilidad.

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 26 de abril de 1996, a favor de Hacienda Teresita, C. por A., fue interpuesto por Teresa Guerrero Peynado, Ana Josefa Guerrero, Celia María Guerrero, Bélgica Terrero Ramírez y Ruddy de León; que, como se advierte, en el referido recurso de apelación no figura el nombre del actual recurrente Mónico Aquiles del Rosario; que al no ser parte en el recurso de alzada, no podía válidamente interponer recurso de casación; que si Mónico Aquiles del Rosario entendía que la sentencia de primer grado no le fue notificada regularmente para que se iniciara el plazo que otorga la ley para recurrir en casación, debió incoar la vía de recurso que la ley abre a favor de aquellos que no han sido parte en la instancia, pues los terceros no pueden recurrir en casación más que contra la decisión que sea rendida en última instancia sobre su recurso en tercera, en consecuencia, el recurso de casación interpuesto resulta inadmisibile. (Cámara Civil, 11 de agosto de 1999).

22.35 Casación. Plazo.

Considerando, que el examen del expediente pone de manifiesto, que los recurrentes interpusieron sus recursos de casación fuera del plazo establecido por el artículo 29 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que los mismos quedaron citados en la audiencia del 21 de diciembre de 1992, para el 19 de enero de 1993, fecha en que la Corte a-quá falló el fondo del asunto, dichos recurrentes incoaron sus recursos el 20 de julio de 1993, o sea seis meses después del pronunciamiento de

la sentencia del tribunal de alzada, por tanto sus recursos deben ser declarados inadmisibles por tardíos. (Cámara Penal, 17 de marzo de 1999; B. J. 1060. Pág. 354).

22.36 Casación. Plazo. Artículo 5 de la Ley de Casación. Inadmisibilidad de oficio.

Considerando, que el plazo de dos meses establecido para interponer el recurso de casación por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, debe ser observado a pena de caducidad; que, por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo, la Suprema Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto para la interposición del recurso;

Considerando, que en la especie consta la mención al pie de la sentencia impugnada de que la misma fue fijada en la puerta principal del Tribunal a-quo, el día 10 de octubre de 1997, que por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación vencía el día 11 de diciembre de 1997, plazo que aumentado en un día, en razón de la distancia de 22 kilómetros que media entre el municipio de San Cristóbal y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el día 12 de diciembre de 1997, ya que el término se aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros, de acuerdo con lo que prescriben los artículos 1033 del Código de Procedimiento Civil y 66 y 67 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 22 de mayo de 1998,

mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y debe en consecuencia ser declarado inadmisibile. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 21 de octubre de 1998; B.J. 1055. Págs. 643-644).

22.37 Casación. Plazo. Artículo 134 de la Ley sobre Registro de Tierras.

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con la indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en los dos meses de la notificación de la sentencia;

Considerando, que el plazo de dos meses establecido en ese texto legal para interponer el recurso de casación debe observarse a pena de caducidad; que, por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo, la Suprema Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto para la interposición del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Págs. 488- 489).

22.38 Casación. Recurso contra una sentencia que ordena la ejecución de otra ligada al tribunal. Improcedencia del recurso de apelación contra una sentencia de adjudicación.

Considerando, que, por otra parte, tal como lo admite el recurrido, Negocios Inmobiliarios, S. A., fue también condenada por haberse adherido a las conclusiones de Refrescos Nacionales, C. por A., lo que significa, en otros términos, que la mencionada compañía, que fue parte en el proceso ante los jueces del fondo, sucumbió, como sucumbió la recurrente Refrescos Nacionales, C. por A.; que, por ese motivo, el recurrente no estaba obligado a poner en causa a los demás co-sucumbientes en el fallo recurrido, sino a la parte beneficiaria con la decisión atacada contra quien se dirige el recurso; que la sentencia impugnada se contrae a rechazar el recurso de apelación interpuesto por Refrescos Nacionales, C. por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 5 de octubre de 1988, que acogió la demanda intentada por William Amador Alvarez, a los fines de que este tribunal decidiera acerca del inconveniente suscitado en la ejecución de la sentencia de adjudicación, la cual, en el ordinal segundo de su dispositivo, dispuso lo siguiente: "que debe autorizar y autoriza al Registrador de Títulos del Distrito Nacional, inscribir la sentencia de adjudicación de fecha 11 del mes de septiembre de 1984, dictada por este tribunal con el No. 2303-81, sobre el ámbito de la Parcela No. 3-B reformado-Refundido de la Manzana No. 2349

del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado por el Certificado de Título No. 83-12504, propiedad de Refrescos Nacionales, en una extensión de una (1) hectárea, cincuentitrés (53) áreas, catorce (14) centiareas y cuarentidós (42) decímetros cuadrados, en ejecución de la antes señalada sentencia"; que es admitido que cuando una decisión constituye la simple ejecución de una sentencia anterior dicha decisión no puede ser objeto de un recurso de casación recibile, pues, las sentencias que ordenan la ejecución de otra ligada al tribunal, tienen en cuanto a las vías de recurso, el mismo carácter que la primera sentencia, a la cual se incorpora la segunda; que en la especie, la sentencia de adjudicación del 11 de septiembre de 1984, a favor del recurrido, no susceptible de apelación, no podía, por aplicación del artículo 10 de la Ley de Registro de Tierras, ser anulada por ninguna otra jurisdicción que la ordinaria que conoció de la expropiación, y solo mediante una demanda principal a tales fines, lo que no ha ocurrido, como lo reconoció esta Suprema Corte de Justicia por su sentencia del 1ro. de julio de 1988; que al no ser atacada por esa vía dicha sentencia y constituir una adjudicación consumada, exenta de incidentes y no seguida de puja ulterior ni de falsa subasta y adquirir por ello el carácter de título ejecutorio, al tenor de los artículos 712 del Código de Procedimiento Civil y 223 de la Ley de Registro de Tierras, la segunda sentencia rendida después de culminado el procedimiento del embargo inmobiliario, para la aplicación o ejecución de la anterior, no podía tampoco ser objeto de recurso de apelación ni de casación por separado, excepto si la demanda sobre las dificultades de ejecución hubiere sido rechazada; que como la sentencia impugnada, que debió por las razones

expuestas declarar irrecible el recurso de alzada de la actual recurrente, es, no obstante, confirmatoria de la decisión de primer grado que autorizó la ejecución de la sentencia de adjudicación, procede declarar, en consecuencia, por este motivo de puro derecho y de orden público que suple la Suprema Corte de Justicia, la inadmisibilidad del presente recurso de casación. (Cámara Civil, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Págs. 63-64).

22.39 Casación. Recurso. Copia auténtica de la sentencia impugnada.

Se advirtió en el expediente que la parte recurrente no depositó una copia auténtica de la sentencia impugnada con el memorial depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, sino, una simple copia fotostática de dicha sentencia, en la cual aparecen incompletas las páginas 3, 4 y 5, a lo que debe agregarse que las copias fotostáticas no satisfacen, en principio, las exigencias de la ley, como medio de prueba. (Cámara Civil, 17 de septiembre de 1997; B.J. 1042. Pág. 59).

22.40 Casación. Recursos del acusado y del ministerio público. Nulidad del recurso del ministerio público. Consecuencias.

Considerando, en cuanto al acusado J. N. R., sancionado con un (1) año de prisión y RD\$2,000.00 de multa, como encubridor, conforme lo señalado por el artículo 73 de la Ley No. 50-88, es evidente que dicho texto fue violado, ya que el mínimo de la sanción a imponer es de dos (2) años de prisión y RD\$2,000.00 de multa; pero en razón de lo

anteriormente expresado con relación a la irregular notificación del recurso del Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de La Vega, su situación no puede ser agravada, puesto que el único recurso que subsiste es el del propio acusado. (Cámara Penal, 26 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 232).

22.41 Casación. Recurso del ministerio público. Notificación del recurso. Artículo 34 Ley de Casación.

Considerando, en cuanto al otro aspecto, de lo expuesto por los acusados, que tal como lo alegan éstos, el artículo 34 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, impone al ministerio público la obligación de notificar el recurso de casación que intervenga contra una sentencia, a la persona contra quien se deduzca el mismo, en el plazo de tres días; y si estuviere detenida, el secretario procederá a leerle el acta y solicitará que la firme, pero en caso de no querer o no poder, se debe consignar en la misma.-

Considerando, que el expediente no hay constancia de que el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago, ni el secretario de la Cámara Penal de la Corte de ese Departamento, hayan dado cumplimiento a lo establecido en el texto legal transcrito, que obviamente está dirigido a preservar el derecho de defensa, por lo que dicha inobservancia invalida el mencionado recurso. (Cámara Penal, 17 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 175).

22.42 Casación. Recurso interpuesto sin haber sido parte ni condenada en primer y segundo grado. Recurso carente de interés.

Considerando, que en efecto, en primer grado fue puesta en causa la compañía L. de S. y la sentencia que intervino en esa jurisdicción declaró la sentencia oponible a esa compañía, la que al no invocar ninguna excepción de inoponibilidad, admitió ser la aseguradora de la responsabilidad civil de B. R. N. y/o. F. M.-

Considerando, que quien interpone el recurso de apelación, además del prevenido y la persona civilmente responsable es la compañía L. A., que no figuró en la instancia de primer grado y por ende la sentencia no le hizo ningún agravio.-

Considerando, que en la sentencia de la corte a-qua figuró también S. L. A. como recurrente, pero la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago confirmó la sentencia de primer grado, que como se ha dicho había declarado oponible la misma a L. de S, que no figuró en la instancia de alzada.

Considerando, que la situación se complica más en razón de que el Lic. C. F. recurre en casación a nombre de J. S., prevenido, B. R. N. y/o F. M., persona civilmente responsable y S. L. A., compañía que ni figuró, ni fue condenada en primer grado, ni tampoco fue condenada en apelación, pese a haber ejercido el recurso de alzada.

Considerando, que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, al advertir, como debió hacerlo, que S. L. A., no fue parte en proceso de primera instancia, ni fue afectada por esa decisión, debió declarar sin interés dicho recurso, y en cambio proceder a determinar

si la C. de S. había sido notificada por acto de alguacil, para que el plazo de apelación comenzara a correr en su contra, y no confirmar la sentencia de primer grado, incluyendo la oponibilidad a dicha compañía, que no figuraba como apelante, ni había sido citada en esa instancia; que al fallar de esta manera, la corte a-quá violó el derecho de defensa de la referida entidad aseguradora. (Cámara Penal, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 155-156).

22.43 Casación. Resolución del Tribunal de Tierras. Artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras. Inadmisibilidad del recurso.

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras: "El recurso de Casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso"; que el examen de la decisión impugnada muestra que el Tribunal a-quó, a instancia del recurrido ordenó la suspensión de la sentencia penal dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y a que se ha aludido precedentemente, hasta tanto dicho tribunal decida los recursos de apelación interpuestos y se pronuncie sobre el caso;

Considerando, que la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, impugnada ahora en Casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisibile, lo que hace innecesario en consecuencia, el examen de los Medios de dicho recurso. (Cámara de

Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de abril de 1998; B. J. 1049. Págs. 491- 492).

22.44. Casación. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en Cámara de Consejo. Inadmisibilidad.

Considerando, que para la aplicación del artículo 1ro. de la Ley No. 3726 del 1953, sobre Procedimiento de Casación, hay que determinar si la decisión impugnada es un fallo dictado por un tribunal ordinario o especializado del orden judicial en última o única instancia, pues de lo contrario no es susceptible de recurso de casación; por tanto, al no tener las resoluciones dictadas en Cámara de Consejo por la Suprema Corte de Justicia, caso de la especie, el carácter de fallos dictados por tribunales inferiores del orden judicial en última o única instancia, estas no pueden ser impugnadas en casación, por lo cual resulta inadmisibile el presente recurso. (Pleno, 15 de diciembre de 1999).

22.45 Casación. Sentencia objeto de dos recursos de casación. Inadmisibile.

Que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos sucesivos de casación interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la decisión impugnada los mismos medios de casación y los mismos agravios o desarrollos, que por figurar ya en la decisión de esta Suprema Corte de Justicia del 17 de septiembre de 1997, resulta innecesario repetir ahora. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1ro. de octubre de 1997; B.J. 1043. Pág. 248).

22.46 Casación. Suspensión. Artículo 12 de la Ley de Casación. Perención. Plazo.

Atendido, a que si bien el artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por el artículo 8 de la Ley No. 845, de 1978, dispone en la parte in fine de su primer párrafo, que el auto de suspensión perimirá de pleno derecho si dentro de los ocho días subsiguientes a su fecha, no se le entrega al secretario de la Corte, el recibo correspondiente a la consignación de la fianza que hubiere sido fijada, no es menos cierto que conforme a la reforma introducida por la citada ley de 1978, esa fianza puede ser una garantía personal o en efectivo, que se regirá por los artículos 131 al 133 de la Ley No. 834 de 1978; que la naturaleza, la extensión y las modalidades de la garantía son precisadas por la decisión que prescribe su constitución, según lo establece el citado artículo 131; que, como se puede apreciar, la Resolución No. 2116-98, del 11 de noviembre de 1998, después de ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago, del 12 de agosto de 1998, fijó una fianza de RD\$300,000.00, a ser prestada por el recurrente mediante una garantía personal; que la fianza constituida por el recurrente mediante la póliza emitida por la Universal de Seguros, C. por A., cumple la modalidad de garantía personal requerida por la ley, establecida por esta Suprema Corte de Justicia en su Resolución del 11 de noviembre de 1998;

Atendido, a que es de principio que la prescripción, como la Perención, que tiene el mismo fundamento, no corren contra aquel que no puede actuar en justicia; que si es cierto que el artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de

Casación consagra una Perención de pleno derecho contra el auto de suspensión si el solicitante no procede a la entrega de la fianza al secretario de la Corte dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha del auto, esa perención no puede correr sino a partir del momento en que el recurrente en casación y solicitante en suspensión, haya sido puesto en condiciones de tomar conocimiento de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia respecto de la solicitud de suspensión que se le haya formulado;

Atendido, a que lo dispuesto por la aludida Resolución No. 2116-98, fue informado mediante comunicación remitida a los abogados de las partes, doctores Luis Bircann Rojas, calle San Luis No. 100, y Juan Luis Pineda, calle San Luis No. 39, en Santiago, el 8 de enero de 1999, recibida por los interesados, vía Instituto Postal Dominicano, en Santiago, el 11 de enero del mismo año 1999, según se comprueba por los sellos gomifrafos estampados, al momento de la recepción, en el anverso del sobre contentivo de la comunicación dirigida a dichos abogados en relación con el asunto, de donde es forzoso inferir que la parte recurrente solicitante de la suspensión tuvo conocimiento de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia del 11 de noviembre de 1998 que ordenó la suspensión y fijó la fianza, el 11 de enero de 1999; que como ésta fue depositada en la Secretaría General, el 13 de enero de 1999, mediante Póliza No. 16-17425, emitida por la Universal de Seguros, C. por A., para garantizar la suma de RD\$300,000.00 fijada como fianza, resulta evidente que el banco recurrente actuó dentro del plazo impartido por el artículo 12, modificado, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, para la constitución de la fianza que hubiere sido acordada, y,

por tanto, el auto de suspensión no pudo haber perimido, por lo que la instancia en solicitud de perención de que se trata, carece de fundamento y debe ser desestimada. (Pleno, Resolución No. 565/99, de fecha 9 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 1168).

22.47 Casación. Tierras. Plazo. Artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras. Punto de partida.

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las leyes del derecho común; que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con la indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia;

Considerando, que el plazo de dos meses establecido en ese texto legal para interponer el recurso de casación debe observarse a pena de caducidad; que, por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo, la Suprema Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto para la interposición del recurso;

Considerando, que los plazos de meses establecidos por las Leyes de Procedimiento deben ser contados de fecha a fecha, no computándose en ellos, de conformidad con

la regla general contenida en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando esos plazos son francos, como ocurre en esta materia tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que dichos plazos se aumentarán en razón de la distancia, a razón de un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros, según lo disponen los artículos 67 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 1033 del Código de Procedimiento ya citado;

Considerando, que de conformidad con la combinación de los artículos 118 y 119 de la Ley de Registro de Tierras, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos, es el día en que ha tenido lugar la publicación, esto es, la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó, que en la especie consta la mención de que la sentencia impugnada, fue fijada en la puerta principal del Tribunal a-quo el día veintiocho (28) de noviembre de 1994; que por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación vencía el día 29 de enero de 1995, plazo que aumentado en dos días, en razón de la distancia de 61 kilómetros que media entre el municipio de Bayaguana, domicilio de los recurrentes y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia debía extenderse hasta el día treintiuno (31) de enero de 1995, ya que el término se aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 16 de febrero de 1995, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de

Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en consecuencia debe ser declarado inadmisibile. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de septiembre de 1998, B.J. 1054, pág. 442).

22.48 Casación. Trabajo. Caducidad del recurso. Aplicación artículo 7 de la Ley 3726 de 1966.

Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que "en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria";

Considerando, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se verifica que el Memorial de Casación fue depositado en la Secretaria de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el 8 de julio de 1997 y notificado a los recurridos el 23 de julio del mismo año, cuando había transcurrido un plazo mayor al de los cinco días que prescribe el referido artículo 643;

Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho Código que trata del Recurso de Casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que al no haber en el nuevo Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la caducidad del recurso de Casación cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido Código, debe aplicarse el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que dispone "Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no

emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio". (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 500-501).

23. CASINOS:

Casinos. Arrendamiento de un casino sin la autorización del Poder Ejecutivo. Artículo 11 Ley No. 351 de 1964, sobre Salas de Juegos de Azar.

Considerando, que según consta en el expediente, la entidad que figura como administración responsable en la solicitud de autorización para la instalación del Casino del H. R. L., es la empresa I. T. y H. y no la M. D. I., la que asumió la explotación comercial de dicho Casino a través del contrato de arrendamiento intervenido entre ella y el H. R. L., sin que dicha operación se haya obtenido la autorización del Poder Ejecutivo, por lo que la alegada violación del artículo 11 de la Ley No. 351 invocada por la recurrente carece de fundamento. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 841).

24. CEDULA:

Cédula de Identidad y Electoral. Ley 8-92. Falta de la misma.

Considerando, que asimismo los recurrentes invocan que René Ozuna, parte civil constituida, no podía ejercer

sus derechos de justicia, en razón de que carecía de cédula personal de identidad y electoral, conforme lo dispone la Ley 8-92, en sus artículos 5, 6 y 11; pero si bien es cierto que dicho documento sirve para identificar a las personas, no menos cierto es que la carencia del mismo no puede coartar el derecho de una persona que ha sufrido un daño, a obtener la condigna reparación por ante los tribunales del país, sobre todo, si como en la especie, la identidad del reclamante en ningún momento fue puesta en duda, y además, esa circunstancia no le ha causado ningún agravio a la parte demandada, la cual pudo ejercer plenamente su derecho de defensa e invocar cualquier causa de exoneración de su responsabilidad. (Cámara Penal, 29 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 670).

25. CESION DE EMPRESA:

25.1 Cesión de empresa. Obligación de la empresa cesionaria.

Considerando, que para ser adquirente de las obligaciones de una empresa, con relación a sus trabajadores no es necesario que se produzca un cambio en la propiedad de la empresa, ni que haya una transferencia del patrimonio de esta, siendo suficiente que exista una continuidad en la explotación del establecimiento cedido, siendo irrelevante además que se trate de la cesión de una empresa en su totalidad o de una sucursal. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de agosto de 1999).

25.2 Cesión de empresa. Prescripción. Artículos 63 y 64 del Código de Trabajo.

Considerando, que en el momento en que se produjo la sustitución del empleador, la trabajadora no tenía que ejercer ninguna acción contra ninguno de los empleadores, en razón de que su contrato se mantenía vigente y las obligaciones derivadas del mismo se encontraban respaldadas por la responsabilidad solidaria que contrajeron ambos, lo que le garantizaba que podía demandar por el cumplimiento de estas, a cualquiera de los dos, en el momento en que se produjera la terminación del contrato de trabajo;

Considerando, que el empleador sustituto no sólo es responsable de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo con posterioridad a la transferencia del trabajador, sino de las nacidas con anterioridad a ese hecho y aún las que estuvieren pendientes de solución en los tribunales o de ejecución de fallos y se extiende hasta que la acción prescriba;

Considerando, que sin embargo, el plazo de la prescripción de la acción en reclamación del pago del auxilio de cesantía, por todo el tiempo de duración del contrato, incluido el tiempo de la relación con el anterior empleador, se inicia un día después de la terminación del contrato de trabajo, que en la especie ocurrió, según admite la recurrente, el 15 de mayo de 1993, por lo que al 21 de junio de 1993, fecha en que la recurrida inició su acción, el plazo de la prescripción de dos meses no se había vencido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 951-952).

26. CERTIFICADO DE TÍTULO:

26.1 Certificado de título. Inmutabilidad del derecho registrado. Artículo 205 de la Ley sobre Registro de Tierras.

Considerando, que aunque de conformidad con el citado artículo 205 de la Ley de Registro de Tierras, invocado por los recurrentes, "en ningún caso el Tribunal quedará facultado para modificar el derecho adjudicado, sin el consentimiento expreso del dueño", también se agrega en dicho texto que "Salvo que se trate de corregir un error puramente material consagrado en la sentencia de adjudicación, en el Decreto de Registro o en un certificado de título", con lo que se establece una excepción al principio de la inmutabilidad del derecho registrado, sin el consentimiento expreso del dueño, por cuanto conforme esa misma disposición legal, es posible enmendar, por causa de error material un certificado de título sin el consentimiento mencionado, al haber establecido el Tribunal a-quo, como cuestión de hecho y en uso de los poderes soberanos que corresponden a los jueces del fondo y sin que aparezca desnaturalización alguna, que la porción de terreno vendida era de dos (2) tareas y no de 57 como lo pretenden los recurrentes;

Considerando, que los jueces del fondo interpretan soberanamente los documentos que le son sometidos por las partes para su examen y justificación de sus respectivos alegatos, siendo eso lo que hizo el Tribunal a-quo, encontrando la existencia de un error en el acto de venta, cuya corrección dispusieron para lo que disponían de poder, sin que se advierta desnaturalización alguna. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 22 de abril de 1998; B. J. 1049, Pág. 574).

26.2 Certificado de título. Propósito de la Ley.

Considerando, que, en efecto, el examen y estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que le han servido de fundamento, demuestran que en el caso se hizo una aplicación correcta de los principios de la Ley de Registro de Tierras en relación con la invulnerabilidad del certificado de título y su duplicado y de la protección que dicha ley otorga a los terceros que adquieran de buena fe terrenos registrados; que el propósito de la Ley de Registro de Tierras, que es una aplicación del sistema Torrens de registro en nuestro país, es que el certificado de título sea un instrumento de fácil circulación, y, por consiguiente, ese propósito quedaría frustrado si los interesados tuvieran que realizar investigaciones en los Registros de Títulos y otras oficinas públicas, para verificar acerca de la sinceridad del contenido del duplicado que le es mostrado en el momento de realizar cualquier operación con esos inmuebles. (Pleno, 13 de octubre de 1999).

27. CODIGO PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:**Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Propósitos.**

Considerando, que la Ley 14-94, que instituye el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pretende en gran medida, ofrecer protección integral a

este segmento de la población, de hecho, uno de los más vulnerables, obligando a la familia, a la comunidad, al Estado y a la sociedad en general a garantizarle todos sus derechos, preservando su salud física y psíquica, así como su desarrollo espiritual, cultural y social; todo lo cual debe lograrse respetando la dignidad de los menores, en razón de que son personas en proceso de desarrollo, como humanos y como sujetos de derechos;

Considerando, que asimismo, esta ley debe ser interpretada por sus objetivos sociales, por las exigencias del bien común, los derechos individuales y colectivos, y la condición peculiar del segmento de la población que se quiere proteger, haciendo primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes;

Considerando, que también se enfatiza en la normativa, que la autoridad sobre los hijos e hijas será compartida por el padre y la madre en forma igualitaria;

Considerando, que de esa autoridad deviene el deber que tienen padre y madre de proporcionar alimentación, guarda, recreación, atención de salud, vigilancia y educación a los hijos e hijas menores de edad, correspondiéndoles actuar en interés de ellos, con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes sobre la materia (Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

28. COMISION DE APELACION DE ALQUILERES:

Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios. Recurso Inadmisibile.

(Ver: Casación, Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios. Recurso inadmisibile. Cámara Civil, 30 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Págs. 121-122).

29. COMPAÑIA POR ACCIONES:

29.1 Compañía por Acciones. Acciones contra socios no liquidadores. Artículo 64 del Código de Comercio.

Considerando, que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia que los plazos de prescripción establecidos por el artículo 64 del Código de Comercio no pueden comenzar a correr frente a terceros a partir de la fecha de las asambleas, sino desde el momento en que el afectado tenga conocimiento de la celebración de las mismas, para lo cual dicho artículo 64 establece los requisitos de publicidad que deben cumplirse, de donde resulta que tales medidas de publicidad se reputan inútiles y no son exigidas entre asociados para hacer correr esos plazos; que como los demandados, sus viudas, herederos o representantes eran socios no liquidadores de la Ramón & Jacinto Abraham, C. por A., pueden prevalecerse de la prescripción consagrada en el referido texto legal en su favor; que como la disolución de esta compañía fue resuelta en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de septiembre de 1950, y la acción en nulidad de los actos ejecutados por los liquidadores y en revocación del nombramiento de éstos, tuvo efecto por acto del 19 de marzo de 1991, como ya se ha dicho y consta en la sentencia impugnada, es obvio que la acción contra los recurrentes, demandados originales, estaba ventajosamente prescrita al momento de ser introducida por los demandantes y actuales recurridos, quienes dejaron transcurrir más de cuarenta años desde que se originó el derecho para ellos impugnar los actos y deliberaciones de la asamblea celebrada por la compañía en 1950. (Cámara Civil, 22 de septiembre de

1999).

29.2 Compañía por Acciones. Artículo 64 del Código de Comercio. Prescripción. Fundamento.

Considerando, que, asimismo, la prescripción instituida por el artículo 2262 del Código Civil, según el cual "todas las acciones, tanto reales como personales se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título ni que pueda aponérsele la excepción que se deduce de la mala fe", comienza a correr a contar del día en que es hecho el acto argüido de irregular; que como la asamblea general en que se dispuso la disolución de la compañía y el nombramiento de Jacinto Abraham y Pedro Abraham Mercedes como liquidadores de la misma, calificada de irregular por los recurridos, tuvo efecto el 30 de septiembre de 1950, tampoco esa mas larga prescripción aprovecha a estos, en el caso de no serle aplicable la corta prescripción de los artículos 64 del Código de Comercio y 1304 del Código Civil, el primero, fundamentado en el interés de estimular el espíritu de empresa y de garantizar a los asociados contra reclamaciones tardías e imprevistas del hecho de una antigua sociedad de la cual ellos o sus causahabientes habían sido miembros; que por la misma razón de haber transcurrido más de cuarenta años desde que nació el derecho para que los recurridos atacaran las resoluciones adoptadas en la referida asamblea general de accionistas, la prescripción veintenaria del artículo 2262 del Código Civil también se encontraba ventajosamente cumplida al momento de introducirse la acción en nulidad, por todo lo cual procede casar sin envío por no quedar cosa alguna que juzgar, la sentencia

impugnada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 22 de septiembre de 1999).

29.3 Compañía por Acciones. Liquidación. Artículo 37 del Código de Comercio.

Considerando, que conforme al artículo 57 y al citado texto legal se infiere que las compañías por acciones dejan de existir al vencimiento del término pactado por los accionistas para su duración, o por su disolución anticipada o en cualquier tiempo que esto ocurra cuando su duración es indeterminada; que, como se ha visto, el punto de partida de la prescripción de cinco años para las acciones contra los socios no liquidadores y sus viudas, herederos o representantes, así como de la prescripción de tres años para las acciones en nulidad o resolución de cualquiera sociedad por acciones o de los actos constitutivos o deliberación de las mismas, por vicios en los actos constitutivos, defectos de publicación, vicios o irregularidades en los actos o deliberaciones posteriores a la constitución, o por cualquiera otra causa, a que se refiere el premencionado artículo 64, corre desde el día de la disolución de la sociedad; que contrariamente a lo alegado por los recurridos, la disolución de una sociedad de duración ilimitada se produce desde el momento que es dispuesta por la asamblea general de accionistas dentro de los límites de los poderes que le dan los estatutos, y no cuando la liquidación, que es la operación que tiene por objeto poner al día, antes de la partición, los asuntos de la sociedad, haya concluido con la rendición de cuenta de los liquidadores; que uno de los efectos de la disolución es precisamente poner fin a la personalidad moral de la sociedad, la cual conserva para las necesidades de la liquidación, únicamente, y por el tiempo que ésta dure. (Cámara Civil, 22 de septiembre de

1999).

29.4 Compañía por acciones. Personalidad jurídica y sus consecuencias. Falta de mención de sus representantes. No hay nulidad sin agravio.

Considerando, que de conformidad con el Código de Comercio, las compañías por acciones, como son las recurrentes, tienen personalidad jurídica y pueden perfectamente actuar en justicia, y prueba de ello es que cuando esas entidades fueron puestas en causa no se mencionaron a sus gerentes o administradores, sino sus nombres jurídicos, y las notificaciones se hacen a cualquier persona con calidad para recibirlas; que si bien es verdad que los titulares de la presidencia o los administradores de las compañías por acciones son sus legítimos representantes y son quienes deben representarlas en principio, y que ciertamente, como afirman los intervinientes, en el memorial de agravios de dichas compañías como recurrentes, no figuran los nombres de las personas que los representan en esa acción, no menos cierto es que esa ausencia no le ha causado ningún agravio a los intervinientes, quienes están en aptitud de defenderse y en efecto así lo han hecho, por lo que el medio de inadmisión que se examina procede rechazarlo. (Cámara Penal, 24 de agosto de 1998; B.J. 1053. Págs. 187-188).

30. COMPETENCIA:

30.1 Competencia.

(Ver: Partición y liquidación de bienes. Artículos 7, 193 y 214 de la Ley de Registro de Tierras. Competencia. Cámara Civil, 30 de septiembre de 1998; B. J. 1054,

Págs. 129-130).

30.2 Competencia. Artículo 4 Ley 834 del 1978. Puesta en mora de concluir al fondo. Extensión al referimiento.

Considerando, que efectivamente, el artículo 4 de la Ley No. 834, de 1978, dispone lo siguiente: "El juez puede, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, declararse competente y estatuir sobre el fondo del litigio, salvo poner previamente a las partes en mora de concluir sobre el fondo, en una próxima audiencia a celebrarse en un plazo que no excederá de 15 días, a partir de la audiencia"; que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, criterio que ratifica en esta oportunidad, que si bien es verdad que los jueces del fondo pueden mediante una sola sentencia pero por disposiciones distintas decidir tanto los incidentes procesales que sean promovidos como el fondo del asunto, esto es así cuando las partes hayan concluido al fondo o puestas en mora de hacerlo; que esa solución se impone por respeto al derecho de defensa de las partes; que la obligación de poner en mora a las partes de concluir sobre el fondo es aplicable ante todas las jurisdicciones judiciales, incluida la de referimiento, no obstante la oralidad de este procedimiento. (Cámara Civil, 1 de septiembre de 1999).

30.3 Competencia. Artículo 56 Ley 14-94. Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Considerando, que de lo anterior se desprende que el Tribunal A-quo hizo una correcta aplicación de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, al

proceder a declarar su incompetencia *ratione materie*, puesto que en el presente caso se trata de una acción derivada de terrenos declarados de utilidad pública para fines de asentamiento campesino dentro de los planes de reforma agraria, lo cual escapa a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que es materia de la jurisdicción de tierras; por lo que esta Suprema Corte de Justicia considera que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes que justifican su dispositivo; por lo que procede rechazar el presente recurso de casación por improcedente e infundado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativa y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

30.4 Competencia. Derecho de propiedad.

Considerando, que el Tribunal de Tierras es el único que tiene competencia exclusiva para decidir sobre el derecho de propiedad de un inmueble cualquiera, de conformidad con la enumeración contenida en el artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras, por lo que el último Medio del recurso que se examina también carece de fundamento y debe desestimarse. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 387).

30.5 Competencia. Excepción de incompetencia. Artículo 3 Ley 834.

Considerando, que si bien el artículo 3 de la Ley No. 834 de junio de 1978 establece que "si se pretende que la jurisdicción apoderada es incompetente, la parte que promueve esta excepción debe, a pena de inadmisibilidad, motivarla y hacer conocer en todos los

casos ante cuál jurisdicción ella demanda que sea llevado," esta obligación es suficientemente cumplida, cuando la parte que promueve la incompetencia, hace precisiones claras para que la designación de la jurisdicción competente, sea cierta; que, la exigencia procesal de la indicación de la jurisdicción competente, cuando no es la que está apoderada, puede figurar en los motivos de las conclusiones, en lugar del dispositivo; que, en el caso que nos ocupa, dicha exigencia fue satisfecha desde el momento que el recurrente, luego de concluir en la audiencia del 11 de abril de 1996 tal y como aparece copiado precedentemente, reiterando las conclusiones formuladas en primera instancia, en el escrito ampliatorio de sus conclusiones del 22 de abril de 1996, que se encuentra depositado en el expediente y que figura como recibido el 23 de abril, por la Secretaría del Tribunal a-quo, respecto de la invocada incompetencia, advierte, que el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, en atención al documento traslativo de propiedad, por el cual los esposos Amador le vendían el inmueble edificado dentro de la Parcela 122 A-1-A del Distrito Catastral No. 3 del Distrito Nacional, ordenó en su favor el Registro de los derechos del referido inmueble, por lo cual le fue expedido el certificado de título marcado con el número 66-999 y que "cualquier modificación o rectificación de ese título, y más si se trata de una cancelación, sólo le es dable conocer y disponer conforme lo dispone el artículo de 7 de la Ley de Registro de Tierra y no a otro tribunal"; que, sigue diciendo el recurrente, "el artículo 7 (modificado por la Ley 3719 del 28 de diciembre de 1953), dispone entre otras cosas que, el Tribunal de Tierras tendrá competencia para conocer.... 4to. de la litis sobre derechos registrados";

que es evidente, que la excepción de incompetencia tal y como lo plantea el artículo 3 de la Ley 834 antes citado, es irrecible si ella no indica la jurisdicción ante la cual el asunto debe ser llevado, pero es suficiente, como ocurrió en la especie que las precisiones dadas permitan identificar de manera indubitable la jurisdicción competente. (Cámara Civil, 13 de mayor de 1998; B. J. 1050. Págs. 192-193).

30.6 Competencia. Sucesión. Partición. Terrenos registrados.

(Ver: Partición de una sucesión. Competencia. Artículos 214 Ley de Registro de Tierras. Tribunal civil apoderado; Cámara Civil, 2 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 69-70).

31. COMPOSICIÓN DE UN TRIBUNAL:

Composición de un tribunal. Inhibición. Consecuencias.

Considerando, que cuando en un juez concurren causas que pueden poner en duda su *sindéresis* o su imparcialidad, ese Magistrado por prudencia debe proponer su inhibición, figura jurídica que toca el orden moral, y aunque esta es privativa de la persona del Juez, si este Magistrado no lo hace está contraviniendo la disposición arriba transcrita; la cual, por ser de orden público, puede ser invocada por primera vez en casación;

Considerando, que es una regla esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que el tribunal que dicte una sentencia debe estar regularmente constituido; que por

consiguiente, cuando un fallo ha sido rendido por una Corte irregularmente integrada, esta violación a la Ley procesal vicia su dispositivo, puesto que la Corte es la fuente de donde ha emanado la sentencia; por lo que procede acoger el medio alegado por los recurrentes, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos. (Cámara Penal, 7 de julio de 1998; B.J. 1052. Págs. 163-164).

32. COMUNIDAD DE BIENES:

32.1 Comunidad. Bienes propios. Inmuebles. Derechos adquiridos antes del matrimonio.

Considerando, que conforme el artículo 1404 del Código Civil,... si se comprueba que uno de los esposos recibió un bien inmueble por herencia durante el curso de su matrimonio o inició la posesión de un inmueble antes de la celebración del mismo, este inmueble permanece siendo un bien propio de ese esposo o esposa, aún cuando, en el último caso la prescripción se cumpla durante el matrimonio; que en consecuencia los jueces procedieron correctamente al declarar que la referida parcela era un bien propio de A. A. de J. y, por tanto, la única con derecho a transigir con dicho inmueble; que el hecho de que al expedirse el Decreto de Registro en su favor se hiciera con su nombre de casada, no altera la situación jurídica, ni el carácter de bien propio del inmueble. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 9 de diciembre de 1998; B.J. 1057. Pág. 371).

32.2 Comunidad de Bienes. Bienes reservados. Disolución de comunidad.

Considerando, que efectivamente, el artículo 4 de la Ley No. 855 de 1978 restableció entre otros, el artículo 223 del Código Civil que había sido abrogado por la Ley No. 390 de 1940, que establece que respecto de los terceros, como del marido, la prueba sobre el origen y la consistencia de los bienes reservados, puede ser establecida por todos los medios;

Considerando, que con este propósito, consta en la sentencia impugnada que la Corte a-qua examinó además del acto de venta por el que la esposa del recurrente vende el bien objeto del litigio y en donde consta que había sido adquirido por ella con sus propios recursos económicos, otros medios de prueba, como fueron: el contrato de arrendamiento a favor de dicha señora, con el Ayuntamiento de Villa Vásquez, del terreno donde está edificado el inmueble vendido y que luego se traspasó a Francisca Martínez, causante de la parte recurrida; lo expresado por las partes en la medida de comparecencia personal celebrada ante la corte; y, una declaración jurada instrumentada por el notario público de los del número para el municipio de Montecristi, Lic. Humberto Antonio Santana Pión, en la que testifican siete personas, que era de todos conocido, que la esposa del recurrente "Había hecho esa casa con sus propios recursos, los que obtuvo con su trabajo personal de agricultura y otros negocios particulares"; que como la prueba de la propiedad de un bien reservado de la mujer puede hacerse por todos los medios y los jueces gozan en este aspecto de entera libertad en la ponderación de la misma como lo apreció la Corte a-quo,

procede rechazar los medios que se examinan por improcedentes y mal fundados;

Considerando, además, que es oportuno destacar que es la Ley No. 390 de 1940, la que instituyó en provecho de la mujer este tipo particular de bienes, llamados reservados, que son los adquiridos por la mujer con el producto de su trabajo personal y las economías que de éste provengan; que si bien estos bienes entran en la comunidad conforme lo disponen los artículos octavo de la citada ley, y el 224 del Código Civil restablecido por la Ley No. 855 de 1978, y como tal, entran en la partición del fondo común si ella se disuelve, mientras la misma esté vigente, como es el caso de la especie, la mujer casada tiene la administración y disposición de los referidos bienes. (Pleno, 15 de diciembre de 1999).

32.3 Comunidad de bienes. Bienes reservados. Renuncia.

(Ver: Bienes reservados. Renuncia a la comunidad de bienes. Formalidades. Cámara Civil, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 79-81).

32.4 Comunidad de Bienes. Recompensa. Artículo 1437 del Código Civil.

Considerando, que conforme dispone el artículo 1437 del Código Civil: " Se debe la recompensa, siempre que se haya tomado de la comunidad una suma, ya sea esta para pago de deudas o cargas personales a cualquiera de los cónyuges, tales como el valor o parte del valor de un inmueble que es de su propiedad, o liberación de

servidumbres reales; o bien para la reivindicación, conservación y mejora de sus bienes personales, y generalmente siempre que uno de los esposos ha sacado algo de la comunidad en provecho propio"; que como se advierte, contrario a lo estatuido por la sentencia impugnada, y por la aplicación del texto legal citado, es la recurrente, que habiendo tomado de la comunidad, como se pudo establecer, una suma para el pago de parte del precio de un inmueble de su propiedad, quien debe la recompensa a la comunidad de la que ha extraído un valor en provecho propio, y no como erróneamente lo entendió la Corte a-quo, medio de puro derecho que suple la Suprema Corte de Justicia, por lo que la sentencia recurrida debe ser casada sin necesidad de ponderar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 27 de octubre de 1999).

33. COMPARECENCIA PERSONAL:

Comparecencia personal. Naturaleza de la sentencia.

Considerando, que es facultad de los jueces del fondo conceder o negar las medidas de instrucción de comparecencia personal e informativo testimonial, cuando la parte que las solicita no advierte al tribunal lo que pretende demostrar con dichas medidas y cuando los jueces encuentran en el proceso suficientes elementos de juicio que le permiten formar su convicción en uno u otro sentido; que en esas circunstancias, cuando el juez rechaza las medidas, no prejuzga el fondo y por tanto la sentencia que interviene no puede ser considerada interlocutoria, sino preparatoria y, por tanto,

sólo recurrible con el fondo del asunto; que por otra parte, de ser considerada interlocutoria la sentencia que rechazó las medidas mencionadas, con sus conclusiones al fondo las partes recurrentes dieron aquiescencia al fallo que las rechazaba, lo que evidencia la ejecución por su parte, de la sentencia in-voce que rechazó la comparecencia y el informativo, y por tanto su renuncia a recurrirla; que al considerar la Corte a-qua que con sus conclusiones al fondo, las recurrentes colocaron al tribunal de primera instancia en condiciones de pronunciarse con respecto al fondo de la demanda, no violentó las disposiciones del artículo 457 citado, por lo que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara Civil, 6 de octubre de 1999).

34. COMUNICACION DE DOCUMENTOS:

Comunicación de documentos. Sentencia preparatoria.

(Ver: Sentencia preparatoria. Comunicación de documentos. Cámara Civil, 4 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 38).

35. CONCILIACION:

35.1 Conciliación. Finalidad. Incidentes.

Considerando, que la audiencia de conciliación que debe preceder a la discusión de toda demanda laboral, tiene

por finalidad permitir que las partes lleguen a un acuerdo sobre las pretensiones del demandante y evitar que esta llegue a la fase de discusión del asunto que podría resultar enojosa y agravante;

Considerando, que en esa virtud, el tribunal no está obligado a discutir y estatuir sobre ninguna excepción, medio de inadmisión o conclusiones al fondo que se le formulen en dicha etapa conciliatoria, debiendo verse como una actitud de rechazo a la conciliación la presentación de cualquier incidente en el curso de la misma que tienda a desconocer la acción ejercida por el demandante, lo que permite al tribunal ordenar el levantamiento de la correspondiente acta de no acuerdo y fijar la audiencia para la presentación de prueba y discusión del caso;

Considerando, que la recurrente podía, después del fracaso del intento de conciliación y en cualquier estado de causa, presentar el medio de inadmisión invocado, pues el mismo no fue rechazado por improcedente, sino por no corresponder su discusión a la fase conciliatoria;

Considerando, que no existe ninguna contradicción en una sentencia que declara bueno y válido un recurso de apelación en cuanto a la forma y a la vez rechaza dicho recurso en cuanto al fondo, pues para el conocimiento del fondo de todo recurso es necesario que primero se juzgue si el recurrente cumplió con las formalidades exigidas por la ley para su validez, sin que el cumplimiento de las mismas tuviere incidencia alguna en cuanto a la procedencia del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 921-922).

35.2 Conciliación. Propuesta de arreglo. Consecuencias.

Considerando, que el hecho de que un demandado proponga al demandante llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación, no implica un reconocimiento de parte del proponente de los hechos de la demanda, ni los pretendidos derechos del demandante, por lo que nada impide que luego de formularse una propuesta de conciliación la parte que la formule niegue su condición de empleador, en cuyo caso, el tribunal debe solucionar el asunto con la ponderación de las pruebas que se le aporten para determinar la existencia del contrato de trabajo entre las partes, siendo improcedente que se establezca la condición de empleador de un demandado, por el solo hecho de tratar de llegar a un acuerdo de conciliatorio. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 246-247).

36. CONDICION POTESTATIVA:

Condición Potestativa. Conceptos.

Considerando, que la condición potestativa es aquella que, según el artículo 1170 del Código Civil hace depender el cumplimiento del contrato, de un suceso a que puede dar lugar o que puede impedir la voluntad de los contratantes, que esta condición es la llamada simplemente potestativa por oposición a la puramente potestativa, que depende únicamente de un acto de voluntad de una de las partes y que anula la obligación cuando emana del deudor; que en ese orden, es válida la condición cuando ella dependa de la voluntad del acreedor; que el análisis de la sentencia impugnada,

pone de manifiesto que la Corte a-qua no ha ponderado adecuadamente el concepto jurídico de la condición puramente potestativa;

Considerando, que es criterio de esta Corte que la única condición a la cual se le aplica la disposición del artículo 1174 del Código Civil es la condición puramente potestativa de parte del deudor. (Cámara Civil, 1 de diciembre de 1999).

37. CONCLUSIONES:

37.1 Conclusiones. Apreciación de la naturaleza de las conclusiones.

Que al declarar el tribunal a-quo que las conclusiones presentadas por los recurrentes constituyen verdaderas conclusiones al fondo y no un medio de inadmisión que hiciera necesario colocar a la parte adversa en mora de concluir al fondo, desconoció que las conclusiones no están sometidas a ninguna fórmula sacramental y que ellas forman un todo indivisible con los motivos que son su sostén necesario y donde se encuentran los argumentos de hecho y de derecho susceptibles de constituir el fundamento jurídico de la pretensión, por lo que el hecho de que los recurrentes formularan ante el tribunal de apelación dichas conclusiones al fondo para que se revocara la sentencia apelada, en nada alteraba la verdadera naturaleza y propósitos de las mismas ya, que su fundamento jurídico era la prescripción de la acción, que es un medio de inadmisibilidad previsto en el citado artículo 44, mediante el cual los recurrentes pretendían no anonadar un derecho, por todo lo cual procede examinar la procedencia o no del medio de inadmisión

desestimado por el tribunal a-quo. (Cámara Civil, 19 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 83).

37.2 Conclusiones al fondo. Violación al derecho de defensa. Medio de Inadmisibilidad.

Que ante el rechazo del medio de inadmisibilidad presentado por la recurrente la Corte a-qua debió antes de fallar el fondo del asunto, darle oportunidad para que presentara sus conclusiones sobre lo principal: que las disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajo que dispone que el Juez decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes si los ha habido, es a condición de que las partes previamente se hubieren pronunciado sobre el fondo o que por lo menos se les hubiese dado la oportunidad de hacerlo, pues de lo contrario se violaría su derecho a la defensa, como sucedió en la especie, razón por la cual la sentencia debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1ro. de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 261).

38. CONGRESO NACIONAL:

38.1 Congreso Nacional. Dos discusiones distintas. Artículo 39 de la Constitución. Disposición aplicable únicamente a las leyes en sentido estricto y no a las resoluciones.

Considerando, en cuanto a lo que la impetrante alega en la letra c) que, es correcto que todo proyecto de ley admitido en una de las cámaras debe ser sometido a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión, salvo declaratoria de

urgencia, caso en el cual deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas. Sin embargo, esta regla sólo rige para la formación de las leyes en sentido estricto, quedando excluidos, por tanto, conforme a los reglamentos internos de ambas cámaras, los acuerdos que no tengan carácter de ley y que son sancionados mediante resoluciones, las cuales se votan por una discusión en cada cámara, aunque excepcionalmente pueden discutirse en más de una, cuando así se acuerde; que por otra parte, la impetrante solo se limita a afirmar, sin aportar prueba alguna, que las resoluciones no fueron aprobadas por las dos terceras partes de los votos; que aparte de ello, esta exigencia se requiere sólo para la segunda discusión de un proyecto de ley cuando ha sido previamente declarado de urgencia, que no es el caso;

Considerando, en cuanto concierne a la letra de) que, si bien es cierto que las cámaras se reúnen extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo, tal circunstancia no incide sobre la validez de las resoluciones adoptadas por el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que resulta irrelevante que a la sesión en la cual fue aprobado el contrato de permuta se le calificara de extraordinaria cuando correspondía realmente a una legislatura ordinaria prorrogada, por todo lo cual procede desestimar la instancia de que se trata. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 9).

38.2 Congreso Nacional. Facultad de hacerse asistir de otros organismos del Estado. No hay violación a la separación de los poderes.

Considerando, en lo que toca al aspecto sostenido en la letra b) que, si bien el artículo 4 de la Constitución declara

que los tres poderes en que se divide el gobierno de la Nación, son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la misma Constitución y las leyes, dicha disposición, en modo alguno, puede ser interpretada en el sentido de restringir el derecho que tiene el Congreso Nacional de hacerse asistir de otros organismos técnicos del Estado, como son la Administración General de Bienes Nacionales y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, antes de adoptar una decisión que requiere conocimientos especializados con los cuales no cuenta dicho organismo, como es el caso de la evaluación y discusión de las condiciones de calidad, valor y tiempo de ejecución de las obras de ingeniería a recibir, en virtud del contrato de permuta, por el Estado Dominicano; que ninguna disposición de la Constitución ni de la ley, pone a cargo del Congreso Nacional, como una de sus atribuciones indelegables, la misión asignada a los organismos señalados. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág.9).

38.3 Congreso Nacional. Legislatura ordinaria y extraordinaria.

Considerando, en cuanto concierne a la letra d) que, si bien es cierto que las cámaras se reúnen extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo, tal circunstancia no incide sobre la validez de las resoluciones adoptadas por el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que resulta irrelevante que a la sesión en la cual fue aprobado el contrato de permuta se le calificara de extraordinaria cuando correspondía

realmente a una legislatura ordinaria prorrogada, por todo lo cual procede desestimar la instancia de que se trata. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 9).

39. CONSTITUCIONALIDAD:

39.1. Constitucionalidad.

(Ver: Oposición. Constitucionalidad. Inadmisible contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063, Págs. 79-81).

39.2 Constitucionalidad.

(Ver: Sociedad financiera de empresas que promueven el desarrollo económico. Ley No. 292 de 1966. Alegato de inconstitucionalidad. Pleno, 30 de junio de 1999; B. J. 1063. Pág. 192).

39.3 Constitucionalidad.

(Ver: Responsabilidad civil laboral. Artículo del 712 al 715 del Código de Trabajo. Exoneración de la prueba del perjuicio. Constitucionalidad. Pleno, 22 de septiembre de 1999).

39.4 Constitucionalidad. Alegatos de inconstitucionalidad contra varias leyes.

(Ver: Empresas Públicas. Artículo 4 de la Constitución. Ley 141-97. Alegato de violación a la separación de poder y Sociedad Financiera de empresas que promueven el desarrollo económico. Ley No. 292 de 1966. Alegato de inconstitucionalidad. Pleno, 30 de junio de 1999).

39.5 Constitucionalidad. Anulación de los actos de los poderes públicos.

(Ver: Nulidad. Nulidad de los actos de los poderes públicos. Anulación. Formas de proceder. Perención de instancia. Suprema Corte de Justicia. Artículo 397 Código de Procedimiento Civil. Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 81-82).

39.6 Constitucionalidad. Artículo 67, inciso 1 de la Constitución.

Atendido, que el artículo 67, inciso 1, de la Constitución de la República dispone que corresponde, exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a solicitud del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada;

Atendido, a que el canon constitucional arriba enunciado ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, según su sentencia del 6 de agosto de 1998, en el sentido de que la acción en inconstitucionalidad por vía directa o principal puede ser llevada ante ella, no sólo contra la ley en sentido estricto, esto es, las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino también contra toda norma social obligatoria, como los decretos, resoluciones y actos emanados de los poderes públicos; que este criterio lo reafirma el hecho de que el artículo 67, inciso 1 de la Constitución cuando expresa que a la Suprema Corte de Justicia corresponde de manera exclusiva "conocer en única instancia de la constitucio-

nalidad de las leyes", no hace distinción entre ley en sentido estricto y otras normas obligatorias; que si esa hubiere sido la intención del constituyente, es decir, la de referirse exclusivamente a la ley emanada del Congreso Nacional, lo hubiera expresado sin ambages, por lo que carece de pertinencia el alegato de que la decisión objeto del presente recurso fue pronunciada por un tribunal incompetente. (Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 78-79).

39.7 Constitucionalidad. Artículo 67, inciso 1 de la Constitución. Inconstitucionalidad por vía principal. Concepto de Ley. Efecto erga omnes. Control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Concepto de parte interesada.

Considerando, que el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República dispone que corresponde, exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a solicitud del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada;

Considerando, que el antes citado canon constitucional ha venido siendo interpretado por esta Suprema Corte de Justicia en el entendido de que él se refiere o tiene por objeto, exclusivamente, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, en sentido estricto, o sea, de las disposiciones de carácter general aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Presidente de la República, que sean contrarias a la Constitución, tanto por su contenido material como por vicios de

procedimiento en su formación; mientras que la expresión "parte interesada", que aparece en la parte in-fine del mismo inciso y texto constitucional, ha sido también interpretada, en sentido estricto, como aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal pretendidamente inconstitucional;

Considerando, que no obstante el limitado alcance atribuido por esta Suprema Corte de Justicia al comentado artículo 67, inciso 1, de la Constitución, el ejercicio de la acción en inconstitucionalidad por vía principal, ha experimentado un notable incremento, en cuanto al número de recursos intentados, los cuales comprenden no solo la ley, tal como ha sido definida, sino que versan además, sobre actos que emanan de los funcionarios que detentan el poder político y la administración del Estado, los cuales enuncia el artículo 46 de la Constitución; que esta circunstancia, unida a la diversidad de personas que fungen como actoras en la acción en inconstitucionalidad, obliga al reexamen de la interpretación dada al referido artículo 67, inciso 1 de la Constitución;

Considerando, que si bien es cierto que el artículo 67, inciso 1, de la Constitución de la República menciona sólo a las leyes como el objeto de la acción en inconstitucionalidad por vía directa ante la Suprema Corte de Justicia, lo que ha servido de base para la posición hasta ahora mantenida, restringida a los actos propiamente legislativos del Congreso Nacional, no es, menos valedero que cuando el artículo 46 de la misma

Constitución proclama que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o acto contrarios a esta Constitución, está dando apertura indudablemente al sistema de control difuso de la constitucionalidad, o sea, el que opera mediante la excepción de inconstitucionalidad en el curso de una controversia judicial entre partes, como medio de defensa; que al consagrar la Asamblea Revisora de la Carta Magna en 1994, el sistema del control concentrado de la constitucionalidad, al abrir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o una parte interesada, pudieran apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de la constitucionalidad de las leyes, es evidente que no está aludiendo a la ley en sentido estricto, esto es, a las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino a la norma social obligatoria que emane de cualquier órgano de poder reconocido por la Constitución y las leyes pues, aparte de que el artículo 46 de la Constitución no hace excepción ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que pueden ser objeto de una acción en nulidad o inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, como guardiana de la Constitución de la República y del respeto de los derechos individuales y sociales consagrados en ella, está en el deber de garantizar, a toda persona, a través de la acción directa, su derecho a erigirse en centinela de la conformidad de las leyes, decretos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la Constitución;

Considerando, de otra parte, que en armonía con el

Estado de Derecho que organiza la Constitución de la República y los principios que le sirvieron de fundamento al constituirse la sociedad dominicana en nación libre e independiente, entre ellos el sistema de control de la constitucionalidad por vía de excepción, hoy ampliado mediante la instauración en 1994, con el derecho a demandar la inconstitucionalidad de la ley por vía directa debe entenderse por "parte interesada" aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en un disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria;

Considerando, que el ejercicio de la acción en inconstitucionalidad por vía principal da lugar a que la ley, decreto, resolución o actos en cuestión, sea declarado inconstitucional y anulado como tal, erga omnes, o sea, frente a todo el mundo; mientras que la declaración de inconstitucionalidad por excepción o medio de defensa tiene un efecto relativo y limitado al caso de que se trate;

Considerando, que la acción de que se trata se refiere a la inconstitucionalidad de sendas resoluciones del Senado y de la Cámara de Diputados, intentada por una parte interesada, por lo que procede ponderar los méritos

de dicha acción. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J 1053. Págs. 4-7).

39.8 Constitucionalidad. Artículo 539 del Código de Trabajo.

Considerando, que las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo que exigen para la suspensión de la ejecución de las sentencias dictadas por los juzgados de trabajo, el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia, son dirigidas contra toda parte que haya sucumbido en esa jurisdicción, sin establecer diferencias por la condición de trabajador o empleador de ella; que las demandas laborales no están reservadas para ser ejercidas exclusivamente por los trabajadores, sino por todos los sujetos del derecho del trabajo, entre los cuales se encuentran los empleadores, quienes, en caso de ejercer cualquier acción en contra de un trabajador o de un sindicato, tendría a su favor la condición que impone el artículo 539, para la suspensión de la ejecución de la sentencia que le diere ganancia de causa, preservándose la igualdad jurídica de las partes;

Considerando, que, independientemente de que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución de la República, no prohíbe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso, el artículo 539, ya citado, no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el efecto suspensivo de ese recurso, efecto éste, cuyo condicionamiento o eliminación no constituye ninguna violación a cánones o principios

constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, sino en los principios del derecho; que el recurso de apelación ejercido, aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, conserva los demás efectos propios de estos recursos, lo que permite a las partes exponer sus medios de defensa, como si la sentencia no existiere, a través de un procedimiento cuyas reglas están previamente establecidas, lo que les da, además, oportunidad de hacer valer todos sus derechos, cumpliéndose con ello el debido proceso;

Considerando, que por lo demás, el artículo 539, del Código de Trabajo no persigue forzar a la parte sucumbiente ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fin al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, muy normal entre los litigantes en esta materia, por su peculiar característica, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Administrativo, 18 de agosto de 1999).

39.9 Constitucionalidad. Decreto Inconstitucional.

(Ver: Impuesto de salida. Decreto inconstitucional. Pleno, 19 de mayo de 1999).

39.10 Constitucionalidad. Facultad de los jueces del fondo.

Considerando, que a pesar de que las disposiciones del artículo 67 de la Constitución de la República, otorga facultad a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, facultad esta que es exclusiva del más alto tribunal de justicia, cuando se encamina como una acción principal en inconstitucionalidad, todo tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar y ponderar dicho alegato como cuestión previa al resto del caso, pues el referido artículo 67, al crear un sistema concentrado de control de la constitucionalidad, no elimina la obligación de todos los tribunales del país, de verificar que la norma jurídica que sirve de fundamento a un litigio puesto a su cargo, está acorde con nuestra Carta Magna, lo que se deriva de las disposiciones del artículo 46 de la misma que declara nulo toda ley, decreto o acto, que sean contrarios a la Constitución. (Cámara Penal, 18 de agosto de 1999).

39.11 Constitucionalidad. Alegatos de inconstitucionalidad de los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo.

Que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución, no prohíbe en modo alguno que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso; que las sentencias originadas en demandas cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos, en la materia en que se trata, está sometida a

reglas de procedimiento que deben cumplirse previamente por las partes en conflicto, las que les da oportunidad de hacer valer todos sus derechos y ejercer en la instancia sus medios de defensa; que además es a falta de llegar a un acuerdo o conciliación en el procedimiento preliminar al conocimiento de la demanda en juicio, de conformidad con lo que establecen los artículos 516 y siguientes del Código de Trabajo y en el cual también deben cumplirse reglas de procedimiento, que aseguran y permiten a las partes ejercer todos sus derechos y medios de defensa, que el tribunal queda en condiciones de pronunciar la decisión correspondiente; que en tales condiciones resulta erróneo sostener que los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo sean inconstitucionales. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 26 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 307-308).

39.12 Constitucionalidad. Procedimiento a seguir. Constitucionalidad. Acción en inconstitucionalidad.

Atendido, en cuanto a la necesidad de trazar el procedimiento para el conocimiento de la acción en nulidad por inconstitucionalidad, denunciada en su instancia por los oponentes, vale decir que la Suprema Corte de Justicia es apoderada por instancia del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada; que esa facultad constitucional es ejercida por quienes son así autorizados para que esta Corte, en virtud de esa competencia excepcional, juzgue si la ley, decreto, resolución o acto, sometido a su escrutinio, es conforme,

es decir, no contrario a la Constitución, sin que estén obligados por la Constitución o la ley, a notificar su instancia a las personas o instituciones que pudieran eventualmente resultar afectadas, ya que cuando esta Corte se aboca a ese análisis en virtud de los poderes que le son atribuidos por la Constitución de la República, lo hace sin contradicción y, por tanto, sin debate, a la vista sólo de la instancia que la apodera y del dictamen u opinión, si se produjera, del Procurador General de la República, a quien se le comunica el expediente, lo que no es óbice para que aquellos que lo consideren útil en interés propio o general, hagan por escrito elevado a la Suprema Corte de Justicia, sus observaciones a favor o en contra del pedimento, máxime cuando dicha acción no implica un juicio contra el Estado u otra persona sino contra una disposición legal argüida de inconstitucional; que la sucesión de las actuaciones aquí relatadas, que no incluyen las citaciones, constituye el procedimiento que se observa en esta materia, instituido por la sentencia del 1ero. de septiembre de 1995, de esta Suprema Corte de Justicia, el cual ha seguido cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo, así como la Procuraduría General de la República al emitir su dictamen en cada caso; que dicho procedimiento, que es el mismo puesto en obra en la acción en inconstitucionalidad intentada contra la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, fue trazado con motivo de la primera acción en inconstitucionalidad incoada al amparo del artículo 67, inciso 1, de la Constitución de la República, después de

la Reforma proclamada el 14 de agosto de 1994, y es el que rige con la variante de lo que debe entenderse, por "parte interesada", noción que, a partir de nuestra decisión del 6 de agosto de 1998, es definida del modo siguiente: "aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria;

Atendido, que si bien es cierto que el artículo 29, numeral 2 de la Ley de Organización Judicial No. 821 de 1927, dispone que la Suprema Corte de Justicia tiene entre sus atribuciones determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurientes cuando no esté establecido en la Ley, lo que se ha interpretado en el sentido de que debe indicarse un procedimiento en cada caso que se presente la hipótesis del citado texto legal, no es menos cierto que con la promulgación de la Ley No. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, el pleno de ésta quedó facultado a trazar el procedimiento judicial a seguir en todos los casos en que la ley no lo establezca; que ese procedimiento fue instituido, como se ha visto, por esta Suprema Corte de Justicia y uniformado para todos los casos que se refieren a la acción sobre la constitucionalidad de las leyes únicamente, lo que no

implica su generalización para otros que no sean de esa naturaleza; que como en la especie se trata de un recurso de oposición, declarado ya inadmisibile, contra una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad de un decreto, cumpliéndose el procedimiento instituido para ello, dicho procedimiento no tenía que ser establecido. (Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 82-84).

39.13 Constitucionalidad. Oposición contra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

(Ver: Oposición. Constitucionalidad. Inadmisibile contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 79-81).

39.14 Constitucionalidad. Recurso de Inconstitucionalidad contra una sentencia.

La acción mediante la cual se perseguía que se declarara la inconstitucionalidad del derecho de propiedad de una parcela, registrada a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), afirmamos el 12 de noviembre de 1997, que la acción a que se refiere el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución tiene por objeto, exclusivamente, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, en sentido estricto, o sea, de las disposiciones de carácter general aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Presidente de la República, que sean contrarias a la Constitución, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento de su

formación. (Pleno, 12 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 13).

40. CONTRADICCION DE SENTENCIA:

Contradicción de Sentencia. Condiciones.

Considerando, que en primer lugar para que pueda existir un medio de casación fundado en la contradicción de sentencias, es preciso que se reúnan las siguientes condiciones: 1) que las decisiones sean definitivas; 2) que emanen de tribunales diferentes; 3) que sean contrarias entre sí; y 4) que se hayan pronunciado en violación de la cosa juzgada; que contrariamente a lo alegado por el recurrente, como en el caso de la especie se trata de una sola y misma sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, no es posible que en la misma se incurra en la contradicción de sentencias invocada por él; que tampoco existe contradicción entre la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el 18 de noviembre de 1988 y la ahora impugnada, puesto que ésta última adopta el criterio jurídico externado por la primera en relación con dos puntos: el primero, sobre la imprescriptibilidad de la acción del recurrente, la cual fue acogida y reconocida por la sentencia impugnada; y la segunda en cuanto a comprobar y establecer si la recurrida Victoriano Gómez, C. por A., adquirió o no los inmuebles objeto del litigio y si en consecuencia, es un adquirente a título oneroso y de buena fe. (Pleno, 13 de octubre de 1999).

41. CONTRATISTA:

Contratista o empleador principal. Prueba de la solvencia del sub-contratista. Artículo 12 del Código de Trabajo.

Considerando, que a la sentencia impugnada no se le puede atribuir violación al artículo 12 del Código de Trabajo, porque el tribunal no basó su fallo en la solidaridad que establece dicho artículo entre el contratista o empleador principal y las personas que contratan trabajadores para laborar en las obras a cargo de estos y que no cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con los trabajadores, sino por considerar que los demandantes habían sido contratados por un intermediario de la recurrente por cuenta de esta; que por demás, aún cuando ese hubiere sido el motivo para la condenación de la recurrente la sentencia estaría bien fundamentada, porque contrario a lo afirmado por la demandada, es al contratista o empleador principal, que se pretende liberado frente al subcontratista, por poseer éste medios económicos para cumplir con las obligaciones de los trabajadores, el que debe probar esa solvencia económica y no los trabajadores, pues el asignarle ese fardo haría inaplicable la medida de protección que en su favor establece el referido artículo para evitar la burla de sus derechos frente a personas que aparentemente tienen las condiciones de empleadores, pero que realmente actúan por cuenta de otras personas de quienes son subordinados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de marzo de 1999; B. J. 1060. Pág. 933).

42. CONTRATO:

42.1 Contrato. Interpretación. Facultad de los jueces del fondo. Excepciones.

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos para interpretar los contratos y sus decisiones escapan al control y la censura de la Suprema Corte de Justicia en sus funciones del Corte de Casación, salvo que dicho jueces hayan incurrido en desnaturalización o que les atribuyan efectos contrarios a su carácter legal; que los recurrentes alegan desnaturalización de los hechos de la causa, equivalente a falta de base legal y para justificar dichos agravios, formulan en su memorial de casación, argumentos contrarios a la apreciación que de los mismos hizo el Tribunal Superior de Tierras, oponiéndoles su propia y particular apreciación a la que hizo dicho tribunal, lo que no puede en modo alguno constituir, ni constituye el vicio de desnaturalización alegada; que el vicio que se pretende no puede consistir en que el tribunal no aceptara la tesis sostenida por los recurrentes en el sentido de que el contrato de venta en discusión era nulo, porque no se había determinado, ni era determinable el precio de venta de los inmuebles, ya que como se sostiene en la sentencia impugnada quedó establecido que en el primer contrato intervenido entre las partes el 12 de agosto de 1987, no anulado ni expresa, ni tácitamente por las partes, se determinó clara y expresamente el precio de la venta en Dos Millones de Pesos (RD\$2,000,000.00) que fueron pagados en la forma siguiente: la suma de RD\$1,400,000.00 entregados al vendedor por el Banco Hipotecario Bancomercio, S.A., y la cantidad de RD\$600,000.00

entregada directamente por el deudor a dicho vendedor y que el único punto modificado de ese primer contrato fue en lo relativo a que el vendedor pague los gastos y accesorios de la venta, contrariamente a lo que establece el artículo 1593 del Código Civil, los que por tratarse de una obligación de carácter secundario de la convención no puede viciar o afectar el acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio, que constituyen los elementos esenciales para la validez del contrato de venta, por lo que no procedía declarar la nulidad demandada; que por todo lo anteriormente expuesto y por lo expresado en la sentencia impugnada, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

42.2 Contrato. Interpretación. Poder de los Jueces. Límites.

Considerando, que los jueces del fondo gozan de un poder soberano para interpretar las convenciones objeto de los litigios que ellos deban resolver, siempre que no las desnaturalicen; que se incurre en desnaturalización, entre otros casos, cuando se atribuye a las cláusulas de un contrato un alcance mayor o distinto del que realmente tienen, que, por consiguiente, no pueden los tribunales, sin incurrir en la censura de la casación, interpretar un acto cuyas cláusulas no sean oscuras y ambiguas y mucho menos modificar las disposiciones claras y precisas de un acto, para declarar bajo pretexto de interpretación, que un inmueble o parte del mismo fue vendido por una persona, cuando la realidad es que la venta fue otorgada por otras personas, teniendo como

apoderado al firmante del documento. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 742).

42.3 Contrato. Naturaleza.

Considerando, que como se observa no es pura y simplemente un arrendamiento, puesto que como se ha expuesto precedentemente, es de la esencia de ese tipo de contrato el pleno disfrute o goce de la cosa arrendada, sin que el arrendador pueda actuar o ejercer acciones que menoscaben ese derecho, y mucho menos que después de identificada la cosa arrendada, esta pueda ser objeto de cambio de manera unilateral, por el arrendador, lo que no sucede en la especie, puesto que la Clínica le impuso determinadas condiciones al Dr. Morel Grullón, cuya inobservancia entrañaría indefectiblemente el cese del contrato;

Considerando, que tal como lo afirmó la Corte a-quá en su sentencia, en la especie se trata de un contrato "intuitu personae", puesto que se le requirió al profesional determinadas cualidades y aptitudes para celebrar el mismo;

Considerando, que por todo lo antes expresado se evidencia que en la especie no existe un contrato puro y simple de arrendamiento, sino que se trata de una concesión otorgada por una de las partes en favor de la otra, imponiéndole como contrapartida a esta última la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero por los metros cuadrados ocupados, y además pagar una suma aleatoria, consistente en un por ciento de lo producido por el médico en la Clínica, en el ejercicio de su profesión;

Considerando, que en la especie, como ya se ha indicado en los considerandos anteriores, lo que existe es una responsabilidad contractual, debido a la ruptura unilateral del acuerdo celebrado entre las partes, lo cual es competencia de la jurisdicción civil, y no procede ser llevado por ante la jurisdicción penal, cuya esfera está circunscrita a las acciones que tienen su fuente en los mismos hechos de la prevención y que tales hechos constituyen un delito o cuasidelito civil, en el sentido de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, lo cual no ocurre cuando se trata de incumplimiento de una obligación contractual; que por tanto, la Corte a-quá no violó los textos señalados como erróneamente invoca el recurrente, ni tampoco en la sentencia se incurrió en falta de base legal, argumento que no es claramente explicado en el memorial. (Cámara Penal, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 433-434).

43. CONTRATO ARRENDAMIENTO:

Veáse:

-Alquileres

43.1 Contrato arrendamiento. Arrendamiento y subarrendamiento. Artículo 1742 del Código Civil. Vigencia.

Considerando, que de acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil, el contrato de arrendamiento no se deshace ni por la muerte del arrendador ni por la del inquilino; que existiendo un contrato verbal de subarrendamiento entre la recurrente y el finado José S. Bobadilla respecto de una parte del inmueble arrendado por este último a The Shell Company (W.I.) Limited, designada preceden-

temente, los derechos resultantes del subarrendamiento se transmitieron a los herederos del subarrendador fallecido, lo que les da a estos calidad para ejercer las acciones que pertenecían al de-cujus; que como la recurrida era esposa común en bienes de dicho subarrendador fallecido y apoderada de sus herederos, lo que no ha sido objeto de controversia, ella pudo, como lo hizo, intentar la demanda en rescisión de contrato, cobro de alquileres y desalojo contra la recurrente, sin necesidad de cumplimentar los requisitos señalados por la subarrendataria; que como son correctos los razonamientos y motivos dados por el Tribunal a-quo para rechazar el recurso de apelación incoado por la recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, el 14 de diciembre de 1994, procede desestimar el medio que se analiza y, por tanto, el presente recurso de casación. (Cámara Civil, 1 de diciembre de 1999).

43.2 Contrato arrendamiento. Contrato de cesión para la explotación de un fondo de comercio. Artículo 3 del Decreto No. 4807 de 1959.

Tal alegato carece de fundamento, porque independientemente de que en el expediente se encuentra depositado el contrato suscrito, que fue ponderado por el tribunal a-quo y en que se establece que el arrendador cede un arrendamiento al arrendatario, la super estación de servicios de expendio de combustibles, lubricantes y otros servicios relacionados, con sus edificaciones, anexidades y dependencias, el artículo 3 del Decreto antes citado, por los términos generales en que está redactado, no deja duda de que incluya el arrendamiento de inmuebles destinados a este tipo de actividad. Que

como la ley no distingue, tampoco le es permitido al recurrente distinguir entre colmados, pulperías, zapaterías, comercios y pequeñas industrias y fondos de comercio, para determinar los inmuebles que son susceptibles de un contrato de inquilinato. Se ratifica el criterio tradicional de nuestra jurisprudencia en el sentido de que la llegada del término no constituye una causa de rescisión del contrato de inquilinato al tenor del artículo 3 del referido Decreto 4807. (Cámara Civil, 10 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 105-106).

43.3 Contrato de arrendamiento. Requisitos.

Considerando, que el contrato de arrendamiento, tal y como lo expresa el artículo 1709 del Código Civil es aquel en virtud del cual una parte se obliga a dejar gozar a la otra de una cosa, durante cierto tiempo, recibiendo a cambio una suma determinada de dinero que pagará la otra parte; que por tanto es de la esencia de ese contrato la entrega de una cosa, mueble o inmueble, a una persona física o una entidad moral, sin más restricciones que las consignadas en el mismo; que es también de la esencia de ese contrato dejar o permitir el pleno goce de la cosa al arrendatario, sin que el arrendador pueda inmiscuirse en ese disfrute, ni restringir el derecho que tiene el arrendatario de gozar plenamente de la cosa arrendada. (Cámara Penal, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 432).

44. CONTRATO DE TRABAJO:

44.1 Contrato de trabajo. Cuando se produce su terminación.

Considerando, que la terminación de un contrato de

trabajo no se produce cuando al trabajador le son pagadas las indemnizaciones correspondientes al preaviso no otorgado y al auxilio de cesantía, sino en el momento en que el trabajador o el empleador toman la decisión de ponerle fin a la relación contractual o se origina el hecho que genera la terminación del contrato de trabajo por causa ajena a la voluntad de las partes, momento a partir del cual el trabajador está en libertad de renunciar a los derechos que pudieren corresponderle. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 10 de noviembre de 1999).

44.2 Contrato de trabajo. Libertad de prueba.

Considerando, que frente a la libertad de prueba existente en esta materia y el soberano poder de apreciación de que gozan los jueces laborales, el juez pudo, como lo hizo, basar su sentencia en las pruebas aportadas por el reclamante, tanto documental como testimonial, y desestimar las aportadas por la recurrente.-

Considerando, que la apreciación hecha por los jueces del fondo, sobre la existencia del contrato de trabajo, basada en testimonios precisos y en documentos analizados por dichos Jueces, escapa al control de esta Corte de Casación, por no existir desnaturalización alguna en la apreciación hecha por la Corte a-quá. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 612).

44.3 Contrato de trabajo. Pago por comisión. Naturaleza. Inaplicabilidad del Código de Comercio.

Considerando, que el denominado pago por comisión es una forma de remuneración del trabajador subordinado,

teniendo en cuenta la unidad de rendimiento y el mismo no determina la naturaleza del contrato de trabajo, ni hace aplicable los artículos del Código de Comercio relativos a los comisionistas, pues el trabajador que reciba un salario por comisión tiene los mismos derechos que el trabajador que reciba su salario por unidad de tiempo, sin convertirse, por la forma en que recibe su salario, en un comisionista regido por el Código de Comercio. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 612).

44.4 Contrato de trabajo. IX Principio del Código de Trabajo. Contrato realidad.

(Ver: Mujer embarazada. Terminación de contrato. Auto auténtico. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 694-695).

44.5 Contrato de trabajo. Presunción de contrato indefinido. Artículo 34 Código de Trabajo.

Considerando, que el artículo 34 del Código de Trabajo dispone que "todo Contrato de Trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido", por lo que frente a la admisión de la existencia del contrato de trabajo, eran los recurrentes quienes debieron probar que el mismo era de duración limitada, para lo cual no le bastaba alegar la forma de compensar los servicios del trabajador, pues esta no determina la naturaleza del contrato de trabajo, ya que las diferentes formas de pagar el salario se pueden presentar en todo tipo de contrato de trabajo;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y

pertinentes que permiten a esta corte verificar que la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 432).

44.6 Contrato de trabajo. Presunción. Artículo 16 del Código de Trabajo.

Sentencia del 8 de octubre de 1997: Que para que opere la presunción de contrato de trabajo es necesario que se demuestre que una persona prestó un servicio personal a otra, que es lo que constituye una relación de trabajo; que en la sentencia impugnada no se indica como el tribunal determinó que el demandante prestó sus servicios personales a la demandada para presumir la existencia del contrato de trabajo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 287).

44.7 Contrato de trabajo. Prueba. Artículo 16 Código de Trabajo. Agente vendedor a comisión.

Considerando, que al invocar los recurrentes, tanto en la audiencia de conciliación como ante la jurisdicción de juicio, que el recurrido era un agente vendedor a comisión, sin exclusividad, estaba admitiendo que este le prestaba un servicio personal, por lo que adquiría imperio la presunción establecida en el artículo 16 del Código de Trabajo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, que presumía la existencia del contrato de trabajo entre la persona que presta un servicio a otro y aquella a quien le es prestado el servicio. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 432).

cioso-Tributario, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 358).

44.8 Contrato de trabajo. Renuncia de derechos. Carácter unilateral del descargo.

Considerando, que para la validez de la renuncia de los derechos producida fuera del ámbito contractual, no es necesario que el documento que recoge la misma esté firmado por el empleador, siendo suficiente que el mismo lo haya firmado de manera libre y voluntaria la parte que otorga descargo, que en este caso es el trabajador demandante;

Considerando, que el artículo 669, del Código de Trabajo, señala que "queda prohibida toda transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias de los tribunales de trabajo favorables al trabajador", mientras que el artículo 96, del Reglamento No. 258-93, del 1ro. de octubre de 1993, precisa que esas sentencias son las que tienen de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, de lo que se deriva que en el período comprendido entre la terminación del contrato de trabajo hasta que los tribunales hayan reconocido de manera irrevocable los derechos de los trabajadores, estos están en capacidad de transigir o renunciar a dichos derechos;

Considerando, que al impedir el artículo 669, citado anteriormente, la renuncia o transacción de derechos reconocidos por sentencia de los tribunales de trabajo, no está limitando los derechos renunciabiles antes de ese reconocimiento, a los que tengan índole litigiosa, sino que la deja abierta a los derechos de cualquier naturaleza, pues el interés de esa disposición legal es el de establecer el período hasta cuando es posible la

renuncia de derechos, que el V Principio Fundamental lo ubica dentro del ámbito contractual y el mencionado artículo, desde el momento que cesa la relación contractual hasta que una sentencia de los tribunales de trabajo los reconoce. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 10 de noviembre de 1999).

44.9 Contrato de trabajo. Suspensión. Artículo 55 del Código de Trabajo. Ineficacia de resolución de Aeronáutica Civil.

Considerando, que si bien la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene calidad para suspender las actividades de una aerolínea que no cumpla con las reglamentaciones de la materia, la resolución que dicte ese organismo para tal fin, por sí solo no produce la suspensión legal de los contratos de trabajo de los trabajadores de las empresas afectadas, pues estas mantienen la obligación que impone a los empleadores, el artículo 55 del Código de Trabajo de comunicar la suspensión, dentro de los tres días de haberse producido, con indicación de causa, al Departamento de Trabajo, para que compruebe si existe o no la causa de suspensión alegada y dicte la resolución correspondiente; que al no hacerlo así, la suspensión de los contratos de trabajo, que pudo haber tenido su fundamento jurídico, en la resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil, devino en ilegal por falta de cumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de todo empleador que se ve en necesidad de suspender a sus trabajadores. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 643-644).

44.10 Contrato de trabajo. Suspensión ilegal. Artículo 100 Código de Trabajo.

Considerando, que al establecer el tribunal la existencia de una suspensión ilegal realizada por la recurrente, se determinó un estado de faltas sucesivos en perjuicio del trabajador recurrido, por lo que el plazo de 15 días que consagra el artículo 100 del Código de Trabajo para el ejercicio de la dimisión, empezaba a correr a partir del momento en que cesara el estado de faltas y no a partir de la fecha en que se inició la suspensión ilegal del contrato de trabajo, como pretende la recurrente; que al declarar que la dimisión fue ejercida dentro de los plazos legales, el tribunal actuó correctamente, careciendo de fundamento el medio de casación que se examina, debiendo ser rechazado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 611).

44.11 Contrato de trabajo. Terminación. Alegato de despido. Conclusión de la Obra.

Considerando, que en la especie, la Corte de Trabajo ha establecido, como cuestión de hecho, haciendo una correcta y soberana interpretación de la prueba testimonial aportada, que en la especie no hubo despido, sino que el contrato de trabajo terminó con la conclusión de la obra en la cual prestaba sus servicios el demandante, no advirtiéndose que al hacer esa apreciación los jueces hayan cometido ninguna desnaturalización ni cometido violación alguna de la Ley; (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 561).

44.12 Contrato de trabajo. Terminación por mutuo acuerdo. Terminación por ante un Notario.

Considerando, que si bien el contenido de un acto notarial puede ceder frente a otros medios de pruebas que demuestren que la realidad de los hechos es contraria a lo afirmado en dicho acto, en virtud del principio de la libertad de pruebas existente en esta materia y a las disposiciones del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, el cual consigna que "El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos", para que ello suceda es necesario que se precisen los hechos que contradicen el acto cuestionado;

Considerando, que para la validez de la terminación de los contratos de trabajo por mutuo consentimiento basta que las partes manifiesten su voluntad de poner término al contrato ante el Departamento de Trabajo, la autoridad local que ejerza sus funciones o un notario, sin necesidad de que se indiquen las razones que motivan tal decisión;

Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo descartó el documento contentivo de la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento sobre la base de apreciaciones derivadas de la larga duración del contrato de trabajo, a la existencia de un exceso y abuso de derecho y a otros razonamientos especulativos, pero sin señalar los elementos y circunstancias que tuvo en cuenta para llegar a la determinación de que lo consignado en el acto notarial no era la libre

manifestación de la voluntad de la trabajadora. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 6 de enero de 1999; B. J. 1050. Pág. 295).

45. CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES:

Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Ley 289 de 1966. Sentencias definitivas. Seguridad jurídica.

Considerando, que consta asimismo en dicho fallo, que a consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Confiscaciones el 26 de abril de 1996, que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, y el contrato de partición amigable mencionado anteriormente, Amelia Margarita Paiewonsky Batlle de Gómez es titular de las 779 acciones del capital de Pinturas Dominicanas, C. por A.(PIDOCA), y que a la fecha de la demanda en validez era titular de un crédito originado en los dividendos de dichas acciones, que la autorizaba a emplear las vías de derecho acordadas por la ley para hacer efectivo su crédito;

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, en diversas sentencias dictadas con motivo de la litis que ha venido planteando la parte recurrida, Amelia Margarita Paiewonsky Batlle de Gómez contra la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y algunas de las empresas dependientes de ésta, entre las cuales pueden mencionarse las del 17 de junio de 1970, 24 de noviembre de 1971 y 30 de abril de 1973, consagran el

carácter definitivo e irrevocable de la sentencia dictada el 26 de abril de 1966, por el Tribunal de Confiscaciones y el posterior acuerdo de partición amigable el 25 noviembre del mismo año sobre el fundamento del artículo 30 de la Ley 5924 de 1962 sobre Confiscación General de Bienes y 4 de la Ley No. 289 del 1963, Orgánica de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que reserva, la primera, la acción del cónyuge en reclamación de su porción en la comunidad; y la segunda que prevé dicha eventualidad así como el carácter declarativo de los derechos de propiedad atribuidos a la parte recurrida, lo que la faculta para obtener por las vías legales de lugar, el cobro de cualesquiera créditos que se originen en estos derechos; que, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia, en virtud de las citadas sentencias estableció que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) ha sido creada para realizar por sí misma, y a través de las entidades que de ella dependen, "no servicios públicos sino actividades industriales y comerciales por lo que es susceptible de todo tipo de vías de ejecución en el mismo plano de igualdad que las empresas de propiedad privada; que la circunstancia de que la Ley 289 de 1966... le haya dado el carácter de entidad pública, no significa que tal empresa esté destinada a servicios públicos", todo lo cual crearía un privilegio dentro de las actividades de dicha corporación;

Considerando, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución vigente son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución; que el artículo 47 de la misma Carta Sustantiva consagra el principio de la no

retroactividad de la ley, por lo que ésta no puede afectar "la seguridad jurídica de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior"; que en virtud de las citadas disposiciones, la Suprema Corte de Justicia debe rechazar todo pedimento de la parte recurrente encaminado a considerar inembargables los bienes de la recurrida en aplicación del artículo 32 de la Ley 289 de 1966, no solamente porque es violatorio a las disposiciones constitucionales citadas, sino en razón de que tales bienes, por el efecto declarativo de la partición habían salido del patrimonio de CORDE. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 101).

46. CORTE TRABAJO:

Corte Trabajo. Composición. Artículo 473 del Código de Trabajo.

El artículo 34 de la Ley de Organización Judicial, que prohíbe a las Cortes de Apelación funcionar con menos de tres jueces, no es aplicable a las Cortes de Trabajo y éstas pueden constituirse con la asistencia de la mayoría. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Págs. 566-567).

47. COSTAS:

Costas. Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Artículo 60 de la Ley 14-94 de 1947.

Considerando, que en la materia de que se trata no hay

lugar a la condenación en costas al tenor de lo previsto por el artículo 60 de la Ley No. 1494 de 1947, agregado por la Ley No. 3835 de 1954. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

48. CHEQUES:

48.1 Cheques. Daños y perjuicios. Cláusula de responsabilidad. Efectos.

Considerando, que al examinar detenidamente la expresada cláusula 12 aunque la misma se refiere a la limitación de responsabilidad civil a favor de dicho Banco, sin embargo, dicha cláusula consagra en su párrafo final que "los daños reales y efectivos que compensará el Banco serán aquellos que el depositante presente pruebas claras y concluyentes y sobre los cuales establezcan pruebas claras y concluyentes y sobre los cuales establezcan una medida cierta en dinero", razón por la cual la Corte a-quá al tomar en cuenta este último párrafo, expresó que el Banco recurrente cometió "una negligencia culpable, originadora de perjuicio; que la falta cometida en la especie por el Banco Popular Dominicano C. por A., le ha causado a su cliente señor José Hidalgo Díaz Cevallos un evidente perjuicio, sobre todo material o económico; que prueba clara y concluyente de ello es la carta de fecha 25 de abril de 1992, enviada desde Constanza, por José Herrera Comercial, C. por A., al señor Ing. José Hidalgo Díaz, cuyo original reposa en el expediente", carta en la que se expresa que el crédito sin límites de que gozaba el señor José Hidalgo Díaz Cevallos, en esa compañía por causa de la devolución del referido cheque por la suma de RD\$62,500.00, fue

cancelado totalmente; que además la Corte a-qua sostiene el criterio de que la suma acordada en primer grado por RD\$400,000.00 a título de indemnización a favor de José Hidalgo Díaz Cevallos, que es comerciante, " lejos de ser irrazonable o exagerada", como lo afirma el banco apelante, resulta por el contrario justificada en su monto para compensar las pérdidas sufridas (*Damnun Emergens*), así como las ganancias dejadas de percibir (*Lucrum Cessans*) por el recurrido, ya que los daños y perjuicios sufridos en este caso por dicho recurrido de acuerdo con la ley deberán ser "en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado", por lo que en la sentencia impugnada se ponderó con sentido de equidad los daños reales sufridos por el actual recurrido, resultando justa y adecuada la indemnización acordada, sin que se haya incurrido en el exceso alegado. (Cámara Civil, sentencia del 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 72-73).

48.2 Cheques. Emisión. Presunción de mala fe.

Considerando, que de conformidad con el artículo 66, párrafos a) y b), y 64 de la Ley No. 2859, los hechos cometidos por O. C. tipifican el delito consagrado por esos textos, habida cuenta que la mala fe se presume desde el momento mismo en que se emite un cheque a sabiendas de que no hay fondos para cubrirlos, sin necesidad de que el protesto sea condición sine qua non para configurar el delito, ya que el párrafo a) del artículo 66 de la mencionada Ley, lo que hace es consolidar la existencia de la mala fe una vez ha sido notificado el librador para que provea los fondos, y éste no obtempera a esa solicitud; el cual es un medio idóneo de probar la

misma. (Cámara Penal, 12 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 287).

48.3 Cheques. Pago rehusado. Responsabilidad. Obligación de justificar el perjuicio. Cláusula de limitación de Responsabilidad.

Considerando, que si bien es cierto que cuando una entidad bancaria rehusa pagar un cheque cuyo librador tiene suficiente provisión de fondos, compromete su responsabilidad al tenor del artículo 32 de la Ley de Cheques No. 2859, del 30 de abril de 1951, no es menos cierto que la cuantía de los danos y perjuicios a que pueda ser condenada la entidad bancaria está subordinada a que el librador justifique el perjuicio de una manera clara y precisa; que el examen de la sentencia impugnada revela que la corte a-quo se limitó a señalar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil incurrida por el banco, sin dar motivos para justificar la cuantía de la indemnización acordada a la recurrida; que, además, la corte a-quo no ponderó la cláusula del contrato de cuenta corriente sobre limitación de responsabilidad; que de haberlo hecho hubiera podido conducir eventualmente a una solución distinta; que en esa situación la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de verificar si la magnitud de los daños ocasionados a la recurrida están en proporción con el monto de la indemnización acordada, en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada por falta de motivos y base legal. (Cámara Civil, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 112).

48.4 Cheques. Prueba en materia bancaria en cuanto a cheques o efectos de comercio ya pagados.

Que las partes están obligadas a aportar la prueba de sus

derechos mediante los procedimientos organizados por la ley, de donde resulta que el juez está limitado a los documentos que les son sometidos al debate y que han sido producidos de acuerdo a las prescripciones legales so pena de nulidad de sus decisiones, que tanto el artículo 31, como el 34 de Ley General de Bancos No. 708 de 1965, dan cuenta de que los datos recogidos en los bancos por el Superintendente de Bancos, serán de carácter estrictamente confidencial y la revelación, por los funcionarios y empleados de la Superintendencia, de la Secretaría de Finanzas o del Banco Central, de cualquier información obtenida en el desempeño de sus funciones es sancionada con la destitución, sin perjuicio de otras penas aplicables. Que los medios de prueba en materia bancaria, en cuanto a los cheques o efectos de comercio ya pagados y su admisibilidad en cualquier procedimiento judicial o administrativo, están reglamentados por los artículos 39, 40 y 41 de dicha Ley por lo que toda otra información manejada por las entidades públicas antes mencionadas, no podría servir de medio de prueba, si su divulgación para esos fines, no hubiese sido previamente autorizada por el Juez; que como la certificación que sirve de fundamento a la sentencia impugnada fue producida en violación a las previsiones de los artículos 31 y 34 de la Ley General de Bancos y por tanto, no administrada de acuerdo a la Ley y no existiendo ninguna otra prueba en apoyo del contenido de la indicada certificación procede casar la sentencia impugnada. (Cámara Civil, 8 de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 57-58).

48.5 Cheques. Rehuso de un cheque con provisión de fondo. Daños y perjuicios.

Considerando, que a los jueces del fondo se les reconoce un poder soberano en la apreciación de los hechos de la

causa, y la Suprema Corte de Justicia tiene sobre esa apreciación un deber de control para que esos hechos no puedan ser desnaturalizados; que la desnaturalización de los hechos de la causa referida a los documentos sometidos a la libre apreciación de los jueces, no puede recaer más que sobre el contenido y el sentido del escrito, el cual no debe ser alterado; que cuando los jueces del fondo consideran, como en la especie, que después que el banco notificó al cliente su intención de cerrar la cuenta y recibió depósitos por la suma de doscientos sesenta y un mil pesos (RD\$261,000.00), lo que no fué discutido, no podía rechazar el pago de cheques que expidiera en favor de varias personas e instituciones por valor de trescientos quince mil pesos oro (RD\$315,000.00), alegando diversos motivos, tales como: cuenta cerrada, fondos en tránsito o refiérase al girador, puesto que, si bien es cierto que el Banco Nacional de Crédito, S.A., tenía derecho a notificarle al cliente su intención de cierre de cuenta dando un preaviso, no es menos cierto que no debió rehusar el pago de algunos cheques que al presentarse al pago tenían la debida provisión de fondos; que el sentido y alcance atribuido a las copias de los comprobantes de depósitos realizados por el cliente; de los cheques por él expedidos y de los protestos hechos por algunos de los beneficiarios de los cheques, son inherentes a la naturaleza de estos documentos, en los cuales los jueces del fondo han fundado su convicción, por lo que lejos de incurrir en una desnaturalización de los hechos por reducir la indemnización, han hecho un uso correcto del poder soberano de apreciación de que están investidos en la admisión de la prueba, por lo que todo lo alegado por el recurrente principal en el medio que acaba de examinarse, debe ser desestimado. (Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 98-99).

48.6 Cheque. Responsabilidad Civil. Daños y Perjuicios.

Considerando, que si bien es cierto que cuando una entidad bancaria rehusa pagar un cheque cuyo librador tiene suficiente provisión de fondo, compromete su responsabilidad al tenor del artículo 32 de la Ley de Cheques No. 2859 del 30 de abril de 1951, no es menos cierto que la cuantía de los daños y perjuicios a que pueda ser condenada la entidad bancaria está subordinada a que el librador justifique el perjuicio sufrido de una manera clara y precisa; que el examen de la sentencia impugnada revela que la Corte a-qua no dio motivos suficientes ni pertinentes para justificar la cuantía de la indemnización acordada al recurrido por un monto de Cien Mil Pesos; que, además, la Corte a-qua no ponderó la cláusula del contrato de cuenta corriente sobre limitación de responsabilidad, al descartar simplemente su aplicación; que de haberlo hecho hubiera podido conducir eventualmente a una solución distinta; que en esa situación la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de verificar si la magnitud de los daños ocasionados al recurrido está en proporción con el monto de la indemnización acordada; en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada por falta de motivos y de base legal. (Cámara Civil, 1 de diciembre de 1999).

D

49. DAÑOS Y PERJUICIOS:

Véase además:

- Acción Civil.
- Accidente de vehículo.
- Cheques.
- Responsabilidad Civil.

49.1 Daños y perjuicios. Carencia de cédula. Carencia de relevancia.

(Ver: Cédula de Identidad y Electoral. Ley 80-92. Falta de la misma, Cámara Penal, 29 de abril de 1999; B. J. 1043, Pág. 248).

49.2 Daños y perjuicios. Facultad de los jueces de fondo.

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, el recurrente alega en síntesis, que si bien se reconoce a los jueces del fondo un poder soberano para apreciar el monto de los daños y perjuicios experimentados por un reclamante, la cantidad fijada como reparación por dichos daños debe estar suficientemente motivada para que su monto se corresponda con la realidad de los hechos y de los perjuicios sufridos por el reclamante;

Considerando, que la fijación de una indemnización de los daños y perjuicios morales y materiales que resultan de la devolución de cheques, constituye un hecho de la soberana apreciación de los jueces del fondo; que esta apreciación escapa a la censura de la Corte de Casación. (Cámara Civil, 1 de diciembre de 1999).

49.3 Daños y perjuicios. Perjuicio in futurum.

(Ver: Perjuicio. Perjuicio in futurum. Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 93).

49.4 Daños y Perjuicio. Presunción de daños. Ambito.

Considerando, que la Corte a-qua concedió sendas indemnizaciones a la parte civil constituida, otorgando Doscientos Mil Pesos (RD\$200,000.00) a favor de la madre de Alejandro Garibaldy Avalo Núñez, fallecido en el accidente, y Cincuenta Mil Pesos (RD\$50,000.00) a cada uno de los hermanos del mismo, lo que resulta un desacierto, ya que sólo los padres, los hijos y los cónyuges supervivientes pueden sustentar sus demandas por concepto de daños y perjuicios, sin necesidad de aportar las pruebas de los daños que ese hecho les ha producido, lo que no sucede con las personas que tengan cualquier otro vínculo familiar, sanguíneo o por afinidad, con las víctimas de un accidente, quienes están en la obligación de probar que existía entre ellos y el occiso dependencia económica o una relación afectiva tan real, cercana y profunda, que permita a los jueces convencerse de que tales reclamantes han sufrido un perjuicio psicológico que amerita una condigna reparación, ya que el interés

puramente afectivo no basta para justificar una indemnización; en consecuencia, los medios analizados deben ser acogidos y procede casar la sentencia en el aspecto señalado;

Considerando, que la solución contraria implicaría una multiplicidad de acciones derivadas de un accidente con víctimas mortales, incoadas por personas cuyos simples sentimientos de afectos podrían ser lesionados por el suceso, lo cual resultaría ilógico, ya que los responsables del hecho se verían compelidos a enfrentar innumerables demandas que no se justifican dentro de un criterio rigurosamente científico. (Cámara Penal, 20 de octubre de 1999).

50. DECLINATORIA:

Declinatoria por sospecha legítima. Aplicación en materia civil.

Atendido, que si bien es cierto que ninguna disposición legal contempla aplicar en materia civil el procedimiento relativo a la demanda en declinatoria por causa de sospecha legítima, no es menos cierto que cuando la inhibición o recusación de varios jueces impida a la jurisdicción apoderada estatuir, lo cual puede ocurrir en los casos en que el pleno de una Corte de Apelación no pueda constituirse legalmente, sea por causa de una inhibición de todos sus miembros, sea por causa de recusación colectiva, cuando su abstención sea obligatoria según lo dispone el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, se procederá como en materia de declinatoria por causa de sospecha legítima.



Atendido, a que es evidente que existe una imposibilidad real y manifiesta de constituirse la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, por causa de inhibición de todos sus jueces, para conocer la inhibición de la Lic. Martha C. Díaz Villafaña, Juez de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte y en su oportunidad todo lo relacionado a la demanda en daños y perjuicios interpuesta por el Lic. Alfredo Piña Martínez, Juez Primer Sustituto de esta Corte; por lo que ante esta circunstancia procede acoger la inhibición propuesta. (Pleno, Resolución de fecha 13 de septiembre de 1999).

51. DEFECTO:

51.1 Defecto. Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que si bien es admitido que cuando el intimante no comparece o si habiendo comparecido no concluye al fondo su defecto debe ser considerado como un desistimiento tácito de su recurso de apelación, lo que puede dar lugar a que los jueces al fallar pronuncien el descargo puro y simple sin examinar el fondo, si así lo solicita la parte apelada, no es menos correcto afirmar que cuando esto sucede, si el intimante, juzgado en defecto, interpone recurso de oposición contra la sentencia que pronunció el descargo puro y simple de la apelación, y la oposición es instruida en varias audiencias al término de las cuales el oponente concluye al fondo de sus pretensiones y el recurrido hace otro tanto solicitando que se rechace el recurso de oposición y que

se confirme la sentencia de primera instancia, es incuestionable que entre la parte oponente y la parte recurrida, actoras de las conclusiones apuntadas, se verificó un contrato judicial para la prorrogación de la competencia de la Corte a-quo, que les permitió, con la anuencia de ésta, no obstante inferirse de los términos del artículo 434 lo contrario, que dichas partes pudieran discutir en este estadio, los méritos del recurso de apelación incoado contra la sentencia en defecto del 30 de mayo de 1984, lo cual pudieron hacer por tratarse de un aspecto del litigio del mero interés de los litigantes y, por tanto, no estar comprometido el orden público; que al declarar la Corte a-quo inadmisble el recurso de oposición interpuesto por Mercedes Pimentel Vda. Pérez y compartes, en desconocimiento del acuerdo concluido para la discusión del referido recurso de oposición, incurrió en el vicio de pronunciarse sobre una cosa no pedida, y que, además, había sido descartada por las partes al aceptar ambas la discusión sobre el fondo del litigio, al conocerse el recurso de oposición, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada en atención a las violaciones denunciadas. (Cámara Civil, 19 de agosto de 1998; B. J. 1053. Págs. 83-84).

51.2 Defecto. Artículo 540 del Código de Trabajo. Deber de los jueces.

Considerando, que frente al defecto en que incurrió el recurrente, el Tribunal a-quo debió ponderar las pruebas aportadas por las partes, para determinar si las conclusiones reposaban sobre base legal y en caso de que estimara que en el expediente no existieren elementos suficientes para formar su criterio, ordenar las medidas de instrucción necesarias para la

substanciación del proceso para lo cual debió hacer uso de su papel activo y no limitarse a pronunciar el descargo puro y simple de la apelación, inaplicable en la especie, en virtud de que el artículo 540 del Código de Trabajo dispone que: "se reputa contradictoria toda sentencia dictada por un tribunal de trabajo", y de las disposiciones del artículo 532 del referido código, en el sentido de que "la falta de comparecencia de una de las dos partes a la audiencia de producción y discusión de las pruebas no suspende el procedimiento", lo que le obligaba a determinar los méritos del recurso de apelación; que al no hacerlo así, la sentencia recurrida carece de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 20 de octubre de 1999).

51.3 Defecto. Materia laboral. Inaplicabilidad del Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Artículos 532 y 540 del Código de Trabajo.

Considerando, que frente al defecto en que incurrió la recurrente, el tribunal a-quo debió ponderar las pruebas aportadas por las partes, para determinar si las conclusiones reposaban sobre base legal, y en caso de que estimara que éstas no eran suficientes, ordenar las medidas de instrucción necesarias para la substanciación del proceso, para lo cual debió hacer uso de su papel activo y no limitarse a pronunciar el descargo puro y simple de la apelación, inaplicable en la especie, en virtud de que el artículo 540 del Código de Trabajo, dispone que: "se reputa contradictoria toda sentencia dictada por un tribunal de trabajo", y de las disposiciones del artículo 532 del referido Código, en el sentido de que: "la falta de comparecencia de una de las dos partes a la audiencia de

producción y discusión de las pruebas no suspende el procedimiento", lo que le obligaba a determinar los méritos del recurso de apelación, al no hacerlo así la sentencia recurrida carece de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 400-401).

52. DERECHO DE DEFENSA:

Derecho de Defensa. Alegato de violación al derecho de defensa.

Que las partes tuvieron ante el tribunal de envío la oportunidad de presentar sus conclusiones al fondo y sus escritos ampliatorios, de un debate celebrado de manera pública y contradictoria pudiendo en consecuencia la Corte a-quá ponderar debidamente todos los alegatos presentados por las partes, por lo que en consecuencia no se puede invocar la violación al derecho de defensa consagrado por el artículo 8, párrafo j) de la Constitución de la República. (Pleno, 17 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 72).

53. DESAHUCIO:

53.1 Desahucio. Elemento que lo caracteriza. Artículos 79 y 86 del Código de Trabajo. Diferencia entre el desahucio y el despido.

Considerando, que el elemento más caracterizante del desahucio, es que el mismo se genera por la voluntad

unilateral de una de las partes contratantes, sin que la persona que lo realice atribuya ninguna falta a la otra ni invoque causa alguna para tomar la decisión de poner fin al contrato de trabajo;

Considerando, que el plazo del desahucio, es una obligación que contrae la persona que ejerce ese derecho, cuyo incumplimiento no varía la causa de terminación del contrato, sino que tiene como consecuencia, obligar a "la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente pagar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos" del desahucio, tal como lo dispone el artículo 79 del Código de Trabajo;

Considerando, que de igual manera, el no pago de esa indemnización sustitutiva y del auxilio de cesantía de parte del empleador que ejecuta el desahucio, tampoco torna el desahucio en despido injustificado, sino que hace aplicable las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, que le impone el deber de pagar, después del décimo día sin que cumpla con su obligación, "una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo"

Considerando, que precisamente el artículo 86, del Código de Trabajo, el cual rechazó aplicar, el tribunal a-quo al considerar que la no concesión del plazo del desahucio y el no pago del auxilio de cesantía, convirtió la terminación del contrato de trabajo "en un despido puro y simple", ha sido instituido para ser utilizado en el caso del desahucio ejercido por el empleador sin el cumplimiento de las obligaciones que su decisión de poner término al contrato de trabajo sin invocar justa causa, le acarrea, por

lo que de acogerse el criterio del tribunal a-quo, dicho artículo no tendría razón de ser;

Considerando, que por otra parte, a pesar de que la Corte a-qua decidió que en la especie no hubo desahucio, por el no ofrecimiento del pago de las prestaciones laborales al recurrente, en la sentencia impugnada se consigna que entre los documentos depositados por éste se encuentra la carta de desahucio, expedida por Molinos Dominicanos, C. x A., "donde se le avisa que pase a buscar sus prestaciones laborales el 18 de febrero de 1994", lo que hace que la sentencia contenga motivos erróneos y contradictorios, que determinan su casación, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

Considerando, que cuando, la sentencia es casada por la violación a una norma procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 7 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 430).

53.2 Desahucio. Empleador que no comunica ninguna causa.

Considerando, que un documento donde el empleador comunica al trabajador que deja sin efecto el contrato de trabajo, sin invocar causa alguna para poner fin a dicho contrato, es una prueba fehaciente de que la terminación se produce por el ejercicio del desahucio de parte del empleador, pues este tipo de terminación del contrato se caracteriza por la circunstancia de que las partes no invocan ninguna causa para dar por concluida la relación contractual. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 539).

53.3 Desahucio. Oferta real de pago. Artículo 653 del Código de Trabajo. Condiciones.

Considerando, que para librarse de esa sanción el empleador debe ofrecer al trabajador desahuciado los valores correspondientes y si éste no lo acepta, hacer la oferta real de los mismos, seguida por la correspondiente consignación, que de ser válida le libera de su obligación de pago, al tenor del artículo 653 del Código de Trabajo;

Considerando, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que al poner término al contrato de trabajo del recurrido, la recurrente le ofertó a éste la suma de dinero que entendía le correspondía por concepto de prestaciones laborales, cuya validez demandó ante los tribunales laborales, pero que la misma fue rechazada por esos tribunales al determinar que dicha oferta no se había hecho conforme a la ley, lo que significó una ausencia de pago de las indemnizaciones laborales y determinó la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 22 de septiembre de 1999).

54. DESALOJO:

Desalojo. Solicitud para ocupar vivienda. Declaración jurada por ante el Control de Alquileres de Casas y Desahucios.

Considerando, que el recurrente alega en su segundo medio la falsedad de la declaración jurada que el

propietario debe prestar ante el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, cuando solicita autorización para iniciar un procedimiento de desalojo motivado en que va a ocupar el inmueble alquilado, argumentando dicho recurrente que el propietario en verdad no ocuparía personalmente el mencionado inmueble. Sin embargo, tal alegato solo podría invocarse cuando ocurriera la desocupación del inmueble y se comprobara que dicho propietario no procedió a ocupar personalmente el inmueble de que se trata y en su lugar lo hiciera otra persona que no fuera la suya o su cónyuge o pariente de uno de ellos, ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado inclusive hasta dos años por lo menos, por lo cual este segundo medio carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 104).

55. DESCARGO:

55.1 Descargo. Prestaciones laborales. Expedición de cheques. Necesidad del procedimiento de oferta real de pago.

Considerando, que el solo hecho de que una empresa confeccione el recibo de descargo y expida el cheque correspondiente para el pago de prestaciones laborales, no le libera de las consecuencias de un proceso judicial en reclamación de prestaciones laborales, si frente a la negativa del trabajador a recibir los valores ofrecidos, ésta no inicia el consecuente procedimiento de la oferta real de pago y de consignación de la suma ofertada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 470).

55.2 Descargo. Prestaciones laborales. Recibo de descargo con posterioridad a la terminación del contrato.

Considerando, que si bien el IV Principio fundamental del Código de Trabajo, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, establecía impedimento de renuncia de derechos reconocidos a los trabajadores, el alcance de esta prohibición se circunscribe al ámbito contractual y no después de la finalización del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad a dicho contrato, siempre que el trabajador no haga consignar en el momento de expedir el recibo su inconformidad con el pago y reservas de reclamar esos derechos. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 426).

56. DESISTIMIENTO:

Desistimiento. Recursos. Condiciones.

(Ver: Apelación. Desistimiento. Condiciones, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 44).

57. DESPIDO:

57.1 Despido.

(Ver: Representantes locales de trabajo. Despido. Atribuciones. Representante competente. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de enero de 1999).

57.2 Despido. Falta de comunicación al Departamento de Trabajo. Artículo 93 del Código de Trabajo. Presunción.

Considerando, que de acuerdo a las disposiciones del artículo 93 del Código de Trabajo, el despido no comunicado al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, se reputa que carece de justa causa, lo que obliga a los jueces del fondo, antes de ponderar las pruebas aportadas por los empleadores para probar la justa causa de un despido a examinar si se ha cumplido con el mandato del artículo 91 del Código de Trabajo, pues la presunción que establece el artículo 93 del Código de Trabajo, es *Juris de jure*, por lo que no se elimina, con la demostración de que el trabajador despedido cometió las faltas atribuidas por el empleador, sino que se mantiene hasta tanto este demuestre la existencia de la referida comunicación, de lo cual no hace mención la sentencia impugnada a pesar del señalamiento formulado por los recurrentes en ese sentido;

Considerando, que al no referirse la sentencia impugnada a la existencia o no de la comunicación de los despidos de los recurrentes, esta corte no está en condiciones de determinar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 4 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 368).

57.3 Despido. Falta laboral. Hecho sujeto a sanción penal. Consecuencias.

Considerando, que para llegar a esa conclusión el Tribunal a-quo hizo un uso adecuado del poder soberano de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, sin incurrir en desnaturalización alguna, lo que escapa al control de la casación;

Considerando, que si bien el hecho que dio origen al despido estaba sujeto a una sanción penal, nada impedía que el Juez a-quo estableciera la existencia de una falta laboral que justificara el despido del trabajador, antes de que la jurisdicción represiva se pronunciara sobre el delito que se le imputaba al recurrente, por tratarse de faltas con características distintas independiente una de la otra. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de diciembre de 1999).

57.4 Despido injustificado. Presunción juris et jure. No comunicación a las autoridades de trabajo.

Considerando, que la presunción del despido no comunicado a las autoridades de trabajo en el plazo de 48 horas, es una presunción juris et jure, que no admite prueba en contrario, por lo que al demostrarse la inexistencia de esa comunicación, la corte a-qua no podía entrar en consideración y apreciación de pruebas que justificaren el hecho del despido, el cual por mandato de la ley era injustificado de pleno derecho, razón por la cual la corte a-qua no cometió los vicios atribuidos en este medio, el cual carece de fundamento, procediendo

su rechazo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 22 de enero de 1998; B. J. 1047. Págs. 274-275).

57.5 Despido. Justa causa. Comunicaciones de faltas.

Considerando, que la sentencia impugnada no expresa a través de qué medio de prueba, el empleador demostró la justa causa del despido del recurrente y en qué circunstancias se cometieron las faltas que sirvieron de base para ese despido, deduciéndose de sus motivaciones, que la Corte consideró que esta prueba se hizo a través de las comunicaciones dirigidas por la recurrida al Departamento de Trabajo comunicando que el trabajador había violado las disposiciones de los ordinales 14 y 19 del artículo 88 del Código de Trabajo y su posterior despido, como consecuencia de esas violaciones.-

Considerando, que las comunicaciones de faltas atribuidas a un trabajador y del despido de que haya sido objeto al Departamento de Trabajo no pueden ser aceptadas por sí solas como prueba del despido realizado, pues ello equivaldría a aceptar que una parte se fabricaba su propia prueba, ya que estas comunicaciones lo que hacen es permitir al empleador presentar en caso de litigio la prueba de la justa causa del despido...Casa. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 544- 545).

57.6 Despido. Negativa de la existencia del contrato de trabajo.

Considerando, que para negar el hecho del despido la recurrente negó la existencia del contrato de trabajo, por lo que al reconocer el tribunal la existencia de éste, es obvio que por vía de consecuencia también quedaba establecido el despido alegado por dicho trabajador. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 359).

57.7 Despido. Nulidad. Artículo 233 del Código de Trabajo. Embarazo.

Considerando, que la nulidad del despido que dispone el artículo 233 del Código de Trabajo opera cuando este es ejercido por el hecho de la mujer estar embarazada; que cuando el empleador invoca una falta de la trabajadora para ejercer el despido y no cumple con 1ª formalidad de someterlo previamente al Departamento de Trabajo a fin de que determine si obedece al hecho del embarazo, como señala la sentencia ocurrió en la especie, es sancionado con la obligación de pagar a dicha trabajadora, además de las prestaciones que le corresponden de acuerdo con el código, "una indemnización equivalente a cinco meses de salario ordinario", pero no con la nulidad del despido;

Considerando, que por otra parte, habiendo declarado nulo el despido de la recurrida y consecuencialmente vigente el contrato de trabajo de esta, el tribunal condena a la recurrente al pago de prestaciones laborales, lo que no es posible dentro del marco de nuestra legislación laboral, la cual no permite el pago de esas prestaciones

durante la vigencia del contrato, sino cuando este concluye con responsabilidad para el empleador, lo que al criterio de la Corte a-quá, no aconteció;

Considerando, que la sentencia a la vez de carecer de base legal, no contiene motivos suficientes y pertinentes, por lo que debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 596).

57.8 Despido. Obligación de comunicar las faltas.

Que el empleador sólo está obligado a comunicar las faltas cometidas por un trabajador, cuando despidió al trabajador por la comisión de dichas faltas, pero sino ejerce el despido contra el trabajador, la comunicación de faltas al departamento de trabajo es opcional del empleador y su ausencia no torna el alegato de abandono en un despido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 349).

57.9 Despido. Participación en una riña.

Considerando, que no es suficiente para que un despido sea justificado, que el empleador demuestre que el trabajador despedido ha participado en una riña, sino que además debe probar que el mismo fue el ente generador de la reyerta, pues en todo caso en que un trabajador se ve envuelto en este tipo de acción, respondiendo a un ataque o una provocación no comete ninguna falta, pues no está obligado a permanecer impasible al mismo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de enero; B. J. 1058. Pág. 410).

57.10 Despido. Plazo vencimiento en día feriado.

Considerando, que cuando un plazo se vence en un día feriado el mismo se extiende hasta el próximo día laborable, el tenor de las disposiciones del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, no iniciándose el plazo nuevamente a partir de ese día, como erróneamente alega la recurrente sucede con los plazos de hora a hora. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 20 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 460).

57.11 Despido. Precisiones que debe hacer el juez.

Considerando, que la sentencia impugnada da como ciertos los hechos imputados por la recurrida a la recurrente para justificar el despido de que fue objeto esta última, para lo cual señala que los mismos se determinaron después de haber hecho un estudio pormenorizado del expediente;

Considerando, que no es motivo suficiente para declarar justificado un despido, expresar que del estudio del expediente se determina la comisión de la falta atribuida al trabajador despedido, sino que es necesario que el tribunal indique los elementos que formaron su convicción y los medios de pruebas que se le presentaron para el establecimiento de los hechos que conforman la justa causa del despido, así como las circunstancias en que este se produjo, lo que no se advierte en la sentencia impugnada, razón por la cual la misma debe ser casada por falta de motivos. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 838-839).

57.12 Despido. Prescripción.

Considerando, que el artículo 75 del Código de Trabajo prohíbe el desahucio del trabajador cuyo contrato está suspendido por una causa atinente a él, pero ninguna disposición legal prohíbe que el empleador le ponga fin al contrato de trabajo durante ese estado, haciendo uso del despido, el cual dio por establecido la sentencia impugnada y fue admitido por el recurrente, aunque discute la fecha que de acuerdo al Tribunal a-quo, se originó;

Considerando, que habiendo la Corte a-qua pronunciado la prescripción de la acción ejercida por el trabajador en reclamación de prestaciones laborales por despido injustificado, el tribunal estaba impedido de decidir sobre la justa causa y procedencia o no del despido invocado por el recurrente, pues el medio de inadmisión acogido puso término al litigio, sin conocimiento del fondo de la demanda;

Considerando, que el recurrente ha invocado que hizo gestiones tanto en la empresa como ante la Secretaría de Estado de Trabajo, porque no se le permitía prestar sus servicios, lo que es indicativo de que no estaba imposibilitado de actuar en justicia, aun cuando su contrato de trabajo hubiere estado suspendido, pues así como la suspensión no impide la realización del despido del trabajador suspendido, tampoco impide actuar en justicia, por lo que el plazo de dos meses que establece el artículo 702 del Código de Trabajo, se inició en la especie, al otro día de la terminación del contrato de trabajo, que el tribunal declaró ocurrió el día 13 de abril del 1994. (Pleno, 10 de noviembre de 1999).

57.13 Despido. Presunción de despido injustificado. Comunicación al Departamento de Trabajo. Carácter de orden público.

Considerando, que el artículo 82, del referido Código establece que "el despido que no haya sido comunicado a la Autoridad del Trabajo correspondiente en el término indicado en el artículo 81, se reputa que carece de justa causa", razón por la cual ningún despido que no haya sido objeto de dicha comunicación puede ser declarado justificado, aún cuando en el expediente existiere prueba de la existencia de las faltas alegadas por el empleador para realizar dicho despido, pues este se convierte en injustificado de pleno derecho, si no se cumple esa formalidad;

Considerando, que por el carácter de orden público que tiene la necesidad de la comunicación del despido y sus causas al Departamento de Trabajo, no es menester que la parte interesada requiera a los Jueces del fondo determinar si el empleador cumplió con ese requisito, sino que estos están obligados a hacer la indagatoria de oficio, antes de pronunciarse sobre la justa causa del despido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 24 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 485).

57.14 Despido. Prueba del despido. Prueba de la justa causa del abandono.

Considerando, que por otra parte la sentencia impugnada proclama que los recurridos no demostraron " que el despido del trabajador Anibal Cid y Cid carezca de justa causa, y que el trabajador Reyes Cid y Cid haya abandonado su trabajo", con lo que se violenta la regla de

la prueba, en esta materia, pues al trabajador solo le corresponde probar el despido, siendo de la responsabilidad del empleador la prueba de la justa causa del mismo o del abandono del trabajador, cuando utiliza ese abandono como una causa del despido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y Contencioso-Administrativo, 13 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 426).

57.15 Despido. Prueba de la justa causa.

Que sólo cuando ha sido establecida la existencia del despido es que el empleador está obligado a probar la justa causa de éste, que habiendo decidido la Corte a-qua que los contratos de trabajo terminaron por la voluntad unilateral de los trabajadores, éstos no podían exigir al empleador probar la justa causa de un despido que ellos no probaron, ni constituir falta alguna al hecho de que no se aceptara la reclamación en pago de prestaciones laborales pues para que éstas se admitieran era necesario que se estableciera el despido, lo que a juicio de los jueces del fondo no existió. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 12 de noviembre de 1997; B.J. 1044. Pág. 154).

57.16 Despido. Prueba. Insuficiencia de probar la existencia del contrato.

Considerando, que la obligación del empleador de probar la justa causa surge después que el trabajador demandante establece la existencia del despido, o el empleador admite haberlo realizado, que habiendo este último negado todos los hechos de la demanda, al

trabajador no le bastaba probar la existencia del Contrato de Trabajo, sino que era necesario que también probar el hecho del despido, que al no existir constancia en la sentencia impugnada de que esta prueba fue presentada, la misma carece de motivos y de base legal, por lo que debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de junio de 1998; B. J. 1051. Pág. 519).

58. DETERMINACION DE HEREDEROS:

58.1 Determinación de Herederos. Herederos omitidos. Tercero de buena fe. Condiciones.

Considerando, que si bien es cierto, que cuando como en la especie y como consecuencia de una solicitud de inclusión de herederos omitidos en la determinación que ya se había hecho de los sucesores de una persona, el tribunal de tierras debe al mismo tiempo ordenar en favor del demandante en inclusión, la transferencia de los derechos que conforme su vocación sucesoral le corresponda en el o los inmuebles registrados pertenecientes al de cujus, no es menos cierto, que ésta solución sólo se impone a condición de que dichos inmuebles permanezcan en el patrimonio del causante o de sus causahabientes, pero no cuando, como en la especie, los mismos han sido ya transferidos a una tercera persona, que los adquiera a título oneroso, que paga el precio convenido por esa venta y que desde ese momento debe ser considerando de buena fe. (Pleno, 13 de octubre de 1999).

58.2 Determinación de herederos. Transferencia solicitada conjuntamente. Artículo 266 de la Ley de Registro de Tierras. Tercero adquirente de buena fe. Artículos 1116 y 2268 del Código Civil.

Considerando, en cuanto a la alegada desnaturalización de los hechos, violación del artículo 1134 del Código Civil y falta de base legal, invocados en el primer medio de su recurso por los recurrentes, que nada de opone a que, conjuntamente con la instancia en solicitud de la determinación de herederos, se sometan para fines de transferencia los documentos de venta que hayan otorgado las partes en favor de otras personas, pudiendo el tribunal resolver ambos pedimentos por una sola sentencia, sin necesidad de que sean conocidos en instancias diferentes; que el tribunal amparado en una solicitud de transferencia en relación con una sucesión está obligado a decidir la determinación de los herederos así como la impugnación que cualquier interesado le someta en relación con el asunto, tal como lo dispone el artículo 266 de la Ley de Registro de Tierras; que cuando como en la especie y tal como consta en la sentencia impugnada, un tercero adquiere un inmueble o derechos en el mismo después de haberse expedido los certificados de títulos correspondientes en favor de sus causantes, se trata incuestionablemente de un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, ya que lo hubo a cambio de una suma de dinero, la cual pagó; que de conformidad con lo que suscriben los artículos 1116 y 2268 del Código Civil, la buena fe se presume siempre hasta prueba en contrario, prueba que en caso de la especie no ha sido hecha, ni existen en el expediente datos algunos que hayan revelado la mala fe de dicho adquirente, que en el caso lo es el recurrido. (Cámara de

Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 397).

59. DIMISION:

59.1 Dimisión. Cambio de forma de pago.

Considerando, que de la ponderación de las pruebas aportadas y de la propia admisión hecha por la recurrente, el Tribunal a-quo apreció que la empresa varió el modo de medir la retribución de los trabajadores, eliminando el salario que de manera fija estos recibían y reforzando el sistema de pago por unidad de rendimiento;

Considerando, que asimismo determinó que la eliminación del pago del salario fijo le ocasionó un perjuicio a los trabajadores, para lo cual dio motivos pertinentes, pues, tal como lo indica la sentencia impugnada, la eliminación de esta forma de pago del salario afecta a los trabajadores, aún cuando en el balance posterior al cambio se determinara un aumento en las entradas de estos, pues al establecer la modalidad de pago por labor rendida a los trabajadores no se le garantizaba un mínimo salarial y sujetaba todos los ingresos al resultado de sus actividades;

Considerando, que la facultad que posee el empleador para introducir cambios en las modalidades de la prestación del servicio, está condicionado, a que no alteren las condiciones esenciales del contrato, de las cuales es una de ella la forma de medir la retribución del trabajador;

Considerando, que no se advierte que la sentencia

impugnada hubiere cometido ninguna desnaturalización en las declaraciones de la representante de la empresa y el testigo que depuso en el informativo testimonial puesto a su cargo, no constituyendo falta de base legal el hecho de que el tribunal restara credibilidad a las declaraciones de un testigo, sino un uso del poder soberano de apreciación de las pruebas de que gozan los jueces del fondo, lo cual escapa al control de la Suprema Corte de Justicia, cuando, como en la especie, no se advierte ninguna desnaturalización de los testimonios y pruebas aportadas. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 846-847).

59.2 Dimisión. Falta continua. Plazo.

Considerando, que por otra parte, el no pago de salarios completos a los trabajadores, sin causa justificada, constituye una falta continua, que se genera cada vez que el empleador incumple su obligación de pagar el salario en la forma convenida o establecida por la ley, lo que hace que el derecho del trabajador a dimitir por esa causa se mantenga mientras dure el estado de falta, que como al momento de la dimisión ese estado no había cesado, el derecho del trabajador a presentar su dimisión por esa causa no había caducado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo, y Contencioso-Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 399 y 400).

60. DISCIPLINARIA:

60.1 Disciplinaria. Destitución de un juez. Artículo 62 Ley de Carrera Judicial. Objetivo del régimen disciplinario.

Considerando, que el régimen disciplinario tiene por objetivo contribuir a que los jueces cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin de mantener el mejor rendimiento del Poder Judicial, así como procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran a favor de los jueces;

Considerando, que asimismo, el objeto de la disciplina judicial es sancionar el respeto a las leyes, la observancia de una buena conducta y el cumplimiento de los deberes oficiales por parte de los funcionarios y empleados judiciales. (Pleno, 24 de agosto de 1999).

60.2 Disciplinaria. Fiscal del Distrito Nacional. Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia.

Atendido, que si bien el poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia, en las Cortes de Apelación y en los Tribunales o Juzgados de Primera Instancia, de la economía de las disposiciones que reglamentan la disciplina judicial se infiere que en la esfera de ese poder disciplinario no se encuentran comprendidos los miembros del Ministerio Público y sus funcionarios y empleados dependientes, lo que se evidencia en el artículo 151 de la Ley de Organización Judicial, cuando expresa que la destitución del Procurador General de la República, de los Procuradores Generales de Corte de Apelación y de los Procuradores Fiscales, será

pronunciada, en caso de inconducta notoria o faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por Decreto del Poder Ejecutivo. (Auto Presidente, 16 de marzo de 1999).

61. DIVORCIO:

61.1 Divorcio. Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Comunicación al Ministerio Público.

Considerando, respecto de la violación de los artículos 10, 12 y 41 de la Ley 1306 bis sobre Divorcio, otro aspecto del segundo medio de casación, un examen de la sentencia impugnada, como del fallo dictado en primera instancia, revelan que el demandado no requirió in limine litis la comunicación al fiscal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 de 1978 respecto de las causas que deben ser comunicadas al fiscal, a cuyo tenor "La comunicación al fiscal sólo procede en los casos antes indicados cuando es requerida por el demandado in limine litis o cuando es ordenada de oficio por el tribunal"; que por otra parte, la Suprema Corte de Justicia comprobó que en el expediente del presente caso, figura una comunicación del 13 de junio de 1994 del Presidente de la Corte a-quo, mediante la cual se envía al Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación el expediente para fines de dictamen, así como el referido dictamen, del 17 del mismo mes, al pie del indicado documento; que ha sido juzgado que si bien la falta de dictamen del fiscal en primera instancia da derecho a apelar, una vez cubierto este requisito por el dictamen del Procurador General de la Corte de Apelación, como es el caso, por argumento a fortiori, no ha lugar para anular por esa razón, la sentencia impugnada, motivo éste que suple la Suprema Corte de Justicia por ser de puro

derecho. (Cámara Civil, 20 de enero de 1999; B. J. 1058, Pág. 79).

61.2 Divorcio. Artículo 215 del Código Civil. Demanda en nulidad.

Que para decidir si la acción ejercida por el recurrente era admisible o no, a los términos del artículo 215 del Código Civil, modificado por la Ley No. 855 del 22 de julio de 1978, no bastaba al Tribunal a-quo con expresar como lo hace en el último Considerando de la sentencia impugnada "que por haberse pronunciado el divorcio entre los esposos Ramón Ernesto Sánchez Sierra y Angela Candelario De la Cruz, el 14 de septiembre de 1982, no hay dudas de que la demanda en nulidad del acto de venta, es inadmisibile, en vista de que fue interpuesta después de haber transcurrido los plazos hábiles para hacerlo", sin hacer mención alguna del momento en que el recurrente tuvo conocimiento de esa venta, ni fundamentalmente de la fecha en que quedó consumada la disolución del régimen matrimonial entre dichos esposos y aquella en que él ejerció su demanda en nulidad; que en tales circunstancias es evidente que los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley, no se hallan presentes en la decisión impugnada, sobre todo tratándose de hechos decisivos para la suerte de la litis; que en esas condiciones la Suprema Corte de Justicia, no puede verificar si la ley ha sido o no correctamente aplicada, por lo que la sentencia recurrida carece de base legal y en consecuencia debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 27 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 620 y 621).

61.3 Divorcio. Juzgado de Paz. Incompetencia para ordenar el retiro de bienes en beneficio de una parte.

Considerando, que el artículo 215 de la Ley 845 de 1978 dice así: "Los esposos no pueden, el uno sin el otro, disponer de los derechos sobre los cuales está asegurada la vivienda de la familia ni de los muebles que la guarnecen"; y el artículo 216 de la misma ley le da facultad al juez de los referimientos para prescribir las medidas que requieran esos intereses, no al juez de paz. (Cámara Penal, 18 de agosto de 1999).

62. DOCUMENTOS:

62.1 Documentos. Depósito. Artículos 508 y 544 del Código de Trabajo.

Considerando, que el artículo 508 del Código de Trabajo, al disponer que el demandante depositará conjuntamente con el escrito contentivo de la demanda los documentos que la justifiquen, utiliza el término, "si los hay", lo que determina que la exigencia no es a pena de inadmisibilidad, sino que tiene por finalidad preservar el derecho de defensa del demandado y la celeridad que prima en el proceso laboral.-

Considerando, que el artículo 16 del Código de Trabajo dispone que "las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios, por lo que no es posible impedir a una parte probar los hechos en que fundamenta sus pretensiones por cualquier medio, bajo el fundamento de que con su escrito inicial no depositó documentos justificativos de la

demanda o de su defensa, lo que pudo haber ocurrido por la inexistencia de documentos que fundamenten la demanda".-

Considerando, que si bien el artículo 544 del Código de Trabajo dispone que a una parte solo se le autorizará la producción de documentos posterior al depósito del escrito inicial, cuando demuestre que a la fecha del escrito inicial no haya podido producirlo y que con dicho escrito hubiere hecho reserva de solicitar su admisión en el curso de los procedimientos, o cuando se trate de un documento originalmente desconocido por la parte que solicita su depósito ulterior o que tuviere una fecha posterior a la del depósito del escrito inicial, ella no autoriza a la contraparte a solicitar a "prima facie", que el juez decida rechazar cualquier documento o medio de prueba que en el futuro pudiese pretender utilizar el interesado, pues el procedimiento para planear ese rechazo debe ser cumplido en el momento en que la parte pretenda utilizar un documento fuera de los plazos establecidos por la ley, solicite la autorización al tribunal, o en ocasión de un depósito realizado fuera de tiempo, sin cumplir con el procedimiento establecido a estos fines.-

Considerando, que en la especie, el tribunal actuó correctamente al rechazar la inadmisibilidad planteada por el recurrente y sus pretensiones de que se le cerraba al demandante la posibilidad de depositar documentos en el futuro, sin la previa ponderación que exige el artículo 544 del Código de Trabajo, por lo que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser rechazados". (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J.1047. Págs. 307-308).

62.2 Documentos no ponderados por el tribunal. Casación de la sentencia.

Considerando, que de conformidad con las previsiones del artículo 186 de la Ley No. 6186, sobre Fomento Agrícola, aplicable al contrato suscrito entre las partes, las causas que pueden producir el vencimiento del préstamo con prenda sin desapoderamiento y, por tanto, la exigibilidad inmediata de su pago están, en principio, consignadas en ese texto legal, sin embargo, la sentencia impugnada se limita a decir, que por el recurrente no haber cumplido con lo establecido en el contrato, el ingeniero N. S. y la compañía J. A. P. iniciaron su ejecución, sin indicar ni precisar en qué consistía el incumplimiento imputado al recurrente; que tampoco pondera la sentencia la circunstancia de que en fecha 7 de diciembre de 1993, el Juzgado de Paz de Municipio de Las Matas de Santa Cruz, dispusiera el descargo del recurrente después de haber sido sometido por los recurridos por violación a la Ley No. 6186, descargo que tuvo como fundamento, según lo expresa la propia sentencia impugnada, el recibo del 23 de agosto de 1993, que comprueba que el recurrente liquidó su cuenta de arroz con la J. A. P.; que la corte a-quo falló el asunto sin determinar la incidencia que esos documentos, no discutidos por los recurridos, hubieran tenido en la suerte del litigio, si se hubieran ponderado en todo su alcance, particularmente la de saber si el recurrente era o no deudor y, por tanto, pasible de la persecución de que fue objeto; que en estas condiciones en que la corte a-quo no

ha justificado ni lo decidido, es evidente que tal situación no permite a la Suprema Corte de Justicia ejercer su control y verificar, como Corte de Casación, si en el caso se hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que la sentencia impugnada deber ser casada por falta de base legal, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 14 de enero de 1998; Boletín Judicial No. 1046 Págs. 131-132). En igual sentido, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 377).

63. DOLO:

Dolo. Facultad de los jueces. Distinción.

Considerando, que si bien los jueces del fondo aprecian soberanamente los hechos constitutivos del dolo personal, o la recuperación de documentos considerados decisivos, sin estar sujetos al control de la Corte de Casación, tratándose del dolo atribuido a un tercero, como es el caso, no procede el recurso de revisión civil sino, en todo caso, la acción en daños y perjuicios, a menos que se pruebe que el tercero, si bien no ha practicado el dolo personalmente, ha participado en él o lo ha favorecido, situación ésta que no comprobó ni estableció la Corte a-quo en la sentencia impugnada, lo que hubiera podido justificar, frente a las disposiciones de la Ley de Registro de Tierras, la mala fe del recurrente, en el hecho del dolo personal. (Cámara Civil, 30 de junio de 1999; B. J. 1063. Pág. 352).

64. DOMICILIO:

64.1 Domicilio de elección. Artículo 111 del Código Civil. Notificación de una sentencia.

Considerando, en cuanto a lo alegado en las letras c), e) y f), que si bien el artículo 111 del Código Civil autoriza a los interesados a hacer las notificaciones, demandas y demás diligencias en el domicilio de elección cuando un acta contenga lo así convenido, las disposiciones del referido texto legal no son aplicables en la especie ya que la notificación de una sentencia para que haga correr el plazo de la apelación o de la casación debe hacerse a persona o a domicilio y no en el domicilio elegido por la parte a quien es dirigida la notificación, en caso de que esto se hubiere hecho; que como lo apreció la Corte a-quo, la notificación que se hizo tanto en el estudio del Lic. Blas E. Santana, abogado de la parte embargada, como en la persona de un vecino sin que éste firmara el original, es nula por esos motivos, y no pudo, en consecuencia, servir de punto de partida para hacer correr el plazo del recurso de apelación; que habiendo interpuesto la recurrida su recurso cuando aún no se había iniciado el referido plazo, dicho recurso fue notificado en tiempo hábil, por lo que los citados alegatos carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, en lo que respecta a lo expresado en la letra g) que las disposiciones del artículo 68 (no 69 como señala el recurrente) del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los emplazamientos deben notificarse a la misma persona, o en su domicilio, cuando la persona tenga su domicilio y residencia en la República, son aplicables a la notificación de una sentencia para que

haga correr el plazo del recurso que corresponda; que tal solución se impone por la necesidad de preservar el derecho de defensa de la parte que sucumbe, expuesta a ver declarar su recurso caduco o inadmisibile, si por desconocimiento de la sentencia que le es adversa, lo interpone tardíamente. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 78).

64.2 Domicilio desconocido. Notificación. Artículo 69 párrafo séptimo del Código de Procedimiento Civil.

(Ver: Sentencia. Notificación. Punto de partida del plazo para los recursos. Domicilio desconocido. Artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil. Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B.J. 1050. Págs. 214-215).

65. DROGAS:

65.1 Drogas y sustancias controladas. Arrestos investigativos.

Considerando, que ni los agentes de la Policía Nacional, ni los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas pueden ser impedidos de practicar arrestos investigativos; que incluso están autorizados a arrestar durante 48 horas, si el caso lo amerita, mientras llevan a cabo las indagatorias preliminares de un crimen o un delito, para lo cual no necesitan la presencia de un representante del Ministerio Público, lo que sí sería imprescindible si fueren a realizar un allanamiento o requisa en una casa habitada, un establecimiento industrial, comercial, profesional, etc., o cualquier otro lugar privado; por lo que procede rechazar el medio que se examina. (Cámara Penal, 9 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 198).

65.2 Drogas. Valor en el mercado de una cantidad de droga.

Que lo que el recurrente estima, y es lo que considera criticable en la sentencia, que la droga incautada tenía un valor superior a los RD\$50,000.00, pero ésto constituye una cuestión de hecho soberanamente apreciada por los jueces de fondo, ya que los valores de las drogas en el comercio son aleatorios y de difícil estimación, por la forma oculta con que generalmente se negocia ese tipo de actos deleznable. (Pleno, 10 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 47).

E

66. ELECTA UNA VIA:

Electa una vía. Condiciones.

Considerando, que ciertamente la regla "electa una vía no datur recursus at alteran", tiene su vigencia y aplicación cuando sobre la base de un mismo hecho que tiene características penales se ha iniciado primero la acción civil, y por tanto ya no se puede apoderar la jurisdicción penal, porque esto agravaría la situación del procesado, pero nada impide que se inicie una demanda en cobro de pesos, basado en un préstamo, que es lo que está en la jurisdicción civil, y que posteriormente, debido al surgimiento de maniobras fraudulentas, se presenta una querella penal;

Considerando, que en la especie, el señor Felicio Nicoldi se querelló contra Enio Scolari y Rinalda Rosa, porque estos alegadamente incurrieron en maniobras para engañar al querellante, todo lo cual representa dos situaciones totalmente distintas, una el dinero, fundada en un contrato de naturaleza puramente civil, como es el préstamo, y la otra consistente en lo que el querellante entiende que fueron maniobras fraudulentas, valiéndose de calidades falsas, para estafar el dinero que fue entregado a los inculpadados, fundando una compañía que a juicio del querellante sólo tuvo el propósito de cohonestar un despojo, y que eso es precisamente lo que

debe determinar la Cámara Penal de la Corte de Apelación apoderada;

Considerando, que por tanto ambas acciones pueden coexistir y tomar rumbos diferentes, toda vez que no tienen su origen única y exclusivamente en un hecho incriminado, caso en que sí procedería la aplicación de la máxima cuya violación se alega, por lo que procede rechazar el medio propuesto, al obrar correctamente la Corte a-qua. (Cámara Penal, 11 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 257 y 258).

67. EMBARAZO:

67.1 Embarazo.

(Ver: Despido. Nulidad. Artículo 233 del Código de Trabajo. Embarazo. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 596).

67.2 Embarazo. Artículo 232 del Código de Trabajo. Notificación al empleador.

Considerando, que de acuerdo al artículo 232, del Código de Trabajo, "es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el período de gestación de la trabajadora y hasta tres meses después de la fecha del parto. La trabajadora debe notificar su embarazo al empleador, por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha presumible del parto";

Considerando, que tal como se observa de la disposición anterior citada, no basta que una trabajadora demuestre su estado de embarazo para que el desahucio ejercido

por el empleador sea declarado nulo, sino que es necesario además, la prueba de que esta comunicó a su empleador su estado;

Considerando, que la sentencia impugnada, aunque admite la obligación de la recurrida de comunicar su estado de embarazo al recurrido, no indica si esa comunicación se produjo y por que medios de pruebas se estableció que el demandado tuvo conocimiento del estado de gestación de la demandante, limitándose a señalar que "se ha podido demostrar que ciertamente estamos en presencia de una demanda por desahucio ejercido por el empleador contra la demandante original y hoy recurrida", pero sin entrar en el análisis de las pruebas aportadas por las partes, en caso de que se hubieren producido esas pruebas;

Considerando, que la sentencia impugnada no contiene una relación completa de los hechos de la causa, ni motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede su casación. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 10 de marzo de 1999; B.J. 1060. Págs. 677 y 678).

68. EMBARGO:

68.1 Embargo Inmobiliario. Incidentes. Artículo 734 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, que está bajo el título XIII del Libro V, primera parte que se refiere a los incidentes del embargo inmobiliario, establece que si la falsa subasta se

requiriese antes de la entrega de la sentencia de adjudicación, el que la promueva se hará entregar por el Secretario una certificación en que conste que el adjudicatario no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigibles de la adjudicación. En caso de que haya habido oposición a la entrega de la certificación, se fallará en referimiento por el Presidente del Tribunal y a pedimento de la parte más diligente;

Considerando, que en la sentencia impugnada se expresa al respecto que lo que establece el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil es que quien promueva la falsa subasta "se hará entregar por el secretario una certificación en que conste que el adjudicatario no ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigidas en la adjudicación", "que en caso de que haya habido oposición se fallará en referimiento", que es evidente que dicho artículo no prohíbe al Secretario entregar la primera copia de la sentencia cuando dicha copia le ha sido solicitada y que en todo caso sería una actuación administrativa que escapa a su competencia en razón del orden disciplinario de los empleados judiciales; (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 619).

68.2 Embargo inmobiliario. Oposición al mandamiento de pago.

Considerando, que la demanda en oposición al mandamiento de pago no es un incidente del embargo inmobiliario cuando ésta ha sido incoada antes del embargo haber sido notificado al embargado y ambas actuaciones transcritas o registradas en la Conservadu-

ría de Hipotecas o en el Registro de Títulos del Distrito Judicial donde radican los bienes embargados, según se trate de inmuebles no registrados o registrados, de acuerdo con la Ley de Registro de Tierras; que cuando la demanda se inicia después de realizadas las indicadas diligencias, o si el oponente presenta conclusiones tendentes a la nulidad del embargo practicado no obstante su oposición, dicha demanda pierde el carácter de instancia principal y se convierte en un incidente del embargo. (Cámara Civil, 1 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 57).

68.3 Embargo retentivo. Tercero embargado. Artículos 569 y 577 del Código de Procedimiento Civil. Demanda en validación y demanda en declaración de deudor puro y simple.

Considerando, que de conformidad con el artículo 569, modificado por la Ley No. 138 del 2 de mayo de 1971, del Código de Procedimiento Civil: "Los funcionarios públicos, bancos e instituciones de crédito mencionados en el artículo 561 no serán citados en declaración afirmativa; pero estarán obligados a expedir una constancia si se debiere a la parte embargada, con indicación de la suma debida, si fuere líquida, cuando tal constancia le sea requerida por el embargante, siempre que exista título auténtico o sentencia que declaren la validez del embargo"; que no obstante no existir título auténtico, puesto que fue necesario que los embargos fueran practicados con autorización del Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, ni sentencia que declarara su validación, pues la demanda a esos fines fue sobreseída por ese tribunal, el banco

recurrente, por intermedio de sus abogados, comunicó el mismo día del embargo, al abogado de la embargante Belkis Dilis Pérez Recio de Puente, mediante la expedición de la constancia correspondiente, que en esa institución bancaria la compañía embargada no mantenía cuentas de ningún género, ni valores ni efectos mobiliarios e inmobiliarios y que no era deudora de la embargada, todo lo cual figura en la sentencia recurrida; que al tenor de la citada disposición legal, el banco en su condición de tercero embargado, independientemente de que la constancia expedida fuese falsa o dolosa, como alega la recurrida, dio cumplimiento a la obligación, que en su indicada calidad, le imponía el citado artículo 569, a pesar de que en el caso los requisitos requeridos por este texto legal, no estaban presentes;

Considerando, que, por otra parte, de acuerdo con el artículo 577 del Código de Procedimiento Civil: "El tercer embargado que no hiciere su declaración, o que no presentare las comprobaciones ordenadas en los artículos anteriores, será declarado deudor puro y simple de las causas de embargo"; que, como se ha visto, la Corte a-quo al dictar su sentencias se basó en las disposiciones de los artículos 569 y 577 del mencionado código; que el último de éstos debe ser interpretado restrictivamente en razón de la penalidad que el mismo pronuncia en contra del tercero embargado en falta; que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia que el citado artículo 577 no es aplicable fuera de los casos especiales que él prevé: ausencia de declaración afirmativa o la no presentación de las piezas justificativas; que en ese orden, la inexactitud o la falsedad de que pueda adolecer la declaración del tercero embargado no tiene el mismo efecto que la ausencia de declaración

pues ellas no convierten al tercero embargado en deudor puro y simple de las causas de embargo; que como la demanda decidida en segundo grado por la sentencia objeto del presente recurso se fundamenta no en la ausencia de declaración del tercero embargado ni en la ausencia de los justificativos correspondientes, caso en que sí podría el tercero embargado ser declarado deudor puro y simple de las causas del embargo, sino en que la declaración afirmativa hecha por el banco fue dolosa o dada para perjudicar al embargante, lo que, además, quedó desvirtuado, según la propia sentencia impugnada, con la certificación del Superintendente de Bancos del 14 de septiembre de 1992, resulta evidente que la Corte a-quo hizo una falsa aplicación de los referidos artículos 569 y 577 del Código de Procedimiento Civil, el último de los cuales, por ser una disposición de derecho estricto, no podía ser extendida a otros casos que los previstos en la ley, por lo que la sentencia recurrida debe ser casada por haber incurrido en las violaciones denunciadas, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 13 de octubre de 1999).

69. EMPLAZAMIENTO:

69.1 Emplazamiento. Artículos 68 y 70 del Código de Procedimiento Civil. Notificación.

Considerando, que el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil declara la nulidad de los actos de emplazamiento que no han sido hechos de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68 del mismo código; que esta disposición establece que los emplazamientos deben

notificarse en la misma persona o en su domicilio, o en su lugar, en manos de sus parientes, empleados o sirvientes; que constituyen igualmente emplazamientos, no sólo la notificación del acto introductivo de la demanda en justicia con la cual se inicia una litis, sino también el acto introductivo del recurso. (Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 85).

69.2 Emplazamiento. Demandado residente en el extranjero. Artículo 73, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. Emplazamiento en la octava franca. No hay nulidad sin agravio.

Considerando, que en su primer medio el recurrente alega que se ha violado el artículo 73, inciso 2, del Código de Procedimiento Civil, ya que dos de los inquilinos residentes en el extranjero fueron emplazados en la octava franca legal, "por lo cual el acto de que se trata es nulo", pero,

Considerando, que se ha podido comprobar por el estudio del expediente que dichos inquilinos tuvieron la oportunidad de constituir abogado en el término de 43 días, transcurridos entre la demanda introductiva que fue notificada en manos del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, el 20 de junio de 1995, y la primera audiencia celebrada por el tribunal apoderado del asunto, la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el 2 de agosto de 1995, o sea, en un período de tiempo mucho más amplio que el plazo de 15 días que requiere la ley, para el emplazamiento de quienes residen en los Estados Unidos de América.-

Considerando, que en el caso de la especie, procede reiterar que la máxima "no hay nulidad sin agravios", constituye en el estado actual de nuestra legislación la expresión de un principio general que el legislador ha consagrado, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, que por consiguiente, sin preocuparse de la importancia objetiva de la formalidad omitida o irregularmente consignada en un acto de procedimiento, los jueces de fondo deben, en cada caso, investigar si la irregularidad del acto ha perjudicado los intereses de la defensa, circunstancia que en la especie fue debidamente ponderado por la corte a-quá, la cual comprobó que los recurrentes no sufrieron ningún perjuicio como consecuencia de la irregularidad de la notificación del emplazamiento, pues tuvieron oportunidad de defenderse de la demanda de que se trata, al igual que sus parientes, cónyuge superviviente, y sucesores del señor C. S. S. F., inquilino originario, que por tanto la nulidad propuesta en su primer medio por el recurrente carece de fundamento y debe ser desestimada. (Cámara Civil y Comercial, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 103-104).

69.3 Emplazamiento. Notificación al domicilio de elección.

Considerando, que las formalidades prescritas a pena de nulidad por los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil para la redacción y notificación del acto de emplazamiento, tienen por finalidad asegurar que el recurrido reciba a tiempo el referido acto y produzca oportunamente su defensa; que en ese orden, los emplazamientos deben notificarse a la misma persona, o en su domicilio; que ese requisito se cumple cuando,

como lo autoriza el artículo 111 del Código Civil, la notificación se hace en el domicilio de elección y no en el domicilio real. (Cámara Civil, 24 de julio de 1998; B. J. 1051. Pág. 146).

70. EMPLEADOR:

70.1 Empleador. Dueño de la empresa. Artículo 3 del Código de Trabajo. Solidaridad.

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Corte, que los trabajadores no están llamados a saber cual es el dueño de la empresa en donde realizan sus labores, sobre todo cuando éstas se presentan y actúan a través de una tercera persona o el nombre de un establecimiento comercial, lo que permite que estos puedan demandar a la persona o establecimiento que actúa como tal, con lo que se ha conformado lo que es el empleador aparente; que a los fines del imperio de la justicia, de nada serviría permitir que los trabajadores hicieren la demanda en tal condición, si los resultados de la misma no se aplicaran contra el empleador real, pues ello produciría la obtención de una sentencia en contra de personas o establecimientos carentes de solvencia económica y la consecuente imposibilidad de ejecución de los fallos condenatorios.

Considerando, que de acuerdo al artículo 3 del Código de Trabajo, el "Establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma, se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa", por lo que debe asimilarse en las situaciones arriba señaladas, la solidaridad que aplica el artículo 12 del Código de Trabajo, entre el contratista o empleador

principal, con las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de diciembre de 1999).

70.2 Empleador. Nombre comercial. Consecuencia.

Considerando, que es criterio de esta Corte que cuando un empleador, ya fuere una persona física o moral, utiliza, frente a la comunidad y a sus trabajadores, un nombre comercial para identificar a la empresa, las demandas que se lancen contra ese nombre comercial y las sentencias que se obtengan como consecuencia de las acciones ejercidas contra él, afectarán al empleador, quien deberá responder de las mismas, siempre que se le garantice su derecho de defensa. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de diciembre de 1999).

70.3 Empleadores demandados. Solidaridad. Artículo 13 del Código de Trabajo. Condiciones.

Considerando, que para considerar empleadores a los diversos demandados, la sentencia impugnada, entre otras razones señala la aplicación del artículo 13 del Código de Trabajo, que establece la solidaridad entre las empresas que constituyen un conjunto económico; que no basta la existencia de empresas que conformen un conjunto económico para que estas sean solidarias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores, sino que se requiere además la existencia de un fraude en perjuicio de los trabajadores, fraude este

que como tal no se presume y debe ser demostrado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 636).

71. EMPRESAS PUBLICAS:

71.1 Empresas Públicas. Artículo 4 de la Constitución. Ley 141-97. Alegato de violación a la separación de poderes.

Considerando, por otra parte, que los artículos 12, 13 y 16 de la Ley No. 141-97, imputados por los impetrantes como violatorios del principio de la separación de los poderes y de la indelegabilidad de sus atribuciones, se refieren a la forma y manera en que el Poder Ejecutivo podrá proceder a la capitalización prevista en esa ley; que, contrariamente a lo así alegado, el Congreso Nacional lejos de infringir esos principios al dictar la Ley No. 141-97, puso en práctica la atribución que le asigna la Constitución, precisamente en el artículo 37, párrafo 4, de proveer a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, como son las empresas públicas comprendidas en el artículo 3 de la indicada Ley No. 141-97. (Pleno, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 58).

71.2 Empresas Públicas. Conversión en sociedades anónimas. Ley 141-97.

Considerando, que en lo que concierne a que "el Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista", interpretado por los impetrantes en el sentido de que sólo eso es posible hacer con las empresas del Estado y sus instituciones,

esta Suprema Corte de Justicia es del criterio que el artículo 8, numeral 13, letra b) de la Constitución, contenido de la norma acabada de transcribir, no es excluyente de otras prerrogativas y facultades que tiene el Estado como propietario de bienes muebles e inmuebles, si no les han sido retiradas de manera expresa por la Constitución o la ley; que en apoyo de esta interpretación, contraria obviamente a las deducciones hechas por los impetrantes, se destaca la circunstancia de que la fórmula utilizada por la Constitución en la norma que expresa que "el Estado podrá convertir sus empresas...", reaparece varias veces en el propio artículo 8 de la Constitución, como cuando en el numeral 6 de éste artículo se establece que "toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento..." o cuando expresa en el numeral 11 que "la ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo", sin que ello implique limitación alguna a la persona de ejercer otros derechos o a la ley establecer otras reglas, siempre que no sean de la competencia de otro Poder del Estado, o contrarias a la Constitución; que, si el constituyente hubiera tenido la intención de que las empresas del Estado no pudieran ser convertidas sino en propiedades de cooperación o economía cooperativista, el artículo 8, párrafo 13, letra b) de la Constitución, habría sido redactado en otros términos, haciendo constar que el Estado podrá convertir sus empresas únicamente en propiedades de cooperación o economía cooperativista. (Pleno, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 57-58).

71.3 Empresas Públicas. Ley 141-97.

Considerando, que las empresas públicas sujetas a la

aplicación de la Ley No. 141-97, del 24 de junio de 1997, según el artículo 3 de la misma son: Las que integran la Corporación Dominicana Empresas Estatales (CORDE), Corporación Dominicana de Electricidad, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar, las cuales son susceptibles, de conformidad con el artículo 16 de dicha ley, de ser capitalizadas por inversionistas nacionales y/o extranjeros, objeto de concesiones, arrendamiento o sus acciones transferidas y/o activos vendidos en la proporción de un cincuenta (50 %) por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, en cada caso;

Considerando, que las empresas públicas que son parte del patrimonio de cada una de las entidades mencionadas, si bien algunas de ellas pueden ser calificadas como de servicio público, como la Corporación Dominicana de Electricidad, no por ello pierden su condición de pertenecer a la masa de bienes que integran el dominio privado del Estado, los cuales, conforme al artículo 37, párrafo 4, in fine, de la Constitución, son enajenables, en la forma indicada por ésta; que, como ya se ha señalado, los bienes del dominio público son establecidos por la ley, y ésta no lo ha consagrado así con respecto a ninguno de los bienes que componen los activos de las empresas sujetas a la aplicación de la denominada Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97; que aún en el caso de que esos bienes no sean susceptibles de propiedad particular porque la ley los haya considerado como dependientes del dominio público, el hecho de que el mismo poder que los erigió como tales les haya retirado ese status, como ocurre con las Leyes Nos. 208, del 2 de abril de 1964 y 141-97, del 24 de junio de 1997, las cuales

permiten la enajenación, constituye la desafectación o liberación del dominio público a que estaban sometidos. (Pleno, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 56-57).

72. ERROR MATERIAL:

72.1 Error material. Error en cuanto al nombre. Artículo 205 de la Ley sobre Registro de Tierras.

Considerando, que el artículo 205 de la Ley de Registro de Tierras en el cual fundamentó su decisión el Tribunal Superior de Tierras, faculta a éste, a solicitud de los Registradores de Títulos o de las personas interesadas, a ordenar la enmienda de un Certificado de Título o de una anotación en el mismo, cuando se demuestre que en sus enunciaciones figuran derechos a cargas ya extinguidas, o que se habían adjudicado derechos o gravámenes que no se habían registrado; o por haber comprobado la existencia de un error puramente material; o por haberse cambiado el nombre o el estado civil de una persona, o por cualquier otro motivo razonable"; que, en la especie el Tribunal a-quo estableció la existencia de un error material en el nombre del solicitante que lo autoriza a hacer la corrección correspondiente a favor de Hilario de Jesús José, sin que ella constituyera modificación alguna de la decisión que tenía ya la fuerza y la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, puesto que el peticionario se limitaba a solicitar que en el Decreto de Registro relativo a la Parcela de que se trata, se enmendara su nombre, que aparecía incorrectamente como Claudio de Jesús, en lugar de Hilario de Jesús José, que es el correcto. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de abril de 1998; B. J. 1049. Págs. 619-620).

72.2 Error Material. Corrección. Artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras.

Considerando, que si de conformidad con lo que dispone el artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras, el Tribunal Superior puede ordenar, aún de oficio, la corrección de los errores puramente materiales que hayan podido deslizarse en la sentencia final del saneamiento, en el Decreto de Registro o en el Certificado de Título, por el contrario dicho Tribunal no está facultado, en forma alguna, para alterar el contenido jurídico de su decisión acerca del saneamiento puesto que la misma es terminante, oponible a todo el mundo y purga o extingue todo interés o derechos contrarios a los del reclamante, cuyas pretensiones en el proceso de saneamiento fueron acogidas; que, por lo tanto, salvo la posibilidad de un recurso de Revisión por Causa de Fraude, como se ha expresado antes, resulta inadmisibile toda pretensión que tienda a reivindicar extemporáneamente derechos que se alegue existían o se tenían antes de que se terminara el proceso de saneamiento, como ocurre en el presente caso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de julio de 1998; B.J. 1052. Pág. 514).

73. ESTADO:

73.1 Estado. Bienes del dominio público y del dominio privado. Distinción. Posibilidad de enajenación.

Considerando, que la disposición contenida en el artículo 38, párrafo 4to., de la Constitución de 1962, vigente cuando fue promulgada la Ley No. 208, y que se ha

mantenido en las diversas reformas, incluida la última de 1994 (art. 37, párrafo 4to.), introducidas al Estatuto Orgánico de la Nación, confiere al Congreso la atribución de determinar lo conveniente para la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y para la enajenación de los bienes del dominio privado de la nación; que de lo anterior se infiere que el constituyente al adoptar ese texto dividió los bienes del Estado en dos grandes categorías: aquellos sujetos sólo a conservación y fructificación y los susceptibles de enajenación o del dominio privado; que si bien la expresión "bienes nacionales" es genérica y debe comprender a todos los bienes del estado y dentro de ellos los del dominio privado, que son una especie, es innegable que el constituyente cuando se refiere en el citado texto a "la conservación y fructificación de los bienes nacionales", está aludiendo a los que forman el dominio público, pues de lo contrario no hubiese hecho la distinción de poner a cargo del Congreso proveer a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, lo que significa, en otros términos, que corresponde al Congreso trazar las reglas de enajenación respecto de los bienes que integran la masa de bienes que constituyen el dominio privado;

Considerando, que integran el dominio privado del Estado, el conjunto de bienes de su pertenencia que, sujetos a ciertas reglas y modalidades, están sometidos al mismo régimen jurídico que los bienes de los particulares y, por tanto, son enajenables, en tanto que, los bienes del dominio público son aquellos inmuebles que deben estar permanentemente a disposición del público o de ciertos servicios públicos y, por tanto, son inajenables; que la enumeración de los bienes que

constituyen el dominio público en la República Dominicana, no es hecha por la Constitución sino por el Código Civil y leyes especiales, como se indica, por ejemplo, en los artículos 538 al 541 de dicho código; que en la enumeración contenida en estos textos legales ni en la Ley No. 208, de 1964, que modifica la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad, ni en ninguna otra disposición legislativa, se reconoce a esa empresa autónoma como que forma parte del dominio público del Estado, lo cual se robustece por el hecho de que la misma Ley No. 208, de 1964, faculta en su artículo 9, párrafo j) al Consejo Directivo de la mencionada Corporación, como se ha visto arriba, a, entre otras cosas, enajenar y transferir el dominio de toda clase de bienes muebles e inmuebles de la indicada entidad, texto este último que equivale, en caso de que existiera, a una desafectación del dominio público. (Pleno, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 54-55).

73.2 Estado Dominicano. Enajenación Inmobiliaria. Aprobación del Congreso Nacional.

Considerando, en cuanto al aspecto alegado en la letra a) que, en efecto, el inciso 10 del artículo 55 de la Constitución dispone: "Corresponde al Presidente de la República: celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro..."; que por su parte, el inciso 19 del artículo 37 de la misma Constitución también dispone: "Son atribuciones del Congreso: Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República de conformidad con el inciso 10 del artículo

55 y con el artículo 110"; que, como puede observarse, las disposiciones constitucionales alegadamente violadas y que se transcriben más arriba, se refieren a enajenaciones de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro, sin señalar la forma y condiciones en que estas fueran consentidas por el Presidente de la República, siendo de la soberana apreciación del Congreso Nacional, impartirle o no su aprobación a la enajenación inmobiliaria que para esos fines le someta el Poder Ejecutivo; que a mayor abundamiento, las reglas establecidas por el Código Civil para la compraventa son las mismas que rigen para la permuta, excepto en lo que concierne al precio, de lo que resulta que al tenor de lo establecido en el artículo 1703 del Código Civil, el cambio o permuta se efectúa por el sólo consentimiento, de la misma manera que la venta, como ha ocurrido en la especie. (Pleno, 6 de agosto de 1998. B. J. 1053. Pág. 8).

73.3 Estado. Entidades autónomas. Instituto Agrario Dominicano. Ley 1486 de 1938.

Considerando, sin embargo, que la Ley No. 1486 del 28 de marzo de 1938, en todo su contexto, está destinada a reglamentar la representación del Estado en los actos jurídicos y en justicia; que el Estado Dominicano, como persona moral de derecho público, si bien realiza sus fines a través de sus funciones administrativa, judicial y legislativa, existen dentro de la administración ciertos órganos con autonomía y poder de decisión, sin sujeción a un superior jerárquico, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, por ser sujeto de derechos en virtud de la Constitución o de la ley de su creación, pueden demandar y ser demandados, con independencia del Estado, como es el caso del Instituto

Agrario Dominicano, creado por la Ley No. 5879, del 27 de abril de 1962, sin que para ello sea necesario dar cumplimiento a los requisitos que son requeridos por la Ley No. 1486, de 1938, para actuar judicialmente contra el Estado. (Pleno, 14 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 35).

73.4 Estado. Representación. Ley 14-86 de 1938.

Considerando, que en virtud de lo previsto por la Ley No. 1486 del 1938, sobre Representación del Estado en los actos jurídicos, el Presidente de la República procedió a otorgar poder especial en fecha 3 de julio de 1997, al administrador general de Bienes Nacionales, para que en nombre y representación del Estado Dominicano, suscribiera un contrato de permuta condicional con la firma Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A., contrato que fue suscrito el 19 de agosto de 1997 y aprobado por el Congreso Nacional, en fechas 7 y 12 de enero de 1998, respectivamente, mediante resoluciones del Senado y de la Cámara de Diputados de la República Dominicana con lo cual se le dio estricto y formal cumplimiento a las disposiciones del citado artículo 55, numeral 10, así como al artículo 37, numeral 19, de la Constitución Dominicana, que faculta al Congreso para "aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República de conformidad con el inciso 10, del artículo 55 y con el artículo 110"; por lo que con esta aprobación, dicho contrato adquirió fuerza de ley para las partes contratantes, en virtud del principio general previsto por el artículo 1134 del Código Civil Dominicano. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de septiembre de 1999).

74. EXCEPCION NON ADIMPLETI CONTRACTUS:

Excepción Non adimpleti contractus. Aplicación.

Considerando, que es posible considerar, en uso del poder creador del derecho que tiene esta Corte de casación como parte de nuestro derecho positivo y como principio general, el de la interdependencia de las obligaciones en el contrato sinalagmático, del cual la jurisprudencia deduce la posibilidad para el acreedor que no ha obtenido la ejecución, de oponer la excepción "non adimpleti contractus" y de ese modo suspender su propia ejecución; que como en la especie las partes convinieron un negocio en que cada una asumió una obligación distinta contenidas en un contrato de compraventa de equipos, la aplicación de la excepción es perfectamente aplicable para el caso en que una parte no de cumplimiento a la suya, por lo que procede desestimar los medios de casación que se examinan por improcedentes y mal fundados. (Cámara Civil, 30 junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 342-343).

75. EXTRADICION:

75.1 Extradición. Ley 489 de 1969, modificada por la Ley 278 de 1998. Facultad del Presidente de la República.

Considerando, que si bien es cierto que conforme al artículo 4 de la Ley No. 489, de 1969, sobre Extradición, modificado por la Ley No. 278-98, del 29 de julio de 1998, el Poder Ejecutivo es competente para conceder la extradición de un dominicano en los casos en que exista convenio de extradición entre el Estado requeriente y el

Estado Dominicano, como ocurre en el presente caso, y cuando la solicitud del Estado requeriente se refiera, entre otros casos, al tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, así como al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cubierto por la Convención de Viena de 1998, de la cual es signataria la República Dominicana, no es menos cierto que los artículos XII del Tratado de Extradición antes mencionado y X de la Convención sobre Extradición de la Séptima Conferencia Internacional Americana, ratificada por Resolución del Congreso Nacional No. 761, del 10 de octubre de 1934, la detención de la persona acusada y requerida en extradición, podrá ser en virtud del mandamiento u orden preventiva del arresto dictado por autoridad competente según se dispone en el artículo XI del Tratado de Extradición citado, por un período que no exceda de dos meses, a fin de que el gobierno requeriente pueda presentar ante el Juez o Magistrado la prueba legal de la culpabilidad del acusado, y si al expirar el período de dos meses no se hubiese presentado ante al Juez o Magistrado, esta prueba legal, la persona detenida será puesta en libertad. (Pleno, 3 de noviembre de 1999).

75.2 Extradición. Facultad del Procurador General de la República para dictar mandamiento.

Considerando, que si bien es cierto que el Procurador General de la República en virtud del Tratado de Extradición a que se ha hecho referencia es autoridad competente para dictar mandamiento u orden preventiva de arresto para los casos que prevé dicho convenio o tratado, no es menos cierto que el arresto deviene ilegal si transcurren dos meses sin que el Estado requeriente aporte la prueba de la culpabilidad del acusado; que,

como en la especie, han transcurrido, a la fecha de hoy mas de dos meses de la detención del impetrante, sin que haya constancia en el expediente de que se aportara la prueba legal de la culpabilidad del impetrante ni de que se estuviese continuando el examen de los cargos aducidos contra él, procede su inmediata puesta en libertad. (Pleno, 3 de noviembre de 1999).

F

76.- FALTA:

76.1 Falta. Falta de base legal. Características.

Considerando, que en cuanto al alegato de que la Corte a-quo incurrió en el vicio de falta de base legal, en razón de que la sentencia impugnada debió previamente a fallar como lo hizo, declarar la competencia del tribunal de primer grado y su propia competencia; que la falta de base legal la constituye una insuficiencia de motivación de la decisión atacada que no permite a la Corte de Casación controlar la regularidad de la decisión o más precisamente verificar que los jueces del fondo han hecho una aplicación correcta de la regla de derecho; que la Corte a-quo no tenía que dar motivos específicos sobre su competencia, declarada implícitamente por ésta, pues no fue controvertida por la intimante y proponente en primera instancia, como demandada, de la incompetencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, por lo que los alegatos contenidos en los medios examinados, carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara Civil, 1 de septiembre de 1999).

76.2 Falta. Falta de calidad. Violación de los artículos 1134 y 1165 del Código Civil. Res inter alios acta.

Considerando, que por lo antes expresado la sentencia

impugnada, ha violado los artículos 1134 y 1165 del Código Civil, al admitir como demandante a la Corporación de Fomento Hotelera y Desarrollo del Turismo, parte sin calidad para solicitar la nulidad del contrato, que en tales condiciones la sentencia atacada ha incurrido en las violaciones denunciadas, y por tanto, debe ser casada. (Cámara Civil y Comercial, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 120-121).

77. FIANZA JUDICATUM SOLVI:

77.1 Fianza Judicatum Solvi. Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil. No se exige para un recurrido en casación. Medio nuevo en casación.

Considerando, que en su segundo medio, la recurrente invoca el incumplimiento de los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la fianza que deben prestar los extranjeros, no obstante que el demandante original es una compañía constituida de acuerdo con las leyes dominicanas; que aparte de que la ley no exige para un recurrido en casación la prestación de dicha fianza, aún en caso de que el recurrido fuese extranjero, resulta también inaceptable la presentación de un medio nuevo por primera vez en casación, como lo es la solicitud que formula el recurrente de la fianza que se exige al extranjero transeúnte, motivos por los cuales el segundo medio de este recurso carece de fundamento y debe ser asimismo desestimado. (Cámara Civil, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 47).

77.2 Fianza Judicatum Solvi. Inaplicabilidad de la fianza judicatum solvi en materia laboral.

Luego de considerar que el artículo 16 del Código Civil no es una disposición que se aplica a los nacionales con lo que se estaría dando un tratamiento discriminatorio al trabajador demandante por su condición de extranjero, lo que prohíbe los principios fundamentales del Código de Trabajo, dijo dicha Cámara, que el Código de Trabajo constituye una legislación especial para regir las relaciones entre trabajadores y empleadores, por lo que ante sus disposiciones cede toda norma legal que no derogue alguna de sus disposiciones de manera expresa; que en el caso del artículo 16 de Código Civil que hace exigible la fianza judicatum solvi en toda materia debe entenderse que no incluye la materia laboral por las razones antes expuestas y porque la Ley 16-92 que constituye el Código de Trabajo es una ley posterior a dicho artículo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 270).

78. FIJACION DE SELLOS:

Competencia. Juez de Paz.

(Ver: Juez de Paz. Fijación de sellos. Artículo 912 del Código de Procedimiento Civil. Cámara Penal, 18 de agosto de 1999).

79. FILIACION:

Filiación. Prueba. Acto de notoriedad.

Considerando, que independientemente de los razonamientos del Tribunal Superior de Tierras, es lo cierto que

la prueba del parentesco está sujeta a las regulaciones del Código Civil, el cual exige la presentación de los Actos del Estado Civil correspondiente que la Ley No. 985, ha introducido en su artículo 2do., en lo que concierne únicamente a la filiación natural materna, la regla de que se prueba por el solo hecho del nacimiento, pero respecto del padre debe probarse por el reconocimiento voluntario o por decisión judicial, según el mismo texto; por lo cual es necesario concluir que sólo cuando la filiación no constituye el objeto de un debate judicial, la prueba del parentesco es libre, pudiendo administrarse al tenor del artículo 46 del Código Civil, por documentos públicos o privados y también por testimonios, siempre que se reúnan las condiciones exigidas por el citado artículo 46, de que los registros no hayan existido o se hubieren perdido.-

Considerando, que aunque el problema de las calidades de los herederos es un asunto de interés privado, nada se opone a que cuando como en la especie se presentan varias personas a reclamar como herederos un terreno registrado, si uno de ellos no ha depositado la prueba de su calidad, la que le está siendo discutida por la otra parte a que el tribunal en virtud de su papel activo indague, y compruebe frente a esta contestación, si a pesar de la no aportación de las actas del estado civil, cual de las partes, al plantearse el litigio, demuestra su parentesco y consecuentemente su vocación sucesoral frente al fallecido titular del terreno registrado, que permita verificar que realmente la persona en favor de quien el tribunal ordene la transferencia del inmueble después de haber comprobado su filiación, es la llamada a recibir los bienes del de cujus.

Considerando, que efectivamente, tal como lo alegan los recurrentes, frente a la contestación surgida entre los herederos de M. J y de F J., el tribunal a-quo admitió como prueba de la calidad de hermana de S. J. alegada por los herederos de la primera, el acto de notoriedad de fecha 3 de octubre de 1975 sometido por dichos herederos, así como el acta de reconocimiento hecha por A. C. de los hijos procreados por él con M. J., desestimando sin embargo, como prueba de la alegada calidad de F. J. hijo legítimo de S. J., el acto de notoriedad del 9 de julio de 1997 aportado por los recurrentes, sin que se mencionen otras pruebas que justifiquen esa contradicción, especialmente demostrativas de que S. y M. J., eran hermanos de padre o de madre, o de padre y madre, a fin de determinar sobre esa base, si en ausencia de descendientes de S J., su heredera resultaba ser la señora M. J. o los herederos de ésta; que era indispensable que el tribunal a-quo indagara y determinara frente a la contestación surgida entre las partes, si M. J. y S. J. eran realmente hermanos, ordenando para su convicción en tal sentido todas las medidas que considerara pertinentes, que al no hacerlo así, en la sentencia impugnada se ha incurrido en una contradicción de motivos y en una falta de base legal, por lo que la misma debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 447).

80. FOTOCOPIA:

80.1 Fotocopia. Casación. Copia de la sentencia.

(Ver: Fotocopia. Recurso. Copia auténtica de la sentencia impugnada. Cámara Civil, 17 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 59).

80.2 Fotocopia. Prueba. Validez.

Considerando, que existiendo la libertad de pruebas en esta materia, los jueces del fondo no pueden descartar pura y simplemente un documento por tratarse de una fotocopia sobre todo, si como en la especie, la parte contra quien se dirige el documento no lo ha atacado de falsedad, siendo su obligación, en caso de que tuviere alguna duda sobre su autenticidad, disponer el depósito del original del documento a los fines de confrontación, obligación esta que se deriva del papel activo del juez laboral. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 14 de abril de 1999; B. J. 1061, Pág. 808).

80.3 Fotocopia. Prueba de un testamento. Deber de los jueces.

Considerando, que si bien los progresos de la técnica fotográfica permiten obtener hoy día reproducciones de documentos más fieles al original que las copias ordinarias, no es menos cierto que en materia de actos bajo firma privada, en el estado actual de nuestro derecho, solo el original hace fe, el cual debe ser producido todas las veces que se invoque como prueba en justicia, pues las fotocopias, en principio, están desprovistas de valor jurídico; que cuando se trata de un acto auténtico cuyo original debe permanecer en el protocolo del notario que lo ha instrumentado y del cual debe expedir las copias que la ley autoriza, el aporte de una fotocopia de ese acto por la parte que demanda su nulidad o inexistencia, pone a cargo de ésta el fardo de la prueba de que dicho acto adolece de tales vicios; que en la especie, en que se trata de un testamento, incumbe al

heredero que lo ataca, como sucede, la demostración de las irregularidades que se le atribuyen, lo cual no ha sido hecho; que no obstante haber enunciado la sentencia impugnada que lo único depositado ante la corte a-quo fue una fotocopia de un supuesto testamento, con la indicación del número del acto, su fecha y el nombre del notario público que lo instrumentó, y que para que un acto pueda ser ponderado por un tribunal de justicia, debe aportarse el original de dicho acto, máxime si se trata de una disposición testamentaria, se hacía imperativo, en vista de la fotocopia depositada por los apelantes, proceder conforme prescribe el artículo 1334 del Código Civil, que dispone que: "las copias cuando el título original existe, no hacen fe sino de lo que contiene aquel, cuya presentación puede siempre exigirse", en vista de que las copias sometidas a esta regla incluyen las de los actos auténticos".

"Considerando, que el recurrente, en el medio que se examina, reprocha a la sentencia impugnada, precisamente, no haber dispuesto, como era su deber, las medidas de instrucción que fueren necesarias, frente a la fotocopia aportada por los apelantes, conducentes a demostrar la existencia del testamento, sobre todo, después de afirmar que, para apreciar la validez de una disposición testamentaria hay que tener a mano el original del acto notarial; que al estatuir declarando inexistente el testamento de que se trata sin ordenar la medida de instrucción que las comprobaciones de la sentencia impugnada misma hizo necesaria, como la de disponer que el original del testamento fuera presentado por el notario que lo instrumentó, revela una caracterizada insuficiencia de motivación que no ha permitido a la Suprema Corte de Justicia ejercer su poder de control y verificar si en el caso se hizo una correcta

aplicación de la ley, por lo que procede, en vista de que la corte no ha dado base legal a su decisión, la casación de dicha sentencia, sin que haya necesidad de ponderar los demás medios del recurso. Por tales motivos, casa". (Cámara Civil, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 118-120).

80.4 Fotocopia. Valor probatorio. Obligación del juez.

Considerando, que si bien, por sí solo las fotocopias no constituyen una prueba, ello no impide que el juez aprecie el contenido de las mismas y deduzca consecuencias, sobre todo en una materia donde existe la libertad de pruebas y el juez tiene un amplio poder de apreciación de éstas.

Considerando, que en la especie, el tribunal a-quo hizo una confrontación de las fotocopias objetadas con otros documentos de la causa apreciando su valor probatorio; que además las recurrentes no han alegado la falsedad del documento depositado en fotocopias, sino que restaron valor probatorio, sin negar su autenticidad, por lo que si entendían que el mismo pudo haber sido adulterado debieron depositar lo que consideraban era el documento auténtico, lo que no hicieron. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 28 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 346).

81. FUERO SINDICAL:

Fuero Sindical. Desahucio. Artículo 80 del Código de Trabajo.

Considerando, que habiendo reconocido la Corte a-qua, que los demandantes estaban amparados por el fuero

sindical debió establecer antes de declarar la prescripción de la acción, si el empleador había sometido previamente a la Corte de Trabajo el despido de los mismos y si esta había decidido al respecto, formalidad indispensable para que el despido de un trabajador amparado por el fuero sindical ponga término al contrato de trabajo;

Considerando, que no es al trabajador afectado por una decisión del empleador de poner fin al contrato de trabajo a quien corresponde demandar la nulidad del despido invocado, sino que es el empleador, cuando pretende que la terminación sea válida, el que debe cumplir con la formalidad prescrita en el referido artículo 391 del Código de Trabajo, manteniéndose vigente el contrato de trabajo hasta que la misma sea cumplida;

Considerando, que es cierto que en esta materia no hay acciones imprescriptibles, sin embargo en la especie la discusión jurídica no gira en torno al tipo de acción ejercida por los recurrentes, sino sobre el momento en que comienza a correr el plazo de la prescripción, que al tenor del artículo 704, es "en cualquier caso un día después de la terminación del contrato. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 21 de abril de 1999; B. J. 1061. Págs. 896 y 897).

G

82. GUARDIAN:

Guardián de la cosa inanimada. Apoderamiento previo a la jurisdicción represiva.

El hecho de haber apoderado previamente a la jurisdicción represiva no constituye una causa suficiente de entrañar consecuencias manifiestamente excesivas que justificara la suspensión de la ejecución de la sentencia, toda vez que la acción intentada por ante la jurisdicción civil tiene su fundamento en circunstancias y hechos extraños a la prevención. (Cámara Civil, 29 de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 96).

H

83. HABEAS CORPUS:

83.1 Habeas Corpus. Admisibilidad de la acción. Límites. Fines del Habeas Corpus.

Considerando, que a pesar de lo alegado por la representación del Ministerio Público de que hay una orden de prisión expedida por funcionario competente, que, como en el caso de la especie, lo es el Juez de Instrucción de Azua, la misma Ley de Habeas Corpus manda, que el Juez de la causa debe examinar aún en caso en que haya orden de funcionario competente y de que figure en esa orden la indicación de la causa de la prisión, si existe la apariencia o la presunción de que contra la persona privada de su libertad aparecen indicios de culpabilidad en atención a la imputación que se le hace;

Considerando, que contrario a como lo plantea el Ministerio Público, de que los impetrantes guardan prisión por orden de funcionario competente y que la decisión de instrucción tiene la autoridad de cosa juzgada, estas ordenanzas no tienen en todos los casos este carácter, debido a que esas decisiones dictadas por el Juez de Instrucción o la Cámara de Calificación, si violan la Constitución y las Leyes pueden ser atacadas por ante la jurisdicción de juicio cuando se conozca el fondo del proceso; que ese criterio se sustenta además,

en que resulta posible, en determinados casos, ordenarse instrucciones suplementarias y aún variarse la calificación otorgada por la fase de instrucción en la jurisdicción de juicio; que en consecuencia se evidencia, que no constituye obstáculo la resolución instruccional para conocer de la acción de Habeas Corpus establecida en el artículo 8, párrafo 2 letra g) de la Constitución; que, además, esas decisiones de los jueces, cuando actúan en Cámara de Calificación, no son susceptibles de ningún recurso al tenor del artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal, reformado por la Ley 5155 del 26 de junio de 1959, puesto que las mismas no colocan a los indicados en una situación irreversible;

Considerando, que al tenor de la Ley de Habeas Corpus, la inadmisibilidad de la acción, sólo puede prosperar en esta materia, cuando existe una sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada o que el impetrante se encuentre en libertad;

Considerando, que en ese sentido, entre los fines esenciales del Habeas Corpus está evitar las arbitrariedades y acciones no legales de los funcionarios, así como salvaguardar, sobre todo, la libertad de los seres humanos, entendiéndose la misma como uno de los valores más trascendentes que sólo debe perderse por motivos contemplados en la Ley y en virtud de los procedimientos en ella establecidos. (Pleno, 11 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 31-32).

83.2 Habeas Corpus. Competencia de la Suprema Corte de Justicia.

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia tiene en

ciertos casos competencia para conocer en primera y única instancia de la acción de habeas corpus, pero es cuando al peticionario se le haya rehusado el mandamiento, tanto de parte del juez de primera instancia, como por la corte de apelación que tenga jurisdicción sobre dicho juzgado, o en los casos en que estos tribunales se han desapoderado definitivamente del asunto por haber juzgado el fondo de la inculpación y estar la Suprema Corte de Justicia apoderada de un recurso de casación, o cuando ningún tribunal este apoderado del asunto, como es el caso de la especie, o cuando el impetrante haya sido descargado o cumplido la pena que se le haya impuesto y la sentencia de descargo o condenatoria, según el caso, haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. (Pleno, 3 de noviembre de 1999)

83.3 Habeas Corpus. Competencia.

En razón de que las actuaciones judiciales habían seguido en el Distrito Judicial de Santiago, era al juzgado de primera instancia de ese Distrito Judicial el que tenía competencia, conforme al artículo 2 de la Ley de Habeas Corpus, para estatuir en primer grado sobre la legalidad de la prisión, y no la Suprema Corte de Justicia; que ésta tiene en ciertos casos competencia para conocer en primera y única instancia de un recurso de habeas corpus, pero cuando al peticionario se le rehusare el mandamiento tanto por ante el juez de primera instancia como el de la corte de apelación que tenga jurisdicción sobre dicho juzgado o cuando estos tribunales se hayan desapoderado definitivamente del asunto por haber juzgado el fondo de la inculpación, pero no cuando dichas jurisdicciones no han sido apoderadas ni han estatuido

sobre el mismo por estar pendiente ante la Suprema Corte de Justicia el fallo del recurso de casación intentado por el impetrante contra la decisión de la cámara de calificación que la envía ante el tribunal criminal. Que en este caso, no podría considerarse a la Suprema Corte de Justicia, en la función de corte de casación que le corresponde con motivo del indicado recurso, como el tribunal donde se siguen las actuaciones, en razón de que independientemente de la suerte que corra el citado recurso de casación, esta corte no tendría competencia para conocer y decidir el fondo del asunto, que es el elemento esencial que ha tomado en cuenta el legislador en el artículo 2 de la Ley de Habeas Corpus para atribuir, en principio, competencia para expedir el mandamiento al juez de primera instancia del Distrito Judicial en donde se siguen las actuaciones, o del lugar en donde se encuentra detenida, arrestada o presa la persona de que se trate (Pleno, 16 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 19-20).

83.4 Habeas Corpus. Competencia.

...Que en el expediente relativo al caso, examinado por la Suprema Corte constan dos órdenes de prisión emitidas por la Magistrada Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, es decir, emitidas por funcionarios con capacidad legal para disponer esa medida, por lo que obviamente conforme lo dispone el párrafo 1ro. del artículo 2 de la Ley 5353, y tal como lo había solicitado el ministerio público, la Suprema Corte de Justicia era incompetente para conocer el caso de Habeas Corpus del cual estaba apoderado. (Pleno, 30 de octubre de 1997).

83.5 Habeas Corpus. Competencia.

De igual manera, ante el dictamen del magistrado abogado ayudante del Procurador General de la República, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia declarara su incompetencia para conocer del recurso de habeas corpus en razón de que en virtud de la Ley de Habeas Corpus, el conocimiento de los mismos se atribuye a los tribunales ordinarios; dijimos el 17 de diciembre de 1997 que la competencia debe ser atribuida en favor de las personas que se pretenden víctimas de un encierro ilegal y se consagra el derecho de recurrir ante cualquier juez del orden judicial; concepto que debe entenderse y así ha sido juzgado, en sentido genérico, como fórmula de protección a dichas personas, a cargo de todo funcionario a quien la Ley de Organización Judicial No. 821 de 1927, le otorga la autoridad y facultad de juzgar, sin distinción del grado de jurisdicción; por lo que se desestimó el dictamen del representante del ministerio público. (Pleno, 17 de diciembre de 1997).

83.6 Habeas Corpus. Competencia. Rehusamiento a librar el mandamiento. Artículo 25 Ley sobre Habeas Corpus. Naturaleza del Habeas Corpus.

Considerando, que la disposición del referido texto legal, es justa y útil al tener por objeto garantizar al máximo el derecho del ciudadano de acudir a un juez o corte, mediante un procedimiento sencillo y expeditivo, para que se indague la causa de su prisión, con independencia de los procesos correccionales o criminales que se le sigan para determinar su culpabilidad o inocencia; que la declinatoria por causa de seguridad pública solicitada a la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la especie, por

el representante del ministerio público ante la Corte de Apelación de San Cristóbal, de la que luego desistió, y que es el fundamento en que apoya dicha Corte de Apelación el aplazamiento de la solicitud de libramiento del mandamiento de habeas corpus, constituye a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, el rehusamiento a que alude el precitado artículo 25 de la Ley sobre Habeas Corpus, en cuyo ámbito se comprende tanto la negativa de librar el mandamiento, como la de conocer del caso después de expedido aquél; que dicha declinatoria por causa de seguridad pública, tomada como pretexto para eludir el mandamiento, presupone la existencia de un juicio penal que transcurre por ante el mismo juez o corte respecto del cual se invoca la "seguridad pública", con el fin de obtener su desapoderamiento, mientras que el habeas corpus constituye un amparo, una acción "sui generis" de Derecho Público, que no es posible clasificar como perteneciente al procedimiento penal, dirigido solo a averiguar las causas de la prisión o privación de libertad, para que en los casos previstos se le devuelva ésta a quien la sufra, por lo que, al proceder a apoderar a esta Suprema Corte de Justicia, después de haber aplazado la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, no obstante la reiteración de la solicitud por parte de los impetrantes, como se hace constar en la sentencia dictada al efecto el 2 de octubre de 1998, el amparo del habeas corpus para que se apreciaran las causas de su prisión, los impetrantes R. E. P. C. y Y. M. L., ejercieron válidamente la facultad que ponía a su disposición el ya mencionado artículo 25 de la Ley de Habeas Corpus, y, en consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia deviene competente y por ello retiene el conocimiento de la acción constitucional de habeas

corpus de que está apoderado. (Pleno, 4 de diciembre de 1998; B. J. 1057, Págs. 16-17).

83.7 Habeas Corpus. Extradición.

(Ver: Extradición. Ley 489 de 1969, modificada por la Ley 278 de 1978. Facultad del Presidente de la República, Pleno, 3 de noviembre de 1999 y Extradición. Facultad del Procurador General de la República para dictar mandamiento. Pleno, 3 de noviembre de 1999).

83.8 Habeas Corpus. Mandamiento. Procedencia. Justificación.

Considerando, que toda persona privada de su libertad puede solicitar un mandamiento de habeas corpus siempre y cuando la sentencia que la condena no haya adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que no ha ocurrido; que si bien es cierto que el legislador, con el fin de dejar plenamente protegida la libertad individual de los ciudadanos, ha declarado competente para dictar un mandamiento de habeas corpus y para juzgar acerca de la legalidad de una prisión, al juez o corte donde se siguen o deben seguirse las actuaciones, y al juez o corte del lugar de la privación de libertad, cuando la orden de prisión emane de una autoridad con capacidad para dictarla, es también cierto que el legislador ha establecido en el artículo 25 de la ley sobre la materia, como antes se indica, un mecanismo de sustitución para el caso de que el juez o corte donde se sigan las actuaciones penales contra el impetrante, rehusé librar el mandamiento o conocer de él después de expedido;

Considerando, que la disposición del referido texto legal

es justa y útil, al tener por objeto garantizar al máximo el derecho del ciudadano de acudir a un juez o corte, mediante un procedimiento sencillo y expeditivo, para que se indague la causa de su prisión, con independencia de los procesos correccionales o criminales que se le sigan para determinar su culpabilidad o inocencia; que en el caso que nos ocupa, el abogado del impetrante arguye que al no librársele el mandamiento, ha habido un rehusamiento, a la expedición del mismo, pero, tal y como se ha señalado, el artículo 25 de la Ley de Habeas Corpus, traza un procedimiento especial mediante el cual debe ser establecido dicho rehusamiento, procedimiento éste no observado en la especie, al no existir en el expediente prueba de que el impetrante haya prestado el juramento de que le fue rehusado el mandamiento, como lo exige el referido artículo 25. (Pleno, 28 de julio de 1999).

83.9 Habeas Corpus. Presencia del Ministerio Público. Artículo 16 de la Ley de Habeas Corpus. Facultad de los jueces si hay indicios de culpabilidad.

Considerando, que es criterio de esta Corte que el referido artículo 16 debe interpretarse, en su primera parte, en el sentido de que la presencia del ministerio público no es imprescindible en el juicio de Habeas Corpus, cuando no existe orden de funcionario judicial competente, lo que no sucede en el caso de existir dicha orden, en el que no se puede conocer sin la presencia del representante de la sociedad; que el legislador ha querido proteger al máximo al ciudadano, al imponer a los jueces la obligación de conocer de ese juicio, aun en ausencia del ministerio público, si por alguna razón éste no accede a formar parte del tribunal apoderado de ese

mandamiento, pero en modo alguno debe interpretarse en el sentido de que el mismo no puede estar presente, como invocan en el caso de la especie los abogados del impetrante;

Considerando, en ese mismo orden de ideas, que si le fuera permitido al impetrante exigir la no presencia en un juicio de habeas corpus del representante del ministerio público, todas las veces que el mismo se encuentre privado de su libertad por una orden que no sea regular por no haber sido expedida por funcionario judicial competente, la posibilidad de que el juez regularice la prisión, que prevé el artículo 13 de la ley de la materia, sería irrealizable, puesto que a la única parte en ese proceso que incumbe aportar la prueba de si existen indicios suficientes que hagan presumir que dicho impetrante pueda resultar culpable del hecho que se imputa, es a ese funcionario;

Considerando que al otorgar la ley al Juez la potestad de mantener en prisión como se ha dicho, al impetrante si hay indicios de culpabilidad, aun en la hipótesis de que existan irregularidades en el mandamiento de prevención o simplemente en ausencia de éste, lo que ha querido el legislador es evitar, por una parte, las arbitrariedades de las autoridades judiciales así como que no se liberen los transgresores de la ley por vicios procedimentales. (Pleno, 20 de julio de 1999).

84. IDIOMA:

Idioma. Acusado juzgado en un idioma que no conoce.

Que es evidente que la sentencia impugnada, cometió un abuso legal al juzgar al acusado en un idioma que no conoce y oír sus declaraciones sin haber sido asistido del intérprete judicial; que el asunto examinado se hace más grave aún, cuando se comprueba que en medio de la forma ilegal de la declaración del ciudadano suizo, la misma sirvió para aumentarle la pena que le había impuesto un juez de primer grado, que sí tuvo la oportunidad de oír al acusado por medio del intérprete judicial previsto por la ley. (Cámara Penal, 12 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 100).

85. IMPUESTO DE SALIDA:

Impuesto de Salida. Decreto. Inconstitucionalidad.

Considerando, que efectivamente, el artículo 4 de la Constitución consagra la división de los poderes y hace a sus encargados responsables y precisa que estos no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes; que entre esas atribuciones al Congreso le corresponde, según el artículo 37, numeral 1, como

Poder Legislativo, establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; que entre las atribuciones reservadas a la competencia del Presidente de la República al tenor del artículo 55 de la Constitución, no se encuentra la de instituir impuestos o contribuciones generales; que como el Decreto del Poder Ejecutivo No. 295-94, del 29 de septiembre de 1994, fija una contribución de salida de la República a cargo de toda persona que viaje al exterior por vía aérea, resulta evidente la transgresión, por vía del indicado decreto, de las disposiciones del numeral 1 del artículo 37 de la Constitución, al crear una contribución que sólo corresponde al Congreso establecer; que al carecer de capacidad el Poder Ejecutivo para disponer la recaudación contributiva, como se ha visto, dicho decreto es nulo por contravenir el artículo 46 de la Carta Magna; que se hace innecesario, por ello, ponderar la petición de los impetrantes de si podía o no el Poder Ejecutivo, fijar la contribución en moneda extranjera, como se establece en el decreto premencionado; que no obstante lo acabado de expresar, la Suprema Corte de Justicia considera pertinente y útil examinar el aspecto de la instancia relativo a la crítica del establecimiento de la contribución en dólares de los Estados Unidos de América;

Considerando, que, en efecto, el artículo 111 de la Constitución dispone que la unidad monetaria nacional es el peso oro, así como que sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos por una entidad emisora única y autónoma, cuyo capital sea propiedad del Estado, siempre que estén totalmente respaldados por reservas en oro y por otros valores

reales y efectivos, en las proporciones y condiciones que señala la ley y bajo la garantía ilimitada del Estado; que lo anterior obliga a admitir que todas las operaciones económicas internas deben hacerse con la moneda nacional, ya que su fuerza liberatoria es absoluta y total; que en ese orden, la Ley Monetaria No.1528, del 9 de octubre de 1947, actualmente en vigor, promulgada al amparo de la Constitución proclamada el 10 de enero de ese año, en su artículo 2 dispone que: "Los precios, impuestos, tasas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, cobrados o ejecutados en la República Dominicana, se expresarán y liquidarán exclusivamente en pesos. Toda cláusula calificativa o restrictiva que imponga pagos en plata y oro metálico, monedas o divisas extranjeras o cualquier unidad monetaria que no sea el peso, será nula. No obstante, dicha nulidad no invalidará la obligación principal, cuando ésta pueda interpretarse en términos de la unidad monetaria nacional, caso en el cual se liquidarán las respectivas obligaciones en pesos, efectuando la conversión sobre la base de las paridades legales correspondientes, ya sea al tiempo de la celebración del contrato o bien al momento del pago según resulte más favorable al deudor. Se exceptúan de las limitaciones anteriores: a) Las obligaciones que establezcan pagos desde la República al exterior o desde el exterior a la República de acuerdo con las regulaciones que la Junta Monetaria dictare al efecto; b) las remuneraciones a personas o entidades domiciliadas efectivamente en el exterior, por servicios prestados temporalmente en el país; c) las obligaciones a favor del Estado o de otras entidades oficiales que por virtud de acuerdos o

disposiciones especiales, deban ser pagadas en oro o en monedas extranjeras; d) los títulos de crédito o valores que se emitieren, ya sea por el Estado o bien por el Banco Central de la República Dominicana, siempre que así lo exija la política monetaria en beneficio del país; e) los depósitos en moneda extranjera constituidos en los bancos del país de acuerdo con las regulaciones que la Junta Monetaria dictare sobre la materia; y f) las transacciones menores que efectúen los turistas y viajeros, las cuales estarán sujetas a las regulaciones que eventualmente dictare la Junta Monetaria a fin de evitar la circulación efectiva de monedas o billetes extranjeros en el territorio de la República";

Considerando, que ni en la Ley Monetaria ni en la que instituye el Banco Central de la República Dominicana, entidad emisora de la moneda nacional, las que con las normas trazadas por la Constitución forman la base del régimen monetario dominicano, existe disposición alguna que permita, fuera de las excepciones que se indican en el transcrito artículo 2 de la Ley Monetaria, el cobro de impuestos y contribuciones en moneda extranjera, por lo que también por este motivo el decreto de que se trata resulta inconstitucional;

Considerando, que, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad constitucional, en virtud del principio de la separación de los poderes, para restituir la vigencia del Decreto No. 504-90, del 8 de diciembre de 1990, derogado por el Decreto cuya inconstitucionalidad se demanda, como solicitan los impetrantes en su instancia, por lo que procede desestimar ese pedimento. (Pleno, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 64-67).

86. INCOMPETENCIA:

Incompetencia. Declinatoria por ante la Suprema Corte de Justicia. Artículos 381 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal.

....Que si bien es cierto que toda jurisdicción tiene, en principio, el derecho de examinar su competencia, cuando lo hace, a requerimiento de parte o de oficio y se declara incompetente en materia represiva, no es menos cierto que en este caso no le es permitido reenviar el asunto a otra jurisdicción por haber agotado sus poderes, ya que al desapoderarse no puede, sin cometer exceso de poder, determinar ella misma la competencia y designar el tribunal que deberá conocer de la cuestión, pues en materia criminal o correccional este derecho pertenece únicamente a la Suprema Corte de Justicia estatuyendo por vía de demanda en designación de jueces según lo previsto por los artículos 381 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal. Que como la sentencia mediante la cual la Séptima Cámara Penal declaró su incompetencia no fue recurrida, era evidente que se ha puesto fin al procedimiento en virtud de esa decisión, por lo que para que esta Suprema Corte de Justicia quedara regularmente apoderada, y, por lo tanto, en aptitud de juzgar su competencia y el fondo, si ésto fuere de lugar, era necesario proceder para el apoderamiento, de conformidad con las reglas trazadas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Criminal o en el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. (Pleno, 5 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 28).

87. INDIVISIBILIDAD:

Indivisibilidad. Recursos. Indivisión en el objeto de litigio. Emplazamiento solamente a una parte.

Considerando, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes contrarias y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisibile con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes que por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha a varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que de no hacerse así, el recurso debe ser declarado inadmisibile. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 28 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 367).

88. INHIBICION:

Inhibición. Obligación del Juez.

Considerando, que el juez a-quo debió abstenerse de

una de las partes, pues esa situación no le permitía actuar con imparcialidad e idoneidad; que al no hacerlo cometió una violación a la ley y a la prudencia que debe acompañar todas las actuaciones de los jueces, razón por la cual la sentencia debe ser casada.(Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de febrero de 1999; B. J. 1058. Págs. 404-405).

89. INSTANCIA:

Instancia. Renovación. Artículo 344 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que la renovación de instancia es un derecho instituido en beneficio de los herederos de un litigante fallecido, que no puede ser invocada por la parte contraria de éstos, en vista de que por ser de interés privado no se produce automáticamente, por lo que en consecuencia el plazo de seis meses fijado para que se produzca la misma, sólo se computa cuando la perención va dirigida contra dichos herederos;

Considerando, que de acuerdo al artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, para que los actos de procedimientos realizados después de la muerte de una de las partes sean nulos, es necesario que esa muerte haya sido notificada; que en la especie, el Tribunal a-quo determinó que esa notificación no se produjo, antes ni después del lanzamiento de la demanda en perención y del fallo de dicha demanda, lo que descarta la nulidad de los mismos;

Considerando, que del estudio de la sentencia

impugnada se advierte, que contrario a lo afirmado por los recurrentes, la Corte a-qua se pronunció sobre el pedimento de declaratoria de la nulidad de la demanda en perención, formulado por éstos, motivado en el hecho de que la demandada no aportó la prueba del fallecimiento del co- demandante José del Carmen Rodríguez, al depositar el acta de defunción después de presentar su escrito original como demandado y sin seguir el procedimiento dispuesto por los artículos 544 y 545, del Código de Trabajo, para los casos en que una parte pretende depositar un documento con posterioridad al momento en que debe depositar su escrito de defensa. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de diciembre de 1999)

90. INTERVENCION VOLUNTARIA:

Intervención voluntaria. Requisitos.

Que por otra parte, declaró la validez de la intervención voluntaria del sub-inquilino sin verificar el cumplimiento de las condiciones de aplicación del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil respecto de la admisibilidad de la intervención, que constituye un medio de puro derecho, admisible por primera en casación; que en ese orden el tribunal a-quo violó el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que carece de una exposición incompleta de los hechos de la causa que no permite a la Suprema Corte de Justicia ejercer su poder de verificar si en la especie el tribunal ha hecho una correcta aplicación de la ley (Cámara Civil, 19 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 63).

J

91. JUEZ:

91.1 Juez. Demanda en responsabilidad civil contra un juez. Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Competencia de la Suprema Corte de Justicia para la autorización.

Atendido, a que, no obstante la improcedencia de la presente solicitud de autorización para demandar en responsabilidad civil, la Suprema Corte de Justicia, única competente para otorgar dicha autorización, considera oportuno destacar, sin embargo, que si bien el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil dispone que la demanda en responsabilidad contra los jueces se promoverá y sustanciará ante la Suprema Corte de Justicia, la cual no podrá ser apoderada sin permiso previo que provea ésta a instancia firmada por la parte o por su representante, con poder auténtico y especial, a pena de nulidad, ello sólo es posible, cuando se trate, de acuerdo con el artículo 164, modificado, de la Ley de Organización Judicial, de jueces de las cortes de apelación; que por consiguiente, como la proyectada demanda en responsabilidad civil se refiere al Magistrado Juez de Instrucción de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia carece de competencia para conocer de la misma, como pretende el impetrante. (Pleno, 25 de noviembre de 1999).

91.2 Juez de Paz. Fijación de sellos. Artículo 912 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que un juez de paz está autorizado a poner sellos sobre los bienes, de acuerdo con el artículo 912 del Código de Procedimiento Civil, pero ninguna ley lo autoriza a ordenar el retiro de bienes en beneficio de una parte y en detrimento de la otra, puesto que el artículo 24 de la Ley 1306 Bis, sobre Divorcio, autoriza a la mujer tomar todas las medidas para conservar sus intereses, pero no para llevarse y disponer de los muebles. (Cámara Penal, 18 de agosto de 1999).

92. JUNTA MONETARIA:

92.1 Junta Monetaria.

(Ver: Sociedades. Fusión. Consecuencias. Artículo 42 del Código de Comercio. Publicidad. Cámara Civil, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 18-19).

92.2 Junta Monetaria. Atribuciones. Carácter definitivo y no susceptible de recurso de sus resoluciones.

Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada revela que la misma ha incurrido en las violaciones denunciadas en su medio de casación por el recurrente, ya que al ordenar en su dispositivo la revocación de la decisión dictada por la Junta Monetaria y autorizar la entrega de valores en divisas a la empresa Lufthansa, el Tribunal a-quo ha desconocido preceptos constitucionales y legales de orden público, los que le otorgan al

Banco Central y a su Junta Monetaria, la calidad de organismo que goza de la más completa autonomía y que tiene el papel de órgano rector del sistema monetario, bancario y cambiario de la nación y que dentro de sus múltiples atribuciones tiene la de dictar las regulaciones que se refieren a las transferencias internacionales de divisas, a su entera discreción y con un carácter definitivo, ya que sus decisiones son irrecurribles y en consecuencia el Tribunal a-quo al desconocer esta facultad inherente y exclusiva del Banco Central ha violado los artículos 111 de la Constitución de la República, 2 y 25 de la Ley No. 6142 del 1964; 1 y 2 de la Ley No. 251 del 1964, 1, 2 y 3 del Reglamento No. 1679 del 1964 y el artículo 4 de la Ley No. 664 del 1977, por lo que dicha sentencia debe ser casada, sin que haya envío, al tenor del artículo 20 de la Ley de Casación, ya que con la casación de dicha sentencia recobra todo su imperio la Resolución de la Junta Monetaria recurrida ante el Tribunal a-quo, por lo que no queda cosa alguna por juzgar. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 333).

93. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:

93.1 Jurisdicción contencioso administrativo.

(Ver Costas. Jurisdicción Contencioso Administrativo. Artículo 60 de la Ley 14-94 de 1947, Cámara de Tierras,

Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

93.2 Jurisdicción contencioso administrativo. Carácter especial. Competencia en materia de contratos. Ley 14-94 de 1947.

Considerando, que la jurisdicción Contencioso-Administrativo, instituida por la Ley No. 1494 del 1947, es una jurisdicción con un carácter especial, ya que su competencia está reservada para las controversias derivadas de las relaciones jurídicas entre los órganos de la administración pública y los administrados, así como también de las relaciones entre los administrados, siempre que los intereses de la administración estén envueltos en dichas relaciones;

Considerando, que en materia de contratos, la competencia de esta jurisdicción está determinada por el artículo 3 de dicha ley que dispone que "el Tribunal Superior Administrativo, será la jurisdicción competente para conocer y decidir, en primera y última instancia, las cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, rescisión, interpretación y efectos de los contratos administrativos (concesiones y contratos de servicios públicos o de construcción de obras públicas) celebrados por el Estado, por los establecimientos públicos, el Distrito de Santo Domingo, las comunes y distritos municipales con personas o empresas particulares, como igualmente las que versen sobre el uso y goce de las dependencias del dominio público del Estado, las comunes o distritos municipales";

Considerando, que de lo anterior se desprende, que la competencia de la jurisdicción Contencioso- Admi-

nistrativo tiene un carácter limitado, por lo que la citada Ley No. 1494 se ha ocupado de establecer las materias que no estarán bajo la competencia de esta jurisdicción. En ese tenor, el artículo 7 de dicha ley, dispone que: "No corresponde al Tribunal Superior Administrativo: .b) Los actos que dicten o realicen los poderes del Estado en uso de atribuciones constitucionales". (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de septiembre de 1999).

93.3 Jurisdicción contencioso administrativo. Competencia. Artículo 56 Ley 14-94 de 1947.

(Ver: Competencia. Artículo 56 Ley 14-94. Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativa y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

93.4 Jurisdicción contencioso administrativo. Incompetencia. Demanda contra el Estado para el pago de mejoras.

Considerando, que de lo anterior se desprende que el Tribunal A-quo efectuó una correcta aplicación de la ley que regula la jurisdicción contencioso - administrativa, al proceder a declarar su incompetencia *ratione materie*, puesto que en el presente caso se trata de la restitución al dominio eminente del Estado, de terrenos declarados de utilidad pública para fines de asentamiento campesino dentro de los planes de reforma agraria, lo cual escapa a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que es materia de la jurisdicción de tierras; por lo que esta Suprema Corte de Justicia considera que la sentencia impugnada contiene motivos

suficientes que justifiquen su dispositivo; por lo que procede rechazar el presente recurso de casación por improcedente e infundado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

94. JUS VARIANDI:

Jus variandi. Modificación del horario de trabajo de manera unilateral. Antiguo Artículo 56 del Código de Trabajo.

Considerando, que en virtud del artículo 56 del Código de Trabajo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, para la modificación del contrato de trabajo es necesario el mutuo consentimiento de las partes, estando prohibida la modificación unilateral del mismo;

Considerando, que la modificación del horario en que un trabajador desenvuelve sus actividades constituye una modificación del contrato de trabajo, que para su validez requiere del consentimiento del trabajador, sin el cual se convierte en una causa de dimisión;

Considerando, que en la especie la recurrente admite haber hecho una variación en el horario que tenía que cumplir el trabajador, alegando que el mismo es válido en razón de que la empresa es de funcionamiento continuo y que como tal se mantiene funcionando las 24 horas del día; que la circunstancia de que una empresa sea de funcionamiento continuo no elimina la reglamentación de los horarios y el establecimiento de un horario fijo a sus

trabajadores, el cual debe observarse en la forma convenida;

Considerando, que solo cuando se han pactado los horarios rotativos en una empresa de funcionamiento continuo, el horario de un trabajador sufre de variaciones, que en todo caso ha sido consentida por el trabajador en el momento del establecimiento de ese horario variable, situación esta que no fue alegada ni demostrada por la recurrente;

Considerando, que el uso de *jus variandi* no puede ser aplicado de una manera tal que implique un perjuicio al trabajador, ni el cambio en las condiciones de la ejecución de los contratos de trabajo de manera permanente, por lo que el alegato de que el cambio de horario fue como consecuencia de esa facultad empresarial no desvirtúa la violación a la ley laboral que le atribuye la sentencia impugnada;

Considerando, que el Tribunal a-quo dio motivos pertinentes para no tomar en cuenta la carta de renuncia fecha 25 de febrero de 1987, señalando que la misma fue depositada después que el expediente estaba en estado de recibir fallo y porque la misma contradecía la constancia expedida por la empresa sobre el tiempo de duración y el salario percibido por el demandante, por lo cual no cometió el vicio atribuido por la recurrente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 421-422).

95. JUZGADO DE PAZ:

Juzgado de Paz. Demandas en desalojo o desahucio. Competencia. Comunicación de documentos. Artículo 2 de la Ley 834 de 1978.

Considerando, que el examen del fallo impugnado y del expediente, revela que las únicas conclusiones que la actual recurrente presentó ante el juez de primer grado, se limitaron a un pedimento de comunicación de documentos, el cual fue rechazado, mientras eran acogidas las conclusiones al fondo de la parte demandante mediante las cuales se solicitaba la rescisión del contrato de inquilinato intervenido entre Isabel Cristina Ureña Pacheco, propietaria, y Alida Altagracia Calderón de Gómez, inquilina, y el desalojo de la casa objeto de dicho contrato; que de esto se infiere que la parte demandada no tuvo ante el juez de paz oportunidad, no sólo de concluir al fondo de sus pretensiones, sino de plantear las excepciones de procedimiento que entendiera pertinentes, lo que pudo haber hecho en razón de que la demanda en comunicación de documentos que presentó ante la jurisdicción de primer grado apoderada, donde solo hizo ese pedimento, no constituía causa de inadmisión de las excepciones; que si bien el artículo 2 de la Ley No. 834 de 1978, en su parte capital, expresa que las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión aún cuando las reglas invocadas en apoyo de la excepción sean de orden público, no es menos cierto que tan sabia disposición no es aplicable en la especie, ya que, como se ha visto, la inquilina no concluyó al fondo ni en primera ni en segunda instancia,

siendo en esta última donde cuestionó la competencia del juzgado de paz para conocer y decidir la demanda en rescisión de contrato de alquiler y desalojo incoada en su contra; que el demandado que hace defecto en primera instancia y no ha podido alegar en este estadio del procedimiento la incompetencia de la jurisdicción apoderada, conserva la facultad de promover en apelación un debate sobre la competencia si él plantea la excepción antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión; que contrariamente a lo decidido por el Tribunal a-quo, la competencia de atribución del juzgado de paz tiene un carácter excepcional limitado a los asuntos que expresamente le son atribuidos por la ley; que el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, en su anterior redacción como en la actual, solo atribuye competencia al juzgado de paz para conocer de las acciones en resiliación del contrato de alquiler, desalojo y lanzamiento de lugares, cuando estas se fundamentan en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos, por lo que fuera de ese caso la incompetencia del juzgado de paz es absoluta para conocer de dichas acciones; que como en la especie, la demanda de la recurrida tiene una causa distinta a la señalada, es obvio que los jueces del fondo no aplicaron correctamente el texto legal mencionado, y en tales circunstancias la sentencia impugnada debe ser casada. (Cámara Civil, 29 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 128-129).

L

96. LIBERTAD CONDICIONAL:

Libertad condicional. Revocación.

Que si bien es verdadero que la libertad condicional es esencialmente revocable por las causas que se indican en la Ley que la instituye, entre éstas el haber violado el beneficiario las condiciones bajo las cuales fue otorgado el permiso de liberación, no es menos valedero que la revocación no es posible cuando la duración de la pena está enteramente agotada; de donde resulta que si la decisión que otorgó la libertad condicional no es revocada antes de la expiración de la pena, la liberación se hace definitiva; que al producirse la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuando ya había transcurrido el tiempo de la condena, es decir, más de diez años, que fue la pena privativa de libertad impuesta, además de satisfacer el impetrante el pago de la multa con la que también fue sancionado, es evidente que la revocación se hizo de manera extemporánea y, por tanto, carece de efectividad. (Pleno, 24 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 34).

97. LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA:

97.1 Libertad Provisional bajo fianza. Monto de la fianza prestada.

...Que al examinar el caso se ha estimado que existían

razones poderosas que justificaban que la libertad provisional bajo fianza que le fue concedida a L. A. V. sea garantizada con un monto mayor que el fijado por la Corte de Apelación de Santiago. (Pleno, 5 de diciembre de 1997).

97.2 Libertad Provisional bajo fianza. Razones poderosas.

Considerando, que la situación normal de toda persona es gozar de plena libertad en el seno de la sociedad, siendo la excepción estar recluido en una prisión, en razón de condenación judicial o de prisión preventiva basada en una acusación que le atribuya haber violado la ley penal;

Considerando, que las principales funciones de las penas privativas de libertad son la regeneración y el reencausamiento del condenado, la aplicación de un régimen punitivo que propicie la reflexión y el mejoramiento de los penados, así como el desagravio social; mientras que las primordiales funciones de la medida transitoria de la prisión preventiva son la protección a las personas y bienes de la comunidad (incluyendo la preservación de la vida del acusado) y el efectivo aseguramiento de la celebración de procesos judiciales imparciales y ejemplarizadores;

Considerando, que entre las razones poderosas a que se refiere el artículo 1 de la Ley 5439 del año 1915, modificado por la Ley 646 del año 1974, sobre libertad provisional bajo fianza, pueden tomarse en cuenta: Primero: La no peligrosidad del recluso; Segundo: La inexistencia de sospecho de que éste, al salir en libertad, se proponga evadir la acción de la justicia, destruir las

pruebas o dificultar su obtención; Tercero: La ausencia de buenos argumentos para entender que con respecto al reo aún no se ha cumplido o agotado la función de protección a la sociedad; Cuarto: La no existencia de motivos para presumir que el provisional regreso del acusado al seno de la comunidad traería como consecuencia la perturbación del orden público. (Pleno, Resolución No. 500-98, del 11 de mayo de 1998).

98. LIBROS DE COMERCIO:

Libros de Comercio. Artículo 8 al 11 del Código de Comercio. Fuerza probante. Estado de cuentas. Banco.

Considerando, que de conformidad con los artículos 8 al 11 del Código de Comercio, los libros obligatorios de los comerciantes son el libro diario y el libro inventario de los activos y pasivos de su comercio en el que se copia el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas; que en dichos libros deben cumplirse determinadas formalidades, tales como la de observar un orden cronológico, no contener espacios en blanco ni alteraciones; deben ser foliados, rubricados y visados una vez al año por el juez de lo civil y comercial o el juez de paz; que es a estos libros que se atribuye la fuerza probante prevista en los artículos 12 y 13 del Código de Comercio; que frente a estas características, no es posible atribuir el carácter de libros de comercio al estado de cuenta que remiten usualmente los bancos a sus clientes, en donde se les informa el movimiento de su cuenta corriente y el balance de ésta, cerrado en una fecha determinada, con el fin de que verifique los

asientos realizados; que por otra parte, en virtud del indicado artículo 12, los libros de comercio deben ser usados cuando se trate de contestaciones entre comerciantes y respecto de hechos de carácter comercial, que no es el caso; que por consiguiente no son aplicables en la especie las disposiciones previstas en los artículos 12 y 13 del Código de Comercio, como erróneamente lo hace la Corte a-quo. (Cámara Civil, 30 de junio de 1999).

99. LOCOMOTORAS:

Locomotoras. Artículo 1ro. y 230 de la Ley 241.

Considerando, en cuanto al recurso de Julio Valdez, prevenido, que no ha depositado memorial con sus medios, pero por ostentar esa calidad es preciso examinar desde su ángulo la sentencia, que de la combinación del artículo 1ro. y 230 de la Ley 241, se advierte que los conductores de locomotoras, que transiten por vías férreas, no pueden ser sometidos por violación de esta ley, sino del derecho común, por lo que también procede casar la sentencia en ese sentido. (Cámara Penal, 8 de septiembre de 1999).

100. LO LABORAL MANTIENE A LO PENAL EN ESTADO:

100.1 Lo laboral mantiene a lo penal en estado. Falta que constituye un delito penal.

Considerando, que es cierto que la prisión o detención de un trabajador produce la suspensión del contrato de

trabajo, pero ese estado de cesación temporal en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, no impide que el empleador que entienda que el hecho cometido por el trabajador que dio lugar a su detención, también constituye una falta grave que justifica su despido, le ponga término al contrato de trabajo ejerciendo ese derecho, con la consecuente obligación de probar la falta imputada y sin tener que esperar el resultado del ejercicio de la acción pública del despido, en razón de que en materia laboral no se aplica el principio de que "lo penal mantiene lo civil en estado", sino que es lo juzgado en lo laboral lo que suspende y se impone al aspecto penal, no estando sujeto, en consecuencia la justificación o no de un despido a la suerte que corriera el trabajador en su enjuiciamiento ante los tribunales penales, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 31 de marzo de 1999; B. J. 1060. Pág. 1046).

100.2 Lo laboral mantiene a lo penal en estado. Artículo 74 del Código de Trabajo.

Considerando, que para la aplicación de ese principio es necesario que la acción penal esté fundada en la comisión de una infracción a las disposiciones del Código de Trabajo que conlleven una sanción penal y que exista una relación de conexidad que haga posible que la decisión laboral sea determinante en el momento de conocerse la acción penal;

Considerando, que sin embargo, el hecho de que este principio no sea aplicable, no significa que lo penal se imponga a lo laboral y que sea la jurisdicción laboral la

que deba sobreseerse hasta tanto la jurisdicción penal decida al respecto, pues en este caso se tratarían de acciones independientes, sin vinculación una con otra, y que como tal pueden ser juzgadas sin sumisión recíproca;

Considerando, que en la especie, la Corte a-quá determinó que entre la acción penal y la laboral no existía ningún vínculo de conexidad, para lo cual tomó en cuenta que se trataba de una demanda en reclamación de prestaciones laborales por despido injustificado, que no resultaría afectada por la decisión de la jurisdicción penal apoderada de una acusación de robo contra el demandante, pues al negar el empleador haber despedido al demandante, una eventual aceptación de dicha acusación no podría ser utilizada como prueba de la justa causa de dicho despido; que por demás un despido puede ser declarado injustificado aún cuando un tribunal penal condene al trabajador por la comisión de una violación a las leyes represivas. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de diciembre de 1999).

M

101. MEDIO DE INADMISION:

101.1 Medio de Inadmisibilidad. Alegato de que no se conoció al fondo.

Que al declarar inadmisibile la demanda del recurrente por prescripción de la acción, la Corte no podía hacer consideraciones sobre el fondo de la demanda y la procedencia de la reclamación del recurrente, pues uno de los efectos de las inadmisibilidades es que impide la discusión del fondo de un asunto, no pudiéndosele atribuir a la sentencia impugnada el vicio de no ponderar los méritos de la acción ejercida por el recurrente ni de no analizar los hechos de la demanda, pues que como consecuencia de su fallo no podía hacerlo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1ro. de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 255).

101.2 Medio de Inadmisión. Necesidad de poner en mora al rechazarse un medio de inadmisión.

Que si bien es cierto que los jueces del fondo pueden, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, decidir tanto los incidentes procesales que sean promovidos, como el fondo del asunto, ello es así cuando

las partes hayan concluido sobre el fondo o puestas en mora de hacerlo, lo que no ocurrió. Que esa solución se impone para salvaguardar el derecho de defensa de las partes, en razón de que con la entrada en vigor de la Ley No. 845 de 1978, el recurso de oposición contra las sentencias en defecto fue ampliamente restringido, lo que obliga a una interpretación de la ley que asegure a las partes la posibilidad de exponer sus respectivos medios de defensa y ataques; que como consecuencia de ello, la Corte a-qua estaba en el deber, para preservar además del principio de la contradicción de invitar a la parte intimada a concluir al fondo, o a presentar sus observaciones; que al no proceder de esta forma, violó el derecho de defensa de dicha parte intimada. (Cámara Civil, 10 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Págs. 43-44).

101.3 Medio de inadmisión. Obligación de fallarlo antes del fondo.

Considerando, que tal como afirma la recurrente, la sentencia impugnada hace constar que ante la Corte a-qua solicitó la inadmisibilidad del recurso de apelación por tratarse de una demanda cuya cuantía no ascendía a 10 salarios mínimos; que no obstante hacer figurar esas conclusiones el tribunal a-quo no tomó ninguna decisión en cuanto al pedimento de inadmisión, ni da ningún motivo para su rechazo;

Considerando, que cuando a los Jueces se les formulan pedimentos formales a través de conclusiones, estos están en la obligación de pronunciarse sobre los mismos, no pudiendo decidir el fondo de un recurso si antes no se ha decidido un medio de inadmisión presentado por una de las partes, como ocurrió en la especie, por lo que la

sentencia impugnada carece de motivos y de base legal, procediendo su casación, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 525).

102. MENORES:

102.1 Menores. Ley 14-94: Propósito. Reclamación de alimentos. Carácter provisional. Apelación de pensiones alimentarias: Efecto Ejecutorio.

(Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

102.2 Menores. Reclamación de alimentos. Carácter provisional.

Considerando, que el recurso de apelación resulta ser un corolario del principio del doble grado de jurisdicción y, en esa virtud, salvo disposición contraria de la ley, toda sentencia es apelable; que en esta materia, reclamación de alimentos, la ley le señala un carácter provisional, es decir, que deben decidir sobre demandas provisionales o lo que es lo mismo, prescribir medidas urgentes y necesarias para proteger el interés de una de la partes; que, no obstante el carácter provisional de estas decisiones, la ley permite que sean inmediatamente apelables; que, más aún, por su carácter de provisionalidad, las sentencias que fijan pensión alimentaria no tienen autoridad de cosa juzgada, puesto que, el tribunal que conoce en alzada y el mismo tribunal que evacuó la sentencia de primer grado, pueden, en uno y otro momento, modificar y revocar cualquier monto de pensión que haya ordenado, si sobreviene un cambio en

el estado de las cosas que había tomado en consideración al pronunciarlas; que entre los cambios que se pueden operar en el estado de las cosas, están, entre otros: que las necesidades del niño, niña o adolescente se haya modificado por cualquier motivo o, por otro lado, que los medios económicos de que pueden disponer los padres experimenten alguna variación. (Cámara Penal, 3 de noviembre de 1999).

N

103. NO HAY NULIDAD SIN AGRAVIO:

No hay nulidad sin agravio. Artículo 37 Ley 834 de 1978. Lo que se entiende por perjuicio.

Considerando, que el agravio a que se refiere el artículo 37 de la Ley 834 de 1978 debe entenderse como el perjuicio que la inobservancia de la formalidad prescrita ha causado a la parte contraria, que ha impedido defender correctamente su derecho; que tal situación no es la planteada por la recurrida ya que es obvio que por los documentos, y los hechos y circunstancias comprobados en la sentencia impugnada ésta conocía la profesión del recurrente, por lo que la omisión señalada no le impidió exponer ante la Suprema Corte de Justicia, sus medios de defensa contra el recurso de casación; que, en tal virtud el medio de nulidad debe ser rechazado. (Cámara Civil, 12 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 70).

104. NOMBRE COMERCIAL:

104.1 Nombre Comercial. Artículo 8. Ley 1450 del 1958. Nombre geográfico. División territorial. Paraje. Ley 5220 de 1959.

Considerando, que los ordinales b y d del inciso 7 del artículo 8 de la Ley No. 1450 de 1938, que alega la

recurrente han sido violados en la sentencia impugnada, disponen que no podrán ser registre los términos o locuciones que estén en uso general, ni los nombres geográficos cuando por sí solos consituyen la marca; que de lo anterior se infiere que el registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos, como el de la especie, está subordinado, conforme dichos textos, a la doble exigencia de que el nombre geográfico que se registre debe ser parte de una denominación compuesta, en la que este nombre no designe únicamente la marca y de que éste a su vez no sea genérico y pueda individualizarse del nombre geográfico; que el nombre geográfico puede ser registrado como nombre comercial, si él mismo no constituye por sí solo el nombre comercial registrado; que el nombre "Bávaro", contrario a lo que alega la recurrente y conforme dicho artículo, no puede, por la razón señalada, ser registrado en beneficio exclusivo de alguien, por tratarse de un nombre geográfico, no susceptible, para tales fines, de propiedad particular y exclusiva;

Considerando, que tampoco incurrió la Corte a-quá en el vicio denunciado por la recurrente, al afirmar que el nombre "Bávaro" corresponde a una demarcación geográfica cuyo uso no es exclusivo de ninguna persona física o moral, ya que para afirmar lo antes dicho, se basó en una serie de documentos y certificaciones, depositados al efecto en el expediente, en la que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, dispone el registro de otros nombres comerciales, en los que "Bávaro" forma parte del nombre de otros establecimientos comerciales de igual naturaleza que las de las partes en litis;

Considerando, que si bien es cierto que el registro de un

nombre comercial efectuado conforme la Ley No. 1450, es declarativo de propiedad, como lo dispone en el inciso 6 del artículo 8, garantizando por tanto al interesado la exclusividad en el uso de ese nombre, en la especie, tal y como consta en la sentencia impugnada, es falso que el nombre de la recurrida sea igual o similar al de la recurrente ni produce confusión en lo absoluto con el de ella y que debió motivar la anulación de la recurrente a los términos del artículo 9 de la Ley No. 1450, ya que no se reprodujo el nombre registrado por la recurrente para un artículo de la misma clase, puesto que el nombre geográfico "Bávaro" no constituye por sí solo el nombre registrado; que además, la apreciación de cualquier parecido o la estimación de que no existe parecido entre ambas denominaciones, es asunto de fondo que los jueces aprecian soberanamente y que como cuestión de hecho escapa al control de la casación. (Cámara Civil, 12 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 136-137).

104.2 Nombre comercial. Conflicto entre particulares. Competencia de los tribunales ordinarios.

Considerando, que en la sentencia impugnada se expresa al respecto, que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 19-86 del 12 de marzo de 1986, a instancia de la Central de Créditos, C. por A., canceló el Registro No. 11879 del 15 de septiembre de 1985 que protegía el nombre de la Financiera Mercantil, S. A. (FIMER) de donde se infieren intereses entre particulares en lo que respecta al mencionado nombre comercial y que el literal (4) del artículo 7 de la Ley No. 1494 es claro y preciso respecto a la incompetencia de este tribunal para conocer del caso que nos ocupa;



Considerando, que en la especie se trata de un conflicto derivado del Registro de un nombre comercial expedido a favor de la recurrente y cuya cancelación fue solicitada ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por la firma reclamante, la Central de Créditos, C. por A., controversia que fue resuelta por dicha Secretaría mediante Resolución motivada, al amparo de lo previsto por el citado artículo 13; por lo que obviamente se trata de un conflicto entre particulares que si bien es cierto que envuelve una actuación de un organismo de la Administración Pública, no menos cierto es que dicha controversia trasciende el ámbito de lo administrativo al tratarse de una litis entre comerciantes derivada de un nombre comercial, que escapa de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 7, literal f) de la Ley No. 1494; por lo que se desestiman los medios de casación propuestos por la recurrente, ya que los mismos carecen de fundamento;

Considerando, que de lo anterior se desprende que el Tribunal a-quo efectuó una correcta aplicación de la ley al declarar su incompetencia *ratione materiae* en el caso de la especie, ya que el Tribunal competente para estatuir al respecto es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción territorial correspondiente, actuando en sus atribuciones comerciales; por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata, por improcedente e infundado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 399).

104.3 Nombre comercial. Nulidad del traspaso. Medio nuevo en casación.

Considerando, que con relación a lo expuesto por último por la recurrente de que la ley fue mal interpretada porque el paraje es una demarcación territorial que forma parte de una sección y esta a su vez de un municipio; el artículo 5 de la Constitución de la República, relativo a la división política de la República Dominicana, establece que: "El territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional en el cual estará comprendida la capital de la República y en las provincias que determine la ley. Las provincias a su vez se dividen en municipios", dejando a continuación en manos de la ley reconocer el "paraje" como división territorial, constituyendo conforme la Ley 5220 de 1959 sobre División del Territorio Dominicano y en especial que el párrafo II del artículo 3 en lo que concierne al municipio de Higüey, la "sección", la división política territorial misma de este municipio y de cualquier otra en la República Dominicana, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 12 de mayo de 1999; B. J. 1062. Págs. 137-138).

105. NOTARIOS:

Notarios. Artículo 16, literal b de la Ley del Notariado. Distinción entre una sanción disciplinaria y una sanción penal.

Atendido, que, como se observa, la única sanción que contempla la ley para el notario que incurra en la inobservancia de la prohibición contenida en el literal b) de la parte capital del texto legal arriba transcrito, como

ocurre en la especie, es la destitución; que de conformidad con la clasificación que hace el artículo 1 del Código Penal, la infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención; las que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito; y la infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen; que, como la destitución no es una pena criminal, ni correccional, ni de policía, sino disciplinaria, resulta evidente que el hecho denunciado, y que sirve de base de la querella interpuesta, sólo castigable con la pena disciplinaria señalada, no constituye ni crimen ni delito, por lo que es inoportuno e improcedente iniciar la persecución penal contra el querrellado. (Auto Presidente, 7 de julio de 1999).

106. NOTIFICACION:

106.1 Notificación. Artículo 68 Código de Procedimiento Civil. Sello gomígrafo del ayuntamiento. Recursos.

Considerando, que en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de Casación figura el acto número 133, fechado 14 de noviembre de 1992, diligenciado por el ministerial Felix F. Durán, Alguacil Ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, a requerimiento de la recurrida, el cual contiene en la última página una nota escrita a manos que dice "En el momento de mi traslado, hable con el encargado de seguridad de dicha empresa y este se negó a recibir el acto y a dar su nombre, pero luego averigüé que su nombre es Casimiro Santamaría", lo que es indicativo de que el referido acto no fue notificado a la recurrente;

Considerando, que a pesar de que el mencionado acto contiene un sello gomígrafo del ayuntamiento del municipio de Villa Altagracia y de la Secretaría Municipal de Villa Altagracia, en él no se consigna que el alguacil actuante diera cumplimiento a las disposiciones del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a entregar copia del acto no recibido en el domicilio de la persona contra quien va dirigido, ni por ningún vecino o cuando este lo recibiera y no firmara el acto, al síndico municipal o quien haga sus veces y a hacer mención de todas sus actuaciones en el original y en las copias del acto notificado;

Considerando, que en el memorial de defensa, la recurrida afirma que el alguacil depositó el acto no recibido por la empresa en el ayuntamiento municipal de Villa Altagracia, con lo que a juicio de esta Corte, no cumple con los requisitos exigidos por el referido artículo 68 del Código de Procedimiento Civil para dar validez a la notificación de la sentencia impugnada;

Considerando, que al no ser válido el acto No. 133, del 14 de noviembre de 1992, con el que se pretendió notificar la sentencia recurrida y no existir en el expediente constancia de que la sentencia se hubiere notificado en una fecha anterior a la del depósito del memorial de casación, es evidente que este fue interpuesto antes de que comenzara a correr el plazo de dos meses que establece el artículo primero de la Ley No.3726, sobre Procedimiento de Casación, para el depósito del memorial contentivo del recurso de casación, razón por la cual fue presentado en tiempo hábil, procediendo en consecuencia el rechazo del medio de inadmisión, por carecer de fundamento. (Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 1 de abril de 1998; B. J. 1049. Págs. 210-211).

106.2 Notificación. Notificación al abogado constituido. Artículo 147 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que en virtud de la indicada disposición "cuando haya abogado constituido, no se podrá ejecutar la sentencia sino después de haberle sido notificada, a pena de nulidad. Las sentencias provisionales y definitivas que pronunciasen condenaciones, se notificarán además, a la parte, en su persona o en su domicilio, haciéndose mención de la notificación hecha al abogado";

Considerando, que ni en el original de la notificación de la sentencia impugnada, ni en ninguna otra notificación hecha anterior o posterior a ésta, figura la notificación al abogado constituido por el hoy recurrente, lo que evidencia que dicha formalidad no fue cumplida; Pero,

Considerando, que la nulidad a que se refiere la primera parte del artículo 147 citado, afecta a los actos de ejecución, no a la sentencia; que, en tal sentido, la notificación hecha a la parte que sucumbe, produce el efecto que le es característico: la de hacer correr los plazos del recurso que corresponda; que en tal virtud, la notificación de la sentencia impugnada, aún no hecha al abogado, hizo correr el plazo del recurso de casación, por lo que su interposición, fuera de los plazos establecidos en el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación constituye un medio de inadmisibilidad del recurso. (Cámara Civil, 2 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Pág. 77).

107. NULIDAD:

107.1 Nulidad. Acto de Procedimiento. Necesidad de ser pronunciadas.

Considerando, que ha sido opinión constante de la doctrina y la jurisprudencia, que la nulidad en los actos de procedimiento, aún cuando sea de orden público, tiene que ser pronunciada en el curso de la instancia, y después de pronunciada la sentencia definitiva la nulidad, si es de orden público, podrá ser pronunciada, aún de oficio, al conocerse del asunto con motivo del ejercicio de la vía ordinaria de recurso, como resultan la oposición y la apelación o, una vía de recurso extraordinaria, como lo son la revisión civil, la tercería y la casación, lo que no ha ocurrido en la especie, pues se trata de una acción incoada de manera principal contra una sentencia de divorcio ya pronunciada, no atacada mediante los recursos consagrados por la ley y que estaban a su alcance; que como la sentencia no puede ser impugnada por medio de una acción principal que tienda a anularla o revocarla, como es de principio, la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de analizar los demás medios contenidos en el memorial de casación. (Cámara Civil, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 195).

107.2 Nulidad. Nulidad de los actos de los poderes públicos. Anulación. Formas de proceder. Perención de instancia. Suprema Corte de Justicia. Artículo 397 Código de Procedimiento Civil.

Atendido, en cuanto al aspecto relativo a la necesidad de citación para conocer de la acción en inconstitucio-

nalidad, los oponentes alegan que al no ser citados el Estado Dominicano y la Comisión Aeroportuaria en la acción intentada para anular el Decreto No. 295-94, del 29 de septiembre de 1994, de conformidad con el procedimiento previsto por los artículos 69 del Código de Procedimiento Civil y 13 de la Ley No. 1486, del 20 de marzo de 1938, se violó en su perjuicio el artículo 8, numeral 2, literal j) de la Constitución, y, por tanto, la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el 19 de mayo de 1999, está afectada de nulidad absoluta;

Atendido, a que la ley, decreto, resolución o acto emanados de los poderes públicos, como normas sociales obligatorias, no se anulan o derogan mediante un procedimiento judicial que conlleve la citación del órgano emisor de la ley, decreto, resolución o acto de que se trate, pues dichos instrumentos legales se dejan sin efecto o validez, mediante las formas instituidas por la Constitución o la ley; que una de esas formas de anulación se alcanza mediante decisión de la Suprema Corte de Justicia, apoderada directamente con esa finalidad por el Poder Ejecutivo, por uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o por parte interesada, en caso de inconstitucionalidad; que tal como se explica mas adelante, no supone en modo alguno el sometimiento a las reglas trazadas por los textos legales invocados por los oponentes;

Atendido, que los oponentes alegan, por otra parte, que esta Suprema Corte de Justicia falló en relación a instancias perimidas, por cuanto las que dieron lugar a la sentencia del 19 de mayo de 1999, son de fechas 6 y 26 de octubre de 1994 y 7 de abril de 1995, y, por tanto, en violación al artículo 397 del Código de Procedimiento

Civil; que el citado texto legal dispone que: "toda instancia, aunque en ella no haya habido constitución de abogado, se extinguirá por cesación de los procedimientos durante tres años. Este plazo se ampliará a seis meses más, en aquellos casos que den lugar a demanda en renovación de instancia, o constitución de nuevo abogado"; que, aparte de que las instancias en cuestión permanecieron en poder de la Procuraduría General de la República por un tiempo superior al indicado en el referido artículo 397, adonde habían sido remitidas para fines de opinión, obstrucción en los procedimientos no imputable a la Suprema Corte de Justicia, es de principio que las reglas de la perención civil, contempladas en el citado texto legal, no son aplicables en materia constitucional ni ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación; que, además, la perención del artículo 397 que tiene por efecto hacer declarar la instancia extinguida, en el proceso civil, no opera de pleno derecho ni puede ser suplida de oficio por el juez, por lo que tiene que ser demandada, lo que tampoco ocurrió en la especie, por lo cual aún en esta hipótesis no se ha incurrido en la denunciada violación del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. (Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 81-82).

107.3 Nulidad. Demanda. Competencia. Derecho registrado puesto en juego.

Considerando, que, por otra parte es obvio, que la demanda planteada por ante el tribunal de primera instancia por los recurridos, en contra del hoy recurrente, es en nulidad del acto, en ejecución del cual el recurrente había obtenido del Registrador de Título del Distrito Nacional, el registro en su favor del inmueble objeto de la

litis y que con dicha demanda se pretende aniquilar ese registro; que si bien es verdad que toda demanda en nulidad de un acto jurídico, es en principio de carácter personal, cuando ella pone en juego la cancelación o modificación de un derecho real inmobiliario registrado, tiene un carácter mixto, planteándose una litis sobre derechos registrados, cuyo conocimiento y decisión corresponde al Tribunal de Tierras, tal y como lo establece el inciso 4to. del artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras, sobre todo si el objeto de la demanda tiende, como ocurre en la especie a reivindicar para el patrimonio de los recurridos, derechos reales inmobiliarios cuyo registro el Tribunal de Tierras ha ordenado a favor del recurrente; que es el propio recurrido quien admite esta competencia, cuando por instancia depositada por ante el Tribunal de Tierras, el 10 de agosto de 1993, y recibida el 1ro. de septiembre de 1993, que aparece depositada en el expediente formado por motivo del presente recurso de casación y que forma parte del inventario de las piezas depositadas por el recurrente ante el Tribunal a-quo, solicita de esa jurisdicción y con relación al inmueble objeto del litigio, la designación de "un Juez de Jurisdicción Original para conocer de la presente litis sobre terreno registrado a fin de que establezca la existencia del contrato de venta alegadamente realizado con el señor Lorenzo A. Rodríguez Melgen, por tratarse de un contrato de préstamo puro y simple..."; que el hecho de apoderar de antemano al Tribunal de Tierras de una demanda sustancialmente idéntica a la que someten luego por ante la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, constituye la admisión por parte de los recurridos de la competencia del Tribunal de Tierras; que,

por tanto, es evidente, que el Tribunal a-quo al no aplicar correctamente la ley y las reglas de la competencia de atribución, ha incurrido en las violaciones invocadas por el recurrente en su primer medio de casación, por lo cual procede casar la sentencia impugnada sin necesidad de ponderar los demás medios propuestos por el recurrente. (Cámara Civil, 13 de mayor de 1998; B. J. 1050. Págs. 193-194).

1.0510

O

108. OCULTAMIENTO DE BIENES:

108.1 Ocultamiento o distracción de bienes. Artículos 792 y 1477 del Código Civil.

Considerando, que como se advierte de lo expuesto anteriormente, los jueces del fondo dieron por establecido que a pesar de que los señores Kismet Bienvenida Ortiz Badía de Vargas y Carlos Federico Vargas de Soto, incluyeron, aparte de otros bienes, en el acuerdo transaccional intervenido entre los sucesores de Bienvenido Ortiz Gómez el 22 de mayo de 1991, que se encuentra depositado en el expediente, sólo la suma de los cien mil pesos dominicanos (RD\$100,000.00) pagados como inicial y no el bien adquirido mediante la venta indicada, ningún hecho positivo de ocultamiento o distracción, como la mala fe o la intención fraudulenta, elemento esencial y constitutivo de este delito civil, le podía ser imputable a los recurridos; que no habiendo la ley determinado las circunstancias que caracterizan el ocultamiento o distracción, los jueces del fondo disponen al respecto de un poder soberano de apreciación; que, por tanto, al considerar la Corte a-quo que la mala fe o intención fraudulenta, que es de la naturaleza del delito civil previsto en los artículos 792 y 1477 del Código Civil, no se encuentran presentes en este caso, han hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 184).

108.2 Ocultamiento de bienes. Condiciones.

Considerando, además, que sobre el argumento de desnaturalización de los hechos, sostenido por la recurrente, es evidente que el mismo tiene su fundamento en el alegato ocultamiento que ha venido sosteniendo; que como se ha expuesto anteriormente, la distracción u ocultamiento de un bien o efecto de la sucesión, por parte de un heredero o del esposo superviviente común de bienes, o de ambos a la vez, supone, por parte de éstos, un fraude o maniobra dolosa, lo que no ha sido establecido ni probado en la especie, por lo que también este alegato carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050, Pág. 186).

109. OFERTA REAL DE PAGO:

109.1 Oferta real de pago. Artículo 86 del Código de Trabajo. Diferencia en cuanto a lo ofertado y reclamado.

Considerando, que la disposición del artículo 86 del Código de Trabajo que dispone la obligación del empleador de pagar una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador, por cada día de retardo en el pago de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía, tiene aplicación cuando el empleador no realiza el pago u ofrece pagar una suma inferior a la que corresponde al trabajador desahuciado;

Considerando, que cuando el empleador hace una oferta de pago y esta no es aceptada por el trabajador bajo el alegato de que la misma es incompleta y no satisface los

derechos que le corresponden, para que un tribunal disponga la aplicación de la penalidad establecida en el referido artículo 86, es necesario que previamente este declare que la negativa del trabajador a recibir los valores ofertados es justificada por no cubrir la oferta realizada el monto total de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía;

Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo confirmó el ordinal quinto de la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, que declaró "justas las sumas ofrecidas a las partes demandantes por la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., con respecto de los beneficios e indemnizaciones por concepto de auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones, bonificaciones y salario de navidad de acuerdo a los cálculos que constan en el expediente y al pago de los cheques cuyas copias figuran también";

Considerando, que la diferencia en el pago ofertado por la recurrente y lo reclamado por la recurrida, radica en la falta del cómputo a los fines del cálculo del salario promedio diario de la trabajadora de un incentivo denominado MICS, que era entregado por la empresa a sus trabajadores; que habiendo considerado el Tribunal a-quo que ese incentivo no beneficiaba a la demandante, razón por la cual revocó en ese aspecto la sentencia de primer grado, no podía mantener la condenación del pago del monto equivalente a un día de salario por cada día de retardo impuesta por la sentencia apelada, ya que de acuerdo al criterio del propio tribunal, al entender que el incentivo no era un salario ordinario recibido por la demandante, los cálculos realizados por el empleador para el pago de los derechos de esta fueron correctos, lo

que hacía injustificada la negativa de la recurrida a recibir los valores ofertados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 307-309).

109.2 Oferta real de pago. Artículo 653 del Código de Trabajo. Necesidad de la consignación para la liberación de la obligación.

Considerando, por otra parte, que el artículo 653 del Código de Trabajo establece que "Todo empleador o trabajador que desee liberarse de la obligación de pagar una suma de dinero que provenga de contratos de trabajos o de convenios colectivos o haya sido contraída en ocasión de la ejecución de los mismos, puede consignarla en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente al lugar en que tenga su domicilio el acreedor, previo ofrecimiento real de pago no aceptado por el último";

Considerando, que de la disposición arriba transcrita se observa que no es el ofrecimiento real de pago lo que produce la liberación del empleador o trabajador, de la suma adeudada, sino la consignación que se haga de la misma en la Colecturía de Rentas Internas, la que a su vez para tener validez requiere del ofrecimiento previo;

Considerando, que la propia recurrente admite que no hizo la consignación de la suma ofertada en la colecturía de Rentas Internas, lo que determina que el ofrecimiento formulado al trabajador no adquiriera ningún valor a los fines de liberar a la recurrente del pago de la suma que reconocía adeudar;

Considerando, Que el término "puede consignarla", que utiliza el referido artículo 653 no implica que no sea

necesaria la consignación para la validez de la oferta, por ser dicha consignación facultativa del ofertante, como alega la recurrente, sino que lo optativo es el deseo del deudor de liberarse de la deuda mediante la oferta de pago, pero una vez iniciado el procedimiento para su culminación válida, se torna imperativa la consignación de la suma ofertada;

Considerando, que no siendo válida la oferta real de pago por no haber sido proseguida de la correspondiente consignación, el tribunal a-quo no tenía que detenerse a ponderar si la oferta abarcaba la totalidad de los créditos adeudados al recurrido, pues aún cuando ello fuere así la nulidad de la oferta se mantenía por no haberse cumplido todo el procedimiento establecido en el referido artículo 653 del Código de Trabajo;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, por lo que el recurso carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 495).

109.3 Oferta real de pago. Condiciones impuestas por el ofertante.

Considerando, que por otra parte, si el recurrido había realizado un embargo retentivo en manos de diversas instituciones bancarias en perjuicio del recurrente era natural, que éste, en el momento de realizar la oferta, le impusiera como condición al ofertado que le mostrara el levantamiento de dicha medida conservatoria o que se

comprometiera a efectuarla, si no la había hecho, asimilándose a una negativa a recibir el pago ofrecido, el hecho de que el recurrido no cumpliera con esa condición;

Considerando, que el hecho de que la oferta real de pago esté condicionada a la realización de un acto al que está obligado el acreedor, como es el levantamiento de un embargo o la radiación de una hipoteca, no es nula por esa circunstancia, si el acreedor no cumple con la condición y la suma ofertada es consignada en la forma que lo establece la ley, en vista de que el deudor puede insertar en sus ofertas reales de pago las mismas condiciones, protestas o reservas que tendría derecho de hacer al realizar el pago de grado a grado, y que no son, por su parte, sino el ejercicio de un derecho legítimo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de diciembre de 1999).

110. OPOSICION:

110.1 Oposición. Constitucionalidad. Inadmisibile contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Atendido, a que la sentencia atacada por la vía de la oposición, ha estatuido, como se ha visto, sobre la constitucionalidad del Decreto No. 295-94, del 29 de septiembre de 1994, a instancias de varias personas que alegan que el cobro de diez dólares de los Estados Unidos de América, por persona, en virtud del señalado decreto, como contribución de salida al exterior por vía aérea, es indebido por ser contrario a la Constitución;

Atendido, a que si bien el recurso de oposición es

admisible contra la sentencia en última instancia pronunciada por defecto contra el demandado, si éste no ha sido citado por acto notificado a su persona misma o a la de su representante legal, como alegan los oponentes, es obvio que éstos se refieren a la vía de recurso ordinaria que, abierta a la parte juzgada sin haber estado presente ni representada, es llevada ante la jurisdicción de donde emana la decisión atacada, para que se estatuya de nuevo en hecho y en derecho;

Atendido, a que es tradicionalmente admitido que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no son susceptibles de ningún recurso; que el único recurso que se permite contra ellas es el de la oposición previsto por el artículo 16 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que traza un procedimiento particular y diferente al recurso de oposición ordinario que reglamentan los textos legales invocados en ese aspecto por los oponentes, que no es el caso, ya que no se trata de la oposición del recurrido que hace defecto en casación; que asimismo, la revisión sólo es posible en corrección de un error puramente material que se haya deslizado en la sentencia de casación, a condición de que no se modifiquen los puntos de derecho resueltos definitivamente. Admitir lo contrario implicaría un desconocimiento al principio de la autoridad de la cosa juzgada; que, por otra parte, el hecho de que el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República le atribuya a la Suprema Corte de Justicia la facultad exclusiva de conocer de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada, no implica, en modo alguno, que cada vez que esto ocurra, la situación jurídica creada da nacimiento a un

proceso judicial, pues al no originar la instancia en acción de inconstitucionalidad una controversia entre partes y, por tanto, un debate en esta jurisdicción excepcional, la decisión en única instancia resultante del tribunal constitucional, no es susceptible de ningún recurso, y se impone a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, las que incurren en desacato cuando oponen resistencia a su ejecución;

Atendido, que como en la especie se trata de una oposición contra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada en materia de constitucionalidad, ni las disposiciones que reglamentan en el Código de Procedimiento Civil el recurso ordinario de la oposición, ni el artículo 16 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que establece, como se ha dicho, un procedimiento particular, pueden servir de fundamento legal al recurso intentado por los oponentes; que en tales condiciones, es obvio que dicho recurso no puede ser admitido;

Atendido, que al declararse inadmisibile la oposición de que se trata, la Suprema Corte de Justicia queda, por ello, redimida de ponderar los demás aspectos planteados por los oponentes en su instancia; que, sin embargo, este alto tribunal juzga conveniente, para la mejor dilucidación del caso, ponderar también los puntos de la instancia que no han sido analizados por esta Corte y planteados por los oponentes. (Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 79-81).

110.2 Oposición. Recurso. Sentencias contra las cuales se admite.

Luego de haber ratificado el criterio de que el recurso de

oposición sólo es admisible contra las sentencias dictadas en defecto por falta de comparecer contra el demandado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, excluyendo el recurso de oposición contra toda otra sentencia no consignada en dicho texto legal, como lo sería el caso del defecto por falta de concluir, se dijo que tanto el artículo 150 para la materia civil como el artículo 434 para la materia comercial, del mismo Código de Procedimiento Civil, conllevan las mismas consecuencias legales y no existiendo en el estado actual de nuestra legislación, después de la puesta en vigor de la Ley No. 845 de 1978, diferencias sustanciales entre el procedimiento en ambas materias, civil y comercial, la aplicación en el procedimiento de los asuntos civiles del artículo 434 del referido Código no es susceptible de desnaturalizar las consecuencias del defecto por falta de concluir en materia civil. (Cámara Civil, 29 de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 78).

P

111. PACTO COLECTIVO:

Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Condiciones para su ejecución. Artículo 105 del Código de Trabajo.

Considerando, que no tan solo es necesario que las negociaciones hayan culminado con un acuerdo sobre la totalidad de los puntos discutidos a través de ellas, para que lo convenido sea de cumplimiento obligatorio, sino que el artículo 105 del Código de Trabajo, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, establecía: "para que el pacto colectivo de condiciones de trabajo pueda ejecutarse debe ser aprobado previamente por los organismos más representativos de patronos y trabajadores", lo que es obvio, no ocurrió en la especie, por no haber concluido las negociaciones colectivas con la firma del convenio colectivo.-

Considerando, que al no haberse cumplido con las formalidades exigidas por la ley para la ejecución del pacto colectivo de condiciones de trabajo, en primer lugar la firma de un acuerdo sobre todos los puntos discutidos y la posterior aprobación de parte de los organismos más representativos de la empresa y del sindicato, la recurrida no estaba obligada a pagar otras prestaciones laborales que no fueran las prescritas por el Código de Trabajo, que las propias recurrentes admiten les fueron pagadas,

razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser rechazado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 356).

112. PARTICION:

112.1 Partición y liquidación de bienes. Artículos 7, 193 y 214 de la Ley de Registro de Tierras. Competencia.

Considerando, que si bien es cierto que cuando la jurisdicción civil ordinaria es apoderada de una demanda en partición y liquidación de bienes sucesorales, el Tribunal de Tierras, que es una jurisdicción especial, deja de ser competente para conocer de las demandas conexas que puedan surgir con motivo de la forma de distribución de los bienes del acervo sucesoral en litigio, aún cuando incluyan o se refieran a inmuebles registrados catastralmente, no es menos cierto que cuando se trata de un pedimento sobre transferencia de un derecho registrado, o que ponga en juego ese derecho, para, por ese medio, aniquilar su registro, cuando ya el Tribunal de Tierras lo ha ordenado, sólo este Tribunal, de conformidad con los artículos 7, 193 y 214 de la Ley de Registro de Tierras, es competente para conocer de la litis que persiga tales fines, lo cual no implica, con modo alguno, menoscabo de la competencia en la materia de los Tribunales Ordinarios, que es más amplia, la cual mantiene su imperio en ausencia de disposiciones expresas en contrario establecidas en la ley; que en la especie, se trata de demostrar que la recurrente no vendió sus derechos dentro de la sucesión

de sus padres y, por tanto, en la Parcela No. 37, y de ese modo obtener la cancelación o aniquilamiento del registro del derecho de propiedad hecho en favor del recurrido en virtud de la Resolución del Tribunal superior de Tierras, del 3 de abril de 1967, con el fin de que ese inmueble retorne al acervo sucesoral y sea comprendido en la partición ordenada por los tribunales ordinarios que fueron apoderados; que en esas condiciones, como la Ley de Registro de Tierras ha incluido expresamente las litis sobre derechos registrados, que es lo que ha planteado en realidad la recurrente cuando pretende aniquilar el registro del derecho de propiedad hecho en favor del recurrido sobre el inmueble de que se trata, entre aquellas que debe conocer el Tribunal de Tierras, es forzoso admitir que al rechazar los jueces del fondo las pretensiones de la hoy recurrente para que se le rindiera cuentas de la administración de la parcela en cuestión, la cual considera propiedad de la sucesión y no del recurrido, hicieron una correcta interpretación de las reglas de su competencia, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 30 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Págs. 129-130).

112.2 Partición de una sucesión. Competencia. Artículos 214 Ley de Registro de Tierras. Tribunal civil apoderado.

Considerando, que los recurrentes alegan en primer término como medio de casación, que cuando la Corte a-quá considera en el noveno considerando de la sentencia impugnada que "toda litis sobre terrenos registrados es de la competencia del Tribunal Superior de Tierras" y que por tanto, el caso de la especie escapa a la

competencia de los tribunales ordinarios, incurre en desnaturalización "del caso de que se trata", ya que en materia de partición de una sucesión la competencia es de los tribunales ordinarios y que sólo en los casos limitativamente señalados por el artículo 214 de la Ley de Tierras, lo es el Tribunal Superior de Tierras; que por tanto, la sentencia impugnada debe ser casada;

Considerando, que de conformidad con el artículo 214 de la Ley 1542 de 1947 sobre Registro de Tierras, el Tribunal de Tierras es competente para conocer del procedimiento relativo a la partición entre herederos o co-participes de los derechos registrados a nombre de su causante, cuando por instancia suscrita por ellos o por apoderado, todos se pusieren de acuerdo y sometieren un proyecto de partición, procediendo el tribunal a determinar los derechos entre las respectivas partes, siempre de acuerdo con dicho proyecto de partición y cuando ningún demandado solicite la declinatoria por ante la jurisdicción ordinaria; que el caso que nos ocupa, se refiere a una demanda en partición de bienes pertenecientes a la finada Remedios Medina, en la que los demandantes, hoy recurrentes, apoderaron al juzgado de primera instancia de Batoruco en sus atribuciones civiles, para que decidiera lo relativo a dicha partición; que es criterio constante de esta Suprema Corte, que cuando el tribunal civil ordinario esté apoderado de la demanda en partición de bienes del patrimonio de una sucesión, dicha jurisdicción es competente cuando estos bienes están registrados; que cuando el legislador consagra expresamente, como ocurre en el caso del artículo 214 de la Ley de Registros de Tierras, que esta jurisdicción especializada, es la facultada para decidir de una demanda en partición, se requiere que todos los

herederos estén de acuerdo ya que se trata de una competencia excepcional; que fuera de ese caso, y tratándose de una acción de carácter personal, es el derecho común el que mantiene su imperio y la competencia es de la jurisdicción ordinaria que es mucho más amplia y natural; que en la especie, por tratarse de una demanda en partición, interpuesta por los hoy recurrentes ante la jurisdicción civil ordinaria y decidir la sentencia impugnada declinar el asunto por ante la jurisdicción de tierras "por ser el tribunal competente en razón de la materia...", es evidente, que tal como alegan los recurrentes, se incurrió en la misma en violación a la ley, motivo por el cual procede casar la sentencia impugnada sin necesidad de ponderar los demás medios del recurso. (Cámara Civil, 2 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 69-70).

113. PATENTE DE INVENCION:

Patente de invención. Protección. Ley 4994 de 1911.

Considerando, que la Corte también yerra al entender que la posibilidad de adquirir el referido producto en mercados internacionales, le otorga a E. P., el derecho de usarlo en la República Dominicana, bajo el nombre de C., puesto que, si bien es cierto que hay países que no reconocen, ni admiten las patentes de invención en favor de quienes los han creado, y por tanto se comercializan libremente esos productos, en menosprecio de reglas internacionales, no menos cierto es que la República Dominicana no está entre ellos, y si B. A. G. registró y patentó su fórmula en la República Dominicana, sólo ella y a quienes ella autorizara pueden hacer uso en el país de la misma;

Considerando, que aceptar lo contrario al criterio sustentado, sería desconocer la garantía que el Estado Dominicano debe a quienes han tenido la previsión de registrar o patentar el producto de su intelecto, acogiéndose a lo previsto por la Ley 4994 de 1911, ya que tácitamente se estaría derogando esa ley, lo que es inconcebible en el estado actual de nuestro derecho;

Considerando, que de todo lo anteriormente expuesto se evidencia, tal y como lo sustentan las recurrentes, que se ha violado el artículo 8, párrafo 14, de la Constitución Dominicana y el principio de la territorialidad de las leyes, por lo que procede casar la sentencia, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos por las recurrentes. (Cámara Penal, 16 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 273-274).

114. PATRONO:

Patrono. Obligaciones adquiridas por el anterior patrono. Influencia del pacto colectivo. Artículos 57 y 58 del Código de Trabajo.

Considerando, que habiéndose establecido que el pacto colectivo que sirvió de fundamento a la reclamación no fue concluido y que como consecuencia de ello, la recurrida no estaba obligada a satisfacer el reclamo de las recurrentes, es intrascendente la determinación de que si la UCE adquirió las obligaciones del CMN, por haber sustituido como patrono, pues como se ha expresado, las obligaciones cuyo cumplimiento exigieron las recurrentes no existían, por lo que aún cuando el tribunal hubiese violado los artículos 57 y 58, la forma que indican las recurrentes en su memorial, dicha

violación no variaría la correcta aplicación de la ley que hizo el tribunal a-quo, en cuanto al objeto de la demanda, careciendo de fundamento el medio que se examina y procediendo a su rechazo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 11 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 357).

115. PATRONATO:

Patronato Nacional de Ganaderos. Naturaleza Jurídica.

Considerando, que la sentencia impugnada no ponderó adecuadamente las disposiciones de los decretos Nos.2204, del 22 de agosto de 1963 y 67-88 del 5 de noviembre de 1988, los cuales cita, dándole la categoría de decretos de incorporación de la recurrente, como entidad constituida al tenor de la orden ejecutiva No. 520, sobre asociaciones sin fines de lucro, omitiendo que a través de los mismos se crea el Patronato Nacional de Ganaderos, como una institución a través de la cual el Gobierno Nacional procura "estimular y fomentar la cría de ganado para incentivar el aumento en la producción de carne y de leche", lo que le da la categoría de un organismo del Estado;

Considerando, que a pesar de que la sentencia impugnada reconoce que el Patronato Nacional de Ganaderos, no es una institución autónoma del Estado con carácter industrial, comercial, financiero o de transporte, que son las instituciones del Estado a quienes se les aplica la legislación laboral, le hace aplicable las disposiciones del Código de Trabajo relativa a la terminación del contrato de trabajo, lo que implica una

contradicción entre los motivos y el dispositivo de la sentencia impugnada, por lo que debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 376).

116. PERENCION DE INSTANCIA:

116.1 Perención de Instancia. Casación. Efectos.

Considerando, que cuando una sentencia es casada en todas sus partes, tiene por efecto reponer a las partes en causa en la misma situación en que se encontraba antes de producirse la sentencia casada; quedando en consecuencia subsistente el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado; que en esa circunstancia, si después de dictada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento permanece inactivo, el recurrido en apelación puede demandar la perención de esa instancia;

Considerando, que no es contra la sentencia de envío que opera la perención, sino sobre la instancia de apelación, por lo que no importa que la sentencia dictada por la Corte de Casación tenga un carácter definitivo, pues al pronunciarse, abre de nuevo, como ya se ha expresado, la instancia que dio lugar a la sentencia anulada, la que debe ser activada por la parte más diligente;

Considerando, que en vista de que la perención de instancia no extingue la acción, sino el procedimiento, tal como lo dispone el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, nada obsta para que en grado de

apelación, el demandante original demande la perención de esa instancia, siempre que en la misma él tenga la posición de recurrido, pues al anular la perención todos los actos de dicha instancia, queda subsistente la sentencia apelada, dictada a su favor;

Considerando, que si bien, el tribunal indebidamente confirma la sentencia impugnada, lo que debió abstenerse de hacer por haber declarado perimida la instancia de apelación, ese hecho no altera la situación jurídica creada con la declaratoria de perención y no la invalida, porque, es una regla que sirve de base a nuestro procedimiento de casación, que una sentencia no puede ser anulada sino cuando, en su disposición, se haya violado la ley, pues sería evidentemente trastornador e injusto que debido a errores doctrinales que no ejercen verdadera influencia sobre el dispositivo se anulara un fallo y se privara, consecuentemente, de los beneficios de la situación, por este creada, a la parte que lo hubiera obtenido;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verifica la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan

carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Pleno, 23 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 183-184).

116.2 Perención de instancia materia laboral. Formas de demandarla.

Considerando, que en esta materia no es necesario el ministerio de abogado, razón por la cual no se aplica la

extensión del plazo previsto en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil para los casos en que haya una nueva constitución de abogados; que por idénticas razones la demanda en perención no tiene que ser realizada mediante acto de abogado a abogado, sino por acto entre las partes con la utilización de un profesional del derecho, si la parte demandante lo considera pertinente, pero no por un imperativo de la ley. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Pág. 324).

117. PERJUICIO:

Perjuicio. Perjuicio in futurum.

Considerando, que la prueba de los riesgos que pudieran ocasionarse por el hueco en la pared del local alquilado, fue establecida en la sentencia impugnada, por las recomendaciones del Inspector de la Secretaría de Obras Públicas; que no obstante, se comprobó que tal recomendación, de donde hubiera podido comprobarse el daño, no fue realizada; que tratándose de un perjuicio in futurum, éste no es susceptible de una evaluación en el momento de la demanda; que de no existir los elementos determinantes del perjuicio, corresponde a los jueces del fondo postergar la fijación de dichos daños y perjuicios hasta que sus elementos constitutivos sean suministrados; que si bien es cierto que los jueces del fondo gozan de un poder discrecional para apreciar el daño y acordar la reparación que a su juicio corresponda, están obligados a motivar su decisión respecto de la evaluación de dichos daños y perjuicios a fin de que la

Suprema Corte de Justicia, pueda ejercer su control en ese aspecto del asunto, lo que no ha ocurrido en la especie; que existe falta de base legal cuando, frente a los hechos y circunstancias de la causa, la sentencia impugnada no contiene motivos suficientes y pertinentes que permitan a la Suprema Corte de Justicia, como corte de casación, determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada;

Considerando que en consecuencia, procede casar la sentencia recurrida por falta de base legal. (Cámara Civil, 21 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 93).

118. PERMUTA:

Permuta. Aplicación de las reglas para la compraventa. Artículo 173 del Código Civil.

(Ver: Estado Dominicano. Enajenación inmobiliaria. Aprobación del Congreso Nacional. Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 8).

119. PERSONALIDAD DE LAS PENAS:

Personalidad de las penas. Persecución penal contra los ejecutivos o representantes legales de una persona moral.

Considerando,....que por otra parte, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional apoderó al Juez de Instrucción de la referida querella para que instruyera la sumaria correspondiente contra ellos en sus calidades de ejecutivos de l. C., ya que ciertamente una persona moral no puede ser perseguida penalmente, pero sí sus

ejecutivos o representantes legales, pues lo contrario sería consagrar una impunidad irritante a favor de quienes se escudaran en las personas morales para cometer sus infracciones, por lo que procede rechazar los medios que se examinan. (Cámara Penal, 30 de mayo de 1998; B. J. 1051. Pág. 270).

120. PERDON CONDICIONAL:

Perdón condicional. Ley 223-84. Condiciones.

Considerando, que la Ley 223 del año 1984, que instituye en nuestra nación el perdón condicional de la pena, exige para que se pueda conceder este beneficio, que concurren los siguientes requisitos: a) que la sentencia conlleve una pena privativa de libertad de un año o menos de duración; b) que el condenado no sea reincidente; y c) que los antecedentes personales y la conducta observada por el procesado con anterioridad a los hechos, así como la naturaleza y modalidades del delito, permitan presumir que este no volverá a delinquir;

Considerando, que además, la ley de referencia ordena que el tribunal que conceda un perdón condicional de la pena, establecerá en la misma sentencia las condiciones siguientes que deberá cumplir el prevenido penalizado: a) residencia en un lugar preciso; b) sujeción a la vigilancia del ministerio público; c) adopción de un trabajo, profesión u ocupación, siempre que no cuente con otro medio que garantice una manera honesta de subsistencia; y d) pago de las costas y multas impuestas mediante la sentencia, salvo que se libere de ello por causa justificada;

Considerando, que en la especie, la ausencia de la documentación probatoria de la observancia de los requisitos exigidos por la Ley 223-84 para la concesión del perdón condicional de la pena, evidencia que la Corte a-qua no dio cumplimiento al procedimiento organizado en esta materia; y por tanto, la sentencia debe ser casada en ese aspecto. (Cámara Penal, 31 de marzo de 1999; B. J. 1060. Pág. 497).

121. PODER EJECUTIVO:

Poder Ejecutivo. Poder al Administrador General de Bienes Nacionales.

Considerando, que el poder otorgado por el Poder Ejecutivo al Administrador General de Bienes Nacionales, para que a nombre y representación del Estado Dominicano suscribiera el contrato de permuta con la recurrente, constituyen actuaciones que se enmarcan dentro de las facultades que le corresponden al Presidente de la República, según lo establece el artículo 55 de la Constitución, por lo que indudablemente constituyen actos realizados por uno de los Poderes del Estado en uso de atribuciones constitucionales, cuyo conocimiento no corresponde a la jurisdicción Contencioso- Administrativo, tal y como ha sido expresamente consagrado por la ley que regula dicha jurisdicción, en su artículo 7, inciso b); por lo que, con su sentencia el Tribunal Superior Administrativo ha incurrido en una violación de la Ley No. 1494, como ha sido denunciado por la recurrente en su segundo medio de casación; que por otra parte, el único requisito establecido por la Constitución para la validez de los

contratos de esta índole, es que los mismos sean sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, lo cual se cumplió en el caso de la especie; por lo que al anular en su dispositivo dicho contrato, la sentencia recurrida violó el principio de la separación de los Poderes del Estado, consagrado por el artículo 4 de la Constitución Dominicana, medio que por ser de orden público, debe ser suplido de oficio por esta Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que de lo anterior se desprende que la sentencia recurrida debe ser casada por el vicio de violación a la ley y a la Constitución, por vía de supresión y sin envío, ya que no queda cosa alguna por juzgar, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y sin necesidad de analizar los restantes medios propuestos por la recurrente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de septiembre de 1999).

122. PRESTACIONES LABORALES:

122.1 Prestaciones Laborales.

(Ver: Lo laboral mantiene a lo penal en estado. Artículo 74 del Código de Trabajo, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de diciembre de 1999).

122.2 Prestaciones laborales. Retardo en el cumplimiento de la obligación. Artículos 86 y 95 del Código de Trabajo.

Considerando, que la intención del legislador al estable-

cer el pago de una suma igual a un día de salario por cada día de retardo en el cumplimiento de su deber de cubrir el importe de las indemnizaciones por preaviso y auxilio de cesantía, es el de conminar al empleador a satisfacer el pago de las mismas, iniciándose a partir del décimo día de la terminación del contrato de trabajo por desahucio ejercido por el empleador y extendiéndose en el tiempo hasta tanto esa obligación sea cumplida;

Considerando, que mientras el artículo 95 del Código de Trabajo consagra indemnizaciones complementarias en favor del trabajador despedido, cuando el empleador no ha probado la justa causa y del trabajador que dimite y logra probar la justa causa de la dimisión, a partir del momento en que se produce la acción en justicia hasta la fecha de la sentencia definitiva, pero sin exceder de seis meses, el referido artículo 86 instituye un astreinte que comienza a cumplirse a partir del décimo día de la terminación del contrato, sin importar que se hubiere lanzado una demanda o no y concluye con el pago de las indemnizaciones laborales, sea cual fuere el momento en que este se produzca y sin tenerse en cuenta la existencia de una sentencia condenatoria;

Considerando, que si el legislador hubiere tenido intención de limitar el monto a recibir por el trabajador desahuciado a quien no se le pagaren las indemnizaciones laborales, lo hubiere señalado, tal como hizo con las indemnizaciones por despido injustificado, no pudiendo en consecuencia los tribunales de trabajo disponer una limitación no contemplada en la ley, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de diciembre de 1999).

122.3 Prestaciones laborales. Condición de empleador. Obligación de los jueces.

Considerando, que frente a la negativa de los dos demandados de haber sido empleadores del recurrido, la corte a-quá debió indicar los medios de que se valió para considerar a todos los demandados como empleadores y porqué circunstancias en la especie había más de un empleador; que para imponer condenaciones por prestaciones laborales, los tribunales deben precisar con exactitud, cual es la persona que ostenta la condición de empleadora y los elementos que determinan esa condición, resultando impreciso el dispositivo de la sentencia recurrida que impone sanciones a tres personas, con la utilización de las conjunciones y/o, lo que dado el efecto contradictorio de las mismas, es indicativo de que el tribunal a-quo no estuvo convencido de cual era el verdadero empleador del recurrido, por lo cual la sentencia impugnada carece tanto de motivos suficientes que permitan a esta corte verificar, si la ley ha sido bien aplicada, como de base legal, que hace que la misma sea casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 14 de enero de 1998; B. J. 1046. Pág. 247).

122.4 Prestaciones laborales. Condiciones para su otorgamiento.

Considerando, que en la sentencia recurrida no se expresa el nombre de la empresa que dirigió la carta al B.

P. que sirvió de base al tribunal a-quo, para dar por establecido el contrato de trabajo del recurrido, ni la persona que firmó dicha correspondencia, así como su posición en la empresa, elemento que habría permitido a esta corte verificar si el recurrente era la persona responsable, como empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.-

Considerando, que para imponer condenaciones por prestaciones laborales, los tribunales deben precisar con exactitud, cual es la persona que ostenta la condición de empleadora y los elementos que determinen esa condición, resultando impreciso el dispositivo de la sentencia recurrida que impone sanciones a su nombre genérico, como es la palabra impermeabilizante, que por sí solo no conlleva la idea de empresa ni al de una persona física, con la utilización de las conjunciones y/o, dado el efecto contradictorio de las mismas, lo que es indicativo de que el tribunal a-quo no estuvo convencido de cual era el verdadero empleador del recurrido, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de motivos suficientes que permita a esta Corte verificar, si la ley ha sido bien aplicada, sino además y de base legal que hacen que la misma sea casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 22 de enero de 1998; B. J. 1046. Págs. 281-282).

122.5 Prestaciones laborales. Condición de empleador. Obligación de los jueces.

Considerando, que si bien el trabajador puede demandar a toda persona, que por la vinculación con su

contratación y la dirección de los servicios que él está obligado a prestar, de la apariencia de ser el empleador, esa circunstancia no libera al juez del deber de determinar los elementos tomados en cuenta para reconocer esa condición a varias personas físicas y morales a la vez, no siendo suficiente para considerarlo como empleador, el solo hecho de que en un momento determinado haya dado instrucciones o entregado el salario al trabajador, lo que pudo haber realizado por obligación propia o por delegación del verdadero empleador, lo cual no queda precisado en la sentencia recurrida.-

Considerando, que habiendo reconocido la sentencia recurrida que el comité del equipo de natación Las Pirañas de A. era "una especie de mandatario y representante del club mencionado", y que dicho comité actuaba por delegación del referido club, no podría condenar al mismo tiempo al club A y al comité que, según la sentencia impugnada, actuaba como un representante, pues las obligaciones y responsabilidades que se derivan de las actuaciones de los mandatarios y representantes no lo comprometen personalmente, sino a sus mandantes o representados.-

Considerando, que para imponer condenaciones por prestaciones laborales, los tribunales deben precisar con exactitud, cual es la persona que ostenta la condición de empleadora y los elementos que determinan esa condición, resultando impreciso el dispositivo de la sentencia recurrida que impone sanciones a varias personas, con la utilización de las conjunciones y/o, que dado el efecto contradictorio de las mismas, es indicativo de que el tribunal a-quo no estuvo convencido de cual era

el verdadero empleador del recurrido, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de motivos y de base legal en el aspecto señalado, por lo que la misma deber ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso-Tributario, 4 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 264-265)

122.6 Prestaciones laborales. Irretroactividad de la ley.

Considerando, que tal como afirma la recurrente, en el momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida y aún de la fecha del inicio de la demanda, estaba vigente el artículo 72 del Código de Trabajo que disponía, que al trabajador correspondía, después de un trabajo continuo mayor de un año, una suma igual a 15 días de salarios, por cada año de servicios, por concepto de auxilio de cesantía, sin computar las fracciones laboradas, después del primer año de servicio.- Considerando, que la sentencia impugnada reconoce que a la recurrida le fueron pagadas prestaciones laborales calculadas en base a un año de servicio, tal como lo establecía la disposición legal vigente en el momento de la terminación del contrato, por lo que aplicar las disposiciones de la Ley No. 207, del 30 de abril de 1984, que modifica el referido artículo 72 del Código de Trabajo y obligaba al cómputo de las fracciones de tiempo laboradas después del cumplimiento, de un año de labor, aplicó retroactivamente una disposición legal, contrario al mandato constitucional que solo le permite la aplicación de la ley de manera retroactiva cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena, lo que constituye una violación de la ley y deja a la

sentencia recurrida sin base legal, por lo que debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso.

Considerando, que si bien la ley laboral es de aplicación inmediata y puede regular relaciones nacidas antes de la promulgación de una ley, ello es a condición de que esas relaciones no hayan concluido antes de entrar en vigencia la ley posterior al inicio de las relaciones, algo distinto a lo ocurrido en el presente caso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 371-372).

122.7 Prestaciones laborales. Pacto colectivo.

Que el hecho de que, por razones de una litis judicial, el pago de las prestaciones laborales se realizara con posterioridad a la suscripción del pacto colectivo no hacía a los trabajadores recurrentes beneficiarios de dicho pacto pues la finalidad de éste es regular las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo, los cuales en el caso de la especie no existían en el momento de su celebración, pues las demandas en pago de prestaciones laborales no inciden en la validez de la terminación del contrato de trabajo, la cual es un hecho anteriormente consumado, independientemente del resultado de la demanda laboral. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 343).

123. PRESCRIPCION:

Prescripción. Materia laboral. Asuntos de interés privado.

Considerando, que siendo la prescripción laboral de estricto interés privado, el Juez a-quo no podía declarar prescritas las horas extras reclamadas por el recurrido, debiendo haber sido planteada dicha prescripción por la recurrente, lo cual no hizo ante los Jueces del fondo y en consecuencia, no puede presentarla por primera vez en casación, por lo que la violación atribuida a la sentencia impugnada en ese sentido es inexistente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 581).

124. PRESUNCION:

124.1 Presunción de Inocencia.

Considerando, que los prevenidos no tienen que probar nada, de conformidad a un principio elemental del Derecho Penal, sino que esa obligación está a cargo del Ministerio Público, en cuanto a la acción pública, y de la parte civil, en lo que toca a sus intereses privados, aún cuando aquel haya hecho defecto. (Cámara Penal, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 474).

124.2 Presunción de comitencia. Propietario de un vehículo de motor.

La presunción de comitencia derivada de la propiedad del vehículo, que debe ser desvirtuada o combatida por

dicho propietario, no libera, sin embargo, a quien invoca esa relación, conforme a las reglas actori incumbit probatio de establecer, por los medios ordinarios de prueba, quien es el propietario o dueño del vehículo causante de los daños cuyos resarcimientos se están pidiendo, y en el expediente no hay constancia de que se hubiera establecido de manera clara y precisa que la UCE fuera la dueña del vehículo. Que el hecho de que en la certificación de la Superintendencia de Seguros se exprese que la C. es aseguradora del Dr. X y/o UCE no necesariamente significa que ésta última fuera propietaria del vehículo, ya que es práctica de grandes empresas asegurar flotillas de vehículos dentro de una misma póliza, pero sólo la certificación que expida Rentas Internas es garantía de quien es el propietario de un vehículo de motor; que en la sentencia impugnada no se expresa como formó su convicción la Corte a-quá de que la UCE era dueña del vehículo. (Cámara Penal, 10 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 264).

125. PROBIDAD:

Probidad. Falta de probidad y honradez. Artículo 88 Código de Trabajo.

Considerando, que para la falta de probidad y honradez que prescribe, el inciso 3ro. del artículo 88 del Código de Trabajo, sea una causal de despido no es necesario que implique que el hecho que la caracteriza genere un grave perjuicio económico a la empresa, pues lo que sanciona el legislador es que con ella se quebranta la confianza que debe regir todo contrato de trabajo y sin la cual no es posible la continuación del mismo, por lo que ninguna

acción u omisión que pueda constituir una falta de probidad puede considerarse irrelevante o de poca importancia. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 9 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 442-443).

126. PROCESO CRIMINAL:

126.1 Proceso criminal. Artículo 280 del Código de Procedimiento Criminal. Garantía del proceso oral.

Considerando, que las reglas establecidas por el artículo 280 del Código de Procedimiento Criminal tienen por objeto garantizar que el proceso en materia criminal sea absolutamente oral; y estas reglas son de orden público, porque atañen al interés social, y su inobservancia está sancionada de manera expresa por el artículo 281 del Código de Procedimiento Criminal; por consiguiente, al desconocer dicho texto legal, la Corte a-qua incurrió en las violaciones denunciadas, y por ende la sentencia debe ser casada. (Cámara Penal, 21 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 397).

126.2 Proceso criminal. Carácter moral. Reglas de orden público. Artículo 280 Código de Procedimiento Criminal.

Considerando, que las reglas establecidas por el artículo 280 del Código de Procedimiento Criminal tienen por objeto garantizar que el proceso en materia criminal sea absolutamente oral; y estas reglas son de orden público, porque atañen al interés social, y su inobservancia está sancionada de manera expresa por el artículo 281 del mismo Código de Procedimiento Criminal; por lo que al

desconocer dicho texto la Corte a-qu incurrió en las violaciones denunciadas, y en consecuencia la sentencia debe ser casada. (Cámara Penal, 14 de abril de 1998; B. J. 1049. Pág. 110).

127. PROMESA DE VENTA:

Promesa de Venta. Competencia de la Jurisdicción Civil.

Que la acción judicial emprendida en el caso de la especie no tiene por objeto que la jurisdicción civil disponga la supresión o modificación del registro de la propiedad envuelta en el caso, sino que persigue la ejecución de un contrato suscrito entre las partes y la reparación de los daños y perjuicios que por su incumplimiento les han sido causados, lo que por su naturaleza constituye una acción personal de la competencia del tribunal civil. (Cámara Civil, 19 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 55).

128. PROVIDENCIA CALIFICATIVA:

Véase:

- Cámara de Calificación.

Providencia Calificativa. Recurso. Sobreseimiento.

Considerando, que, además, las providencias calificativas y otros autos decisorios de la Cámara de Calificación no están incluidos dentro de los fallos a que se refiere al artículo 1 de la Ley 372 del 1953, sobre Procedimiento de Casación; que, a su vez, el artículo 127

del Código de Procedimiento Criminal, modificado por la Ley 5155 del 1959, en su párrafo final, establece que las decisiones de la Cámara de Calificación no son susceptibles de ningún recurso, lo cual tiene como fundamento el criterio de que los procesados, cuando son enviados al tribunal criminal, pueden proponer ante los jueces del fondo todos los medios de defensa en su favor, a los fines de lograr su absolución o la variación de la calificación que se le haya dado al hecho, si procede; que por tanto, el presente recurso de casación no es viable y no puede ser admitido;

Considerando, que cuando se ha apoderado un juez para conocer el fondo de un asunto de naturaleza criminal, corresponde a éste ponderar los méritos y la seriedad de la petición que se le formule, y en consecuencia proceder al sobreseimiento del caso, o por el contrario continuar el conocimiento del fondo del mismo, si entiende que se trata de una maniobra dilatoria que pretende impedir el normal desenvolvimiento del plenario. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 309).

129. PROVOCACION:

Provocación. Condiciones.

Considerando, que la Corte a-quá obró correctamente, toda vez que para ser admitida la excusa legal de la provocación deben encontrarse reunidas las siguientes condiciones: 1ro. que el ataque haya consistido necesariamente en violencias físicas; 2do. que estas violencias hayan sido ejercidas contra seres humanos; 3ro. que las violencias sean graves, en términos de lesiones corporales severas o de apreciables daños

psicológicos de los que se deriven considerablemente secuelas de naturaleza moral; 4to. Que la acción provocadora y el crimen o el delito que es su consecuencia sean bastante próximos, que no haya transcurrido entre ellos un tiempo suficiente para permitir a la reflexión y a la meditación serena neutralizar los sentimientos de ira y de venganza, quedando la comprobación de la existencia de estas circunstancias a cargo de los jueces del fondo, en razón de ser materia de hecho que éstos deben apreciar soberanamente. (Cámara Penal, 20 de agosto de 1998; B. J. 1053. Págs. 154-155).

130. PRUEBA:

130.1 Prueba. Acta escrita. Admisión de testimonio contra ella. Requisitos. Sentido del artículo 549 del Código de Trabajo.

Considerando, que para que una acta escrita impida la admisión de testimonio contra ellas, al tenor del artículo 549, no basta que esta sea una acta auténtica, sino que es necesario que la misma no haya sido objeto de contestación en el curso del proceso; que del estudio de la sentencia impugnada se revela que el demandante cuestionó el contenido del acto notarial, alegado que por haber sido apresado firmó el referido documento, sin que el mismo reflejara su libre voluntad de poner fin al contrato de trabajo por el mutuo consentimiento con su empleador, por lo que la misma no puede considerarse como una acta reconocida a los fines del referido artículo 549 del Código de Trabajo, sin que ello implique desconocimiento del valor probatorio hasta inscripción en

falsedad que corresponde a la actuación notarial, que no resulta afectada con la audición de un testigo que declare sobre los hechos de la causa. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 361-362).

130.2 Prueba. Apreciación de los jueces de fondo. Condiciones.

Considerando, que no obstante dar constancia de esos documentos, los que enumera con indicación del tipo de documento, en las motivaciones de la sentencia impugnada no aparece otra referencia sobre los mismos, ni señal de que el tribunal a-quo hizo un análisis de los mismos, limitándose a fundamentar su fallo en el resultado de la comparecencia personal de las partes y del estudio de un acto de alguacil notificado por el recurrente a la recurrida después de haberse originado la demanda original;

Considerando, que para el buen uso del soberano poder de apreciación de los jueces de fondo, es necesario que estos ponderen toda la prueba aportada, de cuyo resultado formarían su criterio, no bastando con el análisis de parte de la misma, pues ese proceder evitaría el estudio de pruebas que por su importancia podrían determinar el curso de la solución que se daría al asunto; que como en la sentencia impugnada no se advierte que la corte haya realizado esa ponderación, la misma carece de base legal y como tal debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de diciembre de 1999).

130.3 Prueba contrato de trabajo. Condenaciones sobre la base del uso y la costumbre. Precisiones que deba hacer el juez.

Considerando, que la sentencia recurrida no contiene ninguna relación de los hechos en que el trabajador demandante basó su demanda, ni ninguna motivación que justifique las condenaciones impuestas a la recurrente, limitándose a señalar que el uso y la costumbre son fuentes del derecho del trabajo, sin precisar previamente si el recurrido demostró la existencia del contrato de trabajo y en que consistió el uso y la costumbre a que hace alusión la sentencia para fundamentar su fallo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de abril de 1998; B. J. 1049. Págs. 468-469).

130.4 Prueba. Facultad de la Corte de Casación de examinar el carácter legal de la prueba.

Que, además, la Corte de Casación tiene calidad para examinar el carácter legal de la prueba que sirva de fundamento a los hechos de la causa, puesto que, la legalidad de prueba es materia de derecho, no significando con esto que pueda ser revisado en casación la apreciación que los jueces del fondo hayan hecho respecto de la misma prueba. Que en el caso de la especie, no se pone en duda la existencia de un acta de allanamiento regularmente instrumentada y firmada por el Procurador Fiscal de la Provincia Duarte, documento que sirve de prueba para la inculpación. (Cámara Penal, 18 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 272 y 273).

130.5 Prueba. Materia laboral. Precisiones del tribunal.

Considerando, que la sentencia impugnada no contiene ninguna referencia sobre la prueba aportada por la recurrida para establecer los hechos en que fundamentó su demanda, ni a través de que medios el tribunal a-quo determinó esos hechos, lo que hace que la misma carezca de motivos suficientes y pertinentes y una relación completa de los hechos, que permitan a esta corte verificar si la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual la sentencia debe ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de abril de 1998; B. J. 1049. Pág. 486).

130.6 Prueba. Violación. Derecho de defensa. Apreciación de Prueba.

Considerando, que los jueces son soberanos para decidir cuales instrumentos o testimonios bastan para edificarlos, sin que el rechazo que ellos hagan a la audición de testigos considerados innecesarios, o que nada puedan aportar para variar el criterio que se ha ido configurando mediante otras pruebas ofrecidas en el plenario, constituya una violación al derecho de defensa, como expresan los recurrentes; por lo que procede rechazar también este medio. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 365).

Q

131. QUERELLA:

131.1 Querella. Daños y perjuicios. No pago de salarios en la fecha convenida.

Considerando, que si bien la formulación de querellas o denuncias constituye un derecho ciudadano, el juez laboral puede apreciar si ese derecho ejercido por un empleador, ocasiona daños al trabajador involucrado, pudiendo establecer las indemnizaciones correspondientes; que por demás, la sentencia impugnada motiva la indemnización reparatoria en la violación cometida por el empleador por el no pago de salarios en la fecha convenida y a otros hechos apreciados por el tribunal, que a su juicio constituirían violaciones del Código de Trabajo, que al tenor del artículo 712 de dicho Código le hicieron responsable de la reparación de los daños causados por su actitud;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 6 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 372-373).

131.2 Querella. Daños y perjuicios. No pago de salario en la fecha convenida.

Considerando, que la disposición del artículo 86 del Código de Trabajo que dispone la obligación del empleador de pagar una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador, por cada día de retardo en el pago de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía, tiene aplicación cuando el empleador no realiza el pago u ofrece pagar una suma inferior a la que corresponde al trabajador desahuciado;

Considerando, que cuando el empleador hace una oferta de pago y esta no es aceptada por el trabajador bajo el alegato de que la misma es incompleta y no satisface los derechos que le corresponden, para que un tribunal disponga la aplicación de la penalidad establecida en el referido artículo 86, es necesario que previamente este declare que la negativa del trabajador a recibir los valores ofertados es justificada por no cubrir la oferta realizada el monto total de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía;

Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo confirmó el ordinal quinto de la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, que declaró "justas las sumas ofrecidas a las partes demandantes por la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., con respecto de los beneficios e indemnizaciones por concepto de auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones, bonificaciones y salario de navidad de acuerdo a los cálculos que constan en el expediente y al pago de los cheques cuyas copias figuran también";

Considerando, que la diferencia en el pago ofertado por

la recurrente y lo reclamado por la recurrida, radica en la falta del cómputo a los fines del cálculo del salario promedio diario de la trabajadora de un incentivo denominado MICS, que era entregado por la empresa a sus trabajadores; que habiendo considerado el Tribunal a quo que ese incentivo no beneficiaba a la demandante, razón por la cual revocó en ese aspecto la sentencia de primer grado, no podía mantener la condenación del pago del monto equivalente a un día de salario por cada día de retardo impuesta por la sentencia apelada, ya que de acuerdo al criterio del propio tribunal, al entender que el incentivo no era un salario ordinario recibido por la demandante, los cálculos realizados por el empleador para el pago de los derechos de esta fueron correctos, lo que hacía injustificada la negativa de la recurrida a recibir los valores ofertados. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 307-309).

131. 3 Querella directa. Artículo 25 de la Ley 91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Condiciones.

Atendido a que el estudio y examen del expediente pone de manifiesto que el querellante no ha probado haber sufrido un perjuicio, condición inminente para el apoderamiento directo con constitución en parte civil, el cual supone necesariamente haber recibido un perjuicio actual, personal y directo de la infracción que le imputa al querellado; que tampoco el querellante ha probado la intención delictuosa por parte del mandatario, cuya actuación no es más que la continuación de un proceso judicial en desconocimiento de la muerte de su mandante y que de conformidad con lo establecido en el art. 2008 del Código Civil "si ignorase el mandatario la muerte de

su mandante o cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido lo que ha hecho en esa ignorancia", que, por lo antes dicho, la querella debe ser desestimada. (Auto Presidente, 18 de agosto de 1999).

R

132. RADIO TELEVISIÓN DOMINICANA:

Radio Televisión Dominicana. Condición de empleados públicos. Ley No. 168 del 5 de abril de 1966. Cuestión de orden público.

Considerando, que al dictar su fallo, el tribunal a-quo no tomó en cuenta las disposiciones de la ley No. 168, del 5 de abril de 1966, que dispone que los empleados de Radiotelevisión Dominicana, tienen la condición de empleados públicos.-

Considerando, que en virtud de esta ley, las relaciones derivadas de las prestaciones de servicios de Radiotelevisión Dominicana, no están regidas por el Código de Trabajo, ya que a los servidores de ésta se les otorga categoría de empleados y funcionarios públicos, sujetos a las disposiciones que rigen a los servidores de la administración pública.-

Considerando, que en vista de que el recurrido alegó haber laborado antes de entrar en vigencia la indicada ley, el juez debió ponderar esta situación y limitar la aplicación del Código de Trabajo a ese período, tal como lo señala la ley No. 168, ya señalada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 4 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 257).

133. REAPERTURA DE DEBATES:

133.1 Reapertura de Debates. Condiciones.

Considerando, en primer lugar, que la reapertura de debates sólo procede cuando se revelan documentos o hechos nuevos que puedan influir por su importancia en la suerte del litigio, y lógicamente, para que los jueces a quienes ésta medida se solicita puedan apreciar la pertinencia de la misma, es preciso que dichos documentos le sean sometidos o los hechos revelados juntos con la solicitud correspondiente; que en el expediente relativo a éste caso no hay constancia ni pruebas de que se cumplieran las formalidades indicadas; que en consecuencia al ordenar el Tribunal a-quo por auto del 30 de noviembre de 1993, la reapertura de los debates en las condiciones señaladas, ha hecho una incorrecta aplicación de la ley y de los principios que rigen la materia. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1 de septiembre de 1999).

133.2 Reapertura de debates. Sentencia Preparatoria.

Considerando, que ha sido consagrado de manera constante por la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, que las sentencias que ordenan una reapertura de debates tienen carácter preparatorio, porque no prejuzgan el fondo, ya que el tribunal, cuando ordena esta medida, sea a pedimento de una de las partes o de oficio, no deja entrever la decisión que adoptará en razón de que la reapertura de debates tiene como propósito proceder a una mejor sustanciación de la causa; que esto es así, no obstante la oposición de la

contraparte. (Cámara Civil, 5 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 97).

133.3 Reapertura de debates. Facultades del juez. Condiciones.

Considerando, que entra dentro de las facultades de los jueces del fondo determinar cuando procede una reapertura de los debates, siendo optativo para ello ordenarla cuando aprecian que los documentos o hechos nuevos que acompañan la solicitud pudieren influir en la suerte del litigio;

Considerando, que en la especie, el tribunal a-quo rechazó la solicitud de reapertura de los debates, bajo el argumento de que el impetrante no acompañó la misma de los documentos que la fundamentaran y porque al recurrente se le había dado oportunidad para que depositara sus documentos anteriormente, a lo cual no obtemperó, con lo que el juez hizo uso de sus prerrogativas, sin cometer violación alguna, razón por la cual el recurso carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 11 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 421).

134. RECONOCIMIENTO DE UN HIJO:

134.1 Reconocimiento de un hijo. Acta de nacimiento.

(Ver: Acta Nacimiento. Artículo 46 de la Ley 659 sobre Acto del Estado Civil. Declaración personal del padre. Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 120).

134.2 Reconocimiento de hijo. Declaración personal del padre. Artículo 46 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.

Considerando, que lo expresado en dicho artículo revela, tal y como lo argumentan los recurrentes, que cuando el padre se presenta personalmente por ante el Oficial del Estado Civil y declara el nacimiento de una criatura y al propio tiempo que esa criatura es hija natural de la persona que tiene el mismo nombre del declarante, es evidente que está expresando su voluntad de reconocerlo como hijo suyo, salvo los problemas de identidad que pudiesen surgir, tanto en relación con el declarante, como con la criatura declarada; que el hecho de que en los extractos de actas de nacimiento expedidas por el Oficial del Estado Civil de La Romana en los años 1991 y 1992, se intercalará el apellido Mañón a cada uno de los declarados y se insertara la frase "reconocidos por declaración de su padre", no resta validez al reconocimiento contenido y las copias in extenso de las actas originales, en la cual sólo se expresa que los mismos son hijos naturales del declarante;

Considerando, que por lo antes expuesto se advierte que la Corte a-qua no ponderó, como era su deber, la circunstancia de que fue el propio Juan Francisco Mañón Lluberes quien compareció libre y voluntariamente en las fechas indicadas ante el Oficial del Estado Civil y afirmó que él era el padre de esas criaturas, y que no fue suscitado ningún problema de identidad en relación con él; que esa falta de ponderación de esos hechos esenciales de la litis, evidencian que en la sentencia impugnada se incurrió en la desnaturalización invocada por los recurrentes, no atribuyendo al contenido

específico de las actas de nacimiento depositadas por éstos, el sentido y alcance resultante de sus propias enunciaciones; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada que juzgar. (Cámara Civil, 2 de septiembre de 1998; B. J. 1052. Págs. 120-121).

135. RECURSOS:

135.1 Recursos. Desistimiento. Condiciones.

(Ver: Apelación. Desistimiento. Condiciones, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 29 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 1027).

135.2 Recursos. Formalidades requeridas. Imposibilidad de ser sustituidas por otras.

(Ver: Emplazamiento. Artículo 68 y 70 del Código de Procedimiento Civil. Notificación, Cámara Civil, 22 de julio de 1998, B.J. 1052, pág. 85 y Casación. Emplazamiento. Artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 36 de la Ley 834 del 1978, Cámara Civil, 22 de julio de 1998; B.J. 1052. Pág. 85).

135.3 Recursos. Sentencia irregularmente notificada. Punto de partida del plazo.

(Ver: Sentencia. Notificación. Punto de partida del plazo para los recursos. Domicilio desconocido. Artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil, Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 214-215).

135.4 Recursos. Interposición. Formalidades. Irrelevancia de la existencia o no de un agravio. Inadmisibilidad.

Considerando, que a su vez el recurrido propone en su memorial de defensa la inadmisibilidad y/o nulidad del recurso de casación, sobre la base de que el acto de alguacil mediante el cual se le emplazó, no fue notificado a persona, ni en su domicilio, sino en el estudio del Lic. J. A. G., y que con dicha actuación el recurrente no cumplió con "los artículos 5, 6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación que disponen que el recurso incoado a tales fines debe ser dentro de los dos meses a partir de la notificación de la sentencia que se recurre, y notificado al recurrido no al abogado del recurrido, procedimiento que debe observarse según la propia Ley de Procedimiento de Casación a pena de nulidad".-

Considerando que el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, declara la nulidad de los emplazamientos que no han sido hechos de conformidad con el artículo 68 del mismo Código; que esta disposición que es aplicable en toda materia que no haya sido excluida de manera expresa, dispone que los emplazamientos deben notificarse a la misma persona o en su domicilio; que constituyen igualmente emplazamientos, no sólo la notificación del acto introductivo de la demanda con que se inicia la litis, sino también el acto con que se introducen el recurso de apelación y el de casación.-

Considerando, que, por otra parte, el párrafo inicial del artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación manda de manera expresa que el emplazamiento debe dirigirse a la parte contra quien se dirige el recurso,

encabezando el mismo con una copia del memorial de casación y una copia del autor del Presidente autorizando a emplazar; que si el recurrido comparece en la forma que indica el párrafo final del artículo 36 de la Ley 834 de 1978, de aplicación general, con el propósito de invocar la irregularidad del emplazamiento, y por tanto, su ineffectividad, debe hacerse derecho al pedimento, si la irregularidad es comprobada y afecta, como en la especie, una formalidad sustancial y de orden público.-

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la ley para interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras; que la inobservancia de esas formalidades se sancionan con la inadmisibilidad del recurso, independientemente de que la misma haya causado o no agravio al derecho de defensa de la parte que lo invoca; que por las razones expuestas procede declarar inadmisibile el presente recurso y, por tanto, no ha lugar a ponderar los medios propuestos en el memorial de casación del recurrente. (Cámara Civil, 12 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 74-75).

135.5 Recursos. Recursos interpuestos por los ayudantes del ministerio público.

Que en efecto, la Ley 1822, que regula el ejercicio de los ayudantes del ministerio público es clara, y le atribuye a éstos la mera facultad de ostentar la representación de los titulares en los tribunales donde ejerzan sus funciones, sin que bajo ninguna circunstancia esa facultad se extienda a la posibilidad de ejercer las vías de recurso, que sólo es privativa del titular, salvo el caso excepcional consagrado por el artículo 3 de la

mencionada Ley, en virtud del cual dichos ayudantes o sustitutos del ministerio público pueden realizar todos los actos relativos al ejercicio de la acción pública. En otra sentencia del 18 de diciembre de 1997, la misma Cámara, y sobre el mismo asunto dijo: Que de la lectura de esos textos (Ley No. 1822) se desprende y es de buen derecho considerar que los sustitutos del ministerio público no pueden motu proprio, y sin estar ejerciendo las funciones del titular, por una cuales quiera de las causas señaladas por la Ley 1822 de 1948, interponer los recursos que la ley pone al alcance de las partes, contra las sentencias dictadas por los tribunales donde ejercen sus funciones. (Cámara Penal, 9 de octubre de 1997; B. J. 1043. Págs. 189-190).

135.6 Recursos. Recursos interpuestos por el abogado ayudante del ministerio público. Numeral 1ro. del Artículo 2 de la Ley No. 1822 de 1948.

Considerando, que en ese tenor, los abogados ayudantes de los representantes del ministerio público no pueden ejercer los recursos ordinarios ni los extraordinarios contra las sentencias emanadas de los tribunales, si no han sido autorizados por los titulares de esas funciones para actuar a nombre de éstos. (Cámara Penal, 17 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 163-164).

135.7 Recursos. Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia.

(Ver: Oposición. Constitucionalidad. Inadmisibile contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Pág. 79-81).

135.8 Sentencia incidental. Punto de partida.

Que si ciertamente esa sentencia era incidental, que no suspendía el conocimiento del fondo, si obligaba a la parte perdedora a ejercer el correspondiente recurso, dentro del plazo de ley para que la misma acompañara la apelación del fondo del asunto, y que al no haber sido ejercido el mismo, la referida sentencia adquirió la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada. (Cámara Penal, 9 de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 176).

136. REFERIMIENTO:

136.1 Referimiento. Artículo 667 del Código de Trabajo. Demanda en cancelación de Registro Sindical.

Considerando, que al considerar que la suerte de la demanda en referimiento estaba sujeta a la solución de la demanda iniciada por la recurrente por ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en cancelación del registro sindical de la demandante, el tribunal hizo bien al sobreseer el conocimiento de dicha demanda hasta tanto el referido tribunal decidiera sobre el aspecto de que estaba apoderado, sobreseimiento este que no puede ser objetado por la recurrente, en vista de que en sus conclusiones subsidiarias hizo un pedimento en ese sentido. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 13 de octubre de 1999).

136.2 Referimiento. Competencia del juez de los referimientos. Interpretación del artículo 101 de la Ley No. 834 de 1978.

En nuestro ordenamiento jurídico procesal, el juez de los referimientos competente es el de la jurisdicción que es competente para estatuir sobre el fondo del litigio, y por tanto, es el juez de primera instancia que conoce en materia civil o comercial el fondo de la contestación el competente para resolver, como juez de los referimientos, sobre las medidas necesarias o urgentes que le sean requeridas; que ese criterio se corresponde con nuestro sistema judicial en que el juzgado de primera instancia, esté o no dividido en cámaras, constituye una unidad de jurisdicción con plenitud para conocer, conforme el procedimiento de cada uno de ellos, de los asuntos que les atribuyen los códigos, según el artículo 49 de la Ley de Organización Judicial. (Cámara Civil, 1ro. de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 43).

136.3 Referimiento. Suspensión de Ejecución. Notificación en la oficina de abogado.

Que tratándose de una demanda en referimiento para fines de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, interpuesta con motivo del recurso de apelación contra el indicado fallo y dada la evidente conexidad con la instancia sobre el fondo, se admite la citación en manos del abogado constituido en dicho recurso de apelación, domicilio elegido por el recurrente cuando no sea posible la notificación en la persona o en el domicilio del demandado, como ocurrió en el caso de la especie. (Cámara Civil, 26 de septiembre de 1997; B. J. 1042. Pág. 66).

136.4 Referimiento. Suspensión de ejecución de sentencia. Condiciones.

Considerando, que es condición indispensable, al tenor del texto legal arriba citado, para que el presidente del tribunal de segundo grado tenga competencia para estatuir en referimiento sobre los casos especificados en los artículos 140 y 141, de la señalada Ley No. 834, que la decisión cuya ejecución provisional se procura suspender, haya sido recurrida en apelación. (Cámara Civil, 3 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 101).

137. REPRESENTANTES LOCALES DE TRABAJO:

Representantes locales de trabajo. Despido. Atribuciones. Representante Competente.

Considerando, que el artículo 431 del Código de Trabajo crea los Representantes Locales de Trabajo, los cuales operan en los distritos jurisdiccionales que la ley faculta a la Secretaría de Estado de Trabajo crear, para la mejor aplicación del Código de Trabajo;

Considerando, que entre las facultades de los representantes locales de trabajo está la de recibir las comunicaciones referentes a los despidos y dimisiones realizadas por empleadores y trabajadores, que se originen en su distrito y darle el curso correspondiente comunicándolo a la parte contra quien se ejerce la terminación del contrato de trabajo,

Considerando, que en los lugares donde operaba un representante local de trabajo, la comunicación del despido que exigía el artículo 81 del Código de Trabajo, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, debía

ser dirigida a ese funcionario como una forma de garantizar que la información llegaría rápidamente al trabajador despedido, a los fines de que realizara las acciones que considerare de lugar;

Considerando, que al rechazar la comunicación del despido dirigida al departamento de trabajo en lugar del representante local de Montecristi, el Tribunal a-quo actuó correctamente, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 13 de enero de 1999; B. J. 1058. Pág. 352).

138. RESPONSABILIDAD CIVIL:

Véase:

- Accidente de vehículo.
- Acción Civil.
- Bancos.
- Daños y perjuicios.
- Cheques.
- Seguros.

138.1 Responsabilidad Civil. Cláusula de Limitación de Responsabilidad.

Considerando, que es criterio de esta Corte la admisión de la validez de las cláusulas que descartan o limitan la responsabilidad en los contratos de adhesión, en razón de que ninguna disposición legal prohíbe de manera general y expresa la inserción de tales cláusulas en los

contratos de adhesión;

Considerando, que la sentencia impugnada califica de condición potestativa a una cláusula de limitación de responsabilidad, sin analizar y aplicar esa norma jurídica a los hechos y circunstancias de la causa, por lo que en tales circunstancias la sentencia acatada ha incurrido en las violaciones denunciadas, y por tanto debe ser casada. (Cámara Civil, 1 de diciembre de 1999).

138.2 Responsabilidad Civil. Daños y Perjuicios. Daños Morales.

Considerando, que la Corte a-quá condenó al prevenido conjuntamente con la persona civilmente responsable al pago de una indemnización a la parte civil constituida, otorgando Cincuenta Mil Pesos (RD\$50,000.00) a favor del hermano de Jorge Noboa, fallecido en el accidente, lo cual resulta un desacierto, ya que sólo los padres, los hijos y los cónyuges supervivientes pueden sustentar sus demandas por concepto de daños y perjuicios, sin necesidad de aportar las pruebas de los daños morales que ese hecho les ha producido, lo que no sucede con las personas que tengan cualquier otro vínculo familiar, sanguíneo o por afinidad con las víctimas de un accidente, quienes están en la obligación de probar que existía entre ellos y el occiso dependencia económica o una relación afectiva tan real, cercana y profunda, que permita a los jueces convencerse de que tales reclamantes han sufrido un perjuicio psicológico que amerita una condigna reparación, ya que el interés puramente afectivo no basta para justificar una indemnización; en consecuencia, procede casar la sentencia también en el aspecto civil. (Cámara Penal, 1 de diciembre de 1999).

138.3 Responsabilidad Civil. Cheque sin fondo.

(Ver: Cheques. Daños y perjuicios. Cláusula de responsabilidad. Efectos. Cámara Civil, sentencia del 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 72-73).

138.4 Responsabilidad civil. Demanda contra un juez.

(Ver: Juez. Demanda en responsabilidad civil contra un juez. Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Competencia de la Suprema Corte de Justicia para la autorización. Pleno, 25 de noviembre de 1999).

138.5 Responsabilidad civil. Ejercicio de un derecho. Alegato de abuso de un derecho.

Considerando, que al pronunciarse en la forma preindicada, la Corte a-quá no ha hecho más que hacer una simple afirmación sin establecer, como es indispensable y era su deber, que la constitución en parte civil hecha por la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., contra el recurrido Rafael Antonio Cabrera Guzmán por ante la jurisdicción de instrucción, había tenido por objeto alcanzar un fin contrario al espíritu de derecho ejercido, y, por tanto, con el propósito de perjudicarlo; que en la especie, el hecho de que la recurrente se constituyera en parte civil contra el recurrido, como se ha dicho, e imputara a éste ser el autor de la falsificación de los cheques, no hacen por sí solos a la recurrente responsable de los daños que se afirma haber experimentado el recurrido; que la sentencia impugnada tiene comprobaciones de hecho suficientes que demuestran que la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., que se había subrogado en los derechos del Banco Popular Dominicano, C. por A., al constituirse en

parte civil ejerció su legítimo derecho de perseguir el reintegro de la suma pagada a su asegurado, o sea, al banco sobre el cual se libraron los cheques cuyo pago dieron lugar a la litis; que al no haberse probado en el presente proceso por ningún medio que la recurrente ejerció su derecho a constituirse en parte civil con ligereza o con el fin de dañar al demandante y actual recurrido, resulta evidente que el fallo impugnado hizo una falsa aplicación de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, razón por la cual el fallo impugnado debe ser casado, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (Pleno, 6 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 131-132).

138.6 Responsabilidad Civil. Falta médica. Caso de especie.

(Ver: Cámara Civil, 12 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 70).

138.7 Responsabilidad civil. Falta temporal del servicio telefónico. Obligación de los jueces de justificar la indemnización.

Considerando, que si bien es cierto que para la fijación de una indemnización reparadora de los daños y perjuicios morales y materiales que resultaren de la falta momentánea del servicio telefónico, los jueces del fondo gozan de un poder soberano de apreciación que escapa a la censura de la casación, no es menos cierto que la Corte a-quá después de ponderar los daños y perjuicios que alega haber sufrido el Doctor W. E. M., por la suspensión del servicio telefónico prestado por un "beeper", por espacio de unos pocos días, dicha Corte

a-qua al estimar estos daños y perjuicios se limitó a decir que ese perjuicio "no lo evalúa en la suma fijada por el tribunal a-quo (RD\$150,000.00), sino en la suma que más adelante se indicara. En esta misma sentencia", que resultó ser la suma de RD\$100,000.00, que debía pagar a título de indemnización la actual recurrente, Compañía D. de T., pero sin justificar la mencionada Corte a-qua, esta apreciación suya ni exponer los motivos en que se fundamenta la misma, circunstancia que no permite a esta Suprema Corte de Justicia, apreciar si la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, en el caso de la especie, resultan ser adecuadamente compensada y si la indemnización acordada es razonable o no, por lo cual, la sentencia recurrida debe ser casada por carencia de motivos, sin que sea necesario el examen del primer medio de casación. (Cámara Civil, 9 de diciembre de 1998; B. J. 1057. Págs. 102-103).

138.8 Responsabilidad Civil. Guardián de la cosa inanimada. Artículo 1384, párrafo 1ero. del Código Civil. Condiciones. Obligación de los jueces.

Considerando, que la presunción de responsabilidad que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada, prevista en el artículo 1384, párrafo 1ro. del Código Civil está fundamentada en dos condiciones esenciales: que la cosa debe intervenir activamente en la realización del daño, es decir, que esta intervención produzca el daño; y que la cosa que produce un daño deber haber escapado al control material de su guardián;

Considerando, que tal como se desprende de los hechos y circunstancias comprobados por la Corte a-qua contenidas en las declaraciones de ambas partes en litis,

el agua derramada de los tanques, pero también el agua de las lluvias fueron los dos factores que, unidos o separados, pudieron haber provocado las filtraciones que dieron lugar a los daños cuya reparación reclama el recurrente; que la Corte a-quá estableció la responsabilidad del recurrente por los daños causados a consecuencia del desbordamiento de los tanques de agua de su propiedad, sin precisar, mediante la correspondiente motivación, la acción de los mencionados tanques con exclusión de otros factores, como la lluvia, que pudieron influir en la ocurrencia del daño;

Considerando, que si bien los tribunales de fondo aprecian soberanamente la fuerza probatoria de los documentos, de los hechos y circunstancias producidos en el debate, corresponde a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación ejercer su control sobre la motivación para determinar si la sentencia impugnada ha hecho una constatación suficiente y pertinente de los hechos que le permita determinar si en la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho, y si al proceder a su interpretación, no ha incurrido en desnaturalización;

Considerando, que el agravio deducido de la falta de base legal, siendo un motivo de puro derecho puede ser suplido por la Suprema Corte de Justicia; que procede, en consecuencia acoger el tercer medio de casación propuesto por el recurrente y casar la sentencia por desnaturalización de los hechos y falta de base legal, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

Considerando, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas. (Cámara Civil, 7 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 39).

138.9 Responsabilidad civil. Intereses complementarios. Facultades de los jueces.

Considerando, en cuanto al alegato relativo a la condenación al pago de intereses a partir de la fecha en que se produjeron los hechos, los jueces del fondo pueden acordar intereses complementarios sobre el monto de la reparación concedida con motivo de un delito o cuasidelito, fijando el momento en que empezarán a correr, sin necesidad de dar motivos para ello. (Cámara Civil, 19 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 89).

138.10 Responsabilidad civil. Prescripciones particulares. Fundamento.

Considerando, que tratándose en el caso de una acción en responsabilidad civil fundamentada en la existencia de un hecho cuasi-delictual de imprudencia o negligencia, puesta a cargo de la recurrente, la misma ésta sometida a la corta prescripción de 6 meses prescrita por el artículo 2271 citado; que a menos que la dicha acción, tenga su nacimiento en una infracción penal, en cuyo caso la prescripción se rige por los plazos propios de la acción pública, la misma debe ser ejercida en el plazo previsto; que es evidente que en la especie, el hecho que dio nacimiento a la responsabilidad de la recurrente, guardiana del fluido eléctrico, no constituye una infracción a la ley penal, único caso en que la acción no prescribe en el plazo de los seis meses establecidos en el referido 2271;

Considerando, que además, por fundamentarse en la presunción de pago, el mismo Código Civil establece en el artículo 2274 los actos que producen la interrupción de la prescripción particular de los artículos 2271 al 2273, al

indicar, que ella "no deja de correr sino cuando ha habido cuenta liquidada, recibo u obligación, o la citación judicial no fenecida"; que en ninguna parte de la sentencia impugnada, ni en documento alguno a que ella haga referencia, como de los depositados en esa instancia, se advierte, sino como un simple alegato de los recurridos, que éstos permanecieron internos por espacio de dos años; que ese proceso, no causó en ellos ninguna incapacidad, que les impidiera el ejercicio de la acción en el plazo previsto, ni esto constituye un acto de interrupción de la prescripción de los mencionados en el artículo 2274. (Cámara Civil, 7 de octubre de 1998; B. J. 1055. Págs. 51-52).

138.11 Responsabilidad civil laboral. Artículos del 712 al 715 del Código de Trabajo. Exoneración de la prueba del perjuicio. Constitucionalidad.

Considerando, que de las disposiciones combinadas de los artículos 712, 713, 714 y 715 del Código de Trabajo resulta que lo que persigue el referido art. 712 es liberar al demandante de aportar la prueba del perjuicio que los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo, en su calidad de responsables civilmente, le causen por la violación de las disposiciones sancionadas penalmente por dicho Código;

Considerando, que al favorecer de manera general e igualitaria a todas las personas que se encuentren en la condición de demandante, que prevé el precitado artículo 712, en su párrafo único, éste no contraviene, como alega el impetrante, las disposiciones del acápite 5 del artículo 8, y del artículo 100 de la Constitución de la

República, por tratarse de una disposición legal cuya aplicación es igual para todos, y no crea ninguna situación de privilegio que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, pues todos éstos pueden eventualmente prevalerse de esa disposición del Código de Trabajo. (Pleno, 22 de septiembre de 1999).

138.12 Responsabilidad Contractual. Incompetencia de la jurisdicción represiva.

Considerando, que en la especie, como ya se ha indicado en los considerandos anteriores, lo que existe es una responsabilidad contractual, debido a la ruptura unilateral del acuerdo celebrado entre las partes, lo cual es competencia de la jurisdicción civil, y no procede ser llevado por ante la jurisdicción penal, cuya esfera está circunscrita a las acciones que tienen su fuente en los mismos hechos de la prevención y que tales hechos constituyen un delito o cuasidelito civil, en el sentido de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, lo cual no ocurre cuando se trata de incumplimiento de una obligación contractual; que por tanto, la Corte a-quá no violó los textos señalados como erróneamente invoca el recurrente, ni tampoco en la sentencia se incurrió en falta de base legal, argumento que no es claramente explicado en el memorial. (Cámara Penal, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 434).

139. RETROACTIVIDAD DE LA LEY:

Retroactividad de la ley. Procedencia. Leyes 50-88 y 17-95.

Considerando, que si bien es cierto que la Ley 17-95 fue

votada después de dictada la sentencia recurrida, no menos cierto es que el artículo 47 de la Constitución de la República establece que: "La Ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que está subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley, ni poder público alguno, podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior".

Considerando, que por tanto la Ley 17-95 beneficia al acusado H. A. S. J., ya que su infracción al tenor de esa legislación está sancionada con penas mucho menores de la que se le impusieron en la sentencia recurrida y al tener en prisión desde el 7 de julio de 1993, es decir 4 años y 7 meses, obviamente ha cumplido en exceso la sanción condigna que merecía por la infracción cometida.

Considerando, que por lo anteriormente expuesto se evidencia que la sanción impuesta a H. A. S. J. ha perdido su base de sustentación jurídica por la reducción operada en virtud de la Ley No. 17-95, por lo que tratándose de una situación *sui generis*, es preciso entender que el recurso de casación más que anular la sentencia por vicios que la invalidan, tiende a obtener la libertad del impetrante.

Considerando, que en ese orden de ideas su petición está correctamente fundada en derecho, ya que sería inhumano mantenerlo en prisión a contrapelo de las razones jurídicas que la sustentan. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Págs. 191-192).

140. RES INTER ALIOS ACTA:

Res inter alios acta. Calidad para demandar la nulidad de un contrato.

(Ver: Cámara Civil y Comercial, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 110).

141. REVISION:

141.1 Revisión Civil. Dolo atribuido a un tercero. Acción en daños y perjuicios.

(Ver: Dolo. Facultad de los jueces. Distinción. Cámara Civil, 30 de junio de 1999).

141.2 Revisión por causa de fraude. Artículo 139 de la Ley de Registro de Tierras.

Que dados los términos claros y precisos del artículo 139 de la referida Ley, es forzoso concluir que el recurso en revisión por causa de fraude debe reputarse interpuesto el día en que se le da copia de la instancia al intimado toda vez que el Tribunal Superior de Tierras, no puede aceptar la instancia si no se le demuestra que el intimado ha sido puesto en conocimiento de la acción que contra él se ejerce; que el hecho de que los recurridos sometieran junto con la instancia un acto (con los espacios destinados a la mención de las personas a quienes se entregaba el mismo en blanco) que había sido preparado para que la notificación se realizara, no cumple el voto de la ley, pues cuando ésta requiere como prueba de la notificación el depósito de una constancia evidentemente que se refiere a un documento regularmente hecho.

(Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 19 de noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 205).

141.3 Revisión por causa de error material. Artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras. Alcance.

Considerando, que además y contrariamente a como lo pretenden los recurrentes, el recurso en revisión por causa de error material solo permite la corrección de un error puramente material, sin que en ninguna forma se pueda modificar lo decidido definitivamente por el Tribunal Superior de Tierras, siendo éste el verdadero sentido y alcance del artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras; que en consecuencia el Tribunal Superior de Tierras no está facultado para alterar el contenido jurídico de sus propias decisiones, pues de hacerlo incurriría en una violación al principio de la cosa irrevocablemente juzgada y por tanto al artículo 1351 del Código Civil según el cual: "La autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo: Es preciso que la cosa demandada sea la misma; que la demanda se funde sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y formuladas por ellas y contra ellas, con la misma calidad"; que en consecuencia, el Tribunal a-quo no podía modificar en forma alguna los derechos consagrados y ya consolidados por efecto de las decisiones irrevocables dictadas con motivo de la litis, las cuales se mencionan en el historial que precedentemente se ha hecho del presente asunto. (Pleno, 2 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 16).

141.4 Revisión por causa de fraude. Poder soberano de los jueces.

Considerando, que es de principio que los jueces que conocen el recurso de revisión por causa de fraude gozan de un poder soberano para apreciar, mediante la valoración e interpretación de los elementos de prueba sometidos al debate, si la parte demandante fue o no víctima del fraude que alega en apoyo de su recurso.-

Considerando, que los elementos que caracterizan el fraude, y su intención, son evidentemente cuestiones de hecho cuya apreciación escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización que, como se ha dicho antes, no se ha probado en el caso ocurrente; que los demás alegatos del recurrente relativos al fondo, él, está en capacidad de presentarlos en el nuevo saneamiento que ha ordenado el Tribunal Superior de Tierras, por la sentencia impugnada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 4 de marzo de 1998; B. J. 1048. Págs. 328 y 331).

S

142. SALARIOS:

Salarios. Determinación de su monto.

Considerando, que para justificar su fallo, la Corte a-qua expresa lo siguiente: "que es jurisprudencia constante que la comisión se paga como el sueldo mismo, más la suma que se fija mensualmente, por lo que el trabajador tenía que ser desahuciado a base de un sueldo de RD\$667.50 mensuales, más el sueldo de comisión de RD\$4,000.00 mensuales", pero no hace mención de dónde extrajo esos datos y de qué medios de pruebas se valió para determinar que el recurrido recibía salarios comisiones por los montos arriba indicados, lo que no permite a esta Corte verificar si la ley ha sido bien aplicada, careciendo en consecuencia de falta de motivos y de base legal que hace que la misma sea casada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 463).

143. SANEAMIENTO INMOBILIARIO:

Saneamiento inmobiliario. Facultades del Tribunal Superior de Tierras.

Considerando, que en el procedimiento especial instituido por la Ley de Registro de Tierras, para el

saneamiento de los derechos reales sobre la propiedad inmobiliaria, el Tribunal Superior de Tierras, para el saneamiento de los derechos reales sobre la propiedad inmobiliaria, el Tribunal Superior de Tierras está investido de dos facultades: una, como Tribunal de apelación, cuando una persona que se considera agraviada o perjudicada en sus derechos por el fallo dictado en jurisdicción original, intenta ese recurso, y otra, como Tribunal de revisión haya o no apelación; que un estudio combinado de los principios generales que rigen la casación en el derecho común, junto con las reglas sobre la materia en la jurisdicción de tierras, conduce a la convicción de que para que pueda interponerse el recurso de casación contra un fallo de dicho tribunal, es preciso que el recurrente haya figurado como parte en el juicio de apelación; que si la decisión dictada en jurisdicción original no es recurrida en apelación conforme lo permite la Ley de Registro de Tierras, ni la persona que se cree perjudicada somete pedimento alguno para que sea tomado en cuenta al hacerse la revisión, es preciso suponer en su actitud de no participación en el proceso de que se trata, una negligencia, desinterés o asentimiento implícito al fallo dictado, pues es obvio que las únicas personas que pueden recurrir en casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Tierras, que como en la especie, no hayan modificado la situación jurídica creada por la decisión de jurisdicción original, son las que hubieren apelado dicho fallo o bien aquellos interesados que concurrieron de algún modo al juicio de revisión para hacer valer allí sus derechos;

Considerando, que en la especie, el recurrente en casación no interpuso recurso alguno de alzada contra lo

resuelto en jurisdicción original, ni envió al Tribunal Superior de Tierras ninguna instancia, solicitud o pedimento para que este lo tuviera en cuenta en el momento de proceder a la revisión obligatoria que la ley pone a su cargo, haya o no haya apelación. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso- Administrativo y Contencioso-Tributario, 7 de octubre de 1998; B. J. 1055. Págs. 417-418).

144. SECRETARIO DE ESTADO SIN CARTERA:

Secretario de Estado sin cartera. Competencia.

Que no era suficiente que a un funcionario designado por el Presidente de la República, se le otorgue el rango de Secretario de Estado, para que éste tenga derecho a ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, si la designación no corresponde a ninguna de las Secretarías de Estado creadas por la ley al amparo de la Constitución vigente; que como ese era el caso de la especie, era obvio que ese funcionario no tenía el privilegio de jurisdicción a que se refiere el artículo 67 de dicha Carta Sustantiva, por lo cual la Suprema Corte de Justicia, era incompetente para conocer de la causa seguida. Que por otra parte, el inciso 3 del artículo 23 de la Constitución de la República establece como una de las atribuciones del Senado, aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder Ejecutivo, por lo que para que el prevenido pudiera ser procesado, al tenor del artículo 67 de la Constitución, el cual establece la jurisdicción privilegiada para determinados funcionarios públicos, era necesario que se cumplieran todas las formalidades supraindicadas, de lo que no existía

constancia de que haya ocurrido en el caso de la especie. (Pleno, 5 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Págs. 33-36, 59-60).

Sobre la sentencia anterior, podemos decir que compartimos plenamente la interpretación, sentido y alcance que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo le ha dado a la misma.

145. Seguro

Véase:

- Accidente de vehículo.
- Responsabilidad civil.

145.1 Seguro. Propiedad de Vehículos. Póliza.

Considerando, que el Juez yerra también, desnaturalizando ese documento, cuando afirma que en la certificación expedida por la Superintendencia de Seguros revela que el vehículo en cuestión es propiedad de Honduras Motors, C. por A., cuando lo cierto es que el mismo lo que afirma es que ese vehículo no está asegurado con la compañía La Intercontinental de Seguros, S. A., pero aún en la hipótesis que dijera lo afirmado por el juez, ese dato no fuera determinante, en razón de que lo que tiene prioridad y demuestra la propiedad de un vehículo es la matrícula del mismo. (Cámara Penal, 31 de marzo de 1999, B. J. 1060, Pág. 458).

145.2 Seguro obligatorio.

(Ver: Accidente de vehículo. Presunción de propiedad

de un vehículo. Seguro in rem. Condiciones. Cámara Penal, 15 de septiembre de 1999).

145.3 Seguro obligatorio. Asegurador que viola el contrato. Acción recursoria a favor del asegurador.

(Ver: Seguro Obligatorio. Puesta en causa al asegurador. Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 172-173).

145.4 Seguro obligatorio. Póliza de seguro. Asegurado que no niega la calidad en virtud de la cual se le demanda.

Considerando, que si bien no existe en el expediente ninguna certificación emanada de la Superintendencia de Seguros, probatoria de la existencia de la póliza que ampara el vehículo propiedad del Estado Dominicano, la compañía de Seguros San Rafael, C. por A., puesta en causa por la parte civil constituida y a quien ésta le atribuye ser la aseguradora del vehículo causante de su daño, ha aceptado implícitamente esta calidad, al no controvertir la misma. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Pág. 172).

145.5 Seguro obligatorio. Puesta en causa al asegurador.

Considerando, que de conformidad con los principios que dominan el seguro de responsabilidad civil de vehículos de motor y al tenor del espíritu de la Ley No.4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor, para que el tercero lesionado o perjudicado por un accidente causado por un vehículo cumpla con el requisito establecido por el artículo 10 de la referida ley y se

beneficie en consecuencia dentro de los límites de la póliza, de los derechos establecidos por la misma, le basta con: a) demandar judicialmente a la persona a cuyo nombre figure matriculado el vehículo que se establezca su responsabilidad en el hecho, y b) poner en causa al asegurador para que la sentencia que intervenga le sea declarada oponible. Todo salvo el derecho que tiene el asegurador de ejercer una acción recursoria o en repetición contra el asegurado que haya violado los términos del contrato de seguro o contra la persona por la cual haya tenido que realizar un pago sin estar contractualmente obligada a realizarlo, tal como lo disponen los artículos 68 y 70 de la Ley No.126 de 1971, sobre Seguros Privados de la República Dominicana. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 172-173).

145.6 Seguro obligatorio de vehículo. Ejecución no obstante cualquier recurso contra el asegurador. Improcedente. Artículo 29 Ley de Casación.

Considerando, que en el ordinal séptimo de la sentencia de primer grado, ratificada como se ha dicho en grado de apelación, se ordenó lo siguiente: "Se declara oponible y ejecutoria no obstante cualquier recurso a la compañía U. S., por ser la entidad aseguradora", lo que contraviene las disposiciones expresas del artículo 29 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. (Cámara Penal, 10 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 147).

145.7 Seguro de responsabilidad civil. Inoponibilidad al asegurador. Inaplicabilidad del artículo 10 de la Ley 4117.

Considerando, que en cuanto a su segundo medio, los

recurrentes aducen que la Corte a-quia violó el artículo 10 de la Ley No. 4117 sobre Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados por Vehículos de Motor, al aplicar el mismo caso de la especie, en cuanto a que "la General de Seguros, S.A., no podía ser puesta en causa directamente por la parte agraviada, ya que ese derecho sólo le corresponde a las víctimas de accidentes automovilísticos, como lo señala el artículo 10 de la Ley No. 4117";

Considerando, que ciertamente en uno de los motivos de la sentencia recurrida, la Corte a-quia señala: "que es criterio de esta corte, que el texto precedentemente transcrito (art. 10 Ley 4117), no es limitativo o aplicable a los daños ocasionados por vehículos de motor, y que en consecuencia la entidad aseguradora puede ser puesta en causa en otro caso, especialmente en el que se trata, donde existe una póliza de seguros a nombre de Dominican Watchman National, S.A., expedida por la General de Seguros, S.A., puesta en causa";

Considerando, que al haber aplicado la Corte a-quia, en un caso en el cual no ha habido accidente de vehículos, un texto legal que sólo debe ser aplicado limitativamente en los casos en que se haya incurrido en responsabilidad civil, como consecuencia de un accidente de vehículos de motor, como claramente lo establece el artículo 10 de la Ley No. 4117 sobre Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados por Vehículos de Motor, esta ha hecho una errónea aplicación de la ley, por lo que procede la casación de la sentencia. (Cámara Penal, 19 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 400).

146. SENTENCIA:

146.1 Sentencia. Artículo 11 inciso 9. Ley Registro de Tierras. Poderes de los jueces.

Considerando, que si es cierto que los poderes que tienen los jueces de tierras para disponer acerca de cuantas medidas estimen convenientes para la mejor solución de los casos que le son sometidos, son puramente discrecionales, conforme lo establece el inciso 9 del artículo 11 de la Ley de Registro de Tierras, no es menos verdad que en cualquier materia, los jueces solo pueden desestimar una medida de instrucción como la solicitada en el presente caso por los ahora recurrentes, cuando se determine y establezca con exactitud, que dicha medida es realmente innecesaria o frustratoria, dada la naturaleza de los elementos de juicio, que hubiesen sido sometidos al debate; que al no pronunciarse el tribunal a-quo sobre los pedimentos a los fines indicados, presentados por los recurrentes, es evidente que lesionó su derecho de defensa, y en consecuencia, la sentencia recurrida debe ser casada, sin que haya necesidad de ponderar los demás medios del recurso.(Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 27 de enero de 1999; B. J. 1058. Págs. 614-615).

146.2 Sentencia. Diferencia entre la existencia y la calificación de los hechos.

Considerando, que corresponde a los jueces de la causa establecer la existencia de los hechos, así como de las circunstancias que lo rodean o acompañan, pero su calificación implica una cuestión de derecho cuyo

examen entra dentro de la esfera de la competencia del tribunal de casación, puesto que, la apreciación de los hechos y de sus circunstancias, es una cosa distinta, a las consecuencias de éstos en sus relaciones con la ley; que, así pues, no basta que los jueces que conocieron del fondo del asunto decidan en dispositivo el diferendo o la violación a la ley que se aduce, sino que, al tenor del artículo 23 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, éstos están obligados a motivar su decisión de forma que puedan ser ponderadas las consecuencias legales que de estos hechos se desprenden; que es necesario e indispensable conocer en todos sus aspectos la naturaleza de los hechos que generan el derecho, porque de lo contrario, no sería posible estimar la conexión que tengan los hechos con la ley. (Cámara Penal, 15 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 194).

146.3 Sentencia Ejecutada. Materia laboral. Interés jurídico de la parte perdedora. Finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo.

Considerando, que la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, al disponer que las sentencias de los Juzgados de Trabajo son ejecutorias después del tercer día de su notificación, salvo el depósito del duplo de las condenaciones por la parte que haya sucumbido, no es la de impedir la continuación de un proceso judicial, sino garantizar que al final del litigio la parte gananciosa esté en condiciones de acceder a sus acreencias, sin necesidad de recurrir al proceso de la ejecución forzosa, de ahí que el recurso se apelación recupere su efecto suspensivo tan pronto se consigne el duplo arriba indicado.

Considerando, que el hecho de que una sentencia de primer grado, sea ejecutada no elimina el interés jurídico de la parte perdidosa sobre la suerte del litigio, pues esta mantiene el interés de la revocación de la sentencia a los fines de impedir su condenación por una violación que niega haber cometido y de ejercer posteriormente las acciones que pueden derivarse de esa situación contra aquel que se haya prevalido de una ejecución provisional antes de la existencia de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 623-624).

146.4 Sentencia. Ejecución Provisional. Art. 127 al 141 de la Ley 834 de 1978. Ejecución de pleno derecho. Excepciones.

Considerando, que el párrafo agregado por la Ley No. 234, de 1964, al artículo 1 de la Ley No. 5869, de 1962 sobre Violación de Propiedad, dispone que la sentencia que se dicte, en caso de condenación, ordenará, además del desalojo de los ocupantes, la ejecutoriedad provisional y sin fianza, no obstante cualquier recurso; que en virtud de esa disposición legal, la sentencia que intervenga, como consecuencia de una litis de esa naturaleza, es ejecutoria provisionalmente de pleno derecho;

Considerando, que efectivamente, los artículos del 127 al 141 de la Ley No. 834, de 1978, relativos a la ejecución provisional de la sentencia, distinguen entre las sentencias que están revestidas de tal carácter de pleno derecho, como las dictadas en el caso de la especie, y aquellas otras cuya ejecución provisional resulta de una

disposición del juez; que es de principio, que la sentencia ejecutoria provisionalmente de pleno derecho, no está sujeta a suspensión y que cuando dicha ejecución ha sido ordenada por la ley, no puede ser suspendida o detenida por el presidente de la corte actuando en funciones de referimiento, más que si parece que el primer juez ha manifiestamente excedido los poderes que le son atribuidos por la ley, o cuando el juez haya estatuido siendo incompetente, o si éste advierte o comprueba que la decisión recurrida está afectada de una nulidad evidente, o ha sido producto de un error grosero o pronunciada en violación al derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión; que al ser la sentencia del juzgado de primera instancia que ordenó el desalojo, ejecutoria provisionalmente de pleno derecho, en virtud del párrafo agregado al artículo 1 de la Ley No. 5869, y no ser producto de error grosero ni pronunciada en violación al derecho de defensa del que demanda la suspensión, no procedía su suspensión tal y como lo decidió el juez a-quo. (Cámara Civil, 14 de julio de 1999).

146.5 Sentencia. Exclusión de oficio de un demandado.

Considerando, que el hecho de que un tribunal decida excluir de una demanda a un demandado sobre la base de que el mismo no es empleador de la demandada, sin que ninguna de las partes lo solicite, no constituye un fallo ultra petita, pues los jueces del fondo solo puede condenar como empleadores aquellos contra quienes se establezca que tienen la calidad como tales, estando en la obligación de liberar de responsabilidades a aquellos demandados que después de la substanciación del

proceso el tribunal entendiera que fueron empleadores del demandante. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 415).

146.6 Sentencia. Fecha. Certificación de Secretaria.

Considerando, que en el examen de la sentencia se advierte que conforme ella misma indica fue dictada en audiencia pública el 10 de mayo de 1995, y puesto que las sentencias emanadas de nuestros tribunales tienen fe hasta inscripción en falsedad, su contenido no puede ser destruido por la certificación de una secretaria que no pertenece a la Corte a-quá, sino a la Procuraduría General de esa Corte, que es una oficina distinta; además para invalidar las afirmaciones contenidas en esos instrumentos públicos habría que inscribirse en falsedad contra los mismos, lo que no se ha hecho en la especie, y por tanto las afirmaciones que ella contiene conservan todo su vigor y deben ser creídas, por lo que procede rechazar ambos medios. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 364).

146.7 Sentencia. Medida de Instrucción. Obligación de cumplirlas. Excepciones.

Considerando, que es de principio que todo tribunal está en la obligación de cumplir y ejecutar las medidas de instrucción que ordena en el curso de un proceso, sobre todo cuando, como en la especie, ha considerado que las mismas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos sometidos a su consideración y solución; que por excepción esa obligación del tribunal cesa cuando la parte que ha solicitado la medida y en beneficio de quien

ha sido dictada la misma renuncia a hacer uso de la misma, o cuando aparecen pruebas e informaciones nuevas antes de la celebración de dicha medida, suficientes para suplir las que se obtendrían con la ejecución de la sentencia que ordenó la misma; o finalmente, cuando la medida ordenada deviene de imposible ejecución, que en la especie no se está en presencia de ninguno de esos casos, por lo que se imponía al tribunal exigir el cumplimiento del replanteo ordenado, el cual puso a diligencia de cualquiera de las partes. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 9 de diciembre de 1998; B. J. 1053. Págs. 386-387).

146.8 Sentencia. Mención de que será ejecutoria provisionalmente. Consecuencia de su omisión.

Considerando, en cuanto al último aspecto de los dos medios examinados, que resulta irrelevante el que en una decisión de justicia se ordene o disponga que ella será ejecutoria provisionalmente sobre minuta y sin fianza, no obstante cualquier recurso que las partes puedan interponer contra la misma, aunque esa decisión sea, por provenir de un tribunal de alzada, ejecutoria y no ser susceptible de ningún recurso suspensivo; que, cuando esto sucede y el juez ordena la ejecución provisional, no está con ello contraviniendo la ley sino disponiendo, aunque de manera superabundante, lo que la ley manda, por lo que los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados. (Cámara Civil, 1 de septiembre de 1999).

146.9 Sentencia. Motivación.

Considerando, que esta Corte de Casación para poder ejercer la atribución que le asigna la ley, necesita indispensablemente enterarse de la naturaleza de los hechos, de los cuales se deriva la aplicación del derecho, porque de lo contrario no sería posible estimar la conexión que los mismos tengan con la ley, y en consecuencia, determinar si el derecho de los justiciables ha sido respetado en el fallo impugnado; que en la especie la Corte a-quá en su decisión no ha dado motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su dispositivo, por lo que la sentencia atacada debe ser casada por insuficiencia de motivos. (Cámara Civil, 16 de junio de 1999).

146.10 Sentencia. Motivación.

Considerando, que los jueces del fondo, dentro del ámbito de su soberanía deben observar, en la redacción de sus sentencias, determinadas menciones consideradas como sustanciales, o sea, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustentación a la decisión jurisdiccional; que en el caso que nos ocupa, la decisión impugnada contiene una exposición vaga e imprecisa de los hechos, así como una mención superficial del derecho aplicado, de modo que resulta imposible reconocer los elementos de la incriminación, necesarios para la aplicación de la norma jurídica. (Cámara Penal, 25 de noviembre de 1999).

146.11 Sentencia. Motivación. Finalidad.

Considerando, que la motivación de una sentencia debe ser la exposición de la percepción que el juzgador tiene

sobre la historia real de los hechos, y la explicación de la fundamentación jurídica de la solución que se ha dado al caso específico que se juzga; por lo cual no bastaría una simple exposición de lo ocurrido y de los artículos de la ley aplicada, sino que se requiere hacer constar que se ha empleado un razonamiento lógico;

Considerando, que la sentencia debe mostrar, tanto el propio convencimiento de los jueces, como la explicación de las razones dirigidas a las partes, lo cual ha de diafanizar el proceso en cuanto a su decisión y a las razones que motivaron la misma; que una sentencia carente de motivos de hecho y de derecho conduce a la arbitrariedad de la resolución; asimismo, la falta de fundamentación jurídica podría ofrecer una solución cimentada fuera del ordenamiento jurídico; que además, una sentencia carente de motivos puede ser manifiestamente injusta;

Considerando, que una motivación irracional o no razonable, tampoco cumple con el voto de la norma legal, así, de esa manera, la motivación racional apela a la lógica de los hechos, y nunca debe vulnerar los principios de ésta, por eso, no basta como motivación una mera yuxtaposición de proposiciones que no tengan ninguna conexión entre sí; además la motivación debe ser concreta y no abstracta, puesto que unos razonamientos generales sin ninguna conexión con el caso sometido, continúan siendo arbitrarios y no cumplen ninguna de las finalidades de la ley sobre la materia, que tienen en la motivación de la sentencia el conocimiento de las razones de hecho y de derecho que justifican su dispositivo, y posibilitan su entendimiento y su posible impugnación;

Considerando, que por otro lado, la exigencia de la motivación no comporta sólo el hecho de satisfacer al justiciable, puesto que ésta tiene una connotación más trascendente, por lo que no puede equiparse a ausencia de la misma, cuando exista disconformidad con la decisión o cuando no se considere convincente, sino que ésta supone entre otras cosas: a) un juicio lógico que ha llevado al juzgador a seleccionar lo esencial de los elementos expuestos y unas normas jurídicas; b) la aplicación razonada de la norma y la respuesta a las pretensiones de las partes; c) la ponderación y mención de los alegatos relevantes para la decisión, sobre todo, en esto último, basta que se limiten a las alegaciones que sean pertinentes para la resolución del caso, distinguiéndose claramente entre las pretensiones de las partes y las argumentaciones propias del juzgador. (Cámara Penal, 21 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 394).

146.12 Sentencia. Motivación. Derecho fundamental de las personas.

Considerando, que la motivación de las decisiones judiciales es un derecho fundamental de las personas, que forma parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la efectividad del mismo y para no dejar en la penumbra tan importante aspecto del enjuiciamiento, ya que no pueden existir zonas de la actividad jurisdiccional, salvo aquellas que la misma ley ordena, que no se sometan a la consideración de la opinión pública y al conocimiento de las partes, quienes no pueden apreciar si la selección de los elementos probatorios es racional y razonable, de no ponerse de manifiesto en la sentencia las razones en que la misma

se basa. (Cámara Penal, 21 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 396).

146.13 Sentencia. Motivaciones. Importancia.

Considerando, que es una obligación de todos los tribunales del orden judicial motivar sus sentencias, esto, como un principio general que se aplica a todas las jurisdicciones y que aparece consagrado en el inciso 5to. del artículo 23 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que reviste una importancia capital la motivación de una decisión de manera que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, se encuentre en condiciones de apreciar la regularidad de la calificación de los hechos, y que de esa manera, las partes envueltas en el diferendo encuentren la prueba de que la condena o absolución no es arbitraria e ilegal; que además, ese imperativo legal puesto a cargo de los jueces, debe ser entendido en el sentido de que estos decidan y precisen con particular claridad sobre cada uno de los puntos o extremos de las conclusiones, bien sea de parte de la representación del ministerio público en su dictamen, de la parte civil, o del propio acusado; que en sus motivaciones es menester que los jueces examinen y ponderen debidamente los elementos constitutivos de la infracción que se le imputa al procesado, por consiguiente, en la especie, la sentencia evacuada por la Corte a-quá debe ser casada por ausencia de motivos con relación a la decisión expresada en el dispositivo. (Cámara Penal, 11 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 245).

146.14 Sentencia. Motivación. Naturaleza de los hechos.

Considerando, que esta Corte de Casación, para poder

ejercer la atribución que le asigna la ley, necesita enterarse de la naturaleza de los hechos, de los cuales se deriva la aplicación del derecho, porque de lo contrario no sería posible estimar la conexión que los mismos tengan con la ley, y en consecuencia, determinar si el derecho de los justiciables ha sido respetado en el fallo impugnado; que en la especie la Corte a-quá, en su decisión no ha dado motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su dispositivo, por lo que la sentencia atacada debe ser casada por insuficiencia de motivos. (Cámara Penal, 7 de julio de 1999).

146.15 Sentencia. Motivación. Uso y costumbre.

(Ver: Prueba Contrato de Trabajo. Condenaciones sobre la base del uso y la costumbre. Precisiones que deba hacer el juez, Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso- Tributario, 22 de abril de 1998; B. J. 1049. Págs. 468-469).

146.16 Sentencia. Motivos. Enumeración de elementos probatorios. Intima convicción.

Considerando, que los tribunales de Derecho deben exponer en sus sentencias la base en que descansa cada decisión tomada por ellos, lo cual es imprescindible, en razón de que únicamente así la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, puede estar en condiciones de determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada; además, solo mediante la exposición de motivos las partes pueden apreciar en las sentencias, los elementos en los cuales se fundamentó el fallo que les atañe.

Considerando, que no son suficientes en sí mismas, por

lo impreciso y genérico de su contenido, estas expresiones: a) "En la instrucción de la causa, oral, pública, y contradictoria, y sin restricción alguna, se estableció de manera contundente..."; b) "No obstante los alegatos de inocencia expuestos en la instrucción de la causa por todos los acusados, en el sentido de que la admisión de culpabilidad que hicieron extrajudicialmente le fue arrancada por métodos violentos, los jueces estimaron como carentes de seriedad esos alegatos y sin fundamento alguno..."; c) "es un hecho incuestionable la separación misteriosa de las armas de guerra (tres fusiles) del cuartel del Comando de Fuerzas de la Fuerza Aérea Dominicana...".

Considerando, que es necesario que el tribunal exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o en la combinación de elementos probatorios. (Cámara Penal, 20 de octubre de 1998; B. J. 1055. Págs. 222-223).

146.17 Sentencia. Notificación. Punto de partida del plazo para los recursos. Domicilio desconocido. Artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que como se evidencia del estudio de los medios invocados, los agravios atribuidos por el recurrente a la sentencia impugnada consisten fundamentalmente en la incorrecta aplicación por la Corte a-quo, del artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil, en cuanto concierne a la notificación de personas con domicilio desconocido, ya que entiende que en la notificación de los actos Nos. 107-90 y 108-90,

del 22 de febrero de 1990, el primero, y 5 de julio de 1990, el segundo, se siguió el procedimiento trazado por el señalado texto legal, dándose cumplimiento al voto de la ley y la jurisprudencia;

Considerando, que, en efecto, esa disposición del artículo 69 premencionado establece: "A aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en el lugar de su actual residencia, si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribunal que deba conocer de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que visará el original"; que tal como se consigna en la sentencia atacada, el acto No. 107-90 del 22 de febrero de 1990, del ministerial Leonardo A. Santana Santana contentivo de la demanda introductiva de instancia que culminó con la sentencia de primer grado que condenó al recurrido al pago de una indemnización de quinientos mil pesos, figura visado por el Procurador fiscal del Distrito Nacional, pero no hace constar si el mismo se hizo fijar, por tratarse de un emplazamiento, en la puerta del local del tribunal llamado a conocer de la demanda; que del mismo modo se consigna en la sentencia impugnada que el acto No. 108-90 del 5 de julio de 1990 del ministerial Héctor Suberví, mediante el cual Anibal Concepción Mercedes notifica la sentencia de primera instancia, adolece de las mismas fallas porque el ministerial no procedió de acuerdo con el artículo 69 párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil;

Considerando, que el examen de los indicados actos Nos. 107-90 y 108-90 y del expediente pone de manifiesto que Francisco Antonio Pérez cordero, fue desalojado de la casa No. 15 de la calle B, urbanización

Apolo II, del Sector Arroyo Hondo, donde residía en Santo Domingo, mediante proceso verbal contenido en el acto No. 013-90, del ministerial Juan E. Hernández, del 12 de febrero de 1990; que el acto No. 107-90, del 22 de febrero de 1990, contentivo de la demanda en daños y perjuicios contra el recurrido, fue visado por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional pero no fijado en la puerta principal del local del tribunal apoderado; y que en el acto No. 108-90, del 5 de julio de 1990, con el cual se notificó la sentencia revocada por la Corte a-quo, se recoge la declaración de Nelsida Gómez, vividora de la casa No. 15 de la calle B, urbanización Apolo II, del sector Arroyo Hondo, y persona con quien dijo el ministerial actuante haber hablado, según la cual ella le manifestó al alguacil: " que las personas que vivían en esa casa se mudaron hace cinco meses y no tienen dirección conocida.."; que tanto esta declaración como la circunstancia de que el alguacil que instrumentó el acto No. 107-90, del 22 de febrero de 1990, lo notificara también al Procurador Fiscal del Distrito Nacional y lo hiciera visar en su original por este funcionario, revelan que la persona que se trataba de notificar (Francisco Antonio Pérez Cordero) carecía en ese momento de domicilio conocido y, como consecuencia de ello se le juzgó en defecto, y la sentencia intervenida le fue notificada en un domicilio que ya, por fuerza del desalojo sufrido, había cambiado, por lo que, las notificaciones así realizadas, son irregulares por no cumplirse en las mismas con la formalidades prescritas, a pena de nulidad, por el artículo 69, párrafo 7mo. del Código de Procedimiento Civil, lo que permitía al actual recurrido interponer válidamente el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó en primera instancia, ya que el

plazo que imparte el artículo 443, modificado, del mismo código, estaba abierto cuando dicho recurso fue incoado por Francisco Antonio Pérez Cordero por acto No. 136-93, del alguacil José Luis Andújar Saldivar, el 7 de mayo de 1993, recurso que culminó con la sentencia impugnada que declaró la nulidad del acto de emplazamiento No. 107-90, del 22 de febrero de 1990 y de la sentencia del 20 de junio de 1990 que fue su consecuencia, obtenida en violación al derecho de defensa del recurrido. (Cámara Civil, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 214-215).

146.18 Sentencia. Obligación de fallar sobre las conclusiones, no sobre los alegatos y argumentos.

Considerando, que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre los alegatos y argumentos que una parte expone en sus escritos de defensa, sino a decidir los pedimentos que se le formulen a través de conclusiones formales, por lo que el hecho de que un Juez no se refiera en una sentencia a un alegato determinado no implica una violación a la ley, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 22 de julio de 1998; B. J. 1052. Pág. 893).

146.19 Sentencia. Orden en cuanto al fallo.

Considerando, que si bien es cierto lo que alegan las recurrentes de que la Corte a-quá, se encontraba apoderada de otros recursos sobre el mismo asunto, no existe ninguna disposición legal que imponga al tribunal la obligación de fallar en el orden en que fueron

apoderados los expedientes a su cargo, sobre todo cuando son las partes en esta materia, que motorizan la fijación de los expedientes dependiendo del interés que muestren en los asuntos que las envuelven. (Cámara Civil, 6 de octubre de 1999).

146.20 Sentencia. Plazo para fallar. Falta imputable a los jueces. No constituye un vicio de casación.

Considerando, que el hecho de que un tribunal no decida un asunto dentro de los plazos legales constituye una falta de los jueces, que podría dar lugar a acciones en su contra, pero dicha falta no constituye un vicio a los fines de la casación de la sentencia, por lo que el alegato en ese sentido carece de fundamento (Cámara de Tierras, Laboral, Contenciosos-Administrativo y Contencioso-Tributario, 12 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 273).

146.21 Sentencia preparatoria. Comunicación de documentos.

Considerando, que conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación en su párrafo final: "no se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatoria sino después de la sentencia definitiva..."; y el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil expresa que: "se reputa sentencia preparatoria la dictada para la sustentación de la causa, y para poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo";

Considerando, que en el caso ocurrente, en la sentencia impugnada se otorgó un plazo a ambas partes para la comunicación de documentos, y fijó audiencia para el conocimiento de la misma para el día 22 de septiembre de 1994; que de lo que se ha expuesto resulta evidente

que la sentencia impugnada fue dictada para poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo y no resuelve ni prejuzga el fondo del asunto, por lo que es preparatoria y, por tanto, la inadmisión propuesta por los recurridos debe ser acogida, lo que hace innecesario ponderar los medios del recurso. (Cámara Civil, 4 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 38).

146.22 Sentencia preparatoria. Comparecencia personal.

(Ver: Comparecencia personal. Naturaleza de la sentencia. Cámara Civil, 6 de octubre de 1999).

146.23 Sentencia preparatoria. Reapertura de debates.

(Ver: Reapertura de Debates. Sentencia preparatoria. Cámara Civil, 5 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 97).

146.24 Sentencia. Suspensión de Ejecución. Interpretación del artículo 134 de la Ley No. 834 de 1978.

Que al precisar ese texto legal que la consignación debe ser suficiente para garantizar el principal, los intereses y los gastos de la condenación, es obvio que no se está refiriendo al modo de reparación pecuniaria en forma de renta exclusivamente, sino también a la que se acuerda en forma de capital, que es el modo usual en la práctica de nuestros tribunales de fondo. Que como la parte recurrida fue condenada en primera instancia al pago de una suma de dinero a título indemnizatorio, por lo que la ejecución provisional después de haber sido dispuesta, no podía ser detenida sin que se violara la disposición legal señalada ya que ni bajo consignación de las

especies o valores suficientes para garantizar el monto de la condenación en principal, intereses y gastos, podía la parte condenada evitar que la ejecución provisional fuera perseguida sin que se justificaran las consecuencias manifiestamente excesivas que de la ejecución resultarían. (Cámara Civil, 29 de octubre de 1997; B. J.1043. Pág. 97-98.).

146.25 Sentencia. Recursos. Imposibilidad de ser atacada por acción principal.

(Ver Nulidad. Acto de Procedimiento. Necesidad de ser pronunciadas, Cámara Civil, 26 de mayo de 1999; B. J. 1062. Pág. 195).

146.26 Sentencia. Recursos contra las mismas. Hechos y derecho.

Considerando, que los recursos contra las sentencias pueden referirse tanto a la regla de derecho aplicada, como a los hechos presumiblemente probados por ante los jueces del fondo y que sirven de base a las decisiones. Sin embargo, cuando se trata de motivación es frecuente limitarla al derecho aplicado al caso, cuando tanto o más importantes son los razonamientos empleados para la selección de los elementos y circunstancias sometidas a la decisión, y que el juez da como probados, ya que tal selección predetermina normalmente la solución jurídica; que de igual manera, para la apreciación de los indicios en materia penal resulta imprescindible que los tribunales del orden judicial expongan sus razonamientos en torno a los hechos probados, así como a otros hechos acreditados por medio de indicios, obligando a los jueces a exponer las

interpretaciones posibles de tales hechos probados y por qué se elige la interpretación inculpadora; posibilitando de esa manera, tanto a las partes, como a la instancia judicial superior, la revisión de los elementos y circunstancias reales del caso, resultando pues, indispensable, explicitar las razones de la selección de los elementos probatorios. (Cámara Penal, 21 de abril de 1999; B. J. 1061. Pág. 396).

146.27 Sentencia. Relación de hechos y derechos.

Considerando, que la sentencia impugnada no indica de qué medios se valió el Tribunal a-quo, para determinar la existencia del despido y las circunstancias en que este se produjo, ni las violaciones que de acuerdo a éste cometió la empresa demandada, careciendo de una relación completa de los hechos y de motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 14 de julio de 1999).

146.28 Sentencia. Suspensión. Artículo 539. Prestación de Fianza.

Considerando, que la racionalidad de la ley queda manifestada en el complemento que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, establece el artículo 667 de dicho código, al disponer que: "El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación

no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes", lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de agosto de 1999).

146.29 Sentencia. Tribunal colegiado. Ley 684 de 1984.

Considerando, que de esa disposición legal se desprende que el hecho de que una sentencia dictada por un tribunal colegiado esté firmada por un juez que no tomó parte en la instrucción de la causa, no invalida dicha sentencia; que el nombramiento de nuevos jueces por ampliación del número de integrantes de una corte, debe asimilarse a los fines de aplicación de la referida Ley No. 684, al caso de jueces sustitutos que adquieren la facultad de decidir, conjuntamente con los jueces existentes, los asuntos que estuvieren en estado en el momento de su designación, como ocurrió en la especie, razón por la cual el medio que se examina carece de

fundamento y debe ser desestimado. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 20 de octubre de 1999).

147. SIMULACION:

Simulación. Facultad de los jueces de fondo.

Considerando, que los jueces del fondo gozan de un poder soberano de apreciación para decidir si en una operación o acto determinado, existe o no existe simulación, y esa apreciación queda fuera del control de la Suprema Corte de Justicia, a menos que lo decidido acerca de la simulación en uno u otro sentido, se haga con desconocimiento de actos jurídicos cuya consideración hubiera podido conducir a una solución distinta, o con desnaturalización de dichos actos jurídicos. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

148. SOBRESEIMIENTO:

148.1 Sobreseimiento. Recurso de Tercería.

Considerando, que el sobreseimiento procede cuando existe una cuestión prejudicial, esto es, cuando un punto de derecho de la cuestión debe ser juzgado por otra jurisdicción que aquella que conoce del asunto principal, la que debe sobreseer y reenviar al tribunal competente el punto a decidir en primer término y de cuya solución además, depende la suerte del proceso;

Considerando, que la demanda en tercería fue inter-

puesta por la parte recurrida, tercero en el procedimiento de embargo inmobiliario que culminó con la sentencia de adjudicación, contra la sentencia que dispuso la nulidad de la adjudicación; que como el recurrido era un tercero adquiriente a título oneroso y de buena fe, de las parcelas adjudicadas al persiguiendo en el proceso de embargo, y la sentencia que anulaba la adjudicación le había causado un perjuicio, es obvio que tenía derecho a interponer el recurso en tercería establecido en el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, persiguiendo con ello la retractación ante la jurisdicción ordinaria de la sentencia;

Considerando, que la Corte a-quá procedió erróneamente a "sobreseer el asunto, hasta tanto el Tribunal de Tierras decida la litis sobre terrenos registrados de la que está apoderado"; que de la documentación aportada a la litis, se advierte, que el caso que cursa ante el Tribunal de Tierras se refiere a una consulta que el Registrador de Títulos de La Vega le hiciera al Tribunal de Tierras sobre la pertinencia o no de la ejecución de la sentencia que anuló la adjudicación, y que el Tribunal de Tierras convirtió en litis sobre terreno registrado; que tratándose de un recurso de tercería el que cursa ante la jurisdicción ordinaria, no debe esperarse, para conocerlo y fallarlo, la solución de la litis que cursa ante el Tribunal de Tierras, ya que no se trata de una cuestión prejudicial, y además porque, por el recurso extraordinario de la tercería, la sentencia atacada por el mismo, solo tiene con respecto a quien la ejerce, la autoridad relativa de la cosa juzgada.

(Cámara Civil, 16 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 104).

148.2 Sobreseimiento. Recurso de apelación inadmisibles. Querella en falsedad. Consecuencia.

Considerando, que la sentencia impugnada declaró inadmisibles el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, sobre la base de que el mismo había sido elevado tardíamente, por lo que no conoció los méritos de dicho recurso, ni de la demanda del recurrido;

Considerando, que la querella en falsedad interpuesta por la recurrente contra el recurrido, impugna el contrato de trabajo de este, lo que hace que el resultado del conocimiento de dicha querella pudiera tener efectos sobre la demanda intentada por el demandante en pago de prestaciones laborales y otros derechos; que al no conocerse, en el grado de apelación, los méritos de dicha demanda, por el Medio de Inadmisión planteado ante esa jurisdicción, el Juez a-quo no tenía que sobreseer el conocimiento de dicho Medio de Inadmisión, pues la decisión sobre el mismo no resultaría influenciada por la admisión o no de la nulidad planteada por los recurrentes. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de abril de 1998; B. J. 1049. Pág. 393).

148.3 Sobreseimiento. Jurisdicción de fondo.

Considerando, que una vez iniciados los trabajos de la jurisdicción de fondo, el juez apoderado no está en la obligación de sobreseer el conocimiento del caso, cuando el procesado haya interpuesto un recurso contra la providencia calificativa que lo envía al tribunal criminal,

ya que este recurso incoado adrede mucho tiempo después del interesado saber de la existencia del auto de envío a juicio, tiende a frustrar la claridad judicial que debe observar todo tribunal, en aplicación del Derecho. (Cámara Penal, 25 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 309).

149. SOLVE ET RESPETE:

Solve et respete. Artículo 8 Ley 14-94 de 1947. Pago de impuesto previa aun cuando se invoque la incompetencia.

Considerando, que de la disposición del artículo 8 citado resulta que cuando una persona moral o física no quede conforme con alguna decisión de carácter administrativo en relación con la aplicación de impuesto, tasas, derechos, multas o recargos y desee interponer el recurso Contencioso-Administrativo, debe realizar el pago de las sumas que se le reclamen, aún cuando se alegue la falta de fundamento de dicho cobro o la incompetencia del organismo que dictó dicho requerimiento, como se invoca en el caso de la especie, pues tales alegatos son cuestiones de fondo que sólo procede ponderar cuando el recurso es admitido en la forma, esto es, después de que el recurrente haya pagado el monto de lo reclamado y que tendrá derecho al reembolso correspondiente si se acogen sus pretensiones. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 692).

150. SOCIEDADES:

150.1 Sociedades financieras de empresas que promueven el desarrollo económico. Ley No. 292 de 1966. Alegato de inconstitucionalidad.

Considerando, que para incrementar el desarrollo agropecuario así como estimular la agricultura industrial y comercial, la Ley No. 292 de 1966, sobre Sociedades Financieras de Empresas que Promueven el Desarrollo Económico, de capital privado o mixto, dispone que estas entidades sean regidas por las mismas normas legales acordadas al Banco Agrícola de la República Dominicana, por la Ley No. 6186 sobre Fomento Agrícola, en sus artículos 146 al 168, ambos inclusive, para asegurar el reembolso de los préstamos realizados por estas sociedades financieras, así como para dotar de mayores facilidades a las operaciones crediticias que ellas realizan;

Considerando, que al favorecer de manera general e igualitaria la economía individual de todas las personas que se dedican en el país a la explotación agrícola industrial y comercial, la Ley No. 292, no contraviene, como alega el impetrante, las disposiciones del párrafo 5to. del artículo 8 de la Constitución de la República, por tratarse de una ley cuya aplicación es igual para todos, y porque dispone medidas justas y útiles para la comunidad; que tampoco atenta, como se afirma, contra el principio de la libertad de empresa, comercio e industria, ya que no crea ningún tipo de monopolio prohibido por el mismo artículo 8, en su inciso 12, ni desconoce su artículo 100, al no favorecer ninguna situación de privilegio que tienda a quebrantar la igualdad

de todos los dominicanos que laboran en las actividades agrícolas, comerciales e industriales, como medio de propender a la elevación del nivel de vida de toda la población nacional; que, por consiguiente, la ley, cuya nulidad se demanda, no contraría la disposición contenida en el artículo 46 de la Constitución, y, por tanto, la acción de que se trata debe ser rechazada. (Pleno, 30 de junio de 1999; B. J. 1063.Pág. 192).

150.2 Sociedades. Fusión.

Considerando, que se entiende por fusión la operación mediante la cual dos o más sociedades se reúnen para formar sólo una, la cual puede resultar sea de la creación de una sociedad nueva por las sociedades existentes (combinación), sea de la absorción de una sociedad por otra; que la fusión entraña pues la disolución sin liquidación de las sociedades que desaparecen y la transmisión de su patrimonio a las sociedades beneficiarias, implicando, en cuanto al pasivo, que la sociedad absorbente se convierte en deudora de los acreedores de la absorbida, sin que esta sustitución implique novación respecto a ellas;

Considerando, que al decidir que la operación realizada por las empresas Wyeth International Ltd y Ayerst International Inc., constituyó una fusión, la Corte a-quá hizo una correcta interpretación de los documentos de la causa, sin desnaturalizarlos, por lo que el aspecto examinado, carece de fundamento y debe ser desestimado. (Cámara Civil, 16 de junio de 1999).

150.3 Sociedades. Fusión. Consecuencias. Artículo 42 del Código de Comercio. Publicidad.

Considerando, que si bien la creación por fusión, como la que se verifica en la especie, supone la desaparición de las sociedades fusionadas y la formación de una sociedad nueva, cuya constitución está sometida a la aprobación de la asamblea general extraordinaria de las sociedades disueltas y subordinadas a la condición suspensiva del cumplimiento de las formalidades de la fusión, en el caso que nos ocupa, la décimo-séptima resolución del 2 de agosto de 1994 citada anteriormente entre los documentos que informan el presente expediente, en su ordinal primero dispone, "Aprobar la integración por fusión de las entidades Banco del Comercio Dominicano, S. A., Banco Hipotecario Bancomercio, S. A. y el Banco de Desarrollo Bancomercio, S. A....", lo que constituye, sin lugar a duda, la emisión de su dictamen aprobatorio al proyecto de fusión; que, por otra parte, tal y como se comprueba por la lectura del acta de la primera asamblea general constitutiva de la nueva entidad Bancomercio, S. A. del 8 de octubre de 1994, en cuya cuarta resolución se reconoce estar autorizada por la Junta Monetaria, la nueva entidad cuando precisa, que los accionistas de Bancomercio, S. A., reunidos en su primera junta general constitutiva, resuelven reconocer y aceptar el deseo de las sociedades fusionadas, de aportar a su formación, "todos y cada uno de los derechos activos y bienes que poseen con la autorización de la décimo-séptima resolución adoptada por la Junta Monetaria" del 2 de agosto de 1994;

Considerando, que además, el artículo 42 del Código de

Comercio establece que debe publicarse el documento constitutivo de toda compañía comercial "en uno de los periódicos del lugar" que debe ser certificado por el impresor, legalizado y registrado dentro de los tres meses a pena de nulidad, no pudiendo los socios oponer a terceras personas la omisión de ninguna de estas formalidades; que con la publicación se supone pues que la nueva sociedad comienza a tener existencia jurídica erga-omnes y a ser por tanto sus actos constitutivos válidos frente a los terceros; que de existir una condición suspensiva, que no es el caso, sólo tendría validez entre las partes que suscriben el acuerdo de fusión y no frente a terceros. (Cámara Civil, 26 de mayo de 1999; B.J. 1062. Págs. 18-19).

150.4 Sociedad de hecho. Calificación.

....En lo que respecta a la calificación de sociedad de hecho a la formada entre los recurrentes y la solidaridad entre los mismos, atribuida por la sentencia impugnada a dichos recurrentes la indicada sentencia por una parte, no ha precisado mediante una motivación suficiente y pertinente si las cadenas de distribución constituyen denominaciones que corresponden a la Unión de Comerciantes Detallistas de Villa Duarte, o a la llamada sociedad de hecho; así como los elementos constitutivos de toda sociedad como son, además de la intención de las partes de asociarse o *affectio societatis* la existencia de aportes y la vocación de las mismas de participar en los beneficios y las pérdidas, lo que ha impedido a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, ejercer su control sobre la regularidad de la decisión

impugnada, por lo que dicha sentencia carece de base legal. (Cámara Civil, 18 de diciembre de 1997; B. J. 1045. Pág. 127-128).

151. SOLIDARIDAD:

Solidaridad. Contratos de trabajo. Artículo 13 Código de Trabajo. Condiciones.

Considerando, que el hecho de que dos o más empresas constituyan un conjunto económico, integrado por los mismos accionistas, no implica la existencia de un fraude que haga solidaria a cada una de las empresas de las obligaciones que se deriven de la existencia de contratos de trabajo, de algunas de ellas; que al tenor del artículo 13 del Código de Trabajo para que esta solidaridad exista es necesario que hayan mediado maniobras fraudulentas, que en todo caso los jueces deben precisar en qué consistieron.

Considerando, que la sentencia recurrida no señala en qué consistieron las maniobras fraudulentas que exige el referido artículo 13 del Código de Trabajo, ni en qué momento se produjeron, estimando que estas maniobras existieron por el solo hecho de tratarse de un conjunto económico, lo que obviamente constituye una errónea interpretación de la disposición legal arriba indicada.

Considerando, que para que la recurrente estuviere obligada a hacer la prueba contraria a los hechos invocados por el recurrido era necesario que éste estableciera que en algún momento le prestó sus servicios personales, lo que haría presumir la existencia del contrato de trabajo, de acuerdo con las disposiciones

del artículo 15 del Código de Trabajo; que en cambio los documentos a que alude la sentencia impugnada proceden de las empresas A. del C, A. A. y P. del C y A. y P del C., no señalando la sentencia en que prueba se fundamentó para determinar la condición de empleadora de la recurrente.-

Considerando, que la sentencia recurrida no contiene una relación completa de los hechos ni motivos suficientes que permitan a esta Corte verificar que la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual procede su casación. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, 5 de febrero de 1998).

152. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA:

152.1 Suprema Corte de Justicia. Poder creador. Máximas y principios.

Considerando, que aun cuando se le reconoce a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación en uso del poder creador del derecho que se le atribuye, considerar como pertenecientes al derecho positivo, algunas máximas y principios, esto es sólo posible, si esas máximas y principios, están contenidos explícita o implícitamente en algún texto de ley; que la máxima invocada, "primero en el tiempo, primero en el derecho" no está vinculada a disposición legal alguna; que de aceptarse la violación de principios generales y máximas como medios de casación, sin el soporte de la ley, la Corte de Casación transgrediría la prohibición hecha al juez por el artículo 5 del Código Civil de estatuir por vía general y reglamentaria; que el artículo 109 a que se

refieren las recurrentes, relativo al referimiento ante el presidente, no corresponde al Código de Procedimiento Civil, sino a la Ley No. 834 de 1978 y en el mismo no se establece que por su carácter accesorio y provisional, el referimiento deba ser fallado antes que el fondo de la contestación; que ni en éste ni en las demás disposiciones legales citadas por las recurrentes encuentra la máxima citada su base de sustentación, y por tanto, procede desestimar el medio de casación examinado por improcedente e infundado. (Cámara Civil, 6 de octubre de 1999).

152.2 Suprema Corte de Justicia. Querella con constitución en parte civil. Artículo 25 Ley 91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Auto del Presidente.

Atendido a que el estudio y examen del expediente pone de manifiesto que el querellante no ha probado haber sufrido un perjuicio, condición inminente para el apoderamiento directo con constitución en parte civil, el cual supone necesariamente haber recibido un perjuicio actual, personal y directo de la infracción que le imputa al querellado; que tampoco el querellante ha probado la intención delictuosa por parte del mandatario, cuya actuación no es más que la continuación de un proceso judicial en desconocimiento de la muerte de su mandante y que de conformidad con lo establecido en el art. 2008 del Código Civil "si ignorase el mandatario la muerte de su mandante o cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido lo que ha hecho en esa ignorancia", que por lo antes dicho, la querella debe ser desestimada. (Auto Presidente, 18 de agosto de 1999).

152.3 Suprema Corte de Justicia. Querrella contra el Presidente de la República y otros funcionarios. Auto del Presidente. Necesidad de juicio político previo.

Atendido a que la solicitud de fijación de audiencia que antecede para conocer por apoderamiento directo de una querrella con constitución en parte civil, involucra, entre otros, como autor principal de los hechos imputados, al Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, quien ostenta actualmente la investidura de Presidente de la República;

Atendido a que los hechos a que se contrae la querrella se vinculan con la extradición dispuesta por el Poder Ejecutivo del dominicano Máximo Antonio Reyes Vásquez, mediante Decreto No. 346-97, del 12 de agosto de 1997, y la entrega de dicha persona a las autoridades del Pueblo del Estado de New York, Estados Unidos de América, para que sea juzgado por los tribunales de dicho Estado por la comisión de los hechos delictuosos que se le imputan;

Atendido que por esa actuación el querellante entiende que el Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, Presidente de la República, ha violado los artículos 2, 3 y 8, ordinal 2, letra f, de la Constitución; 4 de la Ley de Extradición No. 489, de 1969; y 5 y 6 del Código de Procedimiento Criminal y 114 del Código Penal, y que por ese motivo procede su encausamiento penal y el de los señores Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República y Eduardo Latorre, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, como cómplices;

Atendido que en lo referente al Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, de los hechos relatados en la instancia querrella arriba aludida, se infiere que las

actuaciones a él imputadas, entre las cuales se señalan violaciones a la Constitución, fueron ejecutadas en ocasión del ejercicio de sus funciones como Presidente de la República;

Atendido a que, aparte de que conforme con la mejor doctrina y el Derecho Constitucional, el Presidente de la República no es responsable de los actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones, excepto en el caso de alta traición, éste no puede ser puesto en estado de acusación sin previamente haber sido sometido al juicio político previsto en los artículos 26 y 23, inciso 4 de la Constitución, máxime cuando se le inculpa de la violación del artículo 114 del Código Penal, como ocurre en la especie, que sanciona los crímenes y delitos contra la Constitución, calificados de políticos por la ley del 28 de junio de 1911, que modificó el Capítulo II del Libro Tercero, del Código Penal;

Atendido a que sólo después de ese juicio es que el Presidente de la República, podría ser procesado penalmente ante los tribunales competentes, si es destituido; que como no existe constancia de que los indicados trámites constitucionales hayan sido cumplidos, procede desestimar la solicitud en lo que al Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, se refiere;

Atendido a que el artículo 114 del Código Penal, cuya violación se invoca, y que sanciona con la pena de la degradación cívica a los funcionarios públicos a quienes se les acuse de haber ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a los derechos individuales o políticos garantizados por la Constitución, impide por contener una sanción de carácter criminal, que la Suprema Corte de Justicia sea apoderada por vía directa

sin que previamente se hayan cumplido y agotado los procedimientos relativos al Juicio Político a que se ha hecho referencia precedentemente;

Atendido a que Art. 25 de la indicada Ley dispone lo siguiente: "En todos los casos de apoderamiento directo por querrela de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento;

Atendido a que un examen reflexivo del texto legal transcrito, conduce a la interpretación de que en el caso de que se trata no sólo resulta improcedente fijar audiencia para conocer del apoderamiento por vía directa de ésta Suprema Corte de Justicia con constitución en parte civil contra el Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, Presidente de la República, hecho por el señor Máximo Antonio Reyes Vásquez, sino que tampoco procede contra los señores Dr. Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República, Eduardo Latorre, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, y Bernardo Santiago, Coronel, P.N. Jefe del Servicio Secreto de la Policía Nacional, en razón de que dicha disposición legal no es posible aplicarla cuando la solicitud o demanda de que se trata está, como en la especie, dirigida contra los referidos funcionarios, en virtud de los actos realizados u ordenados por el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones;

Atendido a que procede además la fusión de ambas instancias para ser resueltas conjuntamente. (Auto Presidente, 19 de septiembre de 1997).

152.4 Suprema Corte de Justicia. Querella con constitución en parte civil en contra de Jueces de la Suprema Corte de Justicia. Auto del Presidente. Solicitud de inhibición de jueces.

Atendido a que las solicitudes para la designación de juez de instrucción que antecede, involucra a los Magistrados Dres. Juan Guiliani Vólquez, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio Ibarra Ríos y Rafael Luciano Pichardo, Jueces de la Suprema Corte de Justicia;

Atendido a que el hecho que genera, a juicio del impetrante, la violación aducida del artículo 183 del Código Penal, es la circunstancia de haber los Magistrados Dres. Juan Guiliani Vólquez, Juez Segundo Sustituto de Presidente, Julio Genaro Campillo Pérez y Julio Ibarra Ríos, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, participando y deliberando en el pleno de la Corte que conoció y falló, desestimándola, la abstención o inhibición producida por el Magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo, Juez Primer Sustituto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de octubre de 1997, en relación con los procesos incoados por el Sr. Aníbal De Castro, la Revista Rumbo, Ediciones A.A. y el Sr. Edmundo López Gómez, contra el Dr. Marino Vinicio Castillo R.;

Atendido a que, asimismo, el hecho que genera, a juicio del impetrante, la violación aducida del artículo 183 del Código Penal, en cuanto se refiere al Magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo, Juez Primer Sustituto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es la circunstancia de haber éste participado en el pleno celebrado por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de diciembre de 1997, que declaró su incompetencia para

conocer de la querella que por violación a la Ley No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, presentara en su contra el Sr. Aníbal de Castro;

Atendido a que por esas actuaciones el querellante entiende que los Magistrados Dres. Juan Guiliani Vólquez, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio Ibarra Ríos y Rafael Luciano Pichardo, han violado el artículo 183 del Código Penal, y que por ese motivo procede la designación de un juez de instrucción que instruya la sumaria correspondiente, previo al apoderamiento, en consideración de que la sanción que prevé el citado texto, que es la degradación cívica, es de naturaleza criminal;

Atendido a que si bien es cierto que el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil prescribe que siempre que un juez sepa que en él concurre cualquier causa de recusación, estará obligado a declararla en cámara para que el tribunal decida si aquel debe abstenerse, no es menos cierto que el juez puede también abstenerse por otros motivos, pues la ley no ha enumerado las causas de abstención; que el legislador ha querido, en cuanto a los motivos de abstención, remitirse a la conciencia de los magistrados, y de ahí su independencia de la recusación, cuyas causas sí están limitativamente señaladas por la ley, la cual establece un procedimiento especial para su ejercicio por parte de los interesados, no así para la inhibición que, por ser un acto voluntario del juez, exclusivamente, su conocimiento por el tribunal a que pertenece el juez que la propone, no está sometido a ningún plazo, forma ni procedimiento;

Atendido a que solo cuando una parte ha procedido a la recusación es que un juez puede quedar inhabilitado, y

esto únicamente a partir del día que se dé sentencia ordenando la comunicación del expediente al juez recusado y al fiscal para que se expliquen sobre los hechos en conformidad con los artículos 385, 386 y 387 del Código de Procedimiento Civil; que como la inhibición es un acto de voluntad del fuero interno de los magistrados, su solicitud, como en el caso de la recusación, excepto en el momento indicado, no es de naturaleza a producir la inhabilitación como juez del magistrado a quien se le haya pedido su abstención, pues ninguna disposición legal así lo determina, por lo que, el hecho de que los Magistrados Dres. Juan Guiliani Vólquez, Julio Genaro Campillo Pérez y Julio Ibarra Ríos, a quienes también fue solicitada su abstención, hayan participado y votado en el pleno de la Suprema Corte de Justicia que conoció y decidió la abstención del Magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo, desestimándola, no los puede convertir en pasibles de ser juzgados por violación al artículo 183 del Código Penal, que sanciona con la degradación cívica al juez o administrador que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se sometan a su decisión, como reo de prevaricación, y porque, además, la caracterización de este crimen es eventualmente posible después que se haya juzgado el fondo de la cuestión sometida a la decisión del juez, lo que no ha ocurrido en la especie, pues, para que el artículo 183 pueda ser aplicado es necesario que haya habido de parte del juez o del administrador, una decisión tomada sobre lo principal, ya que simples actos preparatorios o de instrucción no son suficientes, por todo lo cual resulta extemporánea e improcedente la solicitud del querellante a fin de que se designe un juez de instrucción de esta

Suprema Corte de Justicia para que cumpla los requisitos previos de un eventual apoderamiento de jurisdicción de juicio, en relación con la querella de que se trata;

Atendido a que en lo que concierne al Magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo, incluido por el impetrante en su solicitud original de designación de juez de instrucción, por el hecho que le imputa, antes señalado, el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta situación, prescribe lo siguiente: "Siempre que un juez sepa que en él concurre cualquier causa de recusación, estará obligado a declararla en Cámara, para que el tribunal decida si aquél debe abstenerse"; que el Magistrado Dr. Rafael Luciano Pichardo, el 30 de octubre de 1997, declaró por secretaría, levantándose el acta correspondiente, su inhibición o abstención para participar en los juicios o causas incoadas contra el impetrante por el Sr. Aníbal de Castro y otras personas, habiendo decidido el pleno de la Suprema Corte de Justicia, el mismo día, en Cámara de consejo, no aceptar, y por tanto, desestimar, la inhibición hecha por el indicado Magistrado, perdiendo éste la discrecionalidad y quedando obviamente obligado a retomar su asiento y participar en dichos juicios, lo que se infiere del citado texto legal, y es admitido, sobre todo en la especie en que los juicios o causas se iniciaron con posterioridad a la decisión de no aceptación, por parte del tribunal, de la inhibición por él presentada, de donde resulta improbable, y más en el presente caso en que existe una decisión de la Suprema Corte de Justicia desestimando la inhibición, la violación del artículo 183 del Código Penal, cuya violación invoca el impetrante;

Atendido a que de conformidad con el artículo 25 de la

Ley No. 25/91 precitada, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para ponderar los méritos de las querella que se le presenten;

Atendido a que procede, además, la fusión de las instancias querellas para ser resueltas conjuntamente. (Auto Presidente, 16 de diciembre de 1997).

152.5 Suprema Corte de Justicia. Querella contra Senador de la República. Auto del Presidente. Calidad para constituirse en parte civil.

Atendido a que la solicitud para la designación de Juez de instrucción que antecede, involucra, entre otros, al señor Andrés Miguel Berroa Reyes, Senador de la República;

Atendido a que los hechos a que se contrae la "denuncia querella" se vinculan con la reconstrucción del Centro Cardiovascular del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), así como con la continuación de la construcción del Centro Médico SEMMA Santo Domingo;

Atendido a que el artículo 25 de la indicada Ley No. 25/91 dispone lo siguiente: "En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento".

Atendido a que el apoderamiento directo a que se refiere el texto legal anteriormente transcrito, supone necesariamente que el querellante tenga calidad para constituirse en parte civil contra la persona a quien hace la inculpación; es decir, haber recibido un perjuicio actual,

personal y directo derivado de la infracción que se imputa;

Atendido a que en el caso de la especie los querellantes no han probado haber sufrido un perjuicio con las condiciones requeridas anteriormente;

Atendido a que no existe constancia en el expediente de que el Seguro Médico para Maestro (SEMMA), el Estado Dominicano y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), entidades contra las cuales se aduce haberse perpetrado el alegado fraude, hayan otorgado a los querellantes poder para actuar en sus nombres;

Atendido a que de conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 25/91, precitada, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para ponderar los méritos de las querellas que se le presente. (Auto Presidente, 14 de enero de 1998).

152.6 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Auto del Presidente. Actuación dentro de la ley.

Atendido a que la querella criminal con constitución en parte civil que antecede, involucra al Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís;

Atendido a que los hechos a que se contrae la querella se vinculan con el Auto No. 730 de fecha 18 de agosto de 1998, del Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento de San Francisco de Macorís, mediante el cual se ordena

a la nueva incumbente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, que proceda a dejar sin efecto las sentencias civiles dictadas por el juez anterior, después del día 11 (inclusive), en razón de que había sido destituido por la Suprema Corte de Justicia y porque las supuestas sentencias no fueron pronunciadas en audiencia pública y disponer la celebración de un nuevo juicio de todos los casos que se encuentren en esa situación;

Atendido a que por esa actuación el querellante entiende que el Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, no sólo ha cometido un mayúsculo dislate judicial, sino que ha ido más allá de sus propias funciones reguladoras y conductuales hasta cometer abuso de poder muy grave; así como por la Magistrada Juez Presidente del Juzgado de Primera Instancia de Samaná, aceptar la ilegal y criminal orden de anular, no sólo esa sentencia sino todas aquellas rendidas por el Magistrado saliente desde el día 11 de agosto de 1998; ambos funcionarios judiciales son pasibles de ser perseguidos por franca violación a los artículos 123, 126 y 127 del Código Penal;

Atendido a que en fecha 25 de agosto de 1998 los Dres. Andrés Aybar de los Santos y José Martín, presentaron a nombre del señor Alessandro del Ponte una querella criminal con constitución en parte civil, a los mismos fines que la querella a que se contrae el presente auto;

Atendido a que la querella referida en el atendido anterior fue declarada inadmisibile por el Magistrado Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de noviembre de 1998, por no haber probado los

querellantes estar dotados de poder que justifique la representación del señor Alessandro del Ponte;

Atendido a que en el expediente reposa un documento que contiene un Poder Especial según el cual Alessandro del Ponte otorga poder al Dr. Andrés Aybar de los Santos para actuar por ante la Suprema Corte de Justicia, así por ante cualquier tribunal de la República Dominicana, en todo lo relativo a la presentación de formal querella contra los hoy querellados, cuyas firmas han sido legalizadas por la Lcda. Thelma Leo Peña, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, en fecha 14 de diciembre de 1998;

Atendido a que cuando la situación que origine un medio de inadmisión es regularizada en tiempo hábil, como en la especie, la acción puede ser ejercida nuevamente;

Atendido a que el Juez Dr. Francisco Antonio Fernando Fernández, que dictó la sentencia No. 152/98 de fecha 12 de agosto de 1998 fue destituido por la Suprema Corte de Justicia en fecha 11 de agosto de 1998, según se comprueba por el acta del pleno No. 59/98, razón por la cual al momento de dictar dicha sentencia había cesado en sus funciones de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, por lo cual no podía dictar ninguna sentencia;

Atendido a que el Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís actuó de conformidad con la Ley y con apego a sus facultades al dictar el Auto No. 730 de fecha 18 de agosto de 1998, mediante el cual ordenó a la nueva incumbente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, que procediera a dejar sin efecto las sentencias civiles dictadas por el Juez

anterior, después del día once (inclusive) de agosto, en razón de que había sido destituido y disponer la celebración de un nuevo juicio de todos los casos que se encuentren en esa situación;

Atendido a que el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dispone lo siguiente:

"En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento";

Atendido que el referido artículo constituye una disposición autónoma dentro de nuestro ordenamiento legal, consagratoria del derecho que tiene toda persona de apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, en aquellos casos en que éste tribunal tenga competencia para conocer y fallar de un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el apoderamiento directo;

Atendido a que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para ponderar los méritos de los casos de apoderamiento directo por querella de parte que le son sometidos. (Auto Presidente, 28 de enero de 1998).

152.7 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macoris. Auto del Presidente. Necesidad de un poder para actuar a nombre del agraviado.

Atendido a que el apoderamiento directo por querella de parte establecido por el artículo 25 de la indicada Ley No.

25 de 1991, dado que es un acto grave que puede comprometer tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil de quien lo realiza, para ser admisible es preciso, cuando no procede del propio agraviado, que la persona, abogado o no, que dice actuar a nombre del agraviado se encuentre provisto de un poder especial a tales fines;

Atendido a que los firmantes de la querella referida anteriormente no han probado estar dotados de poder con las condiciones referidas más arriba que justifiquen la representación del señor Alessandro del Ponte. (Auto Presidente, 30 de noviembre 1998).

152.8 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Secretario de Estado de Interior y Policía y Jefe de la Policía Nacional. Auto del Presidente. Necesidad de poder.

Atendido a que la querella con constitución en parte civil que antecede, involucra al Dr. Ramón Blanco Fernández, en su calidad de Secretario de Estado de Interior y Policía y al Mayor General de la Policía Nacional, José Anibal Sanz Jiminián, en su calidad de Jefe de la Policía Nacional;

Atendido a que los hechos a que se contrae la querella se vincularon con el cerco policial realizado alrededor de las instalaciones del edificio de la Liga Municipal Dominicana, ocurrido en la tarde del 23 de enero del presente año, y que al decir de los recurrentes se hizo para impedir el acceso de funcionarios que lícita y pacíficamente intentaban ingresar en el referido local, bajo el alegato "de cumplir órdenes superiores", "se produjo una vandálica agresión al Síndico del Distrito

Nacional, Juan de Dios Ventura Soriano, poniendo en peligro con disparos de los agentes policiales, al igual que el Síndico de Monte Plata, Antolín Valdez Montás",

Atendido a que por esa actuación lo querellantes entienden que el Dr. Ramón A. Blanco Fernández y el Mayor General de la Policía Nacional, José Aníbal Sanz Jiminián han violado el artículo 8, en distintos párrafos, de la Constitución de la República; así como el artículo 114 del Código Penal, comprendido bajo el acápite atentados contra la libertad;

Atendido a que el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dispone lo siguiente:

"En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento";

Atendido que el referido artículo constituye una disposición autónoma dentro de nuestro ordenamiento legal, consagratória del derecho que tiene toda persona de apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, en aquellos casos en que este Tribunal tenga competencia para conocer y fallar de un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el apoderamiento directo;

Atendido a que el apoderamiento directo por querella de parte establecido por el artículo 25 de la indicada Ley No. 25 de 1991, dado que es un acto grave que puede comprometer tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil de quien lo realiza, para ser

admisible es preciso, cuando no procede del propio agraviado, que la persona, abogado o no, que dice actuar a nombre del agraviado se encuentre provista de un poder especial a tales fines;

Atendido a que los firmantes de la querella referida anteriormente no han probado estar dotados de poder con las condiciones referidas más arriba que justifiquen la representación de los señores Julio Mariñez Rosario, Juan de Dios Ventura y Antolin Valdez Núñez. (Auto Presidente, 20 de abril de 1999).

152.9 Suprema Corte de Justicia. Querella contra el Presidente de la Junta Central Electoral. Auto del Presidente. Violación a la Ley del Notariado.

Atendido a que la querella de que se trata, involucra al Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, Presidente de la Junta Central Electoral;

Atendido a que el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dispone lo siguiente: "En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento;

Atendido a que el referido artículo constituye una disposición autónoma dentro de nuestro ordenamiento legal, consagratoria del derecho que tiene toda persona de apoderar a la Suprema Corte de Justicia, en aquellos casos en que este tribunal tenga competencia para conocer y fallar de un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el apoderamiento directo;

Atendido a que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para ponderar los méritos de los casos de apoderamiento directo por querella de parte que le son sometidos;

Atendido que el transcrito texto legal tiene aplicación cuando el apoderamiento directo versa sobre querella de parte contra funcionario público por violación a disposiciones penales sancionadas correccional o criminalmente, siempre que el funcionario de que se trate sea de aquellos que señala expresamente el artículo 67, inciso 1 de la Constitución;

Atendido que el sometimiento contenido en la querella se contrae a hechos que alegadamente vinculan al Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, Presidente de la Junta Central Electoral, a la comisión del crimen de falsedad previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal; que esos hechos se relacionan con una operación de compraventa intervenida entre la querellante, representada por su apoderada Katuska Brouwer Hernández, y la Inmobiliaria Turística, S.A., representada por Víctor E. Ruiz Fernández, esposo de la Lic. Mayra Morel de Ruiz, hija del querellado Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, que involucra el apartamento No. A-3 del condominio "Juan Dolio Beach", edificado sobre la Parcela No. 269-B-Refundida del Distrito Catastral No. 6/1 del Municipio de Los Llanos;

Atendido que el estudio del expediente revela que la intervención del Dr. Manuel Ramón Morel Cerda en el acto bajo firma privada de compraventa del 15 de agosto de 1995, antes aludido, se redujo a la legalización de las firmas en dicho acto estampadas, lo que hizo en su condición, no discutida, de notario público para el Distrito

Nacional, para darle autenticidad a las firmas de los suscribientes del acto, exclusivamente;

Atendido a que el artículo 16 de la Ley del Notariado No. 301, de 1964, modificada, dispone: "Se prohíbe a los Notarios, bajo pena de destitución: a) ejercer sus funciones fuera de su jurisdicción sino es en alguno de los casos previstos en la Ley; b) Escriturar actos y legalizar firmas o huellas digitales en que sean partes ellos mismos o sus parientes y afines en línea directa, en cualquier grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive, o que contengan disposiciones a favor del Notario o de cualquiera de las personas especificadas más arriba; c) Constituirse fiadores o garantes en los actos que escrituran, o de los préstamos que se hubieren hecho por su mediación, o que ellos hayan sido encargados de hacer constar en acta auténtica o bajo firma privada; d) Interesarse en asuntos a propósito de los cuales ejerzan funciones; e) Colocar en su nombre personal y sin el consentimiento del dueño, dineros que hayan recibido, aún bajo la condición de pagar intereses. Párrafo I.- Igualmente, se prohíbe a los Notarios, también bajo pena de destitución, escriturar actas auténticas o legalizar firmas o huellas digitales de actas bajo firma privada, en las cuales sean partes las personas públicas o privadas, físicas o morales o sus representantes, a quienes presten servicios remunerados permanentes como empleados, abogados, asesores o consultores retribuidos mediante el sistema de igualas o de cualquier otro modo, o que contengan alguna disposición en relación con las mencionadas personas físicas o morales. Las disposiciones a favor de las personas físicas o morales indicadas, contenidas en actas escrituradas o legalizadas por los Notarios en violación a

las prohibiciones señaladas en este artículo serán anulables, pero la nulidad no podrá ser invocada por la parte en cuyo favor el Notario preste servicios remunerados permanentes";

Atendido que como se observa, la única sanción que contempla la ley para el Notario que incurra en la inobservancia de la prohibición contenida en el literal b) de la parte capital del texto legal arriba transcrito, como ocurre en la especie, es la destitución; que de conformidad con la clasificación que hace el artículo 1 del Código Penal, la infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito; y la infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen; que, como la destitución no es una pena criminal, ni correccional, ni de policía, sino disciplinaria, resulta evidente que el hecho denunciado, y que sirve de base a la querella interpuesta, sólo castigable con la pena disciplinaria señalada, no constituye ni crimen ni delito, por lo que es inoportuno e improcedente iniciar la persecución penal contra el querellado. (Auto Presidente, 7 de julio de 1999).

152.10 Suprema Corte de Justicia. Querella contra Juez Cámara de Cuentas. Auto del Presidente. Necesidad de haber sufrido un perjuicio.

Atendido a que la querella de que se trata, involucra al Dr. Ismael Alcides Benjamín Decena Lugo, Juez de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana;

Atendido, a que el artículo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dispone lo siguiente: "En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las

audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el Presidente designará un Juez de Instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento";

Atendido a que el referido artículo constituye una disposición autónoma dentro de nuestro ordenamiento legal, consagratoria del derecho que tiene toda persona de apoderar a la Suprema Corte de Justicia, en aquellos casos en que este tribunal tenga competencia para conocer y fallar de un asunto, y su aplicación no está sujeta a que otras disposiciones legales autoricen el apoderamiento directo;

Atendido a que de conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 25/91 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para ponderar los méritos de las querellas que se le presenten;

Atendido que el transcrito texto legal tiene aplicación cuando el apoderamiento directo versa sobre querella de parte contra funcionario público por violación a disposiciones penales sancionadas correccional o criminalmente, siempre que el funcionario de que se trate sea de aquellos que señala expresamente el artículo 67, inciso 1 de la Constitución;

Atendido a que el sometimiento contenido en la querella, se contrae a hechos que alegadamente vinculan al Dr. Ismael Alcides Benjamín Decena Lugo, a la comisión del crimen de falsedad de escritura, previsto y sancionado en los artículos 145 y siguientes del Código Penal Dominicano; que estos hechos se circunscriben a un procedimiento civil, con la finalidad de reclamar un crédito de tipo hipotecario en base a un procedimiento de

embargo inmobiliario incoado contra su deudor, señor Carlos Modesto Nouel Grullón, y en el cual el Dr. Ismael Alcides Benjamín Decena Lugo asumió la representación y defensa del señor Ney Veloz Balcácer, acreedor, según mandato del 21 de noviembre de 1988; que terminado el mandato con el fallecimiento del acreedor, continuó actuando en justicia,

Atendido que el estudio del expediente revela que el Dr. Ismael Alcides Benjamín Decena Lugo actuó en la representación y defensa después de la muerte de su mandante, según acta de defunción depositada en el expediente, notificando sentencias, promoviendo audiencias, presentando conclusiones a nombre de su mandante;

Atendido a que el querellante, en los términos de la querella expone "que esta representación es falsedad de escritura privada, en tanto que los escritos ampliatorios de conclusiones fueron redactados en la alegada representación de un muerto. Y los actos de algucil posteriormente redactados y realizados a requerimiento del fallecido, constituyen una falsedad en este acápite del Código Penal";

Atendido a que del estudio y examen del expediente pone de manifiesto que el querellante no ha probado haber sufrido un perjuicio, condición inminente para el apoderamiento directo con constitución en parte civil, el cual supone necesariamente haber recibido un perjuicio actual, personal y directo de la infracción que le imputa al querellado; que tampoco el querellante ha probado la intención delictuosa por parte del mandatario, cuya actuación no es más que la continuación de un proceso

judicial en desconocimiento de la muerte de su mandante y que de conformidad con lo establecido en el art. 2008 del Código Civil "si ignorase el mandatario la muerte de su mandante o cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido lo que ha hecho en esa ignorancia"; que, por lo antes dicho, la querella debe ser desestimada. (Auto Presidente, 18 de agosto de 1999).

152.11 Suprema Corte de Justicia. Recursos contra sus sentencias.

(Ver: Oposición. Constitucional. Presidente. Pleno, 16 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 79-81).

153. SUSPENSION DE EJECUCION:

Suspensión de ejecución de una sentencia. Aplicación a las sentencias de los juzgados de paz de los artículos 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978.

Que si es correcto que el referimiento no es posible ante un tribunal de excepción, como lo es el juez de paz, no es menos valedero que conforme a los artículos 109 al 112 de la citada Ley No. 834, las atribuciones de referimiento pertenecen al Presidente del Tribunal de Primera Instancia y al Presidente de la corte de apelación de acuerdo con las artículos 137, 140 y 141 de la misma ley; que en el caso ocurrente, la cámara civil, comercial y de trabajo del juzgado de primera instancia apoderada de la apelación contra la sentencia del juzgado de paz que ordenó el desalojo, actuó como tribunal de segundo grado, al disponer su Presidente la suspensión de la ejecución de la sentencia del juzgado de paz apelada, lo

que hizo en virtud de los poderes que los señalados artículos 137, 140 y 141 otorgan al Presidente del tribunal de apelación. (Cámara Civil, 1ro. de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 45-46).

T

154. TRABAJADORES:

154.1 Trabajador que ejerce el desahucio.

Considerando, que esa indemnización no corresponde en cambio, al trabajador que pone fin al contrato de trabajo sin alegar causa al ejercitar su derecho al desahucio, aún cuando haya cumplido con la formalidad de otorgar el plazo del desahucio al empleador, pues esa circunstancia no le atribuye ningún derecho, sino que lo exime de la obligación de pagar una suma igual a los salarios que habría devengado en el período del aviso previo, disposición establecida en contra del trabajador que hace uso del desahucio sin otorgar el plazo correspondiente;

Considerando, que en la especie, el tribunal reconoce que quien ejerció el desahucio fue el trabajador demandante, por lo que no podía imponer al empleador la obligación de pagarle las indemnizaciones correspondientes a esta clase de terminación del contrato, pues su responsabilidad no podía resultar comprometida por la conclusión del contrato de trabajo producida por la voluntad unilateral del trabajador, sin el alegato de falta atribuida al recurrente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 14 de diciembre de 1999).

154.2 Trabajadores. Renuncia de sus derechos. V principio fundamental del Código de Trabajo. Alcance.

Considerando, que si bien el V Principio Fundamental, del Código de Trabajo, establece impedimento de renuncia de derechos reconocidos a los trabajadores, el alcance de esa prohibición se circunscribe al ámbito contractual y no después de la finalización del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad a dicho contrato, aún cuando después de recibido el pago se comprobare diferencia a favor del trabajador, siempre que éste no haga consignar en el momento de expedir el recibo, su inconformidad con el pago y formule reservas de reclamar esos derechos. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 10 de noviembre de 1999).

155. TRABAJADORA EMBARAZADA:

155.1 Trabajadora embarazada. Artículo 233 del Código de Trabajo. Terminación del Contrato por mutuo acuerdo.

Considerando, que la limitación y reglamentación especial que contiene el Código de Trabajo para la terminación de los contratos de las trabajadoras embarazadas persigue proteger a la maternidad, lo que le imprime un carácter de disposición de orden público, la cual no puede desconocer ninguna de las partes, y su finalidad es impedir que la mujer en ese estado pueda ser separada de su empleo, la palabra desahucio tiene un sentido legal más amplio que el que le atribuye el Código de Trabajo, en su artículo 75, debiendo ser interpretada

en el sentido de toda terminación del contrato que no implique una falta de parte de la trabajadora;

Considerando, que en consecuencia, todo acuerdo que signifique la pérdida del empleo de una mujer grávida, durante el período de protección establecido por los artículos 232 y 233 del Código de Trabajo, carece de validez, por ser contrario a disposiciones de orden público que persiguen la estabilidad en el empleo de la mujer embarazada;

Considerando, que por otra parte, la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento realizada en la forma indicada por el artículo 71 del Código de Trabajo, no conlleva la obligación del empleador de pagar prestaciones laborales y si bien ese sólo hecho no significa la ausencia de una voluntad común para la terminación del contrato de trabajo, el Tribunal a-quo debió unirlo a la condición de embarazada invocada por la demandante para determinar la verdadera causa de la terminación del contrato y no a restarle significación al alegato de la trabajadora en el sentido de que la terminación del contrato de trabajo fue una iniciativa de su empleador por su estado de embarazo. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de junio de 1999).

155.2 Trabajadora embarazada. Terminación de contrato. Acto auténtico.

Considerando, que en base a la libertad de prueba existente en materia laboral, el poder de apreciación de las pruebas que se aporten en un proceso y las disposiciones del IX principio fundamental del Código de Trabajo, el cual establece que "el contrato de trabajo no

es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos", lo que constituye una consagración legislativa del principio de que el contrato de trabajo es un contrato realidad, donde predominan los hechos por encima del contenido de un documento, la Corte a-quá apreció como ineficaces las declaraciones de las trabajadoras, en el sentido de que los contratos de trabajo habían concluido por efecto de las renunciaciones presentadas por ellas y en consecuencia determinó que la recurrente ejerció desahucios nulos al tenor de los artículos 75 y 232 del Código de Trabajo, que disponen que los desahucios de las mujeres embarazadas son nulos y no producen la terminación de los contratos de trabajo; que con esa actuación la Corte a-quá no dudó de las actuaciones del Notario Público que instrumentó los actos, sino que dio a las declaraciones de las comparecientes, el alcance que los hechos determinaron;

Considerando, que en vista de que la Corte a-quá determinó que la acción consignadas en los actos auténticos no constituía una renuncia de las trabajadoras sino una tentativa de terminación de los contratos de trabajo, de parte del empleador, no es válido el alegato de que las recurridas renunciaron a sus derechos cuando ya no eran trabajadoras, pues como se ha señalado anteriormente, el artículo 75 del Código de Trabajo prescribe que el desahucio de la mujer embarazada "no surte efecto y el contrato por tiempo indefinido se mantiene vigente"; que por demás las medidas que tienden a dar protección a la mujer embarazada son de orden público y como tal no pueden ser objeto de renuncia voluntaria de la trabajadora, pues esas medidas van dirigidas a proteger a la maternidad y no a consagrar beneficios adicionales en provecho de la trabajadora,

como tal, sino por su condición de futura o reciente madre. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de julio de 1998; B.J. 1052. Págs. 694-695).

155.3 Trabajadora embarazada.

(Ver: Despido, Nulidad, Artículo 233 del Código de Trabajo. Embarazo. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 17 de febrero de 1999; B. J. 1059. Pág. 596).

155.4 Trabajadora embarazada.

(Ver: Embarazo. Artículo 232 del Código de Trabajo. Notificación del empleador. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 19 de marzo de 1999; B. J. 1060. Págs. 677 y 678).

156. TERCERO ADQUIRIENTE:

156.1 Tercero adquiriente de buena fe. Un mueble adquirido en virtud de un certificado de título. Presunción de buena fe. Excepción.

Considerando, que si es cierto que todo el que adquiere un inmueble a la vista de un certificado de título que lo ampara y paga el precio convenido por la venta, debe ser reputado tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, no es menos cierto que cuando como en la especie se comprueba y establece que dicho inmueble no es de la propiedad del vendedor, sino que se ha registrado a su nombre como consecuencia de un deslinde ilegal e irregular, en razón de que el mismo no sólo pertenece

desde hace 18 años a otra persona, que lo es el recurrido, quien lo ocupa, además, con una cerca de blocks, y a quien no se dio conocimiento por ningún medio del deslinde realizado, ni se le notificó la sentencia que lo aprueba, como también ocurre en la especie, es incuestionable que la venta de ese inmueble viola, como correctamente lo juzgó el Tribunal a-quo en la sentencia impugnada, el artículo 1599 del Código Civil, según el cual: "La venta de la cosa de otro, es nula; puede dar lugar a daños y perjuicios, cuando el comprador ignora que fuese de otro"; que en consecuencia, al declarar el Tribunal a-quo la nulidad de la venta otorgada por el Lic. Julián Suardí, a favor del recurrente Frank Boon, no ha incurrido en la vulneración de dicho texto legal. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 1 de septiembre de 1999).

156.2 Tercero adquirente de buena fe. Ausencia de oposición en el certificado de título.

Considerando, sin embargo, que la circunstancia de que el recurrente Juan Jiménez De León, viniera desde el extranjero para participar en la subasta del inmueble y que el precio fijado por el persigiente en el pliego de condiciones fuera inferior al real y que una vez adquirido por él como adjudicatario en la subasta el inmueble de que se trata, éste regresara al extranjero, no puede considerarse ni un fraude, ni una simulación, ni lo convierte en cómplice de éstos últimos, puesto que tales circunstancias no constituyen por sí solas elementos suficientes para caracterizar el fraude, ni la simulación cometida por el señor Rafael Colón; que, habiendo adquirido el señor Juan Jiménez De León, el referido inmueble sin que se haya demostrado, que el certificado

de título que servía de base al procedimiento de ejecución forzada contuviera oposición al gravamen y a la transferencia de dicho inmueble y siendo dicho certificado de título un documento que se basta así mismo y que está garantizado por el Estado, es evidente que se trata de un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso; porque de conformidad con lo que dispone el artículo 713 del Código de Procedimiento Civil, al recurrente como adjudicatario en la subasta del inmueble, no se le podía entregar copia de la sentencia de adjudicación si no presentaba al Secretario del tribunal apoderado del procedimiento de ejecución, la constancia de haber satisfecho el saldo de las costas del mismo y la prueba de que había cumplido las condiciones del pliego que sirvió de base a la adjudicación y que deban ejecutarse antes de la entrega, entre los cuales se exige la constancia del pago del precio y de los documentos justificativos, sin el cumplimiento de cuyas condiciones no era posible entregarle la sentencia de adjudicación; que si tal entrega se hizo es porque dicho adjudicatario cumplió esas condiciones, lo que lo convertía como se ha dicho en un tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, que se encuentra protegido de la simulación del acto de hipoteca de fecha 16 de mayo de 1969, por tanto la adquisición del recurrente en la subasta del inmueble, no puede ser considerada como simulada, ni fraudulenta; que en tales condiciones, es obvio que la sentencia impugnada no ofrece los elementos de hecho necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control pueda decidir si la ley ha sido bien aplicada, por lo cual se ha incurrido en dicha sentencia en el vicio de falta de base legal y la misma debe ser casada limitativamente en lo que

respecta al interés del recurrente. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 15 de diciembre de 1999).

157. TESTIGOS:

Testigos. Declaración.

(Ver: Acta de audiencia, materia criminal. Declaraciones de los testigos. Artículos 248, 280 y 281 del Código de Procedimiento Criminal, Cámara Penal, 29 de diciembre de 1999).

158. TIERRA:

Tierra. Artículos 185 y 186 de la Ley de Registro de Tierras. Publicidad. Registro de Títulos.

Considerando, que de acuerdo con el sistema establecido por la Ley de Registro de Tierras, consagrado en los artículos 185 y 186, cualquier acto voluntario o forzoso que se relacione con derechos registrados, solamente surtirá efecto frente a terceros desde el momento en que éste se registre en la oficina del Registrador de Títulos correspondiente; que por la razón apuntada, el artículo 186 sujeta a la formalidad del registro todo acto convencional que tenga por objeto enajenar, ceder o en cualquier forma traspasar derechos registrados, sin lo cual no son oponibles a terceros; que las indicadas disposiciones constituyen la aplicación de los principios consagrados en los artículos 174 y 188 de la misma ley, en los que se establece, por una parte, que en los terrenos registrados no habrá hipotecas ocultas,

por cuya razón la persona a quien se le expide un certificado de título ya sea en virtud de un decreto, una resolución del Tribunal de Tierras o de un acto traslativo de propiedad realizado a título oneroso y de buena fe, retendrá dicho terreno libre de las cargas y gravámenes que no figuren en el certificado de título que se le ha expedido; que, por otra parte, en el libro de inscripciones que debe llevar el Registrador de Títulos se hará constar el año, mes, día, hora y minuto en que recibiere el documento, el que se reputará, desde ese momento, registrado; que este principio es el que consagra, asimismo, el artículo 208 de la referida ley, cuando ordena que ninguna demanda que se establezca sobre derechos registrados, entre las que se incluyen las anotaciones a que se refiere el citado texto legal, surtirá efecto contra las personas que no figuran como partes en las litis, entre las que indudablemente debe colocarse la recurrente, si no se observa la formalidad del registro o inscripción. (Cámara Civil, 30 de junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 350-351).

V

159. VENTA DE TERRENOS:

Venta de terrenos registrados. Formalidades. Artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras. Obligación de los jueces.

Considerando, que de acuerdo con el artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras: "Los actos o contratos traslativos de derechos registrados así como aquellos que estén destinados a constituir, radiar, reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles registrados, o que de cualquier forma afecten o se relacionen con esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo escritura privada. En uno u otro caso se observarán, además de las formalidades comunes a tales actos, las disposiciones siguientes: c) Cuando el acto sea hecho bajo escritura privada, las firmas serán necesariamente legalizadas por un Notario o cualquier otro funcionario competente;

Considerando, que los herederos del finado Máximo Ceballos Rolffot, negaron que éste hubiese consentido, ni firmado esos actos de venta, por lo que no era suficiente con que el Tribunal se contentara para ordenar la transferencia solicitada por los señores Esteban Bigay, Ernesto N. Pueriet Cordero y la Cía. Manuel Arsenio Pueriet, Sucs., C. Por A., con las certificaciones expedidas por el Notario Público de los del número del

municipio de Higuey Dr. Adolfo Oscar Caraballo, en las que no aparecen las firmas del alegado vendedor, sino que estaba en el deber de determinar si esos documentos (las certificaciones) reunían las condiciones y formalidades exigidas por el artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras, puesto que en el momento en que dicho tribunal conoce y se pronuncia sobre dichos documentos, la Parcela de que se trata estaba ya amparada del correspondiente certificado de Título y por tanto se trata de un inmueble registrado, que en esas condiciones es evidente que la sentencia impugnada carece de motivos y de base legal y por tanto procede su casación. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 4 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Págs. 340-341).

160. VIVIENDA Suntuaria:

Vivienda suntuaria. Art. 12 de la Ley 18-88. Cuando constituye un Medio de inadmisión.

"...que este medio de inadmisión previsto en la mencionada ley, en la especie, no puede invocarse válidamente por tratarse en el caso de una vivienda no suntuaria, que no califica para la aplicación de dicho impuesto; que esta circunstancia queda confirmada por la certificación expedida por la Dirección General del Impuesto sobre la Renta que consta en el expediente, según la cual J. M. F. R. no figura inscrito en los archivos de esa Agencia Local. Posee la casa No___ de la calle, portador,, no califica para el impuesto de la Ley 18-88". (Cámara Civil y Comercial, 18 de febrero de 1998; B. J. 1047. Pág. 105).